UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETOS
Y
ORDENES

KB250
.M4
M4
c.1

005187



EX LIBRIS

HEMETHERII VALVERDE TELLEZ

Episcopi Leonensis

1080027481

L 17

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

COLECCION

DE

LOS DECRETOS Y ORDENES

DE

LAS CORTES DE ESPAÑA,

QUE SE REPUTAN VIGENTES

EN LA REPUBLICA

DE LOS

ESTADOS-UNIDOS MEXICANOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
Biblioteca Universitaria y Tellez

MEXICO: 1829.

Imprenta de Galvan á cargo de Mariano Arévalo,
calle de Cadena n.° 2.

42325

FONDO BIBLIOTECA
VALVERDE Y TELLEZ

Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

KB250
.M4
M4

ALERE FLAMMAM VERITATIS

FONDO EMETERIO
VALVERDE Y TELLEZ

REALIZADA felizmente la independencia de México por la ocupacion de su capital en 27 de septiembre de 1821 y destruccion del gobierno vireinal, si bien quedaron rotos para siempre los vínculos de dependencia con la España, no pudieron ni debieron quedar sin vigor las leyes que arreglaban los deberes y derechos de los que componian esta nueva sociedad; pues que no pudiéndose renovar sino con el transcurso del tiempo y por las autoridades competentes, la repentina abolicion de todas ellas habria sido lo mismo que el establecimiento de una absoluta anarquía á la sazon que mas se necesitaba del órden. Asi es que á escepcion de aquellas leyes que chocaban directamente con el memorable plan de Iguala, y nuevo órden de cosas que él crió, todas las demas que habian emanado de los reyes de España, y de la soberana autoridad que hasta aquel dia se habia reconocido, se acataron y respetaron; los pleitos se decidieron por ellas, la justicia se administró conforme á ellas, y los mexicanos ajustaron á su tenor su vida social. De aqui resultó que los códigos españoles, á los que aun no ha sido dado substituir otros enteramente nacionales, son buscados con empeño por los jueces, los profesores y aun los simples ciudadanos, como que en ellos encuentran la norma de sus acciones, la garantía de sus recíprocos derechos y la regla de sus procedimientos.

Entre estos códigos es uno de los mas célebres la coleccion de los decretos y órdenes espedidos por las córtes españolas en los años de 1812, 13, 14, 20 y 21, en que se verificó la independencia. Esta coleccion aumentada hasta el número de diez volúmenes se ha hecho entre nosotros tan escasa como subida de precio; y aun lograda tiene el inconveniente de hallarse diseminadas en los siete

005187

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tomos primeros (que son los que contienen las disposiciones dictadas cuando aun México dependia de los legisladores de Madrid) las que se reputan vigentes en la república por haber tenido su efecto, ó por concernir esclusivamente á estos paises, ó por no haber sido revocadas.

Convencidos por esta observacion de la utilidad de reducirlas á un volúmen que seria tan cómodo por su precio como fácil de registrar por ser solo, se pulsó la dificultad de hacer la segregacion por el peligro de omitir alguna ley que aun rija, ó de insertar otras que no tengan ya ningun caso. Para allanarla se fijó en esta coleccion el periodo en que indudablemente las leyes que se dictaban en Madrid obligaban á México, y este corre desde el primer tomo hasta comenzar el octavo, que principia con la órden de 23 de septiembre de 1821 en que se previno no deber continuar en las córtes los suplentes de ultramar. Este paso del congreso español, verificada como lo estaba á aquella fecha la independencia, si no envuelve cierta especie de reconocimiento, al menos del hecho, pone fuera de duda que las leyes dictadas posteriormente ninguna fuerza podian tener con respecto á los mexicanos que habian roto para siempre los lazos que los ataban á España, y no habian cooperado á la formacion de ellas, ni aun con la mezquina representacion que como de gracia se les habia concedido, no obstante los principios de igualdad que se protestaban, y el caracter del sistema de gobierno representativo.

Escluidos pues del exámen los tres últimos tomos, se limitó este á los siete anteriores. En ellos se encuentran muchas leyes que tenian por objeto esclusivamente el bienestar del territorio de la península: otras que eran esencialmente monárquicas, y otras en fin que se dirigian á personas particulares; ninguna de estas es del caso en el estado actual, y su insercion aumentaria inútilmente el volúmen y frustraria el fin con que se ha formado esta compilacion.

Ella comprende todas aquellas que no chocando en

su totalidad con el estado de independencia y forma de gobierno adoptada, han regido ó rigen en alguna de sus partes, ó en alguno de los puntos de la república. Tal es por ejemplo, la de arreglo de tribunales, que aunque verificado en los estados por sus respectivas legislaturas, no lo ha sido en el distrito y territorios, en donde rige en todos los artículos que son adaptables al sistema de federacion. Algunas hay que conciernen á objetos cuyo arreglo reservó la constitucion federal al congreso general, y no habiéndoseles dado aun el definitivo, subsisten en su vigor; de esta clase es la de libertad de imprenta. Otras, aunque relativas á asuntos que son de la inspeccion de los estados, no sabiéndose que estos los hayan arreglado de nuevo, y sí que en algunos se ajustan y miden por ellas, han debido insertarse como útiles: tal es la de responsabilidad de empleados públicos. Algunas por último arreglan establecimientos que México no tuvo hasta que se hizo independiente, por lo que se ve que no fueron dictadas para ellos; pero como alguna vez se ha usado de ellas, se ha creido conveniente insertarlas: de este número es la que fija las consideraciones y goces de los que han servido las secretarias del despacho. En suma, como esta compilacion no está limitada á determinados lugares se han colocado en ella todas las leyes y órdenes que en algunos de la república puedan tener algun caso; pues que si para los individuos de un estado una es inútil, encontrará otras muchas que no lo sean, y quedará compensado el aparente gravámen de comprar un volúmen en que se hallen determinaciones que no rijan allí con la positiva ventaja de tener reunidas y á un corto precio todas las demas que aun conservan su vigor.

Para acabar de dar idea del método que se ha seguido en la segregacion é insercion de las órdenes y decretos nos resta que decir dos palabras: 1.ª Aunque muchas de las leyes espedidas por el congreso español en el año de 1821 no fueron publicadas en este pais, se han insertado sin embargo todas las que tienen los caracteres esplicados; porque en la práctica observamos que algunas de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

estas rigen á pesar de carecer de ese requisito tan esencial. De este número es v. g. la de 18 de mayo de 1821 sobre arreglo de las conciliaciones, que nunca tuvo publicacion legal, y solo se insertó en el Noticioso de 17 de octubre de aquel año, despues de hecha la independencia, y se observa en la capital y en otras partes, no obstante la oposicion que presenta al artículo 155 de la constitucion. 2.ª No se ha insertado la constitucion española, porque en nuestra opinion no puede regir ni aun supletoriamente en el distrito y territorios, que no la tienen propia, por la absoluta diversidad de sistema, y repugnancia que dice con la federal mexicana; y aunque las leyes que forman este tomo sean emanaciones de aquella, y debieran suponer su existencia, esto seria en España en donde tenian el caracter de permanentes, y no en México donde son puramente supletorias y provisionales á falta de propias que en nada pugnen con nuestra constitucion, como sucede á muchas de estas que solo rigen en algunos de sus artículos, entendiéndose los otros por derogados.

Por último, nos parece conveniente advertir, que persuadidos, como lo estamos, de que solo el congreso general ó los particulares de los estados en su caso pueden declarar auténticamente cuáles leyes rigen y cuáles no, la insercion en este volúmen de algunas de las que prudentemente se duda, en manera alguna envuelve esa declaracion, que quedando reservada á la autoridad competente, deja el punto opinable, como lo era antes, y á los funcionarios en libertad para que sigan el dictámen que les parezca mas seguro sobre el vigor ó inexistencia de ellas; y por esta razon se ha usado en el título de la frase: *que se reputan vigentes.*

Estas reflexiones nos parecen bastantes para que los lectores penetren el sistema que se adoptó para colocar en este volúmen las determinaciones que contiene, y para que conozcan el grado de valor que les da su colocacion, concluyendo con la sincera protesta de que el objeto que nos ha animado á esta empresa ha sido el mejor servicio del público.

INDICE

DE LOS DECRETOS Y ORDENES

CONTENIDOS EN ESTE VOLUMEN.

ENERO DE 1811.

Decreto del dia 26.—*Libertad del comercio del azogue* ..... 1.

FEBRERO.

Orden del dia 1.°—*Ofreciendo premiar á los descubridores de minas de azogue en América con otras medidas para fomento de este ramo* ..... 2.

MARZO.

Decreto del dia 12.—*Varias medidas para fomento de la agricultura é industria de América* ..... ib.
Decreto de 15.—*Esencion de tributos á los indios y castas: repartimiento de tierras á los primeros, y prohibicion del comercio de repartimiento á los justicias* ..... 3.
Decreto de 22.—*Sobre la enagenacion y venta de algunos edificios y fincas de la corona, admitiéndose en parte del precio los valores y créditos* ..... 4.
Orden de 23.—*Haciendo estensiva á la América la libertad de alcabalas y cientos en la venta de embarcaciones* ..... 5.
Orden de 31.—*Por la que se manda erigir en los ejércitos un tribunal llamado de Honor* ..... ib.

ABRIL.

Orden del dia 2.—*Por la que se fijan conforme á ordenanza los premios, y pensiones correspondientes á los individuos de las matrículas de marina y se establece un fondo para este objeto* ..... ib.
Decreto de 16.—*Libertad del buceo de la perla, y de la pesca de la ballena, nutria y lobo marino en todos los dominios de Indias* ..... 7.
Decreto de 22.—*Sobre la libre incorporacion de los abogados en sus colegios* ..... 8.
Decreto de id.—*Abolicion de la tortura, y de los apremios, y prohibicion de otras practicas aflictivas* ..... ib.
Orden de 23.—*Por la cual se establecen algunas reglas para el mejor gobierno de los hospitales militares* ..... 9.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

estas rigen á pesar de carecer de ese requisito tan esencial. De este número es v. g. la de 18 de mayo de 1821 sobre arreglo de las conciliaciones, que nunca tuvo publicacion legal, y solo se insertó en el Noticioso de 17 de octubre de aquel año, despues de hecha la independencia, y se observa en la capital y en otras partes, no obstante la oposicion que presenta al artículo 155 de la constitucion. 2.ª No se ha insertado la constitucion española, porque en nuestra opinion no puede regir ni aun supletoriamente en el distrito y territorios, que no la tienen propia, por la absoluta diversidad de sistema, y repugnancia que dice con la federal mexicana; y aunque las leyes que forman este tomo sean emanaciones de aquella, y debieran suponer su existencia, esto seria en España en donde tenian el caracter de permanentes, y no en México donde son puramente supletorias y provisionales á falta de propias que en nada pugnen con nuestra constitucion, como sucede á muchas de estas que solo rigen en algunos de sus artículos, entendiéndose los otros por derogados.

Por último, nos parece conveniente advertir, que persuadidos, como lo estamos, de que solo el congreso general ó los particulares de los estados en su caso pueden declarar auténticamente cuáles leyes rigen y cuáles no, la insercion en este volúmen de algunas de las que prudentemente se duda, en manera alguna envuelve esa declaracion, que quedando reservada á la autoridad competente, deja el punto opinable, como lo era antes, y á los funcionarios en libertad para que sigan el dictámen que les parezca mas seguro sobre el vigor ó inexistencia de ellas; y por esta razon se ha usado en el título de la frase: *que se reputan vigentes.*

Estas reflexiones nos parecen bastantes para que los lectores penetren el sistema que se adoptó para colocar en este volúmen las determinaciones que contiene, y para que conozcan el grado de valor que les da su colocacion, concluyendo con la sincera protesta de que el objeto que nos ha animado á esta empresa ha sido el mejor servicio del público.

INDICE

DE LOS DECRETOS Y ORDENES

CONTENIDOS EN ESTE VOLUMEN.

ENERO DE 1811.

Decreto del dia 26.—*Libertad del comercio del azogue* ..... 1.

FEBRERO.

Orden del dia 1.°—*Ofreciendo premiar á los descubridores de minas de azogue en América con otras medidas para fomento de este ramo* ..... 2.

MARZO.

Decreto del dia 12.—*Varias medidas para fomento de la agricultura é industria de América* ..... ib.
Decreto de 15.—*Esencion de tributos á los indios y castas: repartimiento de tierras á los primeros, y prohibicion del comercio de repartimiento á los justicias* ..... 3.
Decreto de 22.—*Sobre la enagenacion y venta de algunos edificios y fincas de la corona, admitiéndose en parte del precio los valores y créditos* ..... 4.
Orden de 23.—*Haciendo estensiva á la América la libertad de alcabalas y cientos en la venta de embarcaciones* ..... 5.
Orden de 31.—*Por la que se manda erigir en los ejércitos un tribunal llamado de Honor* ..... ib.

ABRIL.

Orden del dia 2.—*Por la que se fijan conforme á ordenanza los premios, y pensiones correspondientes á los individuos de las matrículas de marina y se establece un fondo para este objeto* ..... ib.
Decreto de 16.—*Libertad del buceo de la perla, y de la pesca de la ballena, nutria y lobo marino en todos los dominios de Indias* ..... 7.
Decreto de 22.—*Sobre la libre incorporacion de los abogados en sus colegios* ..... 8.
Decreto de id.—*Abolicion de la tortura, y de los apremios, y prohibicion de otras practicas aflictivas* ..... ib.
Orden de 23.—*Por la cual se establecen algunas reglas para el mejor gobierno de los hospitales militares* ..... 9.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

MAYO.

Orden del dia 19.—*En que se manda sean preferidos para las plazas del resguardo y otros destinos los militares imposibilitados del servicio* ..... 10.

JULIO.

Orden del dia 4.—*Sobre rebaja de sueldos á los empleados civiles que no sirven sus plazas* ..... ib.
Decreto de 14.—*Responsabilidad de las autoridades en el cumplimiento de las órdenes superiores* ..... 11.
Decreto de 24.—*Se concede el título de noble y leal ciudad de Tepic al pueblo de este nombre* ..... 12.

AGOSTO.

Orden del dia 4.—*Sobre aplicar á los hospitales militares los productos de obras pias y patronatos con la instruccion á que se refiere* ..... ib.
Decreto de 6.—*Incorporacion de los señoríos jurisdiccionales á la nacion: abolicion de privilegios: que nadie pueda llamarse Señor de vasallos ni ejercer jurisdiccion* ..... 17.

SEPTIEMBRE.

Orden del dia 14.—*En que se concede á los individuos del cuerpo de artilleria que sean juzgados por su tribunal particular.* 19.
Orden de id.—*Concediendo al cuerpo de ingenieros la gracia de que habla la anterior* ..... ib.
Decreto de 26.—*Sobre la libre fabricacion y venta de naipes.* 20.

OCTUBRE.

Decreto del dia 28.—*Plan de las pensiones que deben concederse á las viudas y familias de los que perecen en defensa de la pátria* ..... ib.

NOVIEMBRE.

Decreto del dia 11.—*De la responsabilidad sobre la observancia de los decretos del congreso nacional* ..... 22.

DICIEMBRE.

Orden del dia 18.—*Por la que se amplia á los tiempos de Paz la facultad que tenian en el de guerra los gefes de Indias de dar licencia para casarse á los contribuyentes al montepio militar* ..... ib.

ENERO DE 1812.

Orden del dia 16.—*Negando la gratificacion á los administradores de alcabalas de Nueva España por la cobranza del*

producto del chinguirito ..... 23.
Orden de id.—*Se manda dar á los mineros de Nueva España la sal y pólvora que necesiten, á costo y costas* ..... ib.
Decreto de 14.—*Estincion de las matrículas de mar en las provincias ultramarinas* ..... 24.
Decreto de 17.—*Estincion de los estancos menores de alumbre &c. en Nueva España* ..... ib.
Decreto de 18.—*Que los empleos no sean servidos por substituos.* ib.
Decreto de 24.—*Abolicion de la pena de horca* ..... 25.
Decreto de 29.—*Habilitacion á los oriundos de Africa para ser admitidos en las universidades, seminarios &c.* ..... ib.

FEBRERO.

Decreto del dia 14.—*En los matrimonios de los militares suplan sus gefes el consentimiento de los padres que se hallen en pais ocupado por el enemigo* ..... 26.
Orden de 18.—*Para que en los premios de constancia sea considerada la tropa de marina como la del ejército* ..... ib.

ABRIL.

Decreto del dia 22.—*Se establece para los militares un premio medio entre los de constancia y los de las acciones distinguidas* ..... 27.

MAYO.

Decreto del dia 23.—*Formacion de los ayuntamientos constitucionales* 28

JUNIO.

Decreto del dia 1.—*Establecimiento del tribunal especial de guerra y marina* ..... 30.
Decreto de 11.—*Que junto con la pension de montepio se puede disfrutar otra* ..... 32.

JULIO.

Decreto del dia 10.—*Reglas para la formacion de los ayuntamientos constitucionales* ..... ib.

SETIEMBRE.

Decreto del dia 21.—*Los eclesiásticos seculares tienen voto en las elecciones de ayuntamientos; pero no pueden obtener en ellos ningun oficio* ..... 33.

OCTUBRE.

Decreto del dia 9.—*Visita general de cárceles que deben hacer el tribunal especial de guerra y marina, y los demas gefes militares* ..... ib.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Decreto de id.—*Visita general que deben hacer los prelados y jueces eclesiásticos en las cárceles de su jurisdiccion*..... 34.
Decreto de id.—*Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia conocido generalmente por ley de tribunales*..... 35.
Decreto de 28.—*Que los magistrados del supremo tribunal de justicia, y de los demas tribunales especiales no sean ocupados en otra comision*..... 52.
Orden de 27.—*Como deben estenderse los títulos á los provistos en piezas eclesiásticas y empleos civiles y militares*.. 53.

NOVIEMBRE.

Decreto del dia 5.—*Sobre los límites de las jurisdicciones eclesiásticas castrense y ordinaria*..... ib.
Decreto de 9.—*Abolicion de las* mitas, *esencion de servicio personal, y otras medidas á favor de los indios*..... 54.
Orden de 10.—*Los gefes políticos no tienen voto en los ayuntamientos, pero sí los alcaldes y procuradores síndicos*... 55.
Orden de 27.—*En que se declara que las agencias consulares encargadas á ciudadanos españoles por las potencias estrangeras no deben ser consideradas como empleos*..... ib.

DICIEMBRE.

Orden del dia 22.—*Como ejecutará la visita de cárceles el tribunal especial de guerra y marina*..... 56.

ENERO DE 1813.

Decreto del dia 4.—*Sobre reducir los baldios y otros terrenos comunes á dominio particular: suertes concedidas á los defensores de la pátria y á los ciudadanos no propietarios*.. ib.
Decreto de 23.—*Que el supremo tribunal de justicia debe conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de los tribunales especiales*..... 59.
Decreto de 26.—*Ereccion de obispado y seminario en la capital de Nuevo México*..... 60.

FEBRERO.

Decreto del dia 5.—*Como deben informar en los estrados de las audiencias los militares letrados*..... ib.
Decreto de 22.—*Abolicion de la inquisicion y establecimiento de los tribunales protectores de la fe*..... ib.
Decreto de id.—*Por el que se mandan quitar de los parages públicos, y destruir las pinturas ó inscripciones de los castigos impuestos por la inquisicion*..... 62.
Decreto de id.—*Se declaran nacionales los bienes que fueron de la inquisicion: medidas sobre su ocupacion, y sobre el sueldo y destino de los individuos de dicho tribunal*..... 63.

MARZO.

Decreto del dia 9.—*Que para la admision en colegios &c. del ejército y armada no se admitan informaciones de nobleza, ni haya distinciones perjudiciales entre sus individuos*... 66.
Decreto de 10.—*Cómo se reemplazarán los regidores y demas oficiales de los ayuntamientos*..... ib.
Decreto de 24.—*Los individuos de los antiguos ayuntamientos conserven sus honores*..... 67.
Decreto de id.—*Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos*..... ib.
Orden de 30.—*Quedan suspensos de sus funciones todos aquellos á quienes se mande formar causa por infractores de la constitucion*..... 74.

ABRIL.

Decreto del dia 11.—*Consideracion que debe tenerse á los jueces de primera instancia, y á los abogados particulares cuando suplen en los tribunales la falta de sus ministros*..... 75.
Decreto de 14.—*Se concede á los gefes políticos la facultad que tenian los presidentes de las chancillerias para conceder ó negar la licencia de contraer matrimonio*..... ib.
Orden de 17.—*De quién debe valerse la regencia para instruir los espedientes sobre dispensas de ley*..... 76.
Decreto de 19.—*Instruccion para dirimir las competencias de jurisdiccion en toda la monarquia*..... ib.

MAYO.

Orden del dia 1.°—*Quién ha de espedir las cédulas para la ereccion del obispado en Nuevo México con otras medidas para ello*... 78.
Orden de 19.—*Se manda observar la ley sobre parentescos en la eleccion de individuos para los ayuntamientos*..... ib.
Orden de 22.—*Cuándo y cómo se permitirá rifar las fincas de los particulares*..... 79.
Decreto de 26.—*Se mandan quitar los signos de vasallage que hubiere en los pueblos*..... ib.

JUNIO.

Del dia 8.—*Varias medidas para el fomento de la agricultura y ganaderia*..... ib.
Decreto de id.—*Cómo deben contribuir todos los españoles á la manutencion y servicio de los ejércitos nacionales*..... 81.
Decreto de id.—*Sobre establecimiento de cátedras de agricultura y de sociedades económicas*..... 82.
Decreto de id.—*Sobre el libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquiera industria útil*..... 83.
Decreto de 10.—*Reglas para conservar á los escritores la pro-*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

piedad de sus obras ..... 84.
Orden de 13.—*Repitiendo la de 10 de noviembre último sobre que los gefes políticos no tengan voto en los ayuntamientos, y sí los alcaldes y síndicos* ..... 85.
Decreto de 14.—*Pueden ser diputados de córtes los catedráticos y regulares secularizados, pero no los profesos de las órdenes militares* ..... ib.
Decreto de 23.—*Instruccion para el gobierno económico-político de las provincias* ..... ib.

JULIO.

Decreto del dia 8.—*Premio de las tropas de Ultramar* ..... 101.
Orden de 14.—*Para asegurar las cantidades que deban los poseedores de vínculos cuando soliciten permiso para enagenarlos* 102.
Decreto de 17.—*Sobre el recurso de nulidad en las causas criminales* ..... ib.
Orden de 29.—*Se manda que el montepio militar pague las pensiones correspondientes á las viudas de los oficiales que mueren de epidemia en los lugares donde estén acantonados los ejércitos* ..... ib.

AGOSTO.

Decreto del dia 11.—*Varias reglas para gobierno de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de los pueblos* .. 103.
Decreto de 17.—*Prohibicion de la correccion de azotes en escuelas y colegios* ..... 104.

SETIEMBRE.

Decreto del dia 1.°—*Declaracion del decreto de 24 de marzo de este año sobre que el supremo tribunal de justicia conozca de las reclamaciones de los magistrados y jueces de que habla el artículo 8 del mismo decreto* ..... ib.
Decreto de 8.—*Abolicion de la pena de azotes: se prohibe usar de este y otros castigos con los indios* ..... 105.
Decreto de 9.—*Se hace estensivo á la armada el reglamento de sueldos del ejército* ..... 106.
Decreto de 13.—*En que se mandan entregar y quedar á disposicion de los ordinarios los lugares de indios reducidos al cristianismo por los regulares de ultramar* ..... ib.

OCTUBRE.

Orden del dia 22.—*Se resuelven las dudas propuestas por el consejo de generales del puerto de Sta. María* ..... 107.
Orden de 28.—*Se declara que en las causas criminales en que empezó la pendencia por injurias verbales terminándose con alguno de los delitos que turban la seguridad personal, ó la tranquilidad pública, no ha lugar al juicio de conciliacion* 109.

Orden de id.—*Se declara que á los jueces de primera instancia toca acordar por via de providencia el destino ó correccion de los reos en los casos y forma que previene el artículo 5.° de la ley 6.ª título 4.° libro 1.° de la Recopilacion* ..... 109.
Decreto de 29.—*Se concede el título de ciudad al pueblo de Comitan y otros de Chiapa* ..... 110.

NOVIEMBRE.

Orden del dia 1.°—*Se recuerda la observancia de las leyes prohibitivas de los enterramientos en sagrado bajo la responsabilidad de los que las entorpezcan* ..... ib.
Orden de id.—*Declarando que en Granada y demas capitales de provincia debe haber la junta municipal de sanidad ademas de la provincial* ..... ib.
Orden de 3.—*Restablecimiento del montepio militar y reglas para su gobierno* ..... 111.
Orden de 20.—*Declarando las córtes que solo debe haber en las capitales y pueblos la junta municipal de sanidad y la superior de la provincia* ..... 112.
Decreto de 23.—*Se declaran anexas para siempre á los comandantes de buques de guerra las maestrías de plata de los mismos* ..... ib.
Decreto de 25.—*Se declaran libres del derecho de alcabalas las ventas cambios y permutas de esclavos* ..... 113.
Decreto de 28.—*Se declara el haber y consideracion de los ex-secretarios del despacho* ..... ib.

FEBRERO DE 1814.

Decreto del dia 19.—*Se declara que los empleados de la hacienda militar son subalternos del ministerio de la guerra* ... 114.

MARZO.

Decreto del dia 26.—*Se habilita á Comercio el puerto de Guaimas* ..... 115.

ABRIL.

Decreto del dia 30.—*Se manda abrir un canal entre los rios de Chimipila y Goazacoalcos* ..... ib.

MAYO.

Orden del dia 4.—*Se Declara que la mayoría del número de diputados de provincia basta para instalarse la diputacion provincial* ..... 116.
Decreto de 5.—*Se señalan los derechos por los juicios de conciliacion* ..... ib.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

JULIO DE 1820.

Orden del dia 18.—*Declarando las dudas ocurridas al alcalde constitucional de la villa de Torre de Miguel Sesmero sobre los procedimientos en causas livianas* ..... 117.
Orden de 22.—*Se declara la duda ocurrida al supremo tribunal de justicia sobre si debe dirimir una competencia suscitada entre el alcalde constitucional de Belmonte y el provisor eclesiastico de Cuenca, acerca del conocimiento de un artículo posesorio* ..... 118.

AGOSTO.

Orden del dia 11.—*Declarando innecesaria la consulta de la mayoria de la sala primera del supremo tribunal de justicia, relativa á si con motivo de la formacion de causa al marqués de Campo Sagrado, mandada formar por las cortes estraordinarias, deberia pasar para instruir el sumario el ministro mas antiguo de la sala al pueblo de la residencia del tratado como reo ó presentarse este ante el tribunal &c.* ..... 119.
Decreto de 17.—*Supresion de la compañia de Jesus, y restitucion al cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta córte de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su ereccion* ..... 120.
Orden de 28.—*Sobre que los jueces de primera instancia en los casos de apelacion, y demas en que deban remitir y remitan á las audiencias territoriales los procesos lo ejecuten sin los presos, como no preceda espresa órden de dichas audiencias para ello* ..... 121.

SETIEMBRE.

Orden del dia 2.—*Se aprueba el dictamen del supremo tribunal de justicia sobre los trámites de una causa seguida en Cataluña contra D. Ramon Domingo, encargado de la abogacia de pobres* ..... 122.
Decreto de id.—*Acerca de los sueldos que han de gozar los eclesiásticos que sirven empleos civiles, y que no puedan obtener mas de un beneficio* ..... 124.
Decreto de 3.—*Sueldos que han de disfrutar los empleados cesantes* ..... 125.
Decreto de 11.—*Se establecen diferentes reglas para la sustanciacion de las causas criminales* ..... 126.
Decreto de id.—*Haciendo varias aclaraciones para poder proceder á la prision ó detencion de cualquier español* ..... 129.
Decreto de id.—*Se previene que los jueces de primera instancia no puedan ejercer la abogacia escepto en la defensa de sus propias causas con lo demas que se espresa* ..... ib.

Decreto de id.—*Se prescribe la conducta de los gefes politicos y ayuntamientos con los que no tienen modo de vivir conocido, gitanos &c.* ..... 130.
Decreto de 18.—*Aumento de sueldo y prest á los oficiales y tropa que se espresa, y licencias que podran concederse á las clases desde coronel á subteniente inclusive* ..... 131.
Orden de 25.—*Se manda admitir por el supremo tribunal de justicia la súplica que Doña Maria Inés de Jáuregui, viuda del teniente general D. José de Iturrigaray, interpuso en el estinguido consejo de Indias.* ..... 132.
Decreto de 27.—*Supresion de toda especie de vinculaciones...* ib.

OCTUBRE.

Decreto del dia 1.°—*Supresion de monacales y reforma de regulares* ..... 135.
Decreto de 2.—*Asegurando el derecho de propiedad á los que inventen, perfeccionen ó introduzcan algun ramo de industria.* 139.
Decreto de 8.—*Se estinguen las matriculas de mar, y se establecen las reglas para la navegacion y pesca, y servicio militar de marina* ..... 143.
Orden de 12.—*Mandando se destruyan los calabozos subterraneos y mal sanos con los demas que se espresa* ..... 151.
Decreto de 21.—*Sobre las reuniones de individuos para discutir en público asuntos politicos* ..... 152.
Decreto de 22.—*Reglamento acerca de la libertad de imprenta* .. ib.
Decreto de id.—*Se hacen estensivas á la armada las modificaciones que se espresan respecto á las penas de desercion.* 163.
Decreto de id.—*Sueldos que han de gozar los oficiales del cuerpo politico de la armada nacional* ..... ib.
Decreto de id.—*Se señalan los sueldos de los primeros y segundos médicos-cirujanos de la armada.* ..... 164.
Decreto de 25.—*Haciendo estensivo el aumento de prest y sueldo acordado á algunas clases del ejército á los individuos de las mismas en la marina militar* ..... ib.
Orden de 26.—*Previniendo que á los declarados pobres no se exijan derechos en las curias episcopales por el despacho de dispensas* ..... ib.

NOVIEMBRE.

Orden del dia 1.°—*Sobre interinidad de los jueces de los tribunales &c.* ..... 165.
Decreto de 6.—*Dotacion de los capellanes párrocos castrenses.* 166.
Decreto de 7.—*Sobre percepcion del derecho del* post mortem, *vacantes de prebendas eclesiásticas, consultas de las mismas &c.* ..... 167.
Orden de id.—*Se autoriza al gobierno para que pueda conceder á los oficiales del ejército sus retiros con la escala que*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

se espresa ..... 168.
Decreto de id.—*Sobre venta de efectos de las casas de regulares suprimidas* ..... ib.
Orden de 8.—*Aclarando la duda de si los militares que obtengan plazas de gefes políticos en propiedad se han de dar ó no de baja en el ejército,* ..... 169.
Orden de id.—*En la cual se declaran algunas dudas sobre la inteligencia del decreto de 2 de setiembre sobre* pluralidad de beneficios ..... 170.
Orden de id.—*En la cual se manda que las solicitudes de los ayuntamientos para obras de pública utilidad vengan dirigidas é informadas por las diputaciones provinciales &c.* ib.
Orden de id.—*Se consideran como parroquias las que son ayudas de la de Cartegena para las elecciones parroquiales, haciéndose general esta resolucion á todos los pueblos que se hallen en el caso que se espresa* ..... 171.
Orden de id.—*Se declara que los síndicos procuradores están obligados como los demas individuos de los ayuntamientos á la recaudacion y conduccion de las contribuciones* ..... 172.
Orden de id.—*Declarando que la ley sobre abolicion de la ordenanza de matrículas de mar es estensiva en todas sus partes á todos los puntos de ambas Españas* ..... ib.
Decreto de 9.—*Supresion de medias annatas* ..... ib.
Decreto de id.—*Supresion de las esacciones para redencion de cautivos* ..... 173.

MARZO DE 1821.

Orden del dia 17.—*Por la que se declara que el decreto sobre abolicion de mayorazgos no se opone á la conclusion de los permisos concedidos antes de su publicacion para vender bienes vinculados* ..... ib.
Orden de 20.—*Declarando que en todos los tribunales eclesiásticos del reino deban admitirse las apelaciones en ambos efectos en todos los casos prevenidos por el derecho comun.* 174.
Decreto de 23.—*Aclaraciones de la ley de 23 de mayo de 1812 sobre formacion de ayuntamientos constitucionales* ..... 175.
Orden de 31.—*En la cual se declara que la espedicion de títulos de revisores de letra antigua corresponde á las diputaciones provinciales, asi como el examen y aprobacion de maestros de primeras letras* ..... 176.
Orden de id.—*Por la que se manda que los individuos de ayuntamiento una vez nombrados para servir sus cargos no puedan serlo para otros del mismo en todo el tiempo que hayan de continuar en ellos con arreglo á lo prevenido.* ib.

ABRIL.

Orden del dia 8.—*Mandando se suspenda la provision de beneficios y capellanias que no tengan anexa cura de almas &c. interin se acuerde lo conveniente sobre el plan general del clero* ..... 176.
Orden de 14.—*Se recomienda al gobierno proceda en uso de sus facultades á la formacion de la lista de libros que no deban correr, y que tome las medidas mas energicas para que no circulen aquellos, ni los escritos y estampas obscenas &c* 177.
Decreto de 17.—*Se establecen las penas que habrán de imponerse á los conspiradores contra la constitucion é infractores de ella* ..... 178.
Decreto de 17.—*Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiracion* ..... 183.

MAYO.

Orden del dia 9.—*Declarando no hallarse comprendidas en el artículo 2. de la ley de libertad de imprenta las conclusiones que versan sobre la sagrada escritura &c.* ..... 187.
Decreto de 12.—*Concediendo á los intendentes ciertas facultades para la cobranza de contribuciones é impuestos* ..... 188.
Orden de 14.—*Declarando no estar escluidos de tomar parte y representar en las causas de la hacienda pública los empleados en ella* ..... 189.
Orden de 15.—*Permitiendo á D. Andrés Fernandez de Viedma que disponga de todas las vinculaciones que posee; y se hace general esta resolucion con las modificaciones que se espresan.* ib.
Orden de 17.—*Por la que se suprimen las cédulas de preeminencia, y se establecen reglas para conceder jubilaciones á los magistrados de las audiencias &c.* ..... 190.
Decreto de 18.—*Se hace estensivo á los eclesiásticos y militares el medio de conciliacion que se prescribe en la constitucion para los demas ciudadanos, con las escepciones que se espresan* ..... 191.
Orden de id.—*Haciendo estensiva á los cuerpos de la armada la resolucion de 7 de noviembre último sobre retiros á los oficiales del ejército* ..... 193.
Decreto de 19.—*Se establecen reglas para la fabricacion de pólvora, arrendamiento y venta de las fábricas pertenecientes á la nacion* ..... ib.
Orden de 20.—*Reglas para el establecimiento de los oficios de hipotécas* ..... 195.
Decreto de 21.—*Derogacion del artículo 7.° de la instruccion de 1725 sobre apremio de labradores &c.* ..... ib.
Orden de id.—*Por la cual se declara que los premios de constancia y de acciones distinguidas no tienen caracter de sueldo.* ib.
Orden de 25.—*En la cual se prescribe el plan de ejercicios literarios para la oposicion de prebendas y curatos* ..... 196.
Orden de 28.—*En la que se declara que las corporaciones,*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

aunque autorizadas por la ley asi como las sociedades que no lo esten, no deban admitirse como defensores en las causas de fe ..... 196.
Decreto de 29.—*Sobre reemplazo de los gefes y oficiales agregados y supernumerarios del ejército* ..... 197.
Decreto de 30.—*Acerca de la propuesta de S. M. sobre promocion de los cadetes y sargentos primeros del ejército* ..... 198.

JUNIO.

Decreto del dia 8.—*Abolicion de ciertos derechos sobre la plata y oro &c.* ..... 199.
Orden de 12.—*Declarando que los párrocos que vivan fuera del recinto de sus parroquias no pueden dar ni recibir votos en las juntas electorales en que sean pastores &c.* ..... 201.
Decreto de 13.—*Derogacion del artículo 6.° del decreto de 30 de mayo relativo al pase de cadetes á las milicias provinciales* ib.
Orden de id.—*Aclaracion del decreto de 8 de octubre de 1820 sobre matrículas de mar* ..... ib.
Decreto de 19.—*Aclaracion de la ley de 27 de setiembre último sobre vinculaciones* ..... 202.
Decreto de 22.—*Aumento de sueldo á los oficiales primeros, segundos y terceros del ministerio de artillería* ..... 203.
Orden de 24 *Aclaracion de la inteligencia que deberá darse á la voz* sirvientes domésticos ..... ib.
Orden de 25.—*Declarando que las diputaciones provinciales pueden consentir que los ayuntamientos graven á sus pueblos con ciertos impuestos, cuando su objeto sea urgente* ..... ib.
Orden de id.—*Mandando se observen las leyes vigentes relativas á obrages de plata y oro* ..... 204.
Orden de 27.—*Para que se continúe el abono de la gratificacion á los cirujanos militares* ..... ib.
Decreto de 28.—*Reglas para hacer el abono de retiro á los oficiales del ejército que han servido en las milicias provinciales* .. ib.
Orden de 29.—*Aclaraciones sobre el modo y órden con que han de proceder las diputaciones provinciales para la renovacion de sus individuos en las circunstancias que se expresan* . 205.
Decreto de id.—*Esencion de diezmos á los nuevos plantíos de cacao de Nueva España* ..... 206.
Decreto de id.—*Asignacion de retiros á los sargentos de primera y segunda clase del ejército* ..... ib.

SETIEMBRE.

Orden del dia 23.—*Por la que se declara no deber continuar en las córtes mas diputados suplentes de las provincias de Ultramar que los de Filipinas y Perú* ..... ib.

FIN.

COLECCION
DE LOS DECRETOS Y ÓRDENES
DE
LAS CORTES DE ESPAÑA.
QUE SE HALLAN ACTUALMENTE VIGENTES EN LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DECRETO.
DE 26 DE ENERO DE 1811.

Libertad del comercio del azogue.

Deseando las córtes generales y estraordinarias que el importante ramo de minería en todos los dominios de Indias é Islas Filipinas tenga el aumento posible, y considerando que el estanco de azogue establecido por la ley 1, tít. XXIII, lib. VIII de su recopilacion, y el derecho que la real hacienda se reserva por el art. 22 tít. VI de la ordenanza de Nueva España, para aplicarse y labrar de su cuenta las de esta especie cuando le acomode, mediante convenio con el descubridor ó denunciador, manteniendo incierta la suerte del dueño, y privando de su comercio, retrae precisamente de la útil y costosa empresa de descubrir y labrar minas de azogue, y tambien de solicitarlo, conducirlo y proporcionar la concurrencia, como podrá suceder en la seguridad de ser un artículo de comercio libre, exento perpetuamente de todo derecho, incluso el del quinto, ó de la parte que el minero debiere contribuir; teniendo presente lo propuesto y consultado á las mismas córtes por el consejo de regencia en 26 de diciembre último á favor de la libertad y franquicia de tan necesario auxilio para las operaciones de las minas de oro y plata, é igualmente lo que sobre el particular han promovido y solicitado los diputados de Indias á córtes, persuadiendo con ilustracion y celo la conveniencia de derogar las citadas disposiciones, y cualesquiera otras que en todo ó parte sean conformes á ellas, ó contradigan la libertad del comercio en dicho mineral, y la seguridad del dominio absoluto y perpetuo del minero, *con tal que en seguirlas y labrarlas observe las reglas dadas por punto general en la materia*, despues de un maduro exá-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

aunque autorizadas por la ley asi como las sociedades que no lo esten, no deban admitirse como defensores en las causas de fe ..... 196.
Decreto de 29.—*Sobre reemplazo de los gefes y oficiales agregados y supernumerarios del ejército* ..... 197.
Decreto de 30.—*Acerca de la propuesta de S. M. sobre promocion de los cadetes y sargentos primeros del ejército* ..... 198.

JUNIO.

Decreto del dia 8.—*Abolicion de ciertos derechos sobre la plata y oro &c.* ..... 199.
Orden de 12.—*Declarando que los párrocos que vivan fuera del recinto de sus parroquias no pueden dar ni recibir votos en las juntas electorales en que sean pastores &c.* ..... 201.
Decreto de 13.—*Derogacion del artículo 6.° del decreto de 30 de mayo relativo al pase de cadetes á las milicias provinciales* ib.
Orden de id.—*Aclaracion del decreto de 8 de octubre de 1820 sobre matrículas de mar* ..... ib.
Decreto de 19.—*Aclaracion de la ley de 27 de setiembre último sobre vinculaciones* ..... 202.
Decreto de 22.—*Aumento de sueldo á los oficiales primeros, segundos y terceros del ministerio de artillería* ..... 203.
Orden de 24 *Aclaracion de la inteligencia que deberá darse á la voz* sirvientes domésticos ..... ib.
Orden de 25.—*Declarando que las diputaciones provinciales pueden consentir que los ayuntamientos graven á sus pueblos con ciertos impuestos, cuando su objeto sea urgente* ..... ib.
Orden de id.—*Mandando se observen las leyes vigentes relativas á obrages de plata y oro* ..... 204.
Orden de 27.—*Para que se continúe el abono de la gratificacion á los cirujanos militares* ..... ib.
Decreto de 28.—*Reglas para hacer el abono de retiro á los oficiales del ejército que han servido en las milicias provinciales* .. ib.
Orden de 29.—*Aclaraciones sobre el modo y órden con que han de proceder las diputaciones provinciales para la renovacion de sus individuos en las circunstancias que se expresan* . 205.
Decreto de id.—*Esencion de diezmos á los nuevos plantíos de cacao de Nueva España* ..... 206.
Decreto de id.—*Asignacion de retiros á los sargentos de primera y segunda clase del ejército* ..... ib.

SETIEMBRE.

Orden del dia 23.—*Por la que se declara no deber continuar en las córtes mas diputados suplentes de las provincias de Ultramar que los de Filipinas y Perú* ..... ib.

FIN.

COLECCION
DE LOS DECRETOS Y ÓRDENES
DE
LAS CORTES DE ESPAÑA.
QUE SE HALLAN ACTUALMENTE VIGENTES EN LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DECRETO.
DE 26 DE ENERO DE 1811.

Libertad del comercio del azogue.

Deseando las córtes generales y estraordinarias que el importante ramo de minería en todos los dominios de Indias é Islas Filipinas tenga el aumento posible, y considerando que el estanco de azogue establecido por la ley 1, tít. XXIII, lib. VIII de su recopilacion, y el derecho que la real hacienda se reserva por el art. 22 tít. VI de la ordenanza de Nueva España, para aplicarse y labrar de su cuenta las de esta especie cuando le acomode, mediante convenio con el descubridor ó denunciador, manteniendo incierta la suerte del dueño, y privando de su comercio, retrae precisamente de la útil y costosa empresa de descubrir y labrar minas de azogue, y tambien de solicitarlo, conducirlo y proporcionar la concurrencia, como podrá suceder en la seguridad de ser un artículo de comercio libre, exento perpetuamente de todo derecho, incluso el del quinto, ó de la parte que el minero debiere contribuir; teniendo presente lo propuesto y consultado á las mismas córtes por el consejo de regencia en 26 de diciembre último á favor de la libertad y franquicia de tan necesario auxilio para las operaciones de las minas de oro y plata, é igualmente lo que sobre el particular han promovido y solicitado los diputados de Indias á córtes, persuadiendo con ilustracion y celo la conveniencia de derogar las citadas disposiciones, y cualesquiera otras que en todo ó parte sean conformes á ellas, ó contradigan la libertad del comercio en dicho mineral, y la seguridad del dominio absoluto y perpetuo del minero, *con tal que en seguirlas y labrarlas observe las reglas dadas por punto general en la materia*, despues de un maduro exá-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

men, han venido y vienen en decretar la espuesta derogacion, y la concesion de las franquicias esplicadas, mandando al mismo tiempo que si en consecuencia del anterior estanco, ó sin él, la real hacienda hubiere remitido ó remitiere de su cuenta alguna porcion de azogue á repartirla á costo y costas, segun lo ha ejecutado hasta ahora en beneficio de los dueños de las mismas, el repartimiento se haga precisa y privativamente por los respectivos tribunales de minería, como mas instruidos de las necesidades y de todo lo conducente al acierto y logro del fin á que se dirige, en cuya virtud será de su cargo el debido reintegro del importe en las cajas reales, fiando las córtes del honor, integridad y celo de los espresados tribunales, que llenarán la alta confianza que de ellos hacen en un encargo tan interesante y digno de sus paternales miras.

ORDEN.

Ofreciendo premiar á los descubridores de minas de azogue en América, con otras medidas para fomento de este ramo.

Deseando las córtes generales y estraordinarias fomentar el descubrimiento y laboreo de las minas de azogue con la atencion y particularidad correspondientes á su gran importancia, han tenido á bien reservarse el premiar á los descubridores en la América de minas de azogue, y el dar el premio mas considerable al que hallare la mas rica y útil. Han resuelto asimismo que se encargue á los tribunales de minería de las Américas la esacta observancia de esta importantísima determinacion, estimulando su adelantamiento por todos los medios que estimen conducentes, dando parte con puntealidad á las córtes por medio del consejo de regencia. Y declaran que premiarán á los químicos y mineralogistas de la Europa que descubran ó inventen el modo de beneficiar los metales con menos cantidad y la menor posible pérdida de azogues. Febrero 1 de 1811.

DECRETO.

DE 12 DE MARZO DE 1811.

Varias medidas para fomento de la agricultura é industria de la América.

Siendo uno de los cuidados que principalmente ocupan la atencion de las córtes generales y estraordinarias el de proporcionar á los habitantes de las dilatadas provincias de América todos los medios que puedan contribuir á promover y asegurar su verdadera felicidad, y persuadidas de la justicia y utilidad de los que ha propuesto el consejo de regencia en vista de la representacion

que dirigió en 30 de mayo de 1810 el R. obispo de Valladolid de Michoacan con el interesante objeto de fomentar en aquellos paises el adelantamiento y mejoras de la agricultura é industria, disminuyendo cuanto sea posible las trabas y gravámenes que lo impiden con notable perjuicio del estado, decretan:—1.° Que el derecho sobre las tiendas conocidas con el nombre de *pulpería* quede suprimido —2.° Que se permita francamente la fábrica y venta del aguardiente mezcal en el vireinato de México.—3.° Que se exijan seis pesos fuertes por cada barril de dicho aguardiente mezcal, y se rebajen dos pesos fuertes en el impuesto sobre cada barril de aguardiente de caña —4.° Que subsista el aumento impuesto últimamente de dos reales en cada libra de tabaco, y el de dos por ciento sobre los seis que se cobraban por derecho de alcabala con el destino que se dió á estos arbitrios para el pago del capital y réditos del empréstito de veinte millones de pesos abierto en Nueva España.—5.° Que para llenarle con mayor rapidez, se permita que de los propios y cajas de comunidad de los indios se pongan como á ganancia en dicho fondo las cantidades que voluntariamente den las comunidades, villas y lugares de aquel reino.—y 6.° Que el virey de Nueva España, con audiencia de los fiscales y de una junta compuesta del arzobispo, regente, intendente, contador mayor, el de tributos, un oficial real, el regidor decano, el síndico procurador, y un hombre bueno elegido por el ayuntamiento de México, examine la rebaja justa que pueda hacerse en los derechos que se cobran del pulque y la lleve á efecto, dando sin embargo cuenta á S. M. por medio del consejo de regencia para su soberana sancion.

DECRETO.

DE 13 DE MARZO DE 1811.

Esencion de tributos á los indios y castas: repartimiento de tierras á los primeros, y prohibicion del comercio de repartimiento á los justicias.

Las córtes generales y estraordinarias, habiendo examinado detenidamente el decreto espedido por el anterior consejo de regencia en la real Isla de Leon á 26 de mayo del año próximo pasado de 1810, y el bando que para su ejecucion mandó publicar en México con fecha de 5 de octubre del mismo año, el virey de Nueva España D. Francisco Xavier Venegas, al mismo tiempo que han tenido á bien aprobar la esencion del tributo concedida á los indios en aquel decreto, con la estension declarada por dicho virey en el referido bando á favor de las castas de mulatos, negros, y demas que se han mantenido y mantengan fieles á la sagrada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

causa de la pátria en el distrito de aquel vireinato, decretan: 1.° Que la espresada gracia de la esencion de tributo sea estensiva á los indios y á las castas de las demas provincias de América: 2.° Que la gracia del repartimiento de tierras de los pueblos de los indios no se estienda á las castas: 3.° Que se cumplan con el mayor rigor las reales órdenes y disposiciones que prohiben á las justicias el abuso de comerciar en el distrito de sus respectivas jurisdicciones bajo el especioso título de *repartimientos*.

DECRETO.

DE 22 DE MARZO DE 1811.

Sobre la enagenacion y venta de algunos edificios y fincas de la corona, admitiéndose en parte del precio los valores y créditos.

Las cortes generales y estraordinarias, teniendo en consideracion que los edificios y fincas pertenecientes á la corona gravan al erario con gastos que no se recompensan con sus productos, al paso que trasladándose á manos de particulares, fomentarian su riqueza y la general del estado; y siendo muy urgente el reunir fondos para sostener la sangrienta lucha en que tan justamente se halla empeñada la nacion, á fin de asegurar su libertad é independencia, decretan: 1.° La enagenacion de los edificios y fincas de la corona, esceptuando por ahora los palacios, cotos y sitios reales: 2.° Que desde luego se proceda por los intendentes á realizar la venta de los edificios y fincas de la corona que se hallen en las provincias no ocupadas por los enemigos, previa tasacion, debiendo remitir una nota puntual de las que hubiere en el distrito de su provincia respectiva, con espresion de su valor y precios del remate de cada una: 3.° La venta deberá hacerse en pública subasta, y no podrá admitirse postura que sea menor de las tres cuartas partes del valor que resulte tener la finca por justa tasacion: 4.° No podrá celebrarse el remate hasta que se halle cubierto el precio total del justiprecio: 5.° Se podrán admitir vales reales en pago de la tercera parte del precio por que se remate la finca; pero las otras dos deberán satisfacerse precisamente en dinero metálico: 6.° Podrán tambien admitirse en pago de las dos terceras partes del precio del remate créditos procedentes de suministros, ó de asientos hechos para la subsistencia y servicio de los ejércitos en la presente guerra; pero en este caso deberá igualmente satisfacerse en dinero metálico la otra tercera parte: 7.° Los intendentes deberán dirigir inmediatamente á la tesorería mayor los vales reales que se recojan por estas ventas, á fin de que hecha

su amortizacion, se dé noticia al público de los números de dichos valores amortizados.

ORDEN.

Haciendo estensiva en la América la libertad de alcabalas y cientos en la venta de embarcaciones.

Las cortes generales y estraordinarias, teniendo en consideracion lo que de órden del consejo de regencia manifiesta V. S. en oficio de 25 de febrero último, han resuelto que la real órden de 14 de abril de 1802, por la que se concedió la absoluta libertad de derechos de alcabalas y cientos en las ventas de embarcaciones españolas y estrangeras que se ejecutasen en los puertos de estos dominios á favor de los naturales de ellos, sea estensiva á todas las provincias de América, pero no debiendo producir efecto hasta que esta soberana disposicion sea comunicada y publicada en aquellos dominios. Cádiz 23 de marzo de 1811.

ORDEN

Por la que se manda erigir en los ejércitos un tribunal llamado de honor.

Exmo. sr.: =Enteradas las cortes generales y estraordinarias del proyecto sobre la formacion en cada uno de los ejércitos de un tribunal denominado de *honor*, para juzgar sin apelacion de los delitos que hacen desmerecer á los oficiales y cadetes que incurren en ellos de la alternativa con sus compañeros, cuyo establecimiento consideraba oportuno el consejo de regencia, segun espuso V. E en oficio de 14 de febrero último, acompañando cópia de dicho proyecto; han resuelto se establezcan dichos tribunales, y que se remita á V. E, como lo ejecutamos, el dictámen dado en su razon por la comision de guerra de las mismas, el del diputado D. Antonio Samper, y el resultado de la discusion inserto en los diarios, que incluimos, números 14, 21, 22, 23 y 24; para que con presencia de todo forme S. A. el reglamento con que se han de regir y gobernar los espresados tribunales de *honor*, dirigiéndolo al congreso antes de su publicacion para la sancion de S. M. Cádiz 31 de marzo de 1811.

ORDEN

Por la que se fijan conforme á ordenanza los premios, y pensiones correspondientes á los individuos de las matrículas de marina, y se establece un fondo para este objeto.

Enteradas las cortes generales y estraordinarias del proyecto que de órden del consejo de regencia nos comunicó V. S. con fe-

cha de 22 de enero próximo sobre el establecimiento de un fondo seguro. que tenga por objeto satisfacer las pensiones de inválidos, y los premios declarados por la ordenanza de matrícula del año de 1802 á los individuos que en ella se señalan; y persuadidas que la utilidad pública y la justicia reclaman el cumplimiento de tan interesantes objetos, han resuelto se observe puntualmente lo dispuesto en cuanto á ambos estremos en el artículo 19 del título 1.° y en el 17 del 2.° de dicha ordenanza, y que para la asignacion de premios se regulen las campañas de un año cada una, señalándose seis reales mensuales al que sin desercion ni nota fea hubiere servido honradamente seis campañas ó años, nueve al que ocho, noventa al de quince, ciento treinta y cinco al de veinte y cinco, concediéndose la graduacion de oficial al que tuviere veinte y ocho, con tal que patronee ó mande embarcacion que no baje de 200 quintales, ó haya ascendido por sus méritos é inteligencia á la clase de oficial de mar, á fin de que sostenga con el correspondiente decoro una distincion que no conviene por ningun pretesto envilecer. Y para que por falta de fondos no dejen de realizarse estas disposiciones, han resuelto igualmente las cortes se destinen por ahora, ínterin que el erario público menos eshausto pueda con sus propios fondos cubrir tan legítima deuda, los arbitrios siguientes: 1.° La cantidad que se rebaja por inválidos y otro cualquiera título á la gente de mar debe entrar en este fondo, que ha de ser muy sagrado, sin que por ningun título ó razon pueda distraerse ni emplearse el todo ni la mas mínima parte en otro distinto objeto: 2.° Lo que produzca un cierto y moderado impuesto que se establezca sobre la pesca que se conduzca á los puertos ó playas: 3.° Que toda embarcacion grande ó chica, de cualquier porte, que se emplee en navegaciones de alta mar, en las de cabotage, ó en el tráfico dentro de los puertos y calas, pague una cierta cantidad mensual segun su porte: 4.° Que todo corsario satisfaga un tanto por ciento del valor de la carga y buque que hubiere apresado; y 5.° Que se escite la generosidad de los consulados para que den anualmente lo que quieran para este fondo Al mismo tiempo ha determinado S. M. que la recaudacion de estos arbitrios se ejecute en los distintos puntos de la costa bajo una esacta cuenta y razon por los comandantes de marina, depositándose en una arca de tres llaves para remitirse á los respectivos departamentos, con la circunstancia de que estos tres fondos no se han de considerar como distintos, sino que formarán uno solo distribuible igualmente entre todos, auxiliandose recíprocamente unos á otros. Pero siendo indispensable puntualizar á cuanto puedan ascender los gastos y los productos de los arbitrios asignados, y de cualquiera otro que

se proponga para la estabilidad de esta providencia, es la voluntad de S. M. que el consejo de regencia proponga á su soberana aprobacion la forma y cuota que se fije á los impuestos espresados, presentando tambien con la posible brevedad las demas medidas en que se ocupa para el fomento del servicio militar de marina.= Cádiz 2 de abril de 1811.

DECRETO.

DE 16 DE ABRIL DE 1811.

Libertad del buceo de la perla, y de la pesca de la ballena, nutria y lobo marino en todos los dominios de Indias.

Las cortes generales y estraordinarias, ocupadas incesantemente en promover por todos los medios posibles el fomento y progresos de la industria, navegacion y comercio nacional, que tanto influjo tienen sobre la riqueza y prosperidad del estado, íntimamente convencidas de que la mayor parte de las leyes establecidas á beneficio del interesante ramo de la pesca y buceo de la perla en los dominios de América son diametralmente opuestas á los mismos fines con que se dictaron, y deseando restablecer las pesquerías á su antigua abundancia, y si es posible elevarlas á un grado de opulencia mayor del que tuvieron en los primitivos tiempos de su descubrimiento, decretan: 1.° Que sea absolutamente libre en todos los dominios de Indias para los súbditos de la monarquía el buceo de la perla, y lo mismo la pesca de la ballena, y particularmente la de nutria y lobo marino en los puertos, ensenadas y surgideros de ambas Californias: 2.° Que queden abolidos todos los derechos municipales, y cualesquiera otros que hayan podido cobrarse con los nombres de regalías, obvenciones y demas para los comandantes generales y empleados: 3.° Que todos los contratos que en lo sucesivo se hicieren entre los armadores y buzos sean enteramente libres, y sin mas restricciones ó reglas que las que estipulen entre sí los contratantes, en cuya operacion jamás podrá intervenir la real hacienda; pues en los casos de derecho la parte agraviada ocurrirá al juez competente y demas tribunales: 4.° Que todo gobernador, juez ó empleado que se interese en este tráfico, incurra en la pena de perdimiento de empleo y de las cantidades que invierta, las cuales se adjudicarán á la persona que justifique pertenecer á los tales gobernadores, empleados ó jueces: 5.° Que queden enteramente libres de todos derechos los objetos navales, ventas de buques, y cuanto tenga relacion con estos particulares: 6.° Que tampoco paguen impuesto alguno los artículos alimenticios que se introduz-

can y estraigan del puerto de S Blas y demas de ambas Californias, esceptuándose del mismo modo todos cuantos objetos puedan servir directamente á la pesca de la nutria, ballena y lobo marino: 7.° Que siempre que algun comerciante en el curso de sus especulaciones descubriese algun artículo de tráfico, que sea produccion de aquellos paises, quede tambien libre de derechos en su estraccion é introduccion en los otros parages y puertos del mar pacífico: 8.° Que del mismo modo sea libre de derechos toda especie de alimentos, las perlas, pieles de nutrias, esperma y grasa de ballena de las mismas costas, siempre que la conduccion se haga en buques nacionales, á fin de dar impulso al comercio de cabotage, que en el dia se halla tan desanimado en aquellas riberas; y 9.° Que quedan derogadas en cuanto se opongan á lo dispuesto en los artículos anteriores las leyes contenidas en el libro IV, título XXV de la recopilacion de Indias, é igualmente las demas que sean contrarias á este decreto, ó coarten la plena y absoluta libertad con que deben gozar en lo sucesivo del producto de su industria los que se dediquen á este ramo.

DECRETO.

DE 22 DE ABRIL DE 1811.

Sobre la libre incorporacion de los abogados en sus colegios.

Las córtes generales y estraordinarias, despues del mas detenido exámen y deliberacion, decretan: Que subsistiendo los colegios de abogados, no tengan número fijo de individuos, y que sea libre la entrada é incorporacion en ellos á cuantos abogados lo soliciten; á cuyo fin derogan las córtes cualesquiera leyes, órdenes y disposiciones generales y particulares espedidas sobre fijar y reducir el número de los abogados en todos y cada uno de los colegios de la nacion.

DECRETO.

DE 22 DE ABRIL DE 1811.

Abolicion de la tortura, y de los apremios, y prohibicion de otras prácticas aflictivas

Las cortes generales y estraordinarias, con absoluta unanimidad y conformidad de todos los votos, decretan: Queda abolido para siempre el tormento en todos los dominios de la monarquía española, y la práctica introducida de afligir y molestar á los reos por los que ilegal y abusivamente llamaban *apremios*; y prohiben los que se conocian con el nombre de *esposas, perrillos, ca-*

labozos estraordinarios, y otros, cualquiera que fuese su denominacion y uso; sin que ningun juez, tribunal ni juzgado, por privilegiado que sea, pueda mandar ni imponer la tortura, ni usar de los insinuados apremios bajo responsabilidad, y la pena, por el mismo hecho de mandarlo, de ser destituidos los jueces de su empleo y dignidad, cuyo crímen podrá perseguirse por accion popular, derogando desde luego cualesquiera ordenanzas, ley, órdenes y disposiciones que se hayan dado y publicado en contrario.

ORDEN.

Por la cual se establecen algunas reglas para el mejor gobierno de los hospitales militares.

Exmo. sr.=Con el fin de que los hospitales militares esten servidos lo mejor que sea posible, é ínterin se establecen las reglas mas convenientes para su gobierno, han resuelto las córtes generales y estraordinarias: 1.° Que en el de la Isla de Leon y en todos los demas se supriman los costosos, fraudulentos y generalmente perjudiciales renglones de los bizcochos y huevos, á fin de que este ahorro se aplique mas útilmente; pero dejando siempre á los facultativos el cuidado de prescribirlos cuando fuesen necesarios: 2.° Que el despensero ú otro cualquiera encargado del abasto diario del hospital entre á primera hora en las carnicerías, y compre antes que nadie las carnes mas suculentas y tiernas para el alimento de los enfermos: 3.° Que por las consideraciones que son obvias se declare preferente á cualquiera otra atencion de las tesorerías de ejército el suministrar los caudales necesarios para el surtimiento de todos los artículos precisos en sus hospitales: 4.° Que los panaderos obligados al abasto del pan de los militares enfermos esten esentos de hacer el servicio en las milicias urbanas: 5.° Que los facultativos destinados á su curacion sean pagados con toda la puntualidad posible, y siempre al mismo tiempo que su respectivo ejército: 6.° Que para evitar los innumerables abusos y funestas consecuencias que se siguen de que dichos facultativos esten en una casi servil dependencia de los empleados de real hacienda, se les deje independientes de estos, y solo sujetos al gefe de la facultad residente en el mismo ejército, debiendo este entenderse en todo lo facultativo con los gefes supremos de la misma facultad, y en lo económico con la junta superior de la provincia, conforme al artículo XXXVIII del reglamento de estas. Cádiz 23 de abril de 1811.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ORDEN.

En que se manda sean preferidos para las plazas del resguardo y otros destinos los militares imposibilitados del servicio.

Conformándose las córtes generales y estraordinarias con lo propuesto por el consejo de regencia, de que nos dió V. S. aviso con fecha de 10 de este mes, han resuelto se confiera la plaza de dependiente del resguardo de Ayamonte, con destino al de Sevilla, á Isidoro del Rio, sargento primero que fue del regimiento de caballeria de húsares de Castilla: y al mismo tiempo han dispuesto que S. A. atienda con preferencia para sta clase de destinos, y otros para que sean aptos, á militares imposibilitados del servicio. Cádiz 19 de mayo de 1811.

ORDEN.

Sobre rebaja de sueldos á los empleados civiles que no sirven sus plazas.

Exmo. sr.=Las córtes generales y estraordinarias han resuelto: 1.° Que ninguno de los empleados civiles, que cobre sueldo del erario sin servir su plaza, perciba mas que las dos terceras partes de su sueldo, siempre que hecha esta deduccion no le queden mas que doce mil réales anuales; pero que si rebajada la tercera parte, le quedasen mas de doce mil reales, únicamente percibirá esta cantidad anual, aunque importen mucho mas las dos terceras partes que antes de ahora se le hayan abonado: 2.° Que los empleados civiles que se presentaren ó hayan presentado al gobierno legítimo dos meses cumplidos despues de la instalacion de las presentes córtes, procedentes de paises ocupados por el enemigo antes de la referida instalacion, se hayan y tengan por escluidos de los empleos que obtenian, sin obcion, pension ó gratificacion nacional, salvo el derecho en lo demas de ciudadanos españoles, despues de examinada la conducta política, y fallada su aprobacion. En consecuencia comprende este artículo á los que actualmente ejerzan dichos empleos, habiendo comparecido despues de la enunciada época, esceptuando solo el caso de un estraordinario mérito patriótico, por el que se les conservará el precedente destino, ú otorgará otro mas aventajado, á voluntad de S. M.: 3.° No se comprenden en la regla anterior aquellos empleados, que en cumplimiento del reglamento espedido con fecha de 5 de mayo, se vayan retirando de los paises que invadan los enemigos, pues ínterin esten en territorio de su provincia disfrutarán el sueldo de su destino, y las dos terceras partes cuando pasen á las confi-

nantes libres: 4.° No se permitirá á ningun empleado, sea civil, militar ó eclesiástico, que venga al pueblo donde resida el supremo gobierno, sin espresa licencia del mismo; y el que contraviniere, quedará por el mismo hecho privado del empleo que obtenia: 5.° Que al consejo de regencia, como ejecutor de los decretos de S. M., se le devuelvan todos los espedientes que remitió á las córtes en virtud de lo prevenido en el artículo IV de la órden que se comunicó en 29 de marzo último, que quedará sin efecto en cuanto manda que no se pague á los empleados que vengan de provincias ocupadas cantidad alguna sin que se proponga á las córtes, y estas lo aprueben, sirviéndole de norma para la decision de dichos espedientes, y demas que ocurran en lo sucesivo, las reglas últimamente establecidas por S. M., á quien consultará en caso que se le ofreciese alguna duda sobre su puntual observancia: VI Que para las vacantes sucesivas y para los empleos que hayan de proveerse prefiera el consejo de regencia á los que no estando en activo ejercicio se consideren mas aptos y patriotas, poniendo particular cuidado en que sean de los que disfruten asignaciones mas aproximadas á los sueldos que tengan asignados, ó se asignaren á los empleos: VII. Que no obstante lo prevenido en el decreto de S. M. de 13 de febrero último, todos los que perciban asignaciones del erario por retiro ó jubilacion, y esten en actual goce de bienes con que puedan subsistir, se les suspenda por ahora el pago de la mitad de las asignaciones; entendiéndose que la mitad que se les rebaja, se entiende del todo de la asignacion. Cádiz 4 de julio de 1811.

DECRETO.

DE 14 DE JULIO DE 1811.

Responsabilidad de las autoridades en el cumplimiento de las órdenes superiores.

Debiéndose establecer en todas las clases de la monarquía la absoluta subordinacion al gobierno, como el único medio de dar un movimiento y direccion uniforme á la máquina del estado, y de dirigir á un fin los esfuerzos de todos, las córtes generales y estraordinarias decretan:

1.° Todo general, junta, audiencia, ó cualquier otro superior á quien incumba el dar cumplimiento á las superiores órdenes, será responsable de la ejecucion de ellas, y privados de sus respectivos empleos, si por culpable omision, negligencia ó tolerancia, por no aplicar inmediatamente las penas á los desobedientes, dejaren de cumplimentarse.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

2.º Las justicias y autoridades inferiores á quienes toque el inmediato cumplimiento de la ley ú órden, incurrirán en la misma pena que los desobedientes, si no se la aplicaren al instante segun permita la ley.

3.º Celará el consejo de regencia que se cumplan las leyes, ordenanzas y decretos, exigiendo una estrecha responsabilidad de las autoridades encargadas del cumplimiento, castigándolas irremisiblemente en los casos dichos: y quieren las córtes que por ningun motivo reitere el consejo de regencia órdenes una vez dadas, sin imponer antes la merecida pena á cuantos hubiesen de cualquier modo culpable retardado su cumplimiento.

DECRETO.

DE 24 DE JULIO DE 1811.

Se concede el título de noble y leal ciudad de Tepic al pueblo de este nombre.

Deseando las córtes generales y estraordinarias manifestar á los leales hábitantes de Tepic en Nueva España lo gratos que les han sido sus servicios, y la particular atencion que les han merecido sus esfuerzos, dirigidos á restablecer la tranquilidad pública en aquellos paises, decretan conceder, como por el presente conceden, al pueblo de Tepic el título de *noble y leal ciudad de Tepic*, y que los oficios concejiles que restan para la formacion de su ayuntamiento, sean nombrados por esta primera vez en la misma conformidad que en él se hace el nombramiento de sus alcaldes ordinarios; debiéndose en lo sucesivo seguir la práctica general que rija en América, esto es, ó la actual si nada se innova, ó la que se establezca de nuevo.

ORDEN.

Sobre aplicar á los hospitales militares los productos de obras pias y patronatos, con la instruccion á que se refiere.

Las córtes generales y estraordinarias, enteradas de lo propuesto por el consejo de regencia, acerca de la utilidad que resultará á la santa causa que defiende la nacion de hacer general la providencia de aplicar á los hospitales militares muchas obras pias y patronatos, aprobada por S. M. en 12 de mayo próximo pasado para los de esta plaza, llevándola á ejecucion bajo el método comprendido en la instruccion que de su órden acompañó V. S. en oficio de 20 del mismo, formada de acuerdo con eclesiásticos de probidad y doctrina, y comprensiva de veinte capítulos: han resuelto se haga general la indicada providencia de aplicar á los hospitales militares los productos de obras pias y patronatos bajo el método que prescribe la insinuada instruccion, que en un todo se han servido aprobar, sin mas variacion que la de que se substituya en el artículo 13 de ella *durante la presente guerra*, en lugar de *mientras subsistan á cargo de la junta superior*; y han dispuesto al mismo tiempo que la conmutacion de las rentas de obras pias fundadas en monasterios y conventos regulares de ambos sexos, que por dicha providencia de 12 de mayo se puso al juicio del M. R. cardenal arzobispo de Toledo, quede á la autoridad de los M. RR. arzobispos y RR. obispos en sus respectivas diócesis, en virtud de las facultades que les competen por derecho comun, y de las que les tiene declaradas la santa iglesia en el concilio de Trento. Cádiz 4 de agosto de 1811.

La instruccion espedida por la secretaría de hacienda, de que habla la órden anterior, formada solamente para Cádiz y su diócesi, con el fin de llevar a efecto la resolucion de S. M. de 12 de mayo último, y mandada ahora observar generalmente en toda la nacion con las correcciones espresadas, es la siguiente:

Para la debida ejecucion y cumplimiento de la resolucion de S. M. que precede, el consejo de regencia encarga al eminentísimo cardenal, arzobispo de Toledo, como visitador apostólico de regulares, y al vicario capitular, gobernador de esta diócesi, que procedan desde luego, el primero en uso de su delegacion apostólica, y el segundo en el de la jurisdiccion ordinaria que le asiste, y de la comision que á mayor abundamiento se les confiere, á hacer por ahora la conmutacion de los objetos de los productos de las obras pias, patronatos, memorias, confraternidades, congregaciones, cofradías, hermandades, y cualesquiera otras fundaciones semejantes que haya en esta plaza, aplicándolos en favor de los hospitales militares de ella, y del establecimiento ó establecimientos piadosos de mayor necesidad y utilidad á los intereses de la pátria, mediante á ser un fin tan urgente, tan caritativo y tan sagrado, teniendo á la vista la instruccion siguiente:

1.º Los productos se entenderán deducidas las impensas necesarias para la conservacion de las fincas, su administracion, los censos ó tributos, y las contribuciones públicas que tengan ó tuvieren sobre sí.

II. Se deducirá igualmente la parte destinada á sufragios, cuyas limosnas coadyuvan á la congrua sustentacion de los ministros del altar, y dotacion de las iglesias; quedando á cargo del vicario capitular el cumplimiento del real decreto de 29 de julio de 1810,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
Biblioteca Valverde y Tellez

en cuanto á arreglar con su clero la contribucion que estime practicable en esta ciudad y su diócesi (cuando sus circunstancias lo permitan) para atender á la defensa del estado y subsistencia de los ejércitos.

III. Se deducirá tambien, con arreglo al real decreto de 6 de diciembre de 1809, la parte que esté aplicada por los fundadores á hospitales, hospicios, casas de misericordia, educacion pública, esuelas de cualquier ramo de instruccion, ó otros objetos de igual utilidad; sin comprender en ellos por ningun título los dotes, asignaciones caritativas, y limosnas que suelen adjudicarse y repartirse á personas particulares fuera de las pertenecientes á los dichos establecimientos; á menos que las dichas asignaciones redunden inmediatamente en fomento de la carrera militar, cuya importante necesidad para el bien de la pátria está recomendada por real decreto de 30 de abril de 1810

IV. Bajo estas nociones visitará el eminentísimo cardenal todos los monasterios y conventos de regulares que hay en esta plaza, y los de monjas que no estuvieren sujetas al ordinario, y los hospitales, casas de piedad, patronatos, obras pias, memorias, y otras cualesquiera fundaciones de cargo de los mismos, haciendo rendir cuentas á los prelados y administradores en el término de veinte dias contados desde la publicacion del real decreto; y los sobrantes que resultaren tener, y los créditos que obraren á su favor, serán aplicados á la subsistencia de los hospitales militares de esta plaza, disponiendo que se ponga pronto cobro á los créditos.

V. El vicario capitular practicará igual visita en todas las iglesias, ermitas y capillas, y en los conventos y monasterios pertenecientes á su jurisdiccion dentro de esta plaza, y en las cofradías, hermandades, congregaciones, esclavitudes, confraternidades, y demas fundaciones de esta especie que haya en ella, y en todas las obras pias, patronatos, memorias, dotaciones é institutos piadosos de su clase, exigiendo de los administradores respectivos la cuenta de sus productos é inversion en el término y á los fines espresados en el artículo anterior.

VI. Visitará tambien todos los hospitales, hospicios, casas de misericordia, recogimiento, correccion, enseñanza ú otros objetos semejantes, y cualquiera otra clase de conservatorio, beaterio ó establecimiento piadoso que haya en esta plaza (no estando á cargo de regulares, á menos que proceda de acuerdo ó por comision del eminentísimo cardenal arzobispo visitador apostólico), y hará rendir cuentas á los administradores respectivos en el término antedicho, para conocer el mérito y estado de cada fundacion, la utilidad que traen al público los establecimientos que gozan este concepto, las mejoras de que sean unos susceptibles, y las degeneraciones en que puedan haber otros incurrido, para reformarlos ó suprimirlos, segun convenga, con la aprobacion de S. A. por la parte en que se interesa la real proteccion.

VII. Como puede suceder que entre los conventos, monasterios, hospitales, hospicios, casas de misericordia y demas establecimientos piadosos haya algunos cuyas rentas é ingresos escedan notablemente á sus cargas y atenciones, se recomienda al zelo y la prudencia del eminentísimo cardenal y del vicario capitular que procuren conmutar á favor de los hospitales militares de esta plaza el esceso que gradúen en las dichas rentas, en tanto que no prefieran aplicarlo á otro ú otros establecimientos piadosos de igual necesidad é importancia al bien de la pátria, que se hallen menos dotados en esta misma plaza, pues en tal caso lo ejecutarán poniéndolo en consideracion de S. A. por la secretaría de mi cargo, á los fines antedichos

VIII. Dentro de los ocho dias primeros de la publicacion del real decreto, y antes de rendir las cuentas que se indican en los artículos IV, V y VI, presentarán todos los prelados y administradores una relacion de las fincas, propiedades, acciones y derechos correspondientes á las fundaciones de su cargo, espresando el rédito mensual ó anual de cada finca y propiedad, su inquilino ó colono, y las personas que deban pagar las acciones y derechos.

IX. Acompañarán á las notas las escrituras ó documentos de las fundaciones, y los instrumentos que acrediten sus obligaciones, cargas y pensiones, para que con vista de todo pueda fijarse la conmutacion de las rentas y productos, sin perjuicio de las deducciones espresadas en los artículos primeros.

X. Verificada por parte del eminentísimo cardenal y del vicario capitular la conmutacion que á cada uno corresponda de las rentas y productos de patronatos, obras pias y demas que incluye esta instruccion, pasará á la junta superior una nota bien circunstanciada para los efectos prevenidos en la instruccion aprobada por S. A. para la ejecucion del decreto que aplica á los hospitales los beneficios simples y espolio. La junta remitirá copia á la comision que esté encargada por ella de la administracion de los hospitales militares de esta plaza, reservándose otra para su noticia y fines necesarios.

XI Prevendrán al mismo tiempo á los prelados y administradores de patronatos, obras pias y demas que hubiesen sido comprendidos en la conmutacion, que entreguen á disposicion de la comision de hospitales los productos de sus administraciones mensualmente, por tercios, medios años ó años enteros, y en las cantidades correspondientes, con arreglo al decreto de conmutacion, que se les hará saber en forma, entendiéndose estas entregas sin

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

perjuicio del espediente de cuentas, que deberá correr prontamente para la aplicacion de los sobrantes.

XII. Las conmutaciones que se hagan de unos establecimientos piadosos en favor de otros, ya sea por reforma ó supresion, ó ya por esceso de rentas, se entienden y han de ser perpetuas, y para ello se impartirá la real confirmacion por la secretaría de mi cargo, cual se dice en los artículos VII y VIII.

XIII. Las conmutaciones que se hagan á favor de los hospitales militares se entienden y han de ser temporales, mientras subsistan á cargo de la junta superior de esta plaza, debiendo volver despues á los objetos y destinos de sus fundaciones respectivas.

XIV. Todos los prelados y administradores rendirán cuentas al fin de cada año al eminentísimo cardenal arzobispo, visitador apostólico de regulares, y al vicario capitular, gobernador de esta diócesi (ó á su legítimo prelado cesando la vacante de la silla episcopal), segun corresponda, para que puedan cerciorarse del cumplimiento de los dichos prelados y administradores, é informar puntualmente á S. A. por la secretaría de mi cargo de las cantidades que por este medio haya recibido la comision de hospitales para la debida esactitud en la cuenta y razon pública.

XV. El celo y patriotismo del eminentísimo cardenal y del gobernador de esta diócesi, no permite dudar que procurarán tenga el mas pronto cumplimiento el decreto de las córtes generales y estraordinarias en esta materia, que sobre ser tan precisa é interesante al doliente defensor de la religion y del estado, es muy análoga y conforme á la piedad y beneficencia eclesiástica.

XVI. Por lo mismo, en el caso de que la comision de hospitales reclame algun descuido, mala versacion ó falta de puntualidad en las entregas de los administradores, el eminentísimo cardenal ó el vicario capitular, segun competa, dictará el remedio mas pronto y eficaz, hasta removerlos y subrogar otros de su entera satisfaccion y confianza, los que no podrán ser removidos en ningun tiempo sin causa legítima y probada.

XVII Las dudas que se ofrezcan al eminentísimo cardenal, ó al vicario capitular gobernador de esta diócesi, sobre el cumplimiento del real decreto en cualquiera de sus artículos é incidencias, se elevarán en consulta al consejo de regencia por la secretaría de mi cargo, para que recaiga la resolucion de S. A.

XVIII. Para evitar que se aglomeren en la dicha secretaría espedientes de recursos é instancias de prelados, administradores y patronos de obras pias, quiere S. A. que al menos el vicario capitular, gobernador de esta diócesi, forme una junta compuesta del número de eclesiásticos del clero secular de ella que estime conveniente, haciendo eleccion de los de mas integridad, patriotismo y eficacia, para que le ayuden en las averiguaciones necesarias para fijar la conmutacion, y en la audiencia instructiva de los recursos para su resolucion, que nunca podrá ser aventurada teniendo modo de asegurarse por el órden que espresa el artículo anterior.

XIX. La eleccion que haga el vicario capitular, con arreglo á los fines indicados en el artículo que precede, deberá elevarse á noticia y confirmacion del supremo consejo de regencia, por la secretaría de mi cargo, antes que llegue á tener efecto la junta mencionada; y si esta ó el mismo vicario capitular creyesen de necesidad ó utilidad, para la mas fácil espedicion, el agregar alguno ó algunos mas eclesiásticos en calidad de secretario ó dependientes, sin que irroguen sueldo, gratificacion ni otro algun emolumento, podrá hacerlo presente á S. A. por el órden susodicho, proponiendo desde luego las personas que merezcan su eleccion, para que obtengan la real confirmacion.

XX. Los respetos del eminentísimo cardenal merecen al consejo de regencia la justa consideracion de dejar á su arbitrio el de formar igual junta de eclesiásticos seculares, ó valerse de la diocesana, segun lo estime conveniente. Cádiz 20 de mayo de 1811.

DECRETO.

DE 6 DE AGOSTO DE 1811.

Incorporacion de los señoríos jurisdiccionales á la nacion: abolicion de privilegios: que nadie pueda llamarse señor de vasallos ni ejercer jurisdiccion.

Deseando las córtes generales y estraordinarias, remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de poblacion y prosperidad de la monarquía española, decretan:

I. Desde ahora quedan incorporados á la nacion todos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condicion que sean.

II. Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demas funcionarios públicos, por el mismo órden y segun se verifica en los pueblos de realengo.

III. Los corregidores, alcaldes mayores y demas empleados comprendidos en el artículo anterior, cesarán desde la publicacion de este decreto, á escepcion de los ayuntamientos y alcaldes ordinarios, que permanecerán hasta fin del presente año.

IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallage, y las prestaciones asi reales como personales, que deban su origen á título jurisdiccional, á escepcion de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad.

v. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demas derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse á la nacion, ó de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisicion.

vi. Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que se hayan hecho en razon de aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos, ú otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratados de particular á particular.

vii. Quedan abolidos los privilegios llamados esclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes y demas, quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho comun y á las reglas municipales establecidas en cada pueblo; sin que por esto los dueños se entiendan privados del uso que como particulares pueden hacer de los hornos, molinos y demas fincas de esta especie, ni de los aprovechamientos comunes de aguas, pastos y demas, á que en el mismo concepto puedan tener derecho en razon de vecindad.

viii. Los que obtengan las prerogativas indicadas en los antecedentes artículos por título oneroso, serán reintegrados del capital que resulte de los títulos de adquisicion; y los que los posean por recompensa de grandes servicios reconocidos, serán indemnizados de otro modo.

ix. Los que se crean con derecho al reintegro de que habla el artículo antecedente, presentarán sus títulos de adquisicion en las chancillerías y audiencias del territorio, donde en lo sucesivo deberán promoverse, sustanciarse y finalizarse estos negocios en las dos instancias de vista y revista con la preferencia que exige su importancia, salvos aquellos casos en que puedan tener lugar los recursos estraordinarios de que tratan las leyes; arreglándose en todo á lo declarado en este decreto, y á las leyes que por su tenor no queden derogadas.

x. Para la indemnizacion que deba darse á los poseedores de dichos privilegios esclusivos por recompensa de grandes servicios reconocidos, precederá la justificacion de esta calidad en el tribunal territorial correspondiente, y este la consultará al gobierno con remision del espediente original, quien designará la que deba hacerse, consultándolo con las córtes.

xi. La nacion abonará el capital que resulte de los títulos de adquisicion, ó lo reconocerá, otorgando la correspondiente escritura; abonando en ambos casos un tres por ciento de intereses desde la publicacion de este decreto hasta la redencion de dicho capital.

xii. En cualquier tiempo que los poseedores presenten sus títulos, serán oidos, y la nacion estará á las resultas para las obligaciones de que habla el artículo anterior

xiii. No se admitirá demanda ni contestacion alguna que impida el puntual cumplimiento y pronta ejecucion de todo lo mandado en los artículos anteriores, sobreseyéndose en los pleitos que haya pendientes; llevándose inmediatamente á efecto lo mandado, segun el literal tenor de este decreto, que es la regla que en lo sucesivo debe gobernar para la decision; y si se ofreciese alguna duda sobre su inteligencia y verdadero sentido, se abstendrán los tribunales de resolver é interpretar, y consultarán á S. M. por medio del consejo de regencia, con remision del espediente original.

xiv. En adelante nadie podrá llamarse señor de vasallos, ejercer jurisdiccion, nombrar jueces, ni usar de los privilegios y derechos comprendidos en este decreto; y el que lo hiciere perderá el derecho al reintegro en los casos que quedan indicados.

ORDEN

En que se concede á los individuos del cuerpo de artillería que sean juzgados por su tribunal particular.

Exmo. sr.—Las córtes generales y estraordinarias, enteradas de la consulta que hizo el consejo de regencia por conducto de V. E. en 13 de mayo último, sobre si deberá ser estensiva al real cuerpo de artillería la declaracion hecha por S. M. en 20 de febrero de este año con respecto á los individuos del regimiento de reales guardias españolas, ampliada posteriormente á los del de reales guardias Walonas; han resuelto que los individuos del real cuerpo de artillería sean juzgados por su tribunal particular, y no por los consejos permanentes del ejército, ínterin se dicta la ley general que deba regir, conforme á las citadas declaraciones en favor de las reales guardias españolas y Walonas. Cádiz 14 de setiembre de 1811.

ORDEN.

Concediendo al cuerpo de ingenieros la gracia de que habla la anterior.

Exmo. sr.—Las córtes generales y estraordinarias han resuelto, que la declaracion de 20 de febrero último, para que los individuos del regimiento de reales guardias españolas fuesen juzgados por su tribunal particular, y no por los consejos permanentes de los ejércitos, sea estensiva á los del real cuerpo de ingenieros, mientras la constitucion no la altere, si lo considera conveniente, asi como se

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ha ampliado tambien en favor de los reales cuerpos de guardias Walonas y artillería. Cádiz 14 de setiembre de 1811.

DECRETO.

DE 26 DE SETIEMBRE DE 1811.

Sobre la libre fabricacion y venta de naipes.

Las córtes generales y estraordinarias, deseando quitar todas las trabas que se oponen al fomento de la industria, y considerando una de ellas el estanco de los naipes, decretan: 1.° Que sea libre en todo el reino la fabricacion y venta de los naipes: 2.° Que por cada baraja de las que se fabricaren en la Península é islas adyacentes, se paguen diez y seis maravedises, y veinte y dos por cada una de las que se fabriquen en América: 3.° Que por cada baraja de las que despues de bolladas se estrajesen de la Península é islas adyacentes para las Américas, se satisfagan los seis maravedises de esceso que en el artículo anterior se imponen á las fabricas en aquellos paises sobre los diez y seis asignados á las de la Península: 4.° Que al tiempo de pagarse en las aduanas esta contribucion, conocida en Cataluña con el nombre de *bolla ó marca*, se pongan dos rubricas en el cuatro de copas por los respectivos administradores y contadores de ellas, ú otros empleados que al efecto se designaren: 5.° Que las barajas que se vendieren sin este requisito sean confiscadas; y tanto los vendedores como los compradores sean multados en dos reales por cada baraja por primere vez, en cuatro por la segunda, y en ocho por la tercera: 6.° Que el consejo de regencia dé las demas órdenes reglamentarias que estime oportunas para que se eviten los fraudes, y tenga efecto la espresada contribucion.

DECRETO.

DE 28 DE OCTUBRE DE 1811.

Plan de las pensiones que deben concederse á las viudas y familias de los que perecen en defensa de la pátria.

Deseando las córtes generales y estraordinarias manifestar el singular aprecio que hacen de todos los ilustres defensores de la pátria, contando entre ellos no solo á los militares, sino tambien á los honrados patriotas, que sin serlo de profesion luchan sin cesar con las armas en la mano contra el enemigo comun, y á los que por haber hecho algun servicio á la pátria perecen á la violencia de los tormentos y cadalsos levantados por la barbarie de

nuestros opresores para abatir nuestra heroica constancia; y conociendo que el testimonio menos equívoco y mas enérgico de su soberana voluntad en esta parte es suministrar los posibles ausilios á las viudas, húerfanos ó padres de los que falleciesen en esta gloriosa lucha, y proporcionarlos igualmente á los que quedaren estropeados é inutilizados de sus resultas, decretan:

I. Se señala la pension de un empleo mas á las familias de los oficiales que fallezcan en funcion de guerra, ó de resultas de heridas recibidas en ella, bajo el órden prescrito en el reglamento del montepio militar, siempre que se hubiesen casado con derecho á los beneficios del referido monte.

II A las familias de los oficiales que no se hubieren casado con derecho al montepio militar, falleciendo en funcion de guerra, ó de resultas de heridas recibidas en ella, se les asigna la pension que les corresponda por el último empleo de su marido, padre ó hijo.

III Para los efectos espresados en el artículo precedente se considerarán como muertos en funcion de guerra no solo aquellos oficiales que despues de prisioneros sueron fusilados ó condenados á otra especie de muerte por los enemigos, sino tambien los que fallecieren estando prisioneros en poder de ellos, declarándose á sus familias comprendidas en la gracia que se concedió en real órden de 5 de julio de 1809 á las de los que mueren de epidemia en plazas sitiadas, siempre que se acredite en la mejor forma posible que en su cautiverio no tomaron partido en el servicio de los enemigos.

IV Siempre que por estas nuevas pensiones contra el fondo del montepio militar llegue este á estinguirse en términos que no pueda cumplir sus primitivas y fundamentales obligaciones, en este caso se suplirá el *deficit* por el erario público.

V. Se asigna sobre el erario público la pension de un real y medio diario á las familias de los soldados, de dos á las de los cabos y tambores, y de tres á las de los sargentos, y á las de los patriotas que mueran en funcion de guerra ó poco tiempo despues de resultas de heridas recibidas en ella, considerándose tambien como muertos en accion de guerra los que perecieren de alguna desgracia imprevista en faccion del servicio, como voladura de almacen ó repuesto de pólvora, epidemia padecida en plaza sitiada, y otras de esta clase, incluyendo asimismo en la pension de tres reales á las familias de los que los enemigos condenan inicuamente á la muerte por servicios hechos á la pátria.

VI. Estas pensiones las disfrutarán las mugeres de los espresados mientras se mantengan viudas; en defecto de estas, ó pasando á segundas nupcias, las hijas ó hijos hasta la edad de diez y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ocho años, ó las madres viudas ó padres pobres de los mismos individuos en falta de sus viudas é hijos.

VII. Serán atendidos con los retiros de inválidos, señalados á los militares, los patriotas que, por haber quedado inútiles y estropeados de resultas de heridas recibidas en funcion de guerra, no puedan continuar trabajando en sus respectivos oficios, siempre que no tengan bienes con que subsistir y mantener á sus familias, debiendo considerarse para el goce como oficiales los que sirvan en la clase de tales en las partidas, y como sargentos y cabos los que en ellas ejerzan estas funciones, justificándolo en debida forma.

DECRETO.

DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1811.

De la responsabilidad sobre la observancia de los decretos del congreso nacional.

Las córtes generales y estraordinarias, queriendo hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos, con arreglo y en cumplimiento de lo acordado en el decreto de 14 de julio último, á fin de asegurar por este medio la puntual observancia de sus soberanas resoluciones, decretan: Que todo empleado público, civil ó militar, que despues de tercero dia del recibo de una ley ó decreto del congreso nacional retardare su cumplimiento en la parte que le toque, quedará por el mismo hecho privado de su empleo, pasando inmediatamente el consejo de regencia á hacer su provision en otra persona, sin perjuicio de proceder á lo demas que haya lugar. Los jueces y magistrados que faltaren en los términos predichos se entenderá que se hallan en el caso del artículo 2 capítulo III del reglamento provisional para el consejo de regencia, el cual, teniéndolos por suspensos con justa causa de sus respectivos destinos, hará que inmediatamente se proceda á la formacion de proceso, segun previene el citado artículo de dicho reglamento. Los secretarios del despacho, bajo la efectiva responsabilidad de ser separados de sus empleos, cuidarán de la puntual observancia de este decreto.

ORDEN

Por la que se amplia á los tiempos de paz la facultad que tenian en el de guerra los gefes de Indias de dar licencia para casarse los contribuyentes al montepio militar.

Exmo. sr.—Las córtes generales y estraordinarias, conformándose con el dictamen que tenian pedido, y V. E. nos dirigió en 8 de

octubre próximo, de todos los ministerios, han resuelto ampliar á los tiempos de paz la facultad que para los de guerra estaba declarada á los gefes de Indias de poder dar licencias para contraer matrimonios á los súbditos contribuyentes al montepio militar, en atencion á los graves inconvenientes que resultaban de las dilaciones que sufrian los interesados por la grande distancia de aquellos paises. Pero quieren las córtes que los vireyes, capitanes generales y demas gefes á quienes corresponda dicha facultad, remitan al gobierno, despues de concedidas las licencias de casamiento, para su examen y aprobacion, todos los documentos prevenidos por el reglamento del montepio militar, sin que de modo alguno puedan dispensar requisito, bajo espresa responsabilidad por cualquiera contravencion que se haga á dicho reglamento. Cádiz 18 de diciembre de 1811.

AÑO DE 1812.

ORDEN.

Negando la gratificacion á los administradores de alcabalas de Nueva España por la cobranza del producto del chinguirito.

Habiéndose examinado detenidamente por las córtes generales y estraordinarias la memoria presentada á las mismas en 27 de julio último por D. Esteban Varea, antecesor de V. S., y espresándose en ella, entre otras cosas, que por no abonarse á los administradores de alcabalas en Nueva España gratificacion alguna por el trabajo que dedican al manejo del ramo del *chinguirito*, es de creer que muchos de ellos, no resultándoles utilidad, no lo zelarán con el interes que conviene, han resuelto: Que estando suficientemente dotados dichos administradores, y siendo muy poco el trabajo que les añade el encargo de la cobranza del producto del *chinguirito*, no se les añada gratificacion en las urgencias del dia; fuera de las cuales se les señale la correspondiente al que se les aumenta. Cádiz 13 de enero de 1812.

ORDEN.

Se manda dar á los mineros de Nueva España la sal y pólvora que necesiten á costo y costas.

Las córtes generales y estraordinarias se han conformado con la propuesta hecha en la memoria presentada por el antecesor de V. S. D. Esteban Varea, en 27 de julio último, relativa á que á los mineros de Nueva España se les den á costo y costas los artículos de sal y pólvora que necesiten. Cádiz 13 de enero de 1812.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ocho años, ó las madres viudas ó padres pobres de los mismos individuos en falta de sus viudas é hijos.

VII. Serán atendidos con los retiros de inválidos, señalados á los militares, los patriotas que, por haber quedado inútiles y estropeados de resultas de heridas recibidas en funcion de guerra, no puedan continuar trabajando en sus respectivos oficios, siempre que no tengan bienes con que subsistir y mantener á sus familias, debiendo considerarse para el goce como oficiales los que sirvan en la clase de tales en las partidas, y como sargentos y cabos los que en ellas ejerzan estas funciones, justificándolo en debida forma.

DECRETO.

DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1811.

De la responsabilidad sobre la observancia de los decretos del congreso nacional.

Las córtes generales y estraordinarias, queriendo hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos, con arreglo y en cumplimiento de lo acordado en el decreto de 14 de julio último, á fin de asegurar por este medio la puntual observancia de sus soberanas resoluciones, decretan: Que todo empleado público, civil ó militar, que despues de tercero dia del recibo de una ley ó decreto del congreso nacional retardare su cumplimiento en la parte que le toque, quedará por el mismo hecho privado de su empleo, pasando inmediatamente el consejo de regencia á hacer su provision en otra persona, sin perjuicio de proceder á lo demas que haya lugar. Los jueces y magistrados que faltaren en los términos predichos se entenderá que se hallan en el caso del artículo 2 capítulo III del reglamento provisional para el consejo de regencia, el cual, teniéndolos por suspensos con justa causa de sus respectivos destinos, hará que inmediatamente se proceda á la formacion de proceso, segun previene el citado artículo de dicho reglamento. Los secretarios del despacho, bajo la efectiva responsabilidad de ser separados de sus empleos, cuidarán de la puntual observancia de este decreto.

ORDEN

Por la que se amplia á los tiempos de paz la facultad que tenian en el de guerra los gefes de Indias de dar licencia para casarse los contribuyentes al montepio militar.

Exmo. sr.—Las córtes generales y estraordinarias, conformándose con el dictamen que tenian pedido, y V. E. nos dirigió en 8 de

octubre próximo, de todos los ministerios, han resuelto ampliar á los tiempos de paz la facultad que para los de guerra estaba declarada á los gefes de Indias de poder dar licencias para contraer matrimonios á los súbditos contribuyentes al montepio militar, en atencion á los graves inconvenientes que resultaban de las dilaciones que sufrian los interesados por la grande distancia de aquellos paises. Pero quieren las córtes que los vireyes, capitanes generales y demas gefes á quienes corresponda dicha facultad, remitan al gobierno, despues de concedidas las licencias de casamiento, para su examen y aprobacion, todos los documentos prevenidos por el reglamento del montepio militar, sin que de modo alguno puedan dispensar requisito, bajo espresa responsabilidad por cualquiera contravencion que se haga á dicho reglamento. Cádiz 18 de diciembre de 1811.

AÑO DE 1812.

ORDEN.

Negando la gratificacion á los administradores de alcabalas de Nueva España por la cobranza del producto del chinguirito.

Habiéndose examinado detenidamente por las córtes generales y estraordinarias la memoria presentada á las mismas en 27 de julio último por D. Esteban Varea, antecesor de V. S., y espresándose en ella, entre otras cosas, que por no abonarse á los administradores de alcabalas en Nueva España gratificacion alguna por el trabajo que dedican al manejo del ramo del *chinguirito*, es de creer que muchos de ellos, no resultándoles utilidad, no lo zelarán con el interes que conviene, han resuelto: Que estando suficientemente dotados dichos administradores, y siendo muy poco el trabajo que les añade el encargo de la cobranza del producto del *chinguirito*, no se les añada gratificacion en las urgencias del dia; fuera de las cuales se les señale la correspondiente al que se les aumenta. Cádiz 13 de enero de 1812.

ORDEN.

Se manda dar á los mineros de Nueva España la sal y pólvora que necesiten á costo y costas.

Las córtes generales y estraordinarias se han conformado con la propuesta hecha en la memoria presentada por el antecesor de V. S. D. Esteban Varea, en 27 de julio último, relativa á que á los mineros de Nueva España se les den á costo y costas los artículos de sal y pólvora que necesiten. Cádiz 13 de enero de 1812.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETO.

DE 14 DE ENERO DE 1812.

Estincion de las matrículas de mar en las provincias ultramarinas.

Las córtes generales y estraordinarias, atendiendo á que las matrículas de mar en las provincias de América y Asia son inútiles, y aun perjudiciales en las primeras, decretan que sean estinguidas inmediatamente las espresadas matrículas en las provincias ultramarinas.

DECRETO.

DE 17 DE ENERO DE 1812.

Estincion de los estancos menores de cordobanes, alumbre &c. en Nueva España

Considerando las córtes generales y estraordinarias que los estancos menores de cordobanes, alumbre, plomo y estaño en Nueva España, ademas de producir muy poco á la hacienda pública, son gravosos á la industria y minería de sus habitantes, y que su producto se reemplazará sobradamente con los derechos que devengue el libre comercio de estos mismos ramos, decretan: Quedan estinguidos desde ahora en Nueva España los estancos menores de cordobanes, alumbre, plomo y estaño.

DECRETO

DE 18 DE ENERO DE 1812.

Que los empleos no sean servidos por substitutos.

Deseando las córtes generales y estraordinarias cortar de raiz los perjuicios que resultan á la administracion pública del estado del abuso introducido en ella de servirse algunas veces por substitutos los empleos que deben ser desempeñados por sus propietarios, decretan:

I. Ningun empleo ni destino, en que se requiera asistencia personal del empleado, podrá ser servido por sub-tituto.

II. El empleado á quien se nombre para otro destino, que requiera su asistencia personal incompatible con la que exija el que antes gozaba, elegirá en el término de ocho dias entre los dos empleos, y se proveerá el que dimitiese, guardando en ello lo determinado por las córtes.

III. Si se encargase al empleado alguna comision temporal pública, podrá servir el destino un substituto por el tiempo que dure la comision.

IV. Lo mismo se ejecutará cuando por enfermedad ó justa ausencia falte el propietario al servicio de su empleo por algun tiempo.

DECRETO.

DE 24 DE ENERO DE 1812.

Abolicion de la pena de horca.

Las córtes generales y estraordinarias, atendiendo á que ya tienen sancionado en la constitucion política de la monarquía, que ninguna pena ha de ser trascendental á la familia del que la sufre; y queriendo al mismo tiempo que el suplicio de los delincuentes no ofrezca un espectáculo demasiado repugnante á la humanidad y al caracter generoso de la nacion española, han venido en decretar como por el presente decretan: Que desde ahora quede abolida la pena de horca, substituyéndose la de garrote para los reos que sean condenados á muerte.

DECRETO.

DE 29 DE ENERO DE 1812.

Habilitacion de los oriundos de Africa para ser admitidos en la universidades, seminarios &c.

Deseando las córtes generales y estraordinarias facilitar á los súbditos españoles, que por cualquiera línea traigan su orígen del Africa, el estudio de las ciencias, y el acceso á la carrera eclesiástica, á fin de que lleguen á ser cada vez mas útiles al estado, han resuelto habilitar, como por el presente decreto habilitan á los súbditos españoles, que por cualquiera línea traen su orígen del Africa, para que, estando por otra parte dotados de prendas recomendables, puedan ser admitidos á las matrículas y grados de las universidades, ser alumnos de los seminarios, tomar el hábito en las comunidades religiosas, y recibir los órdenes sagrados, siempre que concurran en ellos los demas requisitos y circunstancias que requieran los cánones, las leyes del reino, y las constituciones particulares de las diferentes corporaciones en que pretendan ser admitidos; pues por el presente decreto solo se entienden derogadas las leyes ó estatutos particulares que se opongan á la habilitacion que ahora se concede.

DECRETO.

DE 14 DE FEBRERO DE 1812.

En los matrimonios de los militares suplan sus gefes el consentimiento de los padres que se hallen en pais ocupado por el enemigo.

Las córtes generales y estraordinarias, enteradas por la consulta del consejo de regencia de 17 del próximo pasado enero de la frecuencia con que acuden los individuos de tropa de marina á pedir permiso para casarse, sin presentar la licencia de sus padres, por hallarse en paises dominados por el enemigo, decretan: Que los gefes militares del ejército y armada que por real pragmática de 28 de abril de 1803 se hallan autorizados para suplir á sus súbditos el consentimiento cuando los padres les hubieren negado sin causa justa la licencia para contraer matrimonio, lo esten igualmente para suplirle en el caso de que el padre y demas personas á quienes por lo prevenido en la citada real pragmática debe pedirse, se hallaren en pais ocupado por el enemigo.

ORDEN.

Para que en los premios de constancia sea considerada la tropa de marina como la del ejército.

En vista de cuanto de órden del consejo de regencia nos dijo V. S. en su oficio de 27 de junio último sobre la utilidad que resultaria al servicio de estender á la tropa de infanteria y artilleria de marina los nuevos premios de constancia que se señalaron al ejército en 1.° de enero de 1810; á saber: el de ciento doce y medio reales al mes, y graduacion de sargento primero al que sirviese treinta años bajo las circunstancias prevenidas para los premios, quedando con la opcion á su tiempo al de ciento treinta y cinco reales: y el de retiro con docientos sesenta reales al mes, y el grado de teniente al que continuase en la propia forma hasta los cuarenta; las córtes generales y estraordinarias han resuelto en la sesion de ayer 17, que estando las tropas de marina igualadas en un todo en goces con las del ejército, deben estarlo y lo esten tambien en los de los premios de constancia que quedan referidos, señalados para el último en 1.° de dicho enero de 1810. Cádiz 18 de febrero de 1812.

DECRETO.

DE 22 DE ABRIL DE 1812.

Se establece para los militares un premio medio entre los de constancia y los de las acciones distinguidas.

Las córtes generales y estraordinaries, deseando que el soldado encuentre en su gloriosa profesion todas las ventajas posibles, elevar su espíritu y fomentar su valor para proporcionarle la adquisicion de los premios señalados á las acciones distinguidas, decretan:

I. Se establece un premio medio entre los de constancia en el servicio y los de las acciones distinguidas.

II. Este consistirá en el aumento de ocho maravedises diarios sobre su prest, que se concederá en todos los cuerpos del ejercito y armada á un soldado por cada diez á eleccion de sus compañeros.

III. La regencia determinará una señal particular que distinga á los premiados.

IV. La asignacion de dicho aumento y distincion se hará por votacion individual en cada compañía á presencia de sus oficiales, teniendo su capitan voto decisivo en caso de empate.

V. Tanto el capitan como los demas oficiales cuidarán con el mayor esmero de que el premio no recaiga sino en el que verdaderamente sea, en el concepto de sus compañeros, el mas digno por su valor, sin que en su adjudicacion intervengan parcialidades, soborno, violencia ni fraude alguno, para que recaiga en determinada persona. El que se valiere de cualquiera medio ó artificio para ganar votos en su favor ó en el de otro, será privado por un año de opcion al premio, y castigado severamente por el gefe del cuerpo.

VI. Este premio no se concederá sino á los que hayan dado antes muestras de valor y serenidad en acciones de guerra.

VII. Conferido el premio se dará noticia de los electos al comisario encargado de las revistas mensuales, del mismo modo que se practica con los que entran al goce de los escudos de ventaja.

VIII. El sargento mayor formará tambien una relacion por duplicado de los electos, que visada por el coronel ó comandante se pasará á los inspectores respectivos, y por estos al ministerio de la guerra para que les sirva siempre de recomendacion.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETO.

DE 23 DE MAYO DE 1812.

Formacion de los ayuntamientos constitucionales.

Las córtes generales y estraordinarias, convencidas de que no interesa menos al bien y tranquilidad de las familias que a la prosperidad de la nacion el que se establezcan ayuntamientos con la mayor brevedad en aquellos pueblos que no habiéndolos tenido hasta aqui, conviene que los tengan en adelante, como tambien el que para evitar las dudas que pudieran suscitarse en la ejecucion de lo sancionado por la constitucion, se establezca una regla uniforme para el nombramiento, forma de eleccion y número de sus individuos, decretan:

I. Cualquiera pueblo que no tenga ayuntamiento, y cuya poblacion no llegue á mil almas, y que por sus particulares circunstancias de agricultura, industria ó poblacion considere que debe tener ayuntamiento, lo hará presente á la diputacion de la provincia, para que en virtud de su informe se provea lo conveniente por el gobierno.

II. Los pueblos que no se hallen con estas circunstancias seguirán agregados á los ayuntamientos á que lo han estado hasta aqui, mientras que la mejora de su estado político no exija otra providencia; agregándose al mas inmediato en su provincia los que se formaren nuevamente, y los despoblados con jurisdiccion.

III. Debiendo cesar en virtud de lo prevenido en el artículo 312 de la constitucion los regidores y demas oficios perpetuos de ayuntamiento, luego que se reciba y publique en cada pueblo la constitucion y este decreto, se pasará á elegirlos á pluralidad absoluta de votos en la forma que se establece en los artículos 313 y 314, asi en los pueblos en que todos tengan la dicha cualidad de perpetuos, como en los que la tengan algunos solamente; en la inteligencia de que en los pueblos en que pueda verificarse esta eleccion cuatro meses antes de concluirse el año, se renovará en fin de diciembre del mismo la mitad, saliendo los últimamente nombrados; pero en aquellos pueblos en que se haga la eleccion cuando falten menos de cuatro meses para acabarse el año, seguirán los elegidos en su encargo hasta fin del año siguiente, en que cesará la mitad.

IV. Como no puede dejar de convenir que haya entre el gobierno del pueblo y su vecindario aquella proporcion que es compatible con el buen órden y mejor administracion, habrá un alcalde, dos regidores y un procurador síndico en todos los pueblos

que no pasen de doscientos vecinos; un alcalde, cuatro regidores y un procurador en los que teniendo el número de doscientos vecinos, no pasen de quinientos; un alcalde, seis regidores y un procurador en los que llegando á quinientos, no pasen de mil; dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores síndicos en los que desde mil no pasen de cuatro mil; y se aumentará el número de regidores á doce en los que tengan mayor vecindario.

V. En las capitales de las provincias habrá á lo menos doce regidores; y si hubiere mas de diez mil vecinos, habrá diez y seis.

VI Siguiendo estos mismos principios para hacer la eleccion de estos empleos, se elegirán en un dia festivo del mes de diciembre, por los vecinos que se hallen en el ejercicio de los derechos de ciudadano, nueve electores en los pueblos que no lleguen á mil, diez y siete en los que llegando á mil no pasen de cinco mil, y veinte y cinco en los de mayor vecindario.

VII. Hecha esta eleccion, se formará en otro dia festivo de dicho mes de diciembre, con la brevedad que permitan las circunstancias, la junta de electores presidida por el gefe político, si lo hubiere, y si no por el mas antiguo de los alcaldes, y en defecto de estos por el regidor mas antiguo, para conferenciar sobre las personas que puedan convenir para el mejor gobierno del pueblo; y no podrá disolverse sin haber concluido la eleccion, la cual se estenderá en un libro destinado á este efecto, se firmará por el presidente y el secretario, que será el mismo del ayuntamiento, y se publicará inmediatamente

VIII. Para facilitar el nombramiento de electores, particularmente donde una numerosa poblacion, ó la division y distancia de los pueblos ó parroquias que han de agregarse para establecer su ayuntamiento podria hacerlo embarazoso, se formarán juntas de parroquia compuestas de todos los ciudadanos domiciliados en ella, que deberán ser convocados con anterioridad, y presididas respectivamente por el gefe político, alcalde ó regidor, y cada una nombrará el número de electores que le corresponda, con proporcion al total relativo á la poblacion de todas, debiéndose estender la acta de eleccion en el libro que se destinare á este fin, y firmarse por el presidente y el secretario que se nombrare

IX. No podrá haber junta de parroquia en los pueblos que no lleguen á cincuenta vecinos; y los que se hallen en este caso se unirán entre sí ó con el mas inmediato para formarla; pero la tendrán todos aquellos que hayan estado hasta aqui en posesion de nombrar electores para la eleccion de justicia, ayuntamiento ó diputado del comun.

X. Si no obstante lo prevenido en el artículo precedente, todavia resultare mayor el número de parroquias que el de los elec-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tores que correspondan, se nombrará sin embargo un elector por cada parroquia.

XI. Si el número de parroquias fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada parroquia elegirá uno, dos ó mas hasta completar el número que se requiera; pero si faltare aun un elector, le nombrará la parroquia de mayor poblacion; si todavia faltare otro, le nombrará la que siga en mayor poblacion, y asi sucesivamente.

XII. Como puede suceder que haya en las provincias de ultramar algunos pueblos que por sus particulares circunstancias deban tener ayuntamiento para su gobierno, pero cuyos vecinos no esten en el ejercicio de los derechos de ciudadano, podrán sin embargo en este caso elegir entre sí los oficios de ayuntamiento bajo las reglas prescritas en esta ley para los demas pueblos.

III Los ayuntamientos no tendrán en adelante asesores con nombramiento y dotacion fija.

DECRETO.

DE 1° DE JUNIO DE 1812.

Establecimiento del tribunal especial de guerra y marina.

Las córtes generales y estraordinarias, considerando cuan conveniente sea que los asuntos contenciosos pertenecientes al fuero militar, que no está derogado por la constitucion, continúen por ahora determinándose en justicia por las reglas y leyes que gobiernan en este ramo, mientras subsistan la ordenanza general del ejército y la de la armada, y hasta que en circunstancias mas á propósito hagan las córtes las alteraciones que entendieren convenir mas al bien del estado, y fundándose en el artículo 278 de la constitucion han venido en decretar y decretan:

I. Se establece un tribunal especial de guerra y marina para que conozca de todas las causas y negocios contenciosos del fuero militar, de que hasta aquí ha conocido el estinguido consejo reunido de guerra y marina, hasta que las córtes provean lo mas conveniente en este punto.

II. Las sumarias y procesos militares sobre hechos sujetos á los consejos de guerra ordinarios de capitanes, y los de oficiales generales, en todos los casos en que se dirigian en consulta al rey por la via reservada, ó al estinguido consejo supremo de guerra y marina, se remitirán en adelante en derechura por los gefes militares á este tribunal especial, el cual resolverá por sí en los casos en que las ordenanzas autorizaban para ello á dicho supremo consejo, ó consultará al rey ó á la regencia del reino con su dictámen, y

la sumaria ó proceso original, cuando las citadas ordenanzas exigen la real resolucion, para que se lleven á efecto las determinaciones.

III La consulta del tribunal con la real resolucion, y la sumaria ó proceso se devolverá por la secretaría de guerra al mismo tribunal especial, y por este se comunicará inmediatamente á quienes corresponda.

IV. Los demas pleitos y causas de individuos del fuero militar de guerra y marina, sobre asuntos civiles ó delitos comunes, que no tengan conexion con el servicio militar, de los cuales, segun lo dispuesto por las ordenanzas, conocen en primera instancia los capitanes y comandantes generales de las provincias y departamentos, y demas gefes militares, con acuerdo de sus auditores ó asesores, y conforme á derecho, vendrán en apelacion á este tribunal. Y á fin de no privar á los individuos que gocen fuero militar del beneficio de la tercera instancia que establece el artículo 285 de la constitucion, el tribunal especial admitirá esta de las provincias, de donde han venido hasta ahora en apelacion al estinguido consejo de guerra, en los mismos casos y en la propia forma que se observare en las audiencias, segun la planta que á estas se diere por estas córtes.

V. En cuanto al órden de proceder en los negocios de las provincias de ultramar, que no han acostumbrado hasta ahora á terminarse en el estinguido consejo de guerra y marina, no se hará por ahora novedad.

VI. Se compondrá este tribunal de un decano, oficial general de ejército ó marina; cuatro ministros de continua asistencia, dos de ellos generales de tierra, y los otros dos de mar; dos intendentes, uno de cada ramo; siete letrados; dos fiscales, uno militar y otro letrado; y un secretario, que precisamente haya servido en la milicia.

VII. El tratamiento de este tribunal en cuerpo será el de *Alteza*.

VIII. Los individuos de este tribunal no podrán ser removidos de su empleo sino en los propios términos y casos que los demas magistrados.

IX Los magistrados de este tribunal especial gozarán los mismos honores y sueldo de que gozaban los del estinguido consejo supremo de guerra y marina; y si quedaren por ahora sin destino alguno ó algunos de los que componian el estinguido consejo, conservarán los mismos honores y sueldo que disfrutan, sujetos los sueldos de unos y otros á lo prevenido en el decreto de 2 de diciembre de 1810.

X. La regencia del reino nombrará los magistrados de este tribunal especial á propuesta que hará por ternas el consejo de estado conforme lo previene la constitucion.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

XI. Nombrados que sean, prestarán todos en manos de la regencia del reino el juramento prescrito por la constitucion. Los que fueren entrando sucesivamente en las vacantes que ocurran, prestarán el propio juramento en manos del decano, y este en las del rey ó la regencia.

DECRETO.

DE 11 DE JUNIO DE 1812.

Que junto con la pension de montepio se puede disfrutar otra.

Las córtes generales y estraordinarias decretan y declaran: Que en la prohibicion del goce de dos pensiones en una misma persona, establecida por resolucion de 10 de diciembre de 1809, decreto de 1.° de enero, y órden de 2 de diciembre de 1810, no está comprendida la del montepio, que corresponda á las viudas ó huérfanos por fallecimiento de sus maridos ó padres; y por consiguiente que pueden disfrutar de dicho montepio, aunque al mismo tiempo gocen de alguna pension, que por la legítima autoridad y por justos y señalados motivos les esté concedida.

DECRETO.

DE 10 DE JULIO DE 1812.

Reglas para la formacion de los ayuntamientos constitucionales.

Las córtes generales y estraordinarias, deseando evitar en todos los pueblos de la monarquía las dudas que se han consultado por el gobernador de la isla de Leon sobre la inteligencia del decreto de 23 de mayo próximo, relativo á la formacion de ayuntamientos, y cualesquiera otras que sobre el particular pudieran suscitarse, decretan:

I. Para llevar á efecto la formacion de los ayuntamientos en el número y modo que se previene en el artículo 3.° del decreto de 23 de mayo próximo, cesarán desde luego en sus funciones, no solo los regidores perpetuos, sino todos los individuos que actualmente componen dichos cuerpos, pudiendo estos ser nombrados en la próxima eleccion para los cargos de los nuevos ayuntamientos.

II. Para ser elegido secretario de ayuntamiento, conforme al artículo 320 de la constitucion, no es necesaria la calidad de escribano.

III. Las juntas de sanidad continuarán desempeñando, del mismo modo que ahora, las funciones que ejercen, hasta que la regencia del reino, con presencia de las facultades que por la constitucion se dan á los ayuntamientos, adopte y formalice por el ministerio de la gobernacion el plan que deberá regir en este punto, y sea aprobado por las córtes.

DECRETO.

DE 21 DE SETIEMBRE DE 1812.

Los eclesiásticos seculares tienen voto en las elecciones de ayuntamiento; pero no pueden obtener en ellos ningun oficio.

Teniendo en consideracion las córtes generales y estraordinarias, que las leyes, los fueros particulares, las ordenanzas municipales de los pueblos, la práctica y costumbre generalmente observada, y los sagrados cánones prohiben á los eclesiásticos ejercer oficios de justicia y consejo, para que con mayor utilidad de los pueblos puedan dedicarse enteramente á desempeñar las sagradas funciones de su ministerio, sin implicarse por aquellos cargos civiles en responsabilidades agenas de su vocacion, y que los sujetarian al fuero de los legos; y deseando que se les tenga en las elecciones aquella consideracion que se merecen por la dignidad de su estado y demas estimables circunstancias que en ellos concurren, han venido en decretar y decretan: Que los eclesiásticos seculares que se hallen en el ejercicio de los derechos de ciudadano, tengan voz activa y puedan dar su voto en las elecciones de los ayuntamientos constitucionales; pero no podrán ser nombrados ni elegidos para ningun oficio del ayuntamiento ni consejo.

DECRETO.

DE 9 DE OCTUBRE DE 1812.

Visita general de cárceles que deben hacer el tribunal especial de guerra y marina, y los demas gefes militares.

Las córtes generales y estraordinarias, con el fin de que tenga cumplido efecto lo que se previene en el artículo 298 de la constitucion, y queriendo que los ciudadanos sujetos á la jurisdiccion militar disfruten como los demas del beneficio de las visitas de cárceles, decretan:

I. El tribunal especial de guerra y marina, con asistencia de todos sus ministros y fiscales, los capitanes y comandantes generales de los ejércitos y provincias, los gobernadores y demas gefes que ejerzan jurisdiccion militar, acompañados de los auditores de guerra ó asesores, y de los abogados fiscales de sus juzgados, harán respectivamente en los lugares de su residencia visita general y pública de los castillos, cuarteles, cuerpos de guardia y cuales-

quiera otros sitios donde haya reos presos pertenecientes á su jurisdiccion, en los dos sábados precedentes á las domínicas de ramos y pentecostés, en el dia 24 de setiembre, y en la víspera de navidad de cada año.

II. Asistirán sin voto á estas visitas dos individuos de la diputacion provincial, ó del ayuntamiento del pueblo si no residiese en él la diputacion, ó no estuviese reunida; los cuales, cuando concurran con el tribunal especial de guerra y marina, se interpolarán con los ministros de este despues del que presida la visita, y en los demas casos ocuparán el primer lugar despues del juez respectivo. Para ello, asi el tribunal especial como los otros jueces, señalarán la hora proporcionada, y lo avisarán anticipadamente á la diputacion ó al ayuntamiento, á fin de que nombren los dos individuos que hayan de concurrir.

III. Dos ministros del tribunal especial á quienes toque por turno, y los dos fiscales, y los demas jueces militares, con asistencia de sus asesores, harán igual visita pública en los sábados de cada semana.

IV. En las visitas de una y otra clase se presentarán respectivamente todos los presos de la jurisdiccion militar. Los jueces verán las causas para poner en libertad á los que la merezcan, y remediar las dilaciones ó defectos que noten, y reconocerán por sí mismos las habitaciones de los encarcelados, informándose puntualmente del trato y alimento que se les da, de si se les tiene sin comunicacion no estando asi prevenido, ó si de cualquiera otro modo se les molesta arbitrariamente por los encargados de su custodia.

DECRETO.

DE 9 DE OCTUBRE DE 1812.

Visita general que deben hacer los prelados y jueces eclesiásticos en las cárceles de su jurisdiccion.

Las córtes generales y estraordinarias, deseando que los súbditos de la jurisdiccion eclesiástica no carezcan del beneficio que en las visitas de cárceles dispensa á todos los españoles el artículo 298 de la constitucion, han venido en decretar, como por el presente decretan:

I. Todos los prelados eclesiásticos seculares ó regulares, y los demas jueces que ejerzan jurisdiccion eclesiástica de cualquiera clase, acompañados de sus provisores ó asesores, y de los fiscales de sus juzgados, harán respectivamente en los pueblos ó puntos de su residencia, visita general y pública de las cárceles ó sitios donde haya reos presos pertenecientes á su jurisdiccion en los dos sábados precedentes á las domínicas de ramos y pentecostés, en el dia 24 de setiembre, y en la víspera de navidad de cada año.

II. Asistirán sin voto á estas visitas dos individuos de la diputacion provincial, ó del ayuntamiento del pueblo, si no residiese en él la diputacion ó no estuviese reunida; los cuales ocuparán el primer lugar despues del juez que presida la visita; y este señalará la hora proporcionada, y lo avisará anticipadamente á la diputacion ó al ayuntamiento para que nombren los dos individuos que hayan de concurrir.

III. Los provisores y demas jueces eclesiásticos, y los prelados regulares que tengan súbditos presos, harán igual visita pública en los sábados de cada semana, con asistencia de sus asesores si no fueren letrados.

IV. En las visitas de una y otra clase se presentarán respectivamente todos los presos. Los jueces verán las causas para poner en libertad á los que la merezcan, y remediar las dilaciones ó defectos que noten; y reconocerán por sí mismos las habitaciones de los encarcelados, informándose puntualmente del trato y alimento que se les da, de si se les tiene sin comunicacion, cuando no esté asi prevenido, ó si de cualquiera otro modo se les molesta arbitrariamente por los encargados de su custodia.

DECRETO.

DE 9 DE OCTUBRE DE 1812.

Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia.

Las córtes generales y estraordinarias, deseando llevar á efecto lo prevenido en los artículos 271 y 273 de la constitucion, y que desde luego se administre con arreglo á ella la justicia por las audiencias y jueces de primera instancia en todas las provincias de la monarquía, han venido en decretar y decretan lo siguiente:

CAPITULO I.

De las audiencias.

ART. I. Por ahora, y hasta que se haga la division del territorio español prevenida en el artículo 11 de la constitucion, habrá una audiencia en cada una de las provincias de la monarquía que las han tenido hasta esta época, á saber: Aragon, Asturias, Canarias, Cataluña, Estremadura, Galicia, Mallorca, Sevilla, Valencia; y en ultramar, Buenos-Aires, Caracas, Charcas, Chile, Cuzco, Guadalajara, Goatemala, Isla de Cuba, Lima, Manila, México, Quito y Santa Fe.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

II. El territorio de estas audiencias será por ahora el mismo que han tenido, y la misma su residencia; pero si algunas por las circunstancias de la guerra la hubiesen fijado en otros puntos mas á propósito, continuarán interinamente en ellos con aprobacion de la regencia.

III. Se establecerán tambien con la brevedad posible una audiencia en Madrid, otra en Pamplona, otra en Valladolid, y otra en Granada, en lugar de la sala de alcaldes de casa y córte, de las dos chancillerías, y del consejo de Navarra y su cámara de Comptos: erigiéndose ademas una audiencia en la villa del Saltillo, en la América Septentrional.

IV. El territorio de la audiencia de Madrid comprenderá á toda Castilla la Nueva: el de la de Valladolid á todas las provincias comprendidas en la demarcacion de Castilla la vieja y Leon: el de la de Granada á la provincia de este nombre, y las de Córdova, Jaen y Murcia: el de la de Pamplona á las provincias de Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya; y el de la del Saltillo á las provincias de Coahuila, nuevo reino de Leon, nuevo Santander y los Tejas.

V. La audiencia de Madrid se compondrá de un regente, diez y seis ministros y dos fiscales. Habrá en ella dos salas para los negocios civiles, y otras dos para los criminales, con cuatro ministros cada una.

VI. Las audiencias de Aragon, Cataluña, Estremadura, Galicia, Granada, Lima, México, Navarra, Sevilla, Valencia y Valladolid, tendrán cada una un regente, doce ministros y dos fiscales; y constarán de dos salas civiles y una para lo criminal, compuestas de cuatro ministros cada una.

VII. Las audiencias de Asturias, Buenos-Aires, Canarias, Caracas, Charcas, Chile, Cuba, Cuzco, Guatemala, Guadalajara, Mallorca, Manila, Quito, Saltillo y Santa Fe, se compondrán cada una de un regente, nueve ministros y dos fiscales. Habrá en ellas una sala de cuatro ministros para los negocios civiles y criminales en segunda instancia, y otra de cinco para conocer de ellos en tercera.

VIII. Si algunas de las audiencias que deben tener tres salas, no las necesitasen por ahora, por hallarse ocupado en parte su territorio, podrá la regencia establecerlas con dos salas solamente hasta que varien las circunstancias, y se arreglarán en tal caso á lo que se previene en esta ley con respecto á las audiencias de dos salas

IX. Cesará en todas las audiencias la diferencia de oidores y alcaldes del crimen. Todos los ministros de ellas serán unos magistrados iguales en autoridad, y todos tendrán la misma denominacion.

X. Todas las audiencias tendrán en cuerpo el tratamiento de

Escelencia, y sus regentes, ministros y fiscales en particular el de *Señoría*

XI. Ninguna de ellas tendrá en adelante otro presidente que su regente respectivo.

XII. Todas las audiencias serán iguales en facultades, é independientes unas de otras, sin que haya asunto de conocimiento esclusivo de ninguna.

XIII. Las facultades de estas audiencias serán únicamente:

Primera. Conocer en segunda y tercera instancia de las causas civiles y criminales que se les remitan por los jueces de primera instancia de su distrito en apelacion, ó en los casos que previene esta ley

Segunda. Conocer de las causas de suspension y separacion de los jueces inferiores de su territorio conforme á la constitucion.

Tercera. Conocer de las competencias entre los mismos. En ultramar las que ocurran entre los jueces subalternos y los tribunales y juzgados especiales, ó entre estos y las audiencias, se decidirán por la mas inmediata

Cuarta. Conocer de los recursos de proteccion y los de fuerza que se introduzcan de los tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio; entendiéndose comprendidos en ellos los recursos de nuevos diezmos de que antes conocia el consejo real.

Quinta. Recibir de los jueces subalternos de su territorio los avisos de las causas que se formen por delitos, y las listas de las causas civiles y criminales pendientes, como se manda en la constitucion, para promover la mas pronta administracion de justicia.

Sesta. Hacer el recibimiento de abogados, prévias las formalidades prescritas por las leyes. Y los abogados que asi se reciban, ó que esten recibidos hasta el dia, podrán ejercer su profesion presentando el título, en cualquiera pueblo de las Españas, esceptuando únicamente aquellos en que hay colegios, pues deberán incorporarse en ellos conforme al decreto de las córtes de 22 de abril de 1811.

Séptima. Examinar á los que pretendan ser escribanos en sus respectivos territorios, prévios los requisitos establecidos, ó que se establezcan por las leyes. Y los examinados acudirán al rey ó á la regencia, con el documento de su aprobacion para obtener el correspondiente título

Octava. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias dadas por los jueces de primera instancia en las causas en que procediéndose por juicio escrito, conforme á derecho no tenga lugar la apelacion; cuyo conocimiento será para el preciso efecto de reponer el proceso devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254 de la constitucion.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Novena. Conocer en ultramar de los mismos recursos de nulidad, cuando se interpongan de las sentencias dadas en tercera instancia, ó en segunda si causan ejecutoria, para solo el efecto que previene el artículo 269 de la constitucion.

XIV. No podrán las audiencias tomar conocimiento alguno sobre los asuntos gubernativos ó económicos de sus provincias.

XV. Tampoco podrán en ningun caso retener el conocimiento de causa pendiente en primera instancia, cuando se interponga apelacion de auto interlocutorio; y fuera de este caso no podrán llamar los autos pendientes, ni aun *ad effectum videndi*.

XVI. Los regentes, ministros y fiscales de las audiencias no podrán tener comision alguna, ni otra ocupacion que la del despacho de los negocios de su tribunal.

XVII Quedan suprimidos los juzgados de provincia y los de cuartel que hasta ahora han ejercido los alcaldes de córte y los del crimen; y asimismo los empleos de alguacil mayor que hay en algunas audiencias.

XVIII. Tambien queda suprimida la plaza de juez mayor de Vizcaya; y la audiencia de Pamplona conocerá de las causas y pleitos de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en segunda y tercera instancia, por el mismo órden que de las demas de su territorio.

XIX Los ministros y fiscales de las audiencias de la Península é islas adyacentes, tendrán el sueldo de treinta y seis mil reales de vellon anuales, y los regentes el de cincuenta mil. Pero por ahora y hasta que varien las circunstancias, aquellos gozarán solamente el de veinte y cuatro mil, y estos el que actualmente disfrutan de treinta y seis mil.

XX. En atencion á los mayores gastos de la córte, el regente de la audiencia de Madrid tendrá el sueldo anual de sesenta mil reales, y los ministros y fiscales el de cuarenta y cinco mil. Pero mientras rija la ley que designa el *maximum* de los sueldos, se reducirán á él los referidos.

XXI. Por lo respectivo á las audiencias de ultramar, el capitan general de cada provincia, oyendo al intendente ó gefe de hacienda de la misma, y á la audiencia ó audiencias de su distrito, propondrá á la regencia, con remision del espediente, el sueldo de que deban gozar los regentes, ministros y fiscales de cada una, con atencion á las circunstancias de los respectivos paises; y la regencia lo remitirá á las córtes con su informe. Entretanto continuarán aquellos magistrados con la dotacion que actualmente disfrutan.

XXII. Cada una de las audiencias, asi de la Península é Islas adyacentes como de ultramar, teniendo presentes la planta y facultades que se les dan por la constitucion y esta ley, propondrá á la

regencia del reino dentro de cuatro meses, contados desde el recibo del presente decreto, las ordenanzas que crea mas oportunas para su régimen interior, el número de subalternos necesarios y sus dotaciones respectivas, remitiendo al mismo tiempo copia auténtica de las ordenanzas que actualmente rijan; y la regencia, oyendo al consejo de estado, formará con vista de todas una ordenanza para el régimen uniforme de todas las audiencias, con espresion de los subalternos necesarios para cada una, y sus dotaciones, y le pasará á las córtes para su aprobacion. Entretanto se gobernarán las audiencias por sus actuales ordenanzas en cuanto no se opongan á la constitucion, y á lo que aqui se previene.

XXIII. Tambien formará cada audiencia, de acuerdo con la diputacion provincial respectiva, y lo remitirá á la regencia dentro del mismo término, un arancel de los derechos que deban percibir, asi los dependientes del tribunal como los jueces de partido, alcaldes, escribanos y demas subalternos de los juzgados de su territorio; y la regencia, al tiempo de pasar estos aranceles á las córtes para su aprobacion, propondrá lo que le parezca, á fin de que cuanto sea posible se igualen los derechos, asi en la Península como en ultramar respectiva y proporcionalmente.

XXIV. Los dos fiscales de cada audiencia despacharán indistintamente en lo civil y criminal por repartimiento, que autorizará la misma.

XXV. Los fiscales tendrán voto en las causas en que no sean parte, cuando no haya suficientes ministros para determinarlas ó dirimir una discordia.

XXVI. En todas las causas criminales será oido el fiscal de la audiencia, aunque haya parte que acuse. En las civiles lo serán únicamente cuando interesen á la causa pública ó á la defensa de la jurisdiccion ordinaria.

XXVII. Los fiscales de las audiencias no llevarán por título ni pretesto alguno derechos ni obvenciones, de cualquiera clase y bajo cualquiera nombre que sean, por las respuestas que dieren en los asuntos que se les pasen.

XXVIII. Los fiscales en las causas criminales ó civiles en que hagan las veces de actor ó coadyuven el derecho de este, hablarán en estrados antes que el defensor del reo ó de la persona demandada, y podrán ser apremiados á instancia de las partes como cualquiera de ellas.

XXIX. Las respuestas de los fiscales, asi en las causas criminales como en las civiles, no se reservarán en ningun caso para que los interesados dejen de verlas.

XXX. En las audiencias de dos salas todos los negocios civiles y criminales se determinarán en segunda instancia por la sa-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la de este nombre, y en la tercera pasarán á la otra sala despues de admitida la súplica por aquella Cuando tenga lugar la súplica de sentencia de vista confirmatoria de la de primera instancia, concurrirán para la revista y determinacion todos los ministros restantes de la audiencia con el regente y uno de los fiscales, ó ambos, si ninguno fuere parte en el negocio; y siempre deberá haber á lo menos dos jueces mas que los que fallaron en segunda instancia. Si para ello no hubiese magistrados suficientes en la audiencia, se agregarán uno ó dos jueces de letras de la capital, que no hubiesen sentenciado la causa de que se trate; y en su defecto la sala elegirá á pluralidad de votos el letrado ó letrados que se necesiten.

XXXI. En estas audiencias de dos salas la discordia que ocurra en la sala de segunda instancia se decidirá por un ministro de la otra, ó por uno de los fiscales. Si ocurriese discordia en la sala de tercera, se dirimirá, á falta del regente ó de un fiscal, por uno de los jueces de letras de la capital, ó en su defecto por un letrado, con arreglo á lo prevenido en el artículo precedente. En las demas audiencias la discordia que haya en una sala será decidida por un ministro de cualquiera de las otras.

XXXII. En las audiencias de tres salas se determinará en cualquiera de las civiles la súplica interpuesta de la otra ó de la sala criminal; pero si se suplicase de sentencia de vista confirmatoria de la de primera instancia, se reunirán para la revista y determinacion todos los ministros de las otras dos salas; y siempre habrá á lo menos dos jueces mas que los que sentenciaron en vista.

XXXIII. En la audiencia de dos salas civiles y dos criminales la súplica de una se decidirá en la otra del respectivo ramo; pero de cualquiera que se suplique contra dos sentencias conformes se reunirán los ministros de una sala civil y otra criminal, y habrá á lo menos dos jueces mas que los que fallaron en segunda instancia.

XXXIV. Las respectivas salas de las audiencias se formarán cada año alternando los ministros por el órden de su antigüedad en la forma que se designa:

AUDIENCIAS DE DOS SALAS.		AUDIENCIAS DE TRES SALAS.		AUDIENCIAS DE CUATRO SALAS.	
1.ª	1.°	1.ª civil.	2.ª civil.	1.ª civil.	1.ª criminal.
	3.°	1.°	2.°	1.°	3.°
	5.°	4.°	5.°	5.°	7.°
	7.°	7.°	8.°	9.°	11.°
		10.°	11.°	13.°	15.°
2.ª	2.°	Criminal.		2.ª civil.	2.ª criminal.
	4.°	3.°		2.°	4.°
	6.°	6.°		6.°	8.°
	8.°	9.°		10.°	12.°
	9.°	12.°		14.°	16.°

XXXV. Los ministros que en un año han compuesto una sala, pasarán en el otro á la siguiente en órden; pero en las audiencias de dos salas, en que cuatro de los ministros de la de tercera instancia deben pasar á la de segunda, lo harán alternativamente el 8.° y el 9.° segun dispongan los regentes; entendiéndose siempre que los ministros que formen la sala de tercera instancia no podrán determinar en revista ninguna causa que hayan fallado en vista, pues para este solo efecto los deberán reemplazar otros tantos ministros de la otra sala.

XXXVI. Los regentes deberán asistir al tribunal todos los dias en la sala que tengan por mas conveniente; pero si asistiesen á la de segunda instancia en las audiencias que no tengan mas de dos salas, pasará en su lugar el ministro mas moderno de aquella á la de tercera instancia. En las salas en que no asista el regente presidirán los ministros mas antiguos.

XXXVII. Para formar sala habrá tres ministros á lo menos.

XXXVIII. En los asuntos civiles y criminales de cualquiera clase no podrá haber sentencia con menos de tres votos conformes. Si votasen seis ó mas jueces, deberá haber conformidad en la mayoría absoluta.

XXXIX. Las causas criminales en que pueda recaer pena corporal no se verán en segunda ó tercera instancia por menos de cinco jueces.

XL. Acabada la vista ó revista no se disolverá la sala hasta dar sentencia; pero si alguno ó algunos de los magistrados espusiesen antes de comenzarse la votacion que necesitan ver los autos,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

podrá suspenderse, y deberá darse la sentencia dentro de los ocho dias siguientes. En las causas en que los jueces declaren conforme á la ley del reino ser necesaria informacion en derecho, se dará la sentencia dentro de sesenta dias improrogables contados desde el de la vista.

XLI. En las causas criminales solo habrá lugar á súplica de la sentencia de vista cuando no sea conforme de toda conformidad á la de primera instancia.

XLII. En las causas criminales que se remitan á las audiencias por los jueces de primera instancia, conforme á lo que se determina en esta ley, se oirá siempre al fiscal, al reo y al acusador particular, si lo hubiere, para determinar en vista ó en revista.

XLIII. En los juicios sumarísimos de posesion, en los cuales se ejecutará siempre la sentencia de primera instancia sin embargo de apelacion, no habrá lugar á súplica de la sentencia de vista, confirme ó revoque la del juez inferior. En los plenarios solo se podrá suplicar de la sentencia de vista cuando no sea conforme á la de primera instancia, y la cantidad esceda de quinientos pesos fuertes en la Península é islas adyacentes, y de mil en ultramar.

XLIV. En los pleitos sobre propiedad, que no escedan de doscientos cincuenta pesos fuertes en la Península ó islas adyacentes, y de quinientos en ultramar, no habrá tampoco lugar á súplica de la sentencia de vista, la cual causará ejecutoria, sea que confirme ó que revoque la primera.

XLV. Tambien se causará ejecutoria, y no habrá lugar á súplica, cuando la sentencia de vista confirme la de primera instancia en pleitos sobre propiedad que no escedan de mil pesos fuertes en la Península é islas adyacentes, y de dos mil en ultramar. Pero asi en el caso de este artículo como en el del precedente se admitirá la súplica cuando el que la interpusiese presentase nuevos instrumentos, con juramento de que los encontró nuevamente, y de que antes no los tuvo ni supo de ellos, aunque hizo las diligencias oportunas.

XLVI. Cuando la sentencia de vista ó revista cause ejecutoria, quedará á las partes espedito el recurso de nulidad; pero la interposicion de este no impedirá que se lleve á efecto desde luego la sentencia ejecutoriada, dándose por la parte que la hubiese obtenido la correspondiente fianza de estar á las resultas, si se mandase reponer el proceso.

XLVII. Los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias de revista de las audiencias de la Península é islas adyacentes, ó de las de vista que causen ejecutoria, pertenecerán esclusivamente al tribunal supremo de justicia.

XLVIII. En las audiencias de ultramar que tengan tres salas se interpondrá y decidirá el recurso de nulidad de la sentencia de revista en la sala que no haya conocido del negocio en segunda ni tercera instancia. Pero si para determinar el recurso no hubiesen quedado en la audiencia cinco jueces hábiles, se remitirá á otra, con arreglo al artículo 268 de la constitucion.

XLIX. Cuando en las audiencias de la misma clase se interponga recurso de nulidad de sentencia de vista que cause ejecutoria, se verá y determinará por cualquiera de las otras dos salas á que toque por turno.

L. En las audiencias de ultramar que tengan dos salas solamente, se decidirá en la de tercera instancia el recurso de nulidad que se interponga de sentencia de vista que cause ejecutoria.

LI. Cuando el recurso de nulidad se interponga de una audiencia á otra, se decidirá en la sala á que toque por turno.

LII. En todos los casos comprendidos en los cuatro artículos precedentes para determinar el recurso de nulidad asistirán cinco ministros á lo menos; debiendo ser uno de ellos el regente, si no hubiese conocido del negocio en ninguna instancia.

LIII. El recurso de nulidad se interpondrá en la sala donde se cause la ejecutoria dentro de los ocho dias siguientes al de la notificacion de la sentencia.

LIV. La sala admitirá el recurso sin otra circunstancia, y dispondrá que con la seguridad correspondiente, y á costa de la parte que lo interpuso, se remitan los autos originales al tribunal supremo de justicia por lo respectivo á la Península é islas adyacentes, ó á la sala donde corresponda en ultramar, segun lo que queda prevenido, citándose antes á los interesados para que acudan á usar de su derecho; pero si alguno de estos pidiese antes de la remision de la causa que quede testimonio de ella, lo dispondrá asi la sala á costa del mismo.

LV. Tanto en estos recursos como en todos los demas negocios, las audiencias y cualesquiera otros tribunales y jueces guardarán á los abogados y defensores de las partes la justa libertad que deben tener, por escrito y de palabra, para sostener los derechos de sus defendidos. Los abogados, asi como deben proceder con arreglo á las leyes y con el respeto debido á los tribunales, serán tratados por estos con el decoro correspondiente, y no se les interrumpirá ni desconcertará cuando hablen en estrados, ni se les coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su encargo.

LVI. Las audiencias, con asistencia del regente y de todos sus ministros y fiscales, harán anualmente en público visita general de cárceles en los dias señalados por las leyes, y ademas en el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

24 de setiembre, aniversario de la instalacion del congreso nacional, estendiéndola á cualesquiera sitios en que haya presos sujetos á la jurisdiccion ordinaria; y del resultado de estas visitas remitirán inmediatamente certificacion al gobierno, para que este lo haga publicar, y pueda tomar las providencias que correspondan en uso de sus facultades. Sin perjuicio de ello las audiencias de ultramar publicarán desde luego en su territorio las mencionadas certificaciones.

LVII. Asistirán sin voto á estas visitas generales, interpolados con los magistrados de la audiencia, despues del que las presida, dos individuos de la diputacion provincial ó del ayuntamiento del pueblo en que resida el tribunal, si no existiese allí la diputacion, ó no estuviese reunida; y con este objeto la audiencia señalará la hora proporcionada, y lo avisará anticipadamente á la diputacion ó al ayuntamiento, para que nombren los dos individuos que hayan de concurrir.

LVIII. Tambien se hará en público una visita semanal de cárceles en cada sábado, asistiendo dos ministros, á quienes toque por turno con arreglo á las leyes, y los dos fiscales.

LIX. En las visitas de una y otra clase se presentarán precisamente todos los presos, como dispone la constitucion; y los magistrados, ademas del examen que se acostumbra hacer, reconocerán por sí mismos las habitaciones, y se informarán puntualmente del trato que se da á los encarcelados, del alimento y asistencia que reciben, y de si se les incomoda con mas prisiones que las mandadas por el juez, ó si se les tiene sin comunicacion, no estando asi prevenido. Pero si en las cárceles públicas hallasen presos correspondientes á otra jurisdiccion, se limitarán á examinar cómo se les trata, á remediar los abusos y defectos de los alcaides, y á oficiar á los jueces respectivos sobre lo demas que adviertan.

LX. Siempre que un preso pida audiencia, pasará un ministro de la sala que entienda de su causa á oirle cuanto tenga que esponer, dando cuenta de ello á la sala.

LXI. Las listas de causas civiles y criminales que segun la constitucion deben remitir las audiencias al tribunal supremo de justicia, se imprimirán por las de ultramar, y se publicarán en su territorio.

LXII. Todas las audiencias, despues de terminada cualquiera causa civil ó criminal, deberán mandar que se dé testimonio de ella, ó del memorial ajustado, á cualquiera que lo pida á su costa para imprimirlo, ó para el uso que estime; esceptuándose aquellas causas en que la decencia pública exija, segun la ley, que se vean á puerta cerrada.

LXIII. Los negocios que en cualquiera instancia pendan actualmente en las audiencias, y los que ocurran antes de publicarse esta ley, serán determinados en vista y revista por cada una de ellas respectivamente, conforme á lo que queda prevenido; y no habrá apelacion para ante otra audiencia aun en los casos en que ha tenido lugar hasta ahora. Pero con respecto á las causas comenzadas en las audiencias antes de haberse publicado la constitucion, se podrán interponer ante el supremo tribunal de justicia los mismos recursos que hubieran correspondido á los consejos suprimidos, conforme al decreto de 17 de abril de este año.

LXIV. Quedando, como quedan por la constitucion y esta ley, inhibidas las audiencias de todo conocimiento acerca de los asuntos gubernativos ó económicos de sus provincias, cuantos se hallasen pendientes en los acuerdos, y fuesen por su naturaleza contenciosos, se distribuirán por repartimiento en las salas respectivas del tribunal para su despacho; y los gubernativos ó económicos se pasarán desde luego á las diputaciones provinciales, para que estas, de acuerdo con los gefes políticos superiores, los examinen y clasifiquen, den curso á aquellos en que deban intervenir las mismas diputaciones, gefes y ayuntamientos segun sus respectivas facultades, y avisen esactamente de todo á la regencia del reino, remitiéndole los demas por el conducto de las secretarías del despacho á que correspondan, segun la clasificacion hecha por el decreto de 6 de abril último, y promoviendo los que consideren mas convenientes.

CAPITULO II.

De los jueces letrados de partido.

ART. I. Las diputaciones provinciales, ó las juntas donde no estuviesen establecidas las diputaciones, harán de acuerdo con la audiencia la distribucion provisional de partidos en sus respectivas provincias, para que en cada uno de ellos haya un juez letrado de primera instancia, conforme al artículo 273 de la constitucion.

II. En la Península é islas adyacentes formarán los partidos proporcionalmente iguales, con tal que no bajen de cinco mil vecinos, teniendo presente la mayor inmediacion y comodidad de los pueblos para acudir á que se les administre justicia, y haciendo cabeza de partido el que por su localidad, vecindario, proporciones y demas circunstancias sea mas á propósito para ello.

III. En ultramar harán tambien la distribucion proporcionada de partidos, atendiendo á que no podrá dejar de haber juez letrado de primera instancia en un territorio que llegue á cinco mil vecinos.

IV. Sin embargo de lo que queda prevenido, siempre que asi

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en la Península como en ultramar, algun territorio ó algun partido ya formado no pueda agregarse á otro por su localidad y distancia, ó por la mucha estension del pais, las diputaciones harán de él un partido separado, ó lo conservarán como está, para que tenga su juez de primera instancia, aunque no llegue al número de vecinos que queda señalado.

V. Una poblacion, cuyo numeroso vecindario equivalga al de uno, dos ó mas partidos, tendrá el número necesario de jueces de primera instancia, pudiéndoseles agregar aquellos pueblos pequeños, á los cuales por su inmediacion les sea mas cómodo acudir alli para el seguimiento de sus pleitos.

VI. Las diputaciones, y en su defecto las juntas propondrán al mismo tiempo, tambien de acuerdo con las audiencias, el número de subalternos de que deberá componerse cada juzgado de primera instancia.

VII. Hecha la distribucion, se remitirá á la regencia del reino, quien con su informe la pasará á las córtes; y aprobada por estas, se devolverá á la regencia para que nombre desde luego los jueces de primera instancia que sean necesarios.

VIII. El conocimiento de estos jueces y su jurisdiccion se limitarán precisamente á los asuntos contenciosos de su partido.

IX. De las demandas civiles que no pasen de quinientos reales de vellon en la Península é islas adyacentes, y de cien pesos fuertes en ultramar; y de lo criminal sobre palabras y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna advertencia, reprension ó correccion ligera, no conocerán los jueces de partido sino por lo respectivo al pueblo de su residencia, y á prevencion con los alcaldes del mismo. Y asi unos como otros determinarán los negocios de semejante clase precisamente en juicio verbal, y sin apelacion ni otra formalidad que la de asentarse la determinacion, con espresion sucinta de los antecedentes, firmada por el juez y escribano, en un libro que deberá llevarse para este efecto.

X. Todos los demas pleitos y causas civiles ó criminales de cualquiera clase y naturaleza, que ocurran en el partido entre cualesquiera personas, se entablarán y seguirán precisamente ante el juez letrado del mismo en primera instancia, esceptuándose los casos en que los eclesiásticos y militares deban gozar de fuero, con arreglo á la constitucion, y sin perjuicio de aquellos de que, conforme á esta ley, puedan ó deban conocer los alcaldes de los pueblos, y de los que se reserven á tribunales especiales.

XI. De las causas y pleitos que pasando de las cantidades espresadas en el artículo IX no escedan de cincuenta pesos fuertes en la Península é islas adyacentes, y de doscientos en ultramar, conocerán los jueces de partido por juicio escrito, conforme á derecho, pero sin apelacion, quedando á las partes el recurso de nulidad para ante la audiencia del territorio, cuando el juez hubiese contravenido á las leyes que arreglan el proceso. Este recurso se interpondrá ante el mismo juez dentro de los ocho dias siguientes al de la notificacion de la sentencia, observándose respectivamente lo dispuesto en los artículos XLVI y LIV del capítulo I.

XII. No debiendo ya instaurarse en primera instancia ante las audiencias los recursos de que algunas han conocido hasta ahora con el nombre de auto ordinario y firmas, todas las personas que en cualquiera provincia de la monarquía sean despojadas ó perturbadas en la posesion de alguna cosa profana ó espiritual, sea eclesiástico, lego ó militar el perturbador, acudirán á los jueces letrados de partido para que las restituyan y amparen, y estos conocerán de los recursos por medio del juicio sumarísimo que corresponda, y aun por el plenario de posesion si las partes lo promoviesen, con las apelaciones á la audiencia respectiva, en el modo y casos que previene el artículo XLIII del capítulo I, reservándose el juicio de propiedad á los jueces competentes, siempre que se trate de cosas ó personas que gocen de fuero privilegiado.

XIII. Los jueces de partido no admitirán demanda alguna civil ni criminal sobre injurias, sin que acompañe á ella una certificacion del alcalde del pueblo respectivo, que acredite haber intentado ante él el medio de la conciliacion, y que no se avinieron las partes.

XIV. Los jueces de partido, por lo respectivo á los pueblos de su residencia, conocerán, á prevencion con los alcaldes de los mismos, de la formacion de inventarios, justificaciones *ad perpetuam*, y otras diligencias judiciales de igual naturaleza, en que no haya todavia oposicion de parte.

XV. Tambien conocerán de las causas civiles y de las criminales sobre delitos comunes que ocurran contra los alcaldes de los pueblos del partido. Las que se ofrezcan de la misma clase contra el juez letrado, se pondrán y seguirán ante el de partido, cuya capital esté mas inmediata.

XVI. En las causas criminales, despues de concluido el sumario y recibida la confesion al tratado como reo, todas las providencias y demas actos que se ofrezcan serán en audiencia pública para que asistan las partes si quisieren.

XVII. Todos los testigos que hayan de declarar en cualquiera causa civil ó criminal, serán examinados precisamente por el juez de la misma; y si existiesen en otro pueblo, lo serán por el juez ó alcalde del de su residencia.

XVIII. Todos los jueces de primera instancia sentenciarán las causas criminales ó civiles de que conozcan, dentro de ocho dias precisamente despues de su conclusion.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

XIX. Toda sentencia de primera instancia en las causas criminales, se notificará desde luego al acusador y al reo; y si alguno de ellos apelase, irán los autos originales á la audiencia sin dilacion alguna, emplazándose á las partes.

XX. Si el acusador y el reo consintiesen la sentencia, y la causa fuese sobre delitos livianos, á que no esté impuesta por la ley pena corporal, ejecutará su sentencia el juez del partido. Pero si la causa fuese sobre delito, á que por la ley estuviese señalada pena corporal, se remitirán los autos á la audiencia pasado el término de la apelacion, aunque las partes no la interpongan, citándolas y emplazándolas préviamente.

XXI. En todas las causas civiles en que segun la ley deba tener lugar la apelacion en ambos efectos, se remitirán á la audiencia los autos originales, sin exigirse derechos algunos con el nombre de compulsa.

XXII. Admitida la apelacion lisa y llanamente y en ambos efectos por el juez del partido, remitirá este desde luego los autos á la audiencia á costa del apelante, prévia citacion de los interesados, para que acudan á usar de su derecho.

XXIII. De cualquiera causa ó pleito, despues de terminado, deberán tambien los jueces de partido dar testimonio á cualquiera que lo pida á su costa para imprimirlo ó para otros usos, esceptuándose aquellas causas en que la decencia pública exija segun la ley que se vean á puerta cerrada.

XXIV. Los jueces de partido en el pueblo de su residencia harán en público las visitas generales y semanales de cárcel en los dias y sitios que previenen los artículos LVI y LVIII del capítulo I, asistiendo sin voto á las primeras dos individuos del ayuntamiento nombrados por este, conforme al artículo LVII. Los jueces se arreglarán en unas y otras visitas á lo que se dispone en el artículo LIX, dando cuenta á la audiencia mensualmente del resultado de todas. Tambien pasarán á la cárcel siempre que algun preso pida audiencia, y le oirán cuanto tenga que esponer.

XXV. Los jueces de partido en la Península é islas adyacentes disfrutarán por ahora el sueldo anual de once mil reales de vellon, y los derechos de juzgado con arreglo á arancel. Estos sueldos se pagarán de los propios de los pueblos del partido, ó en su defecto de otros arbitrios que las diputaciones provinciales propondrán á las córtes por medio de la regencia.

XXVI. En ultramar el capitan general de cada provincia, oyendo al intendente ó gefe de hacienda de la misma, y á la audiencia ó audiencias de su distrito, propondrá á la regencia, con remision del espediente, el sueldo de que deban gozar los jueces de partido de cada una, ademas de los derechos de arancel por ahora, teniendo consideracion á las circunstancias de los respectivos paises, y la regencia lo remitirá á las córtes con su informe. Estas propuestas se harán en el concepto de que ha de cesar la diferencia de las tres clases de estos jueces que ahora se hallan establecidas, y entretanto disfrutarán todos el sueldo de mil y quinientos pesos fuertes anuales, y los derechos mencionados.

XXVII. En lo sucesivo no se exigirán fianzas á los jueces de partido.

XXVIII. Estos jueces durarán en sus empleos seis años á lo mas; pero no cesarán en sus funciones hasta ser provistos en otro destino, si no hubiere justo motivo para suspenderlos ó separarlos, conforme á la constitucion.

XXIX. Los jueces de partido serán substituidos en sus ausencias, enfermedades ó muerte, por el primer alcalde del pueblo en que residan, y si alguno de los alcaldes fuese letrado, será preferido. En ultramar, si muriese ó se imposibilitase el juez, el gefe político superior de la provincia, á propuesta de la audiencia, nombrará interinamente un letrado que le reemplace, y dará cuenta al gobierno.

XXX. Los vireyes, capitanes y comandantes generales de las provincias, y los gobernadores militares de plazas fuertes y de armas, se limitarán al ejercicio de la jurisdiccion militar, y de las demas funciones que le competen por ordenanza; y quedan suprimidos todos los demas gobiernos y corregimientos de capa y espada, como lo quedarán igualmente los corregimientos y tenencias de letras, las alcaldías mayores de cualquiera clase, y las subdelegaciones en ultramar, luego que hecha y aprobada la distribucion provisional de partidos, se nombren los jueces de ellos.

XXXI. Tambien quedan suprimidos los asesores que ademas de los auditores de guerra tienen los vireyes, capitanes ó comandantes generales de algunas provincias, debiendo estos asesorarse con los auditores para el ejercicio de la jurisdiccion militar que les compete.

XXXII. No debiendo haber, segun lo dispuesto en la constitucion, mas fueros privilegiados que el eclesiástico y militar, cesarán en el ejercicio de jurisdiccion todos los demas jueces privativos de cualquiera clase; y cuantos negocios civiles y criminales ocurran en cada partido, se tratarán ante el juez letrado del mismo, y los alcaldes de los pueblos, como se previene en esta ley. Esceptúanse sin embargo los juzgados de la hacienda pública, los consulados y los tribunales de minería, que subsistirán por ahora segun se hallan, hasta nueva resolucion de las córtes.

XXXIII. Las causas y pleitos pendientes en los juzgados privativos que se suprimen, se pasarán desde luego á los jueces de pri-

mera instancia de los respectivos pueblos; y donde hubiere mas de un juez, se hará por repartimiento.

XXXIV. Las competencias de jurisdiccion que ocurran en la Península é islas adyacentes entre los jueces letrados de partido y los juzgados ó tribunales especiales se decidirán por el tribunal supremo de justicia, al cual se remitirán los autos originales formados sobre ello.

CAPITULO III.

De los alcaldes constitucionales de los pueblos.

ART. I. Como que los alcaldes de los pueblos ejercen en ellos el oficio de conciliadores, todo el que tenga que demandar á otro ante el juez del partido por negocios civiles ó por injurias, deberá presentarse al alcalde competente, quien, con dos hombres buenos nombrados uno por cada parte, las oirá á ambas, se enterará de las razones que aleguen, y oido el dictámen de los dos asociados, dará dentro de ocho dias á lo mas, la providencia de conciliacion que le parezca propia para terminar el litigio sin mas progreso. Esta providencia lo terminará en efecto, si las partes se aquietasen con ella; se asentará en un libro que debe llevar el alcalde con el título de *determinaciones de conciliacion*, firmando el mismo alcalde, los hombres buenos y los interesados si supieren, y se darán á estos las certificaciones que pidan.

II. Si las partes no se conformasen, se anotará asi en el mismo libro, y dará el alcalde á la que pida una certificacion de haber intentado el medio de la conciliacion y de que no se avenieron los interesados.

III. Cuando ante el alcalde conciliador competente sea demandada alguna persona que exista en otro pueblo, la citará aquel por medio de oficio al juez de su residencia, para que comparezca por sí ó por procurador, con poder bastante, dentro del término suficiente que se le asigne; y no compareciendo, se dará al actor certificacion espresiva de haberse intentado el medio de la conciliacion, y de no haber tenido efecto por falta del demandado.

IV. Si la demanda ante el alcalde conciliador fuese sobre retencion de efectos de un deudor que pretenda substraerlos, ó sobre interdiccion de nueva obra, ú otras cosas de igual urgencia, y el actor pidiese al alcalde que desde luego provea provisionalmente para evitar el perjuicio de la dilacion, lo hará asi el alcalde sin retraso, y procederá inmediatamente á la conciliacion.

V. Los alcaldes conocerán ademas en sus respectivos pueblos de las demandas civiles que no pasen de quinientos reales vellon en la Península é islas adyacentes, y de cien pesos fuertes en ultramar, y de los negocios criminales sobre injurias y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna reprension ó correccion ligera, determinando unas y otros en juicio verbal. Para este fin, en las demandas civiles referidas y en las criminales sobre injurias, se asociarán tambien los alcaldes con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, y despues de oir al demandante y al demandado, y el dictámen de los dos asociados, dará ante el escribano la providencia que sea justa, y de ella no habrá apelacion ni otra formalidad que asentarla, con espresion sucinta de los antecedentes, en un libro que deberá llevarse para los juicios verbales, firmando el alcalde, los hombres buenos y el escribano.

VI. Conocerán tambien los alcaldes de los pueblos en todas las diligencias judiciales sobre asuntos civiles, hasta que lleguen á ser contenciosas entre partes, en cuyo caso las remitirán al juez del partido.

VII. Podrán asimismo conocer, á instancia de parte, en aquellas diligencias que aunque contenciosas son urgentísimas, y no dan lugar á acudir al juez del partido, como la prevencion de un inventario, la interposicion de un retracto, y otras de esta naturaleza, remitiéndolas al juez, evacuado que sea el objeto.

VIII. Los alcaldes, en el caso de cometerse en sus pueblos algun delito, ó encontrarse algun delincuente, podrán y deberán proceder de oficio, ó á instancia de parte, á formar las primeras diligencias de la sumaria, y prender á los reos, siempre que resulte de ellas algun hecho por el que merezcan segun la ley ser castigados con pena corporal, ó cuando se les aprenda cometiéndolo en *fraganti;* pero darán cuenta inmediatamente al juez del partido, y le remitirán las diligencias, poniendo á su disposicion los reos.

IX. Los alcaldes de los pueblos en que residan los jueces de partido, podrán y deberán tomar á prevencion igual conocimiento en los mismos casos de que trata el artículo precedente, dando cuenta sin dilacion al juez, para que este continúe los procedimientos.

X. En todas las diligencias que se ofrezcan en las causas, asi civiles como criminales, no se podrán valer los jueces de partido sino de los alcaldes de los respectivos pueblos.

XI. En cuanto á lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos, ejercerán los alcaldes la jurisdiccion y facultades que segun las leyes han tenido hasta ahora los alcaldes ordinarios, arreglándose siempre á lo dispuesto por la constitucion.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO IV.

De la administracion de justicia en primera instancia hasta que se formen los partidos.

ART. I. Hasta que se haga y apruebe la distribucion de partidos prevenida en el capítulo segundo, y se nombren por el gobierno los jueces de letras de los mismos, todas las causas y pleitos civiles y criminales se seguirán en primera instancia ante los jueces de letras de real nombramiento, los subdelegados de ultramar y los alcaldes constitucionales de los pueblos.

II. Los jueces de letras de real nombramiento se limitarán precisamente al ejercicio de la jurisdiccion contenciosa en los pueblos respectivos en que la han tenido hasta ahora; y si en algunos de estos mismos pueblos la han ejercido á prevencion con sus alcaldes, continuarán estos y los jueces de letras conociendo preventivamente.

III. En los demas pueblos en que no haya juez de letras ni subdelegado en ultramar ejercerán la jurisdiccion contenciosa en primera instancia los alcaldes constitucionales, como la han ejercido los alcaldes ordinarios.

IV. Los alcaldes de los pueblos en que haya juez de letras ó subdelegado en ultramar, y en que aquellos no hayan ejercido la jurisdiccion á prevencion con estos, no conocerán en lo contencioso sino en los casos de que tratan los artículos V y VIII del capítulo III

V. Los alcaldes con absoluta inhibicion de los jueces de letras y subdelegados de ultramar conocerán de lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos respectivos.

VI. Los alcaldes constitucionales de los pueblos comenzarán desde luego á ejercer las funciones de conciliadores, con arreglo á lo que queda prevenido en los cuatro primeros artículos del mismo capítulo tercero; y no se admitirá ya demanda alguna civil ni criminal sobre injurias sin la certificacion de haberse intentado el medio de la conciliacion, y de que no se avinieron las partes.

DECRETO.

DE 23 DE OCTUBRE DE 1812.

Que los magistrados del supremo tribunal de justicia, y de los demas tribunales especiales no sean ocupados en otra comision &c.

Las córtes generales y estraordinarias, atendiendo á la necesidad de que los que administran la justicia se ocupen libre y es-

clusivamente en el desempeño de sus importantes funciones; y teniendo en consideracion lo que con respecto á los magistrados de las audiencias se halla dispuesto por el artículo XVI del capítulo I de la ley espedida para el arreglo de las mismas en 9 del corriente, decretan que los magistrados del supremo tribunal de justicia y los de los demas tribunales especiales establecidos hasta el dia, ó que en adelante se establecieren, no puedan obtener comision ni encargo alguno, de cualquiera clase que sea, ni ocuparse en otra cosa que en el despacho de los negocios de sus tribunales respectivos.

ORDEN.

Cómo deben estenderse los títulos á los provistos en piezas eclesiásticas y empleos civiles y militares.

Exmo. sr.=Fijados por S. M. los términos en que deben estenderse los títulos á los agraciados con los empleos de magistratura, y con notaría de reino y escribanía pública numeraria, cuyos modelos remitimos á V. E. con oficio de esta fecha, ha resuelto en cuanto á los que deben espedirse á los provistos en piezas eclesiásticas y empleos civiles y militares no comprendidos en dichos modelos, que continúen estendiéndose como hasta aqui con las variaciones que indican las advertencias siguientes:

I. Que el encabezamiento sea cual se ha mandado por las córtes para todas las leyes, despachos y provisiones.

II. Que se esprese en dichos títulos que han de hacer, ó que ya han hecho el juramento prescrito por la constitucion y decretos de las mismas córtes.

III. Que en todos los títulos de empleados de cualquiera clase, que ejerzan jurisdiccion, ó tengan parte en el gobierno, se esprese que han de proceder y conformarse á la constitucion y á las leyes.

IV. Y últimamente, que en los títulos de Castilla se supriman las espresiones de *señores de castillos y casas fuertes*, por ser contrarios á la constitucion y decreto de señoríos; y que se incluya que *se manda á todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas*, que no se contiene en ellos. Cádiz 27 de octubre de 1812.

DECRETO.

DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1812.

Sobre los límites de las jurisdicciones eclesiásticas castrense y ordinaria.

Las córtes generales y estraordinarias, deseando terminar las dudas y controversias suscitadas, y evitar las que pudieran pre-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

moverse en lo sucesivo sobre los límites entre las jurisdicciones eclesiásticas castrense y ordinaria, á consecuencia de la real órden espedida por la junta central en 25 de julio de 1809, han venido en decretar y decretan:

I. Queda sin ningun valor ni efecto la mencionada órden de 25 de julio de 1809, como opuesta en varios artículos al breve apostólico de la materia, dado por la Santidad de Pio VII en 12 de junio de 1807.

II Gozarán únicamente del fuero eclesiástico castrense las personas comprendidas en las cuatro clases que señala el citado breve, segun y en la misma forma que alli se determina.

DECRETO.

DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1812.

Abolicion de las mitas, *esencion de servicio personal, y otras medidas á favor de los indios.*

Las córtes generales y estraordinarias, deseando remover todos los obstáculos que impidan el uso y ejercicio de la libertad civil de los españoles de ultramar; y queriendo asimismo promover todos los medios de fomentar la agricultura, la industria y la poblacion de aquellas vastas provincias, han venido en decretar y decretan:

I. Quedan abolidas las *mitas*, ó mandamientos, ó repartimientos de indios, y todo servicio personal que bajo de aquellos ú otros nombres presten á los particulares, sin que por motivo ó pretesto alguno puedan los jueces ó gobernadores destinar ó compeler á aquellos naturales al espresado servicio.

II. Se declara comprendida en el anterior artículo la mita que con el nombre de *faltriquera* se conoce en el Perú, y por consiguiente la contribucion real anexa á esta práctica.

III. Quedan tambien eximidos los indios de todo servicio personal á cualesquiera corporaciones ó funcionarios públicos ó curas párrocos, á quienes satisfarán los derechos parroquiales como las demas clases.

IV. Las cargas públicas, como reedificacion de casas municipales, composicion de caminos, puentes y demas semejantes se distribuirán entre todos los vecinos de los pueblos, de cualquier clase que sean.

V. Se repartirán tierras á los indios que sean casados, ó mayores de veinte y cinco años fuera de la patria potestad, de las inmediatas á los pueblos, que no sean de dominio particular ó de comunidades; mas si las tierras de comunidades fuesen muy cuantiosas con respecto á la poblacion del pueblo á que pertenecen, se repartirá, cuando mas, hasta la mitad de dichas tierras, debiendo entender en todos estos repartimientos las diputaciones provinciales, las que designarán la porcion de terreno que corresponda á cada individuo, segun las circunstancias particulares de este y de cada pueblo.

VI. En todos los colegios de ultramar donde haya becas de merced se proveerán algunas en los indios.

VII. Las córtes encargan á los vireyes, gobernadores, intendentes y demas gefes, á quienes respectivamente corresponda la ejecucion de este decreto, su puntual cumplimiento, declarando que merecerá todo su desagrado y un severo castigo cualquiera infraccion de esta solemne determinacion de la voluntad nacional.

VIII. Ordenan finalmente las córtes, que comunicado este decreto á las autoridades respectivas, se mande tambien circular á todos los ayuntamientos constitucionales y á todos los curas párrocos, para que leido por tres veces en la misa parroquial, conste á aquellos dignos súbditos el amor y solicitud paternal con que las córtes procuran sostener sus derechos y promover su felicidad.

ORDEN.

Los gefes políticos no tienen voto en los ayuntamientos; pero sí los alcaldes y procuradores síndicos.

Exmo. sr.:=Las córtes generales y estraordinarias no estiman necesaria declaracion alguna en los puntos sobre que la pide el ayuntamiento constitucional de esta ciudad en la esposicion que nos remitió S. E. en 17 de setiembre último, pues que ni la constitucion concede voto en los ayuntamientos á los gefes políticos, ni pueden dejar de tenerlo, segun ella, los alcaldes y los procuradores síndicos. Cádiz 10 de noviembre de 1812.

ORDEN.

En que se declara que las agencias consulares encargadas á ciudadanos españoles por las potencias estrangeras no deben ser consideradas como empleos.

Exmo. sr. =Las córtes generales y estraordinarias, enteradas por el oficio de V. E. de 13 del corriente de que con motivo del nombramiento que ha hecho el cónsul de S M. B. en esta plaza en D. José Maria Pardo de Seijas para el encargo de agente consular, ó sea viceconsul en Ceuta, era de dictámen el tribunal especial de guerra y marina, á quien consultó la regencia segun práctica, de que Pardo debia tener entendido que quedaba

005187

separado de los goces de ciudadano, con arreglo al artículo 24 de la constitucion, porque el tribunal graduaba su comision de empleo; se han servido declarar, conformándose con el parecer de S. A., que no es un empleo la agencia dada por el cónsul Británico. Cádiz 27 de noviembre de 1812.

ORDEN.

Cómo ejecutará la visita de cárceles el tribunal especial de guerra y marina.

Teniendo noticia las córtes generales y estraordinarias de que el tribunal especial de guerra y marina ha determinado que para la visita general de presos, que debe pasar la próxima víspera de Navidad, se reunan en el castillo de Santa Catalina y la cárcel de esta ciudad todos los que se hallen en los demas sitios de esta plaza; y no pudiendo frustrarse uno de los objetos principales de lo dispuesto en el decreto de 9 de octubre último, cual es el examen de la localidad y situacion de los presos en sus respectivas prisiones; quiere S. M. que si por las distancias ú otros obstáculos cualesquiera no pudiese concluirse dicha visita general en un mismo dia, haciéndola en las mismas prisiones, se continúe aquella en el dia inmediato ó inmediatos en que pueda verificarse segun el tenor del citado decreto. Cádiz 22 de diciembre de 1812.

AÑO DE 1813.

DECRETO.

DE 4 DE ENERO DE 1813.

Sobre reducir los baldíos y otros terrenos comunes á dominio particular: suertes concedidas á los defensores de la pátria y á los ciudadanos no propietarios.

Las córtes generales y estraordinarias, considerando que la reduccion de los terrenos comunes á dominio particular es una de las providencias que mas imperiosamente reclaman el bien de los pueblos y el fomento de la agricultura é industria, y queriendo al mismo tiempo proporcionar con esta clase de tierras un auxilio á las necesidades públicas, un premio á los beneméritos defensores de la pátria, y un socorro á los ciudadanos no propietarios, decretan:

I. Todos los terrenos baldíos ó realengos, y de propios y arbitrios con arbolado y sin él, asi en la Península é islas adyacentes, como en las provincias de ultramar, escepto los egidos necesarios á los pueblos, se reducirán á propiedad particular, cuidándose de que en los de propios y arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los medios mas oportunos, que á propuesta de las respectivas diputaciones provinciales aprobarán las córtes.

II. De cualquier modo que se distribuyan estos terrenos, será en plena propiedad y en clase de acotados, para que sus dueños puedan cercarlos (sin perjuicio de las cañadas, travesías, abrevaderos y servidumbres), disfrutarlos libre y esclusivamente, y destinarlos al uso ó cultivo que mas les acomode; pero no podrán jamás vincularlos, ni pasarlos en ningun tiempo ni por título alguno á manos muertas.

III. En la enagenacion de dichos terrenos serán preferidos los vecinos de los pueblos en cuyo término existan, y los comuneros en el disfrute de los mismos baldíos.

IV. Las diputaciones provinciales propondrán á las córtes por medio de la regencia el tiempo y los términos en que mas convenga llevar á efecto esta disposicion en sus respectivas provincias, segun las circunstancias del pais, y los terrenos que sea indispensable conservar á los pueblos, para que las córtes resuelvan lo que sea mas acomodado á cada territorio.

V. Se recomienda este asunto al zelo de la regencia del reino y de las dos secretarías de la gobernacion, para que lo promuevan, é ilustren á las córtes siempre que les dirijan las propuestas de las diputaciones provinciales.

VI. Sin perjuicio de lo que queda prevenido se reserva la mitad de los baldíos y realengos de la monarquía esceptuando los egidos, para que en el todo ó en la parte que se estime necesaria sirva de hipoteca al pago de la deuda nacional, y con preferencia al de los créditos que tengan contra la nacion los vecinos de los pueblos á que correspondan los terrenos; debiéndose dar entre estos créditos el primer lugar á aquellos que procedan de suministros para los ejércitos nacionales, ó préstamos para la guerra, que hayan hecho los mismos vecinos desde 1.º de mayo de 1808.

VII. Al enagenarse por cuenta de la deuda pública esta mitad de baldíos y realengos, ó la parte que se estime necesario hipotecar, serán preferidos para la compra los vecinos de los pueblos respectivos, y los comuneros en el disfrute de los terrenos espresados; y á unos y á otros se admitirán en pago por todo su valor los créditos competentemente liquidados que tengan por razon de dichos suministros y préstamos, y en su defecto cualquier otro crédito nacional legítimo con que se hallen.

VIII. En la espresada mitad de baldíos y realengos debe comprenderse y computarse la parte que ya se haya enagenado jus-

separado de los goces de ciudadano, con arreglo al artículo 24 de la constitucion, porque el tribunal graduaba su comision de empleo; se han servido declarar, conformándose con el parecer de S. A., que no es un empleo la agencia dada por el cónsul Británico. Cádiz 27 de noviembre de 1812.

ORDEN.

Cómo ejecutará la visita de cárceles el tribunal especial de guerra y marina.

Teniendo noticia las córtes generales y estraordinarias de que el tribunal especial de guerra y marina ha determinado que para la visita general de presos, que debe pasar la próxima víspera de Navidad, se reunan en el castillo de Santa Catalina y la cárcel de esta ciudad todos los que se hallen en los demas sitios de esta plaza; y no pudiendo frustrarse uno de los objetos principales de lo dispuesto en el decreto de 9 de octubre último, cual es el examen de la localidad y situacion de los presos en sus respectivas prisiones; quiere S. M. que si por las distancias ú otros obstáculos cualesquiera no pudiese concluirse dicha visita general en un mismo dia, haciéndola en las mismas prisiones, se continúe aquella en el dia inmediato ó inmediatos en que pueda verificarse segun el tenor del citado decreto. Cádiz 22 de diciembre de 1812.

AÑO DE 1813.

DECRETO.

DE 4 DE ENERO DE 1813.

Sobre reducir los baldíos y otros terrenos comunes á dominio particular: suertes concedidas á los defensores de la pátria y á los ciudadanos no propietarios.

Las córtes generales y estraordinarias, considerando que la reduccion de los terrenos comunes á dominio particular es una de las providencias que mas imperiosamente reclaman el bien de los pueblos y el fomento de la agricultura é industria, y queriendo al mismo tiempo proporcionar con esta clase de tierras un auxilio á las necesidades públicas, un premio á los beneméritos defensores de la pátria, y un socorro á los ciudadanos no propietarios, decretan:

I. Todos los terrenos baldíos ó realengos, y de propios y arbitrios con arbolado y sin él, asi en la Península é islas adyacentes, como en las provincias de ultramar, escepto los egidos necesarios á los pueblos, se reducirán á propiedad particular, cuidándose de que en los de propios y arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los medios mas oportunos, que á propuesta de las respectivas diputaciones provinciales aprobarán las córtes.

II. De cualquier modo que se distribuyan estos terrenos, será en plena propiedad y en clase de acotados, para que sus dueños puedan cercarlos (sin perjuicio de las cañadas, travesías, abrevaderos y servidumbres), disfrutarlos libre y esclusivamente, y destinarlos al uso ó cultivo que mas les acomode; pero no podrán jamás vincularlos, ni pasarlos en ningun tiempo ni por título alguno á manos muertas.

III. En la enagenacion de dichos terrenos serán preferidos los vecinos de los pueblos en cuyo término existan, y los comuneros en el disfrute de los mismos baldíos.

IV. Las diputaciones provinciales propondrán á las córtes por medio de la regencia el tiempo y los términos en que mas convenga llevar á efecto esta disposicion en sus respectivas provincias, segun las circunstancias del pais, y los terrenos que sea indispensable conservar á los pueblos, para que las córtes resuelvan lo que sea mas acomodado á cada territorio.

V. Se recomienda este asunto al zelo de la regencia del reino y de las dos secretarías de la gobernacion, para que lo promuevan, é ilustren á las córtes siempre que les dirijan las propuestas de las diputaciones provinciales.

VI. Sin perjuicio de lo que queda prevenido se reserva la mitad de los baldíos y realengos de la monarquía esceptuando los egidos, para que en el todo ó en la parte que se estime necesaria sirva de hipoteca al pago de la deuda nacional, y con preferencia al de los créditos que tengan contra la nacion los vecinos de los pueblos á que correspondan los terrenos; debiéndose dar entre estos créditos el primer lugar á aquellos que procedan de suministros para los ejércitos nacionales, ó préstamos para la guerra, que hayan hecho los mismos vecinos desde 1.º de mayo de 1808.

VII. Al enagenarse por cuenta de la deuda pública esta mitad de baldíos y realengos, ó la parte que se estime necesario hipotecar, serán preferidos para la compra los vecinos de los pueblos respectivos, y los comuneros en el disfrute de los terrenos espresados; y á unos y á otros se admitirán en pago por todo su valor los créditos competentemente liquidados que tengan por razon de dichos suministros y préstamos, y en su defecto cualquier otro crédito nacional legítimo con que se hallen.

VIII. En la espresada mitad de baldíos y realengos debe comprenderse y computarse la parte que ya se haya enagenado jus-

ta y legalmente en algunas provincias para los gastos de la presente guerra.

IX. De las tierras restantes de baldíos ó realengos, ó de las labrantías de propios y arbitrios, se dará gratuitamente una suerte de las mas proporcionadas para el cultivo á cada capitan, teniente ó subteniente, que por su avanzada edad, ó por haberse inutilizado en el servicio militar, se retire con la debida licencia, sin nota y con documento legítimo que acredite su buen desempeño; y lo mismo á cada sargento, cabo, soldado, trompeta y tambor que por las propias causas, ó por haber cumplido su tiempo, obtenga la licencia final sin mala nota, ya sean nacionales ó estrangeros unos y otros, siempre que en los distritos en que fijen su residencia haya de esta clase de terrenos.

X. Las suertes que en cada pueblo se concedan á oficiales ó á soldados serán iguales en valor con proporcion á la cabida y calidad de las mismas, y mayores ó menores en unos paises que en otros, segun las circunstancias de estos, y la poca ó mucha estension de las tierras; procurándose que á lo menos, si es posible, cada suerte sea tal, que regularmente cultivada baste para la manutencion de un individuo.

XI. El señalamiento de estas suertes se hará por los ayuntamientos constitucionales de los pueblos á que correspondan las tierras, luego que los interesados les presenten los documentos que acrediten su buen servicio y retiro, oyéndose sobre todo breve y gubernativamente á los procuradores síndicos, y sin que se exijan costos ni derechos algunos. En seguida se remitirá el espediente á la diputacion provincial para que esta lo apruebe, y repare cualquier agravio.

XII. La concesion de estas suertes, que se llamarán *premio patriótico*, no se estenderá por ahora á otros individuos que los que sirvan ó hayan servido en la presente guerra, ó en la pacificacion de las actuales turbulencias en algunas provincias de ultramar. Pero comprende á los capitanes, tenientes, subtenientes y tropa, que habiendo servido en una ú otra, se hayan retirado sin nota, y con legítima licencia por haberse estropeado é imposibilitado en accion de guerra, y no de otro modo.

XIII. Tambien comprende á los individuos no militares, que habiendo servido en partidas, ó contribuido de otro modo á la defensa nacional en esta guerra, ó en las turbulencias de América, hayan quedado ó queden estropeados é inútiles de resultas de acciones de guerra.

XIV. Estas gracias se concederán á los sugetos referidos, aunque por sus servicios y acciones señaladas disfruten otros premios.

XV. De las mismas tierras restantes de baldíos y realengos se asignarán las mas á propósito para el cultivo, y á todo vecino de los pueblos respectivos que lo pida, y no tenga otra tierra propia, se le dará gratuitamente por sorteo, y por una vez, una suerte proporcionada á la estension de los terrenos, con tal que el total de las que asi se repartan en cualquier caso no esceda de la cuarta parte de dichos baldíos y realengos; y si estos no fuesen suficientes, se dará la suerte en las tierras labrantías de propios y arbitrios, imponiéndose sobre ella en tal caso un cánon redimible equivalente al rendimiento de la misma en el quinquenio hasta fin de 1817, para que no decaigan los fondos municipales.

XVI. Si alguno de los agraciados por el precedente artículo dejase en dos años consecutivos de pagar el cánon, siendo de propios la suerte, ó de tenerla en aprovechamiento, será concedida á otro vecino mas laborioso que carezca de tierra propia.

XVII. Las diligencias para estas concesiones se harán tambien sin costo alguno por los ayuntamientos, y las aprobarán las diputaciones provinciales.

XVIII. Todas las suertes que se concedan conforme á los artículos IX, X, XII, XIII y XV, lo serán tambien en plena propiedad para los agraciados y sus sucesores en los términos y con las facultades que espresa el artículo II; pero los dueños de estas suertes no podrán enagenarlas antes de cuatro años de como fuesen concedidas, ni sujetarlas jamás á vinculacion, ni pasarlas en ningun tiempo ni por título alguno á manos muertas.

XIX. Cualquiera de los agraciados referidos ó sus sucesores que establezca su habitacion permanente en la misma suerte, será esento por ocho años de toda contribucion ó impuesto sobre aquella tierra ó sus productos.

XX. Este decreto se circulará no solo á todos los pueblos de la monarquía, sino tambien á todos los ejércitos nacionales, publicándose en todos de manera que llegue á noticia de cuantos individuos los componen.

DECRETO.

DE 23 DE ENERO DE 1813.

Que el supremo tribunal de justicia debe conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de los tribunales especiales.

Las córtes generales y estraordinarias decretan: El supremo tribunal de justicia debe conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias dadas en última instancia por los tribunales especiales, arreglándose á lo que sobre la materia está dispuesto en la ley de 9 de octubre próximo anterior.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETO.

DE 26 DE ENERO DE 1813.

Ereccion de obispado y seminario en la capital de Nuevo-México.

Las córtes generales y estraordinarias decretan: I. Se establecerá un obispado en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del Nuevo México: II. En la misma ciudad se establecerá tambien un colegio seminario de estudios mayores.

DECRETO.

DE 5 DE FEBRERO DE 1813.

Cómo deben informar en los estrados de las audiencias los militares letrados.

Las córtes generales y estraordinarias decretan por punto general que los militares letrados que tengan que informar en los estrados de las audiencias, puedan hacerlo indiferentemente, ó con el trage que prevengan los estatutos de ellas, ó con su uniforme riguroso y espada.

DECRETO.

DE 22 DE FEBRERO DE 1813.

Abolicion de la Inquisicion y establecimiento de los tribunales protectores de la fe.

Las córtes generales y estraordinarias, queriendo que lo prevenido en el artículo 12 de la constitucion tenga el mas cumplido efecto, y se asegure en lo sucesivo la fiel observancia de tan sabia disposicion, declaran y decretan:

CAPITULO I.

ART. I. La Religion Católica Apostólica Romana será protegida por leyes conformes á la constitucion.

II. El tribunal de la inquisicion es incompatible con la constitucion.

III. En su consecuencia se restablece en su primitivo vigor la ley II. título XXVI, partida VII, en cuanto deja espéditas las facultades de los obispos y sus vicarios para conocer en las causas de fe, con arreglo á los sagrados cánones y derecho comun, y las de los jueces seculares para declarar é imponer á los hereges las penas que señalan las leyes, ó que en adelante señalaren. Los jueces eclesiásticos y seculares procederán en sus respectivos casos conforme á la constitucion y á las leyes.

IV. Todo español tiene accion para acusar del delito de heregía ante el tribunal eclesiástico; en defecto de acusador, y aun cuando lo haya, el fiscal eclesiástico hará de acusador.

V. Instruido el sumario, si resultare de él causa suficiente para reconvenir al acusado, el juez eclesiástico le hará comparecer, y le amonestará en los términos que previene la citada ley de partida.

VI. Si la acusacion fuese sobre delito que deba ser castigado por ley con pena corporal, y el acusado fuere lego, el juez eclesiástico pasará testimonio del sumario al juez respectivo para su arresto, y este le tendrá á disposicion del juez eclesiástico para las demas diligencias hasta la conclusion de la causa. Los militares no gozarán de fuero en esta clase de delitos; por lo cual, fenecida la causa, se pasará el reo al juez civil para la declaracion é imposicion de la pena. Si el acusado fuere eclesiástico secular ó regular, procederá por sí al arresto el juez eclesiástico.

VII. Las apelaciones seguirán los mismo trámites, y se harán ante los jueces que correspondan, lo mismo que en todas las demas causas criminales eclesiásticas.

VIII. Habrá lugar á los recursos de fuerza, del mismo modo que en todos los demas juicios eclesiásticos.

IX. Fenecido el juicio eclesiástico, se pasará testimonio de la causa al juez secular, quedando desde entonces el reo á su disposicion, para que proceda á imponerle la pena á que haya lugar por las leyes.

CAPITULO II.

ART. I. El rey tomará todas las medidas convenientes para que no se introduzcan en el reino por las aduanas marítimas y fronterizas libros ni escritos prohibidos, ó que sean contrarios á la religion; sujetándose los que circulen á las disposiciones siguientes, y á las de la ley de la libertad de imprenta.

II. El R. obispo ó su vicario, prévia la censura correspondiente de que habla la ley de la libertad de imprenta, dará ó negará la licencia de imprimir los escritos de religion, y prohibirá los que sean contrarios á ella, oyendo antes á los interesados, y nombrando un defensor cuando no haya parte que lo sostenga. Los jueces seculares, bajo la mas estrecha responsabilidad, recogerán aquellos escritos que de este modo prohiba el ordinario, como tambien los que se hayan impreso sin su licencia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

III. Los autores que se sientan agraviados de los ordinarios eclesiásticos ó por la negacion de la licencia de imprimir, ó por la prohibicion de los impresos, podrán apelar al juez eclesiástico que corresponda en la forma ordinaria.

IV. Los jueces eclesiásticos remitirán á la secretaría respectiva de gobernacion la lista de los escritos que hubieren prohibido, la que se pasará al consejo de estado para que esponga su dictámen, despues de haber oido el parecer de una junta de personas ilustradas, que designará todos los años de entre las que residan en la córte; pudiendo asimismo consultar á las demas que juzgue convenir.

V. El rey, despues del dictámen del consejo de estado, estenderá la lista de los escritos denunciados que deban prohibirse, y con la aprobacion de las córtes la mandará publicar; y será guardada en toda la monarquía como ley, bajo las penas que se establezcan.

DECRETO.

DE 22 DE FEBRERO DE 1813.

Por el que se mandan quitar de los parages públicos, y destruir las pinturas ó inscripciones de los castigos impuestos por la Inquisicion.

Las córtes generales y estraordinarias, atendiendo á que por el artículo 305 de la constitucion, ninguna pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental á la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto sobre el que la mereció; y á que los medios con que se conserva en los parages públicos la memoria de los castigos impuestos por la inquisicion, irrogan infamia á las familias de los que los sufrieron, y aun dan ocasion á que las personas del mismo apellido se vean espuestas á mala nota; han venido en decretar y decretan: Todos los cuadros, pinturas ó inscripciones en que estén consignados los castigos y penas impuestos por la inquisicion, que existan en las iglesias, claustros y conventos, ó en otro cualquier parage público de la monarquía, serán borrados ó quitados de los respectivos lugares en que se hallen colocados, y destruidos en el perentorio término de tres dias contados desde que se reciba el presente decreto.

DECRETO.

DE 22 DE FEBRERO DE 1813.

Se declaran nacionales los bienes que fueron de la inquisicion: medidas sobre su ocupacion, y sobre el sueldo y destino de los individuos de dicho tribunal.

Uno de los graves cuidados que mas ocupan la atencion de las córtes generales y estraordinarias, se dirige á poner cobro á los bienes y derechos de la nacion, y á proveer que se administren con la mayor economía y esactitud, evitando su malversacion, á fin de que el producto de ellos se invierta en los grandes objetos de nuestra defensa y libertad, ó en otros fines de reconocida utilidad nacional, y que los pueblos no sufran mas sacrificios de impuestos y contribuciones que aquellos que sean absolutamente precisos. Con esta idea han decretado lo siguiente:

ART. I. Hallándose suprimidos los tribunales de la inquisicion en toda la monarquía española desde el 26 de enero último, en que las córtes generales y estraordinarias decretaron el restablecimiento de la ley II, título XXVI de la Partida VII, en cuanto deja espeditas las facultades de los obispos y sus vicarios para conocer en las causas de fe, con arreglo á los sagrados cánones y derecho comun, quedaron vacantes los bienes, asi muebles, como raices ó semovientes, los derechos y acciones, los patronatos, censos, y otras cualesquiera prestaciones pertenecientes á la inquisicion, ora esten poseidas ó solamente demandadas.

II. Desde dicho dia en adelante pertenecen á la nacion estos bienes, en los mismos términos é igual derecho que la inquisicion los poseia, disfrutaba ó demandaba.

III. Asi como el estado se subroga á la inquisicion en el dominio y posesion de todos estos bienes, derechos y acciones, del mismo modo reconocerá como propias las obligaciones á que estuvieren afectos, y las cumplirá ó hará cumplir puntualmente, aun cuando su valor no alcance á cubrirlas todas.

IV. Toda enagenacion ó venta de los espresados bienes y derechos que se hubiere hecho desde el citado dia 26 de enero, ó las que en adelante puedan hacerse por cuerpos ó personas distintas de las que el gobierno depute y autorice competentemente á este fin, serán reputadas como nulas, y los bienes en que consistan reintegrados completamente á la nacion. Lo mismo debe entenderse de las ventas hechas con anterioridad al referido dia 26 de enero, si se hubieren hecho sin autoridad legítima, y sin las formalidades y requisitos necesarios; incorporándose á la masa general los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

bienes en que consistan, y cualesquiera otros muebles ó semovientes que se hubiesen depositado ó substraido para salvarlos de la usurpacion de los enemigos, ó con cualquiera otro motivo.

v. Los que substrajeren ó hubieren substraido bienes, muebles, alhajas, dinero: los que ocultaren libros de cuentas, escrituras, ó cualesquiera clase de documentos pertenecientes á la inquisicion, ó á la comprobacion de sus bienes y derechos, serán castigados con las penas establecidas ó que se establecieren contra los usurpadores, ocultadores y defraudores de bienes nacionales.

vi. El gobierno, sin crear para ello nuevas oficinas, encargará á los intendentes de las provincias donde haya habido establecido tribunal de la inquisicion, y en las que no hubiere intendente al empleado principal de la hacienda pública, que ocupen y tomen posesion, á nombre de la nacion, de los espresados bienes y demas efectos.

vii. Quedará por ahora el cuidado de la administracion á las mismas personas encargadas de ella por el tribunal de la inquisicion, y sin alterar en nada los precios de los arrendamientos de tierras y edificios que estuvieren hechos, ni lanzar de ellos á los arrendatarios ó inquilinos, siempre que satisfagan el precio estipulado, y cumplan las condiciones de sus contratos.

viii. Los intendentes y encargados de dicha ocupacion, con la intervencion de las diputaciones provinciales, que señala el párrafo 2.º del artículo 135 de la constitucion, recogerán por inventario los libros de cuenta y razon, de cualquiera clase que sean, pertenecientes á la administracion de bienes, rubricando y sellando la primera y última foja, y poniendo diligencia autorizada, que acredite el número de ellas que el libro contuviere.

ix. Tambien recogerán por inventario, y pondrán en segura custodia, todas las escrituras, documentos y demas papeles pertenecientes á los bienes, fundaciones de patronatos, cofradías ó hermandades que hayan estado bajo la proteccion ó direccion de la inquisicion.

x. Procederán tambien inmediatamente á recoger las nóminas de empleados y dependientes de dichos tribunales, por las cuales se les acostumbraba pagar sus sueldos ó salarios, y cuidarán de que por ellas mismas se formen con distincion y claridad otras nuevas, que autorizará el intendente, ó el que accidentalmente hiciere sus veces, espresándose, no solo el nombre de la persona, sino tambien el oficio ó ejercicio que hubiere tenido ó tuviere en el tribunal.

xi. En las provincias donde no se hayan establecido todavía diputaciones provinciales, prestarán la intervencion prevenida en el artículo viii las juntas provinciales hasta que se establezcan las diputaciones; y donde no hubiere juntas, lo ejecutarán sus respectivos ayuntamientos.

xii. Todos los empleados y dependientes de la inquisicion continuarán gozando por ahora de los sueldos y asignaciones que antes de la estincion hubieren gozado, y los percibirán bajo su recibo y con la intervencion correspondiente, sobre los mismos fondos que se les han pagado hasta aqui; pero quedarán sujetos á los mismos descuentos que sufren los demas empleados públicos, con arreglo al decreto de las córtes de 2 de diciembre de 1810.

xiii. Los jueces y otros ministros y dependientes eclesiásticos y seculares de la inquisicion, que hasta ahora han gozado, ó que en adelante obtuvieren prebendas, beneficios eclesiásticos, ú otro cualquiera destino de renta igual ó superior á la asignada como fija á dichos oficios de inquisicion, no podrán continuar percibiendo la renta ó sueldo que les estaba asignado por ella.

xiv. Si la renta eclesiástica ó sueldo, que independientemente del oficio de inquisicion gozan sus ministros y dependientes, fuere inferior, se les continuará pagando solamente la cantidad que falte á completar los sueldos y asignaciones que les estaban declarados por sus empleos y ministerios del tribunal; entendiéndose lo uno y lo otro hasta que obtengan prebendas, beneficios ó empleos de igual ó superior renta.

xv. Los intendentes y encargados por las diputaciones provinciales, por las juntas en falta de aquellas, y por los ayuntamientos en defecto de ambas, remitirán al gobierno cópias autorizadas é intervenidas, así de los inventarios que han de practicar de los bienes y títulos de pertenencia arriba espresados, como de las nóminas de empleados y dependientes de la inquisicion, y de sus respectivas sueldos y asignaciones; y de estos inventarios cuidará el gobierno de remitir á las córtes una cópia autorizada, para que quede en su archivo.

xvi. El gobierno cuidará de atender en la provision de prebendas y otros beneficios y empleos eclesiásticos á los ministros y dependientes de estos tribunales que fueren del estado sacerdotal, segun su mérito y aptitud; é igualmente á los dependientes seculares, en los destinos del servicio nacional para que fuesen á propósito, con el fin de que la hacienda nacional quede libre del pago de sus sueldos, y los mismos empleados de una y otra clase no queden privados de los ascensos de que fueren dignos en sus carreras respectivas.

xvii. Finalmente, si alguno de los edificios que hasta aqui han pertenecido á la Inquisicion fuere á propósito para fijar en él algun establecimiento público y nacional de reconocida utilidad y conveniencia para el estado, podrá el gobierno hacer aplicacion

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de él al insinuado objeto, pasando noticia á las córtes de haberlo ejecutado.

DECRETO.

DE 9 DE MARZO DE 1813.

Que para la admision en colegios &c. del ejército y armada no se admitan informaciones de nobleza, ni haya distinciones perjudiciales entre sus individuos.

Las córtes generales y estraordinarias, que en su decreto de 17 de agosto de 1811 se propusieron abrir la carrera del honor y de la gloria á los hijos de las familias honradas de la monarquía, dispensando asi un premio debido á los heroicos esfuerzos que los españoles de todas clases han hecho y hacen para mantener la independencia y el decoro de la nacion, y facilitando al mismo tiempo la propagacion de los conocimientos necesarios para conseguir el triunfo de las armas nacionales: queriendo que esta resolucion tenga todo su efecto, y que no exista causa alguna que destruya los sentimientos de union y fraternidad que deben reinar entre los jóvenes que se preparan é instruyen para hacerse acreedores á los diferentes grados de la milicia, y que no encuentren otros medios de distinguirse que los que les den el mérito y la virtud, decretan:

ART. I. Para la admision en los colegios, academias ó cuerpos militares del ejército y armada no se admitirán informaciones de nobleza, aunque los interesados quieran presentarlas voluntariamente.

II. En los mismos colegios, academias y cuerpos militares del ejército y armada no se usarán ni permitirán espresiones ni distinciones que contribuyan á fomentar entre sus individuos las perjudiciales ideas de desigualdad legal, ó la rivalidad de clases, salvos sin embargo los tratamientos respectivos con arreglo á las leyes.

DECRETO.

DE 10 DE MARZO DE 1813.

Cómo se reemplazarán los regidores y demas oficiales de los ayuntamientos.

Las córtes generales y estraordinarias, queriendo que el número de individuos de que deben componerse los ayuntamientos respectivos de todos los pueblos de la monarquía se halle siempre completo, y con el fin de disipar las dudas que puedan suscitarse sobre el modo de reemplazar las vacantes que ocurran, decretan:

I. Cuando acaeciere la muerte de algun regidor, se nombrará en su lugar otro por los últimos electores, el cual servirá su cargo todo el tiempo que correspondia desempeñarlo al que hubiese fallecido.

II. Esta declaracion se entenderá por regla general para todos los oficios de ayuntamiento que vacaren.

DECRETO.

DE 24 DE MARZO DE 1813.

Los individuos de los antiguos ayuntamientos conserven sus honores.

Las córtes generales y estraordinarias, no queriendo privar á los regidores y demas individuos de los antiguos ayuntamientos, que hayan cesado ó cesaren en virtud de la formacion de los nuevos que establece la constitucion, de aquellas distinciones que por razon de tales gozaban y les estaban legítimamente declaradas, han tenido á bien decretar lo siguiente: Los regidores y demas individuos de los antiguos ayuntamientos fieles de las Españas en toda la monarquía conservarán los honores, tratamiento y uso de uniforme de que respectivamente estuviesen en posesion al tiempo de cesar por la formacion de los ayuntamientos constitucionales.

DECRETO.

DE 24 DE MARZO DE 1813.

Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos.

Las córtes generales y estraordinarias, queriendo que se haga efectiva la responsabilidad de todos los empleados públicos cuando falten al desempeño de sus oficios, y reservándose determinar por decreto separado acerca de la de los infractores de la constitucion, decretan:

CAPITULO I.

De los magistrados y jueces

ART. I. Son prevaricadores los jueces que á sabiendas juzgan contra derecho por afecto ó por desafecto hácia alguno de los litigantes ú otras personas.

II. El magistrado ó juez de cualquiera clase que incurra en este delito, será privado de su empleo, é inhabilitado perpetuamen-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

te para obtener oficio ni cargo alguno, y pagará á la parte agraviada todas las costas y perjuicios. Si cometiese la prevaricacion en alguna causa criminal, sufrirá ademas la misma pena que injustamente hizo sufrir al procesado.

III. Si el magistrado ó juez juzgase contra derecho á sabiendas, por soborno ó por cohecho, esto es, porque á él ó á su familia le hayan dado ó prometido alguna cosa, sea dinero ú otros efectos, ó esperanzas de mejor fortuna, sufrirá, ademas de las penas prescritas en el precedente artículo, la de ser declarado infame, y pagar lo recibido, con el tres tanto para los establecimientos públicos de instruccion.

IV. El magistrado ó juez que por sí ó por su familia, á sabiendas, reciba ó se convenga en recibir alguna dádiva de los litigantes, ó en nombre ó en consideracian de estos, aunque no llegue por ello á juzgar contra justicia, pagará tambien lo recibido, con el tres tanto para el mismo objeto, y será privado de su empleo, é inhabilitado para ejercer otra vez la judicatura. Quedan prohibidos para siempre los regalos que solian dar algunas corporaciones, comunidades ó personas con el nombre de *tabla*, ú otro cualquiera título.

V. El magistrado ó juez que seduzca ó solicite á muger que litiga, ó es acusada ante él, ó citada como testigo, sufrirá por este hecho la misma pena de privacion de empleo, é inhabilitacion para volver á ejercer la judicatura, sin perjuicio de cualquiera otra que como particular merezca por su delito. Pero si sedujese ó solicitase á muger que se halle presa, quedará ademas incapaz de obtener oficio ni cargo alguno.

VI. Si un magistrado ó juez fuese convencido de incontinencia pública, ó de embriaguez repetida, ó de inmoralidad escandalosa por cualquier otro concepto, ó de conocida ineptitud ó desidia habitual en el desempeño de sus funciones, cada una de estas causas será suficiente de por sí para que el culpado pierda el empleo, y no pueda volver á administrar la justicia, sin perjuicio de las demas penas á que como particular le hagan acreedor sus escesos.

VII. El magistrado ó juez que por falta de instruccion ó por descuido falle contra la ley espresa, y el que por contravenir á las leyes que arreglan el proceso dé lugar á que el que haya formado se reponga por el tribunal superior competente, pagará todas las costas y perjuicios, y será suspenso de empleo y sueldo por un año. Si reincidiese, sufrirá igual pago, y será privado de empleo, é inhabilitado para volver á ejercer la judicatura.

VIII. La imposicion de estas penas en sus respectivos casos acompañará precisamente á la revocacion de la sentencia de primera instancia dada contra ley espresa; y se ejecutará irremisiblemente desde luego, sin perjuicio de que despues se oiga al magistrado ó juez, por lo que á él toca, si reclamase.

IX. Cuando una sala de cualquiera audiencia ó tribunal superior especial revoque en tercera instancia algun fallo dado en segunda por otra sala contra ley espresa, deberá remitir inmediatamente un testimonio circunstanciado al tribunal supremo de justicia, el cual impondrá desde luego las penas referidas á los magistrados que hayan incurrido en ellas.

X. Tambien se aplicarán las propias penas respectivamente en el mismo auto en que se declare nulo, y se mande reponer el proceso por el tribunal supremo de justicia, ó por las audiencias en los casos en que conocen de los recursos de nulidad contra las sentencias de primera instancia, conforme á la 8.ª facultad del artículo 13, capítulo I de la ley de 9 de octubre de 1812.

XI. Impondrá igualmente y hara ejecutar desde luego las penas referidas el tribunal supremo de justicia, cuando declarada por la sala competente de alguna audiencia de ultramar la nulidad de una sentencia dada en última instancia por otra sala, se le remita el testimonio que lo acredite, conforme al artículo 269 de la constitucion.

XII. Estos recursos de nulidad se determinarán precisamente dentro de dos meses, contados desde el dia en que el tribunal que deba conocer reciba los autos originales. Un escrito por cada parte, con vista de estos, y el informe verbal de ambas, serán toda la instruccion que se permita, con absoluta esclusion de cualquiera otra; pero nunca se admitirán los recursos referidos sino cuando se interpongan contra sentencia que cause ejecutoria, por haberse contravenido á las leyes que arreglan el proceso.

XIII. Los tribunales superiores y los jueces serán responsables de las faltas que cometan en el servicio sus respectivos inferiores y subalternos, si por omision ó tolerancia diesen lugar á ellas, ó dejasen de poner inmediatamente para corregirlos el oportuno remedio.

XIV. En su consecuencia, todo tribunal superior que dos veces haya reprendido ó corregido á un juez inferior por sus abusos, lentitud ó desaciertos, no lo hará por tercera, sino mandando al mismo tiempo que se forme contra él la correspondiente causa para suspenderlo ó separarlo, si lo mereciese. Pero tambien cuidarán los tribunales de no incomodar á los jueces inferiores con multas, apercibimientos, ni otras condenas por errores de opinion en casos dudosos, ni por leves y escusables descuidos; les tratarán con el decoro que merece su clase, y no podrán dejar de oirles en justicia, suspendiendo la reprension ó correccion que asi les impongan siempre que representen sobre ello.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

XV. Quedan en toda su fuerza y vigor los decretos de las cortes de 14 de julio y 11 de noviembre de 1811.

XVI. El rey ó la regencia, y aun las mismas cortes por sí, siempre que lo crean conveniente en virtud de quejas que reciban, comisionarán en cada provincia, ó en la que lo tengan á bien, persona de su confianza para que visite las causas civiles y criminales fenecidas por la respectiva audiencia ó cualquiera tribunal especial superior, sin entrometerse de manera alguna en las pendientes.

XVII. Esta visita se reducirá á examinar las causas, sacando nota espresiva de aquellas en que el tribunal haya tenido morosidad reparable, ó fallado contra ley espresa, ó contravenido á la constitucion, ó cometido alguna arbitrariedad ó abuso que merezca la atencion del gobierno.

XVIII. El resultado de esta operacion, con el informe del comisionado, se remitirá al rey ó á las cortes cuando ellas hubiesen mandado la visita, para que lo examinen y pasen al gobierno. En ambos casos dispondrá este que todo se publique por medio de la imprenta; y si hubiese méritos, suspenderá á los magistrados culpables despues de oir al consejo de estado, y hará que se les juzgue por el tribunal supremo de justicia

XIX. Cuando por quejas que se hayan dado á las cortes, ó remitido á estas por el rey, convenga practicar igual visita en el tribunal supremo de justicia, solo á las cortes corresponderá determinarla. Para ello comisionarán dos ó tres individuos de su seno que inspeccionen las causas fenecidas por el mismo tribunal; mandarán publicar el resultado; y si hubiese méritos para hacer efectiva la responsabilidad del tribunal ó de alguna de sus salas, decretarán, ante todas cosas, *que ha lugar á la formacion de causa*, y nombrarán para este fin nueve jueces, conforme al artículo 261 de la constitucion, quedando desde luego suspensos los culpables.

XX. Por regla general, aunque un juicio que ha tenido todas las instancias que le corresponden por la ley, debe considerarse irrevocablemente fenecido por la última sentencia, á menos que interpuesto el recurso de nulidad se mande reponer el proceso, los agraviados tendrán siempre espedita su accion para acusar al magistrado ó juez que haya contravenido á las obligaciones de su cargo; y en este nuevo juicio no se tratará de abrir el anterior, sino únicamente de calificar si es ó no cierto el delito del juez ó magistrado, para imponerle la pena que merezca.

XXI. Los magistrados y jueces cuando cometan alguno de los delitos de que tratan los seis primeros artículos podrán ser acusados por cualquiera español á quien la ley no prohiba este derecho. En los demas casos no podrán acusarles sino las partes agraviadas y los fiscales.

XXII. Los magistrados del tribunal supremo de justicia en todos los delitos relativos al desempeño de su oficio no serán acusados sino ante las cortes.

XXIII. Estas en tal caso, si apareciesen méritos suficientes, declararán previamente *que ha lugar á la formacion de causa;* con lo cual quedarán suspensos desde luego los magistrados de que se trate, y todos los documentos se pasarán al tribunal de nueve jueces que nombren las mismas cortes. El primero de ellos instruirá el sumario y cuantas diligencias ocurran en el plenario. En estas causas habrá lugar á súplica; pero no á recurso de nulidad.

XXIV. Por los mencionados delitos serán acusados ante el rey ó ante el tribunal supremo de justicia, y juzgados por este privativamente los magistrados de las audiencias y los de los tribunales especiales superiores.

XXV. En estas causas el magistrado mas antiguo de la sala á que correspondan instruirá el sumario y las demas actuaciones del plenario. Siempre habrá lugar á súplica, y tambien en su caso al recurso de nulidad contra la última sentencia; el cual se determinará por la sala que no haya conocido de la causa en ninguna instancia.

XXVI. Los jueces letrados de primera instancia serán acusados y juzgados por los referidos delitos ante las audiencias respectivas. En cuanto á la instruccion del proceso y á la admision de la súplica se observará lo dispuesto en el artículo precedente. Tambien tendrá lugar el recurso de nulidad contra la última sentencia como en los negocios comunes.

XXVII. Cuando se forme causa á un magistrado de una audiencia, ó á un juez de primera instancia, el acusado no podrá estar en el pueblo en que se practique la sumaria ni en seis leguas en contorno.

XXVIII. Los magistrados á quienes juzgue el tribunal supremo de justicia no podrán ser suspensos por este, ni los jueces de primera instancia podrán serlo por las audiencias, sino en virtud de auto de la sala que conozca de la causa, cuando intentada legalmente y admitida la acusacion, resulte de los documentos en que esta se apoye, ó de la informacion sumaria que se reciba, algun hecho por el que el acusado merezca ser privado de su empleo, ú otra pena mayor.

XXIX. Asi el tribunal supremo de justicia como las audiencias darán cuenta al rey de las causas que se formen contra magistrados y jueces, y de la providencia de suspension siempre que recaiga.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

XXX. Cuando el rey ó la regencia recibiese una acusacion ó quejas contra algun magistrado de las audiencias ó de los tribunales especiales superiores, usará de la facultad que le concede el artículo 253 de la constitucion; y si las quejas recayesen sobre la mala conducta del magistrado en una ó mas causas, podrá el gobierno pedirlas, si se hallasen enteramente fenecidas, para el solo efecto de que sirvan de mayor instruccion en el espediente que debe preceder á la suspension del culpable, y en el juicio á que despues ha de quedar sujeto.

XXXI. El consejo de estado no incluirá jamás en terna á ningun magistrado ó juez para otros destinos ó ascensos en su carrera sin asegurarse de la buena conducta y aptitud del que haya de proponer, y de su puntualidad en la observancia de la constitucion y de las leyes, por medio de informes que pida á las respectivas diputaciones provinciales, y ademas al tribunal supremo de justicia con respecto á los magistrados, y á las audiencias en cuanto á los jueces de primera instancia.

XXXII. El tribunal supremo de justicia dará aviso al consejo de estado de las causas pendientes contra magistrados de las audiencias, para que no se les proponga hasta que conste que han sido completamente absueltos.

XXXIII. Lo mismo se hará cuando de las listas de causas que, segun el artículo 270 de la constitucion, remitan las audiencias al propio tribunal supremo, resulte hallarse procesado algun juez de partido.

CAPITULO II.

De los demas empleados públicos.

ART. I. Los empleados públicos de cualquiera clase, que como tales y á sabiendas abusen de su oficio para perjudicar á la causa pública ó á los particulares, son tambien prevaricadores, y se les castigará con la destitucion de su empleo, inhabilitacion perpetua para obtener cargo alguno, y resarcimiento de todos los perjuicios, quedando ademas sujetos á cualquiera otra pena mayor que les esté impuesta por las leyes especiales de su ramo.

II. Si el empleado público prevaricase por soborno ó por cohecho en la forma prevenida con respecto á los jueces, será castigado como estos.

III. El empleado público que por descuido ó ineptitud use mal de su oficio, será privado de empleo, y resarcirá los perjuicios que haya causado, quedando ademas sujeto á las otras penas que le esten impuestas por las leyes de su ramo.

IV. Los empleados públicos de todas clases serán tambien responsables de las faltas que cometan en el servicio sus respectivos subalternos, si por omision ó tolerancia diesen lugar á ellas, ó dejasen de poner inmediatamente para corregirlos el oportuno remedio.

V. La lentitud en cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y órdenes del gobierno, será castigada conforme á los decretos de 14 de julio y 11 de noviembre de 1811.

VI. Todos los empleados públicos de cualquiera clase, cuando cometan alguno de los delitos referidos, podrán ser acusados por cualquier español á quien la ley no prohiba este derecho.

VII. Los regentes del reino, cuando hayan de ser juzgados por delitos cometidos en el uso de su oficio, no podrán ser acusados sino ante las cortes; y solo ante las mismas ó ante el rey ó la regencia lo serán los secretarios del despacho y los individuos de las diputaciones provinciales por los delitos de la propia clase.

VIII. Unos y otros serán juzgados por el tribunal supremo de justicia, en el caso de que las córtes declaren que ha lugar á la formacion de causa; con lo cual quedarán suspensos los regentes y secretarios culpables, y lo mismo los individuos de las diputaciones provinciales, si ya no lo estuviesen por el rey ó la regencia, conforme al artículo 336 de la constitucion. Para que las cortes hagan la espresada declaracion con respecto á una diputacion provincial que haya sido acusada ante el rey, ó suspendida por este, se les dará parte de los motivos, con arreglo al propio artículo.

IX. Por los mencionados delitos serán acusados ante el rey ó ante el tribunal supremo de justicia, y juzgados por este privativamente los consejeros de estado, los embajadores y ministros en las cortes estrangeras, los tesoreros generales, los ministros de la contaduria mayor de cuentas, los de la junta nacional del crédito público, los gefes políticos y los intendentes de las provincias, los directores generales de rentas, y los demas empleados superiores de esta clase que residen en la corte, y no dependen sino inmediatamente del gobierno.

X. En estas causas instruirá tambien el sumario y las demas actuaciones del plenario el ministro mas antiguo de la sala respectiva; y habrá lugar á súplica y al recurso de nulidad como en las que se formen contra los magistrados de las audiencias.

XI Los empleados públicos de las demas clases serán acusados ó denunciados por los propios delitos ante sus respectivos superiores, ó ante el rey, ó ante los jueces competentes de primera instancia. Pero si hubiese de formárseles causa, serán juzgados por estos y por los tribunales á que corresponda el conocimiento en segunda y tercera instancia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

XII. Cuando se forme causa al gefe político, ó al intendente de una provincia, el acusado no podrá estar en el pueblo en que se practique la informacion sumaria, ni en seis leguas en contorno.

XIII. Los tribunales darán cuenta al rey del resultado de las causas que se formen contra empleados públicos, y de la suspension de estos, siempre que la acordaren.

XIV. Cuando el rey ó la regencia reciba acusaciones ó quejas contra los empleados públicos, que puede suspender libremente, ó remover sin necesidad de un formal juicio, tomará por sí todas las providencias que están en sus facultades, conforme á la constitucion y á las leyes, para evitar y corregir los abusos, para que no permanezcan en sus puestos los que no merezcan ocuparlos, y para no promover á otros destinos los que hayan servido mal en los anteriores.

XV Sin embargo de cuanto queda prevenido, las cortes, en uso de la 25.ª facultad de las que les señala el artículo 131 de la constitucion, harán efectiva la responsabilidad de todo empleado público que la merezca, ya sea en virtud de mocion de algun diputado, ya de queja fundada de cualquier español.

XVI. Para este fin nombrarán una comision que forme espediente instructivo, á fin de apurar si los cargos aparecen suficientes; y apareciendo tales, decretarán oida la comision, *que ha lugar á la formacion de causa contra N*, quedará suspenso el acusado, y remitirán todos los ducumentos al juez ó tribunal competente para que se le juzgue con arreglo á las leyes.

XVII. Cualquiera español que tenga que quejarse ante las cortes, ó ante el rey, ó ante el tribunal supremo de justicia contra algun gefe político, intendente, ú otro cualquiera empleado, podrá acudir ante el juez letrado de partido, ó ante el alcalde constitucional que corresponda, para que se le admita informacion sumaria de los hechos en que funde su agravio; y el juez ó alcalde deberán admitirla inmediatamente bajo la mas estrecha responsabilidad, quedando al interesado espedito su derecho para apelar á la audiencia del territorio por la resistencia, morosidad, contemplacion, ú otro defecto que esperimente en este punto.

ORDEN.

Quedan suspensos de sus funciones todos aquellos á quienes se mande formar causa por infractores de la constitucion.

Exmo. sr.=Hemos dado cuenta á las cortes generales y estraordinarias de la consulta que á nombre de la regencia del reino nos dirigió V. E. en 3 de enero último, relativa á si en todos los casos en que S. M. decrete haber lugar á la formacion de causa por infracciones de la constitucion, ó bien el gobierno determine lo mismo por igual motivo, se ha de suspender de sus funciones á los individuos ó corporaciones á quienes se mande formar causa y no sean jueces; y en su vista se ha servido S. M. resolver, que todos aquellos contra quienes declare ó haya declarado haber lugar á la formacion de causa por infracciones de la constitucion ó de las leyes, deben por el mismo hecho quedar suspensos en el ejercicio de sus empleos, como ya se halla prevenido en el artículo XVI, capítulo II del decreto de 24 del corriente; verificándose lo mismo cuando la regencia haga igual declaracion: bien que por lo respectivo á los magistrados y jueces y á las diputaciones provinciales, deberá S. A. arreglarse á lo dispuesto en la constitucion y en el artículo VIII, capítulo II del espresado decreto.=Cádiz 30 de marzo de 1813.

DECRETO.

DE 11 DE ABRIL DE 1813.

Consideracion que debe tenerse á los jueces de primera instancia, y á los abogados particulares cuando suplen en los tribunales la falta de sus ministros.

Las cortes generales y estraordinarias decretan por punto general: que los jueces letrados de primera instancia y los abogados particulares tengan iguales asientos y consideracion que los magistrados de los tribunales, cuando concurran con ellos para dirimir discordias, ó sentenciar causas en revista, á falta de ministros, ocupando el lugar despues del mas moderno de estos; y que tambien ocupe el lugar del fiscal propietario el letrado que interinamente ejerza las funciones de tal.

DECRETO.

DE 14 DE ABRIL DE 1813.

Se concede á los gefes políticos la facultad que tenian los presidentes de las chancillerias para conceder ó negar la licencia de contraer matrimonio.

Las cortes generales y estraordinarias decretan por punto general: que la facultad que segun la pragmática de matrimonios de 10 de abril de 1803 ejercian los presidentes de las chancillerías y audiencias, y el regente de la de Asturias, concediendo ó negando á los hijos de familia licencia para casarse, la ejerzan, en los casos que espresa la referida pragmática, los gefes políticos de cada provincia, en los términos que en ella se previene.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ORDEN.

De quién debe valerse la regencia para instruir los espedientes sobre dispensas de ley.

Exmo. sr.=No siendo conforme con lo dispuesto en el artículo 245 de la constitucion y en el 16 del capítulo 1 de la ley de 9 de octubre último la práctica observada por la regencia del reino de remitir á las audiencias territoriales los espedientes ó solicitudes de dispensa de ley que se la dirigen para su instruccion; han venido en declarar las cortes generales y estraordinarias: que no deben cometerse á aquellas la formacion ó examen de los citados espedientes instructivos, ni los informes consiguientes para obtener las espresadas dispensas; y que la regencia del reino debe valerse, para las diligencias judiciales que ocurran en estos asuntos, de los jueces de partido ó de los alcaldes constitucionales de los pueblos. Cádiz 17 de abril de 1813.

DECRETO.

DE 19 DE ABRIL DE 1813.

Instruccion para dirimir las competencias de jurisdiccion en toda la monarquía.

Las cortes generales y estraordinarias, deseando prevenir todos los casos acerca de las competencias de jurisdiccion en todo el territorio de la monarquía; y teniendo presente lo establecido sobre esta materia en la constitucion y en la ley de 9 de octubre próximo pasado, decretan que se guarde y cumpla la siguiente instruccion.

ART. I. Corresponde al supremo tribunal de justicia dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audiencias con los tribunales especiales que existan en la Península é islas adyacentes, segun se dispone en el artículo 261 de la constitucion.

II. El mismo supremo tribunal dirimirá las que se ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los jueces ordinarios de primera instancia y los tribunales especiales que no esten sujetos á la jurisdiccion de las audiencias, con arreglo á lo prevenido en el artículo 84, capítulo II de la citada ley de 9 de octubre.

III. Asimismo decidirá las que se promovieren en la Península é islas adyacentes entre los tribunales especiales de distintos territorios, ó que aunque sean de uno mismo, ejerzan diversa especie de jurisdiccion, ó no tengan entrambos un mismo tribunal superior que pueda decidir.

IV. Conocerá tambien dicho supremo tribunal de las que ocurran en la Península é islas adyacentes entre una audiencia y un juez ordinario de distinto territorio, y entre jueces ordinarios de territorios diferentes.

V. Pertenece á las audiencias de ambos hemisferios dirimir las competencias entre todos los jueces subalternos de sus respectivos territorios, segun lo prevenido en el artículo 265 de la constitucion.

VI. Son jueces subalternos de las audiencias no solo los ordinarios, sino tambien los de los tribunales especiales creados ó que se crearen para conocer en primera instancia de determinados negocios, con las apelaciones á las mismas audiencias.

VII. Las competencias que se promuevan en la Península é islas adyacentes entre los tribunales de guerra y marina serán decididas por el superior especial de guerra y marina; á escepcion de las que ocurran entre comandantes de matrículas de un mismo departamento, que dirimirá su capitan general.

VIII. En ultramar las que ocurran entre los jueces subalternos de las audiencias y los tribunales y juzgados especiales, ó entre estos y las audiencias, se decidirán por la mas inmediata, segun el artículo XIII, capítulo I de la ley de 9 de octubre.

IX. La audiencia territorial decidirá en ultramar las que se promovieren entre los tribunales especiales de su territorio, aunque no sean subalternos de la misma, cuando entrambos no tuvieren un mismo superior; pues teniéndole, deberá este decidirlas.

X. Las que se ofrecieren en ultramar entre los juzgados especiales de distintos territorios, ó entre los jueces ordinarios de territorios diferentes, serán decididas por la audiencia mas inmediata á la provincia del que las promoviere.

XI. El juez ó juzgado que solicite la inhibicion de otro, pasará oficio á este manifestando las razones en que se funde, y anunciando la competencia, si no cede: contestará el intimado dando las suyas, y aceptándola en su caso: si el primero no se satisface, lo dirá al segundo; y ambos remitirán por el primer correo á la autoridad superior competente los autos que cada uno haya formado.

XII. Cada juez, al remitir los autos, espondrá al tribunal las razones en que se funde, y este decidirá la competencia en el preciso término de ocho dias.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ORDEN.

Quien ha de espedir las cédulas para la ereccion del obispado en Nuevo-México con otras medidas para ello.

Exmo. sr. =Las córtes generales y estraordinarias se han enterado de lo que con referencia á una consulta del consejo de estado de 6 de marzo último les comunica V. E. en papel de 21 del mismo acerca de la práctica que se observaba en la suprimida cámara de Indias con respecto al establecimiento de nuevos obispados; y en su vista se han servido determinar: I. Que las reales cédulas consiguientes al decreto de las mismas córtes para que en la ciudad de Santa Fe, capital del Nuevo México, se erija obispado, se han de espedir por la secretaria de gracia y justicia: II. Que estas órdenes han de contraerse á dos: la una, que se dirigirá al gefe principal de Santa Fe, que la regencia tuviere por mas conveniente en calidad de vicepatrono real; y la otra al prelado diocesano de Durango, para que con su anuencia ó intervencion, por sí ó de la persona que tuviere á bien nombrar dicho prelado en el lugar en donde se ejecute la division ó deslinde, se proceda por aquel comisionado á la division y términos del nuevo obispado que se habrá de erigir en Santa Fe, del territorio y diócesi de Durango. Cádiz 1.° de mayo de 1813.

ORDEN.

Se manda observar la ley sobre parentescos en la eleccion de individuos para los ayuntamientos.

Martin Perales Monroy, regidor de la villa de Ceclavin, ha espuesto á las córtes generales y estraordinarias que entre los individuos que componen aquel ayuntamiento hay parientes en grados inmediatos, asi como tambien los hubo en el ayuntamiento que cesó en fin de diciembre último, y entre los individuos de ambos, indicando con este motivo la posibilidad de que tales cargos se perpetúen en unas mismas familias. En vista de ello han tenido á bien declarar, que no estando derogada por la constitucion la ley sobre parentescos, que debe guardarse en la eleccion de los individuos de los ayuntamientos, son nulas en esta parte las que se hayan hecho contra su tenor, debiéndose nombrar por los mismos electores otros individuos en reemplazo de los que con arreglo á dicha ley no debieron ser nombrados; y quiere S. M. que la regencia del reino lo haga saber asi al ayuntamiento de Ceclavin. Cádiz 19 de mayo de 1813.

ORDEN.

Cuándo y cómo se permitirá rifar las fincas de los particulares.

Hemos dado cuenta á las córtes generales y estraordinarias del espediente formado en la secretaría del cargo de V. S. con motivo de las instancias de varios particulares en solicitud de que se les permita rifar sus fincas, el cual nos dirigió de órden de la regencia del reino con papel de 14 de abril último. Y S. M. se ha servido rosolver que si en algun caso particular S. A. hallare causas justas y fundadas para que se dispense la ley prohibitiva de las rifas, lo proponga á las córtes con su informe, y remision del espediente instruido en forma, con arreglo á la órden de 6 de agosto del año próximo pasado, omitiendo hacer tales propuestas siempre que el valor de las fincas ó alhajas no sea por lo menos el de quince mil reales. Cádiz 22 de mayo de 1813.

DECRETO.

DE 26 DE MAYO DE 1813.

Se mandan quitar los signos de vasallage que hubiere en los pueblos.

Las córtes generales y estraordinarias, accediendo á los deseos que les han manifestado varios pueblos, han tenido á bien decretar por regla general lo siguiente: Los ayuntamientos de todos los pueblos procederán por sí, y sin causar perjuicio alguno, á quitar y demoler todos los signos de vasallage que haya en sus entradas, casas capitulares, ó cualesquiera otros sitios, puesto que los pueblos de la nacion española no reconocen ni reconocerán jamás otro señorio que el de la nacion misma, y que su noble orgullo no sufriria tener á la vista un recuerdo continuo de su humillacion.

DECRETO.

DE 8 DE JUNIO DE 1813.

Varias medidas para el fomento de la agricultura y ganadería.

Queriendo las córtes generales y estraordinarias proteger el derecho de propiedad, y que con la reparacion de los agravios que ha sufrido, logren al mismo tiempo mayor fomento la agricultura y ganadería por medio de una justa libertad en sus especulaciones, y por la derogacion de algunas prácticas introducidas en perjuicio suyo, decretan:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

I. Todas las dehesas, heredades y demas tierras de cualquiera clase pertenecientes á dominio particular, ya sean libres ó vinculadas, se declaran desde ahora cerradas y acotadas perpetuamente, y sus dueños ó poseedores podrán cercarlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres, disfrutarlas libre y esclusivamente, ó arrendarlas como mejor les parezca, y destinarlas á labor, ó á pasto, ó á plantío, ó al uso que mas les acomode; derogándose por consiguiente cualesquiera leyes que prefijen la clase de disfrute á que deban destinarse estas fincas, pues se ha de dejar enteramente al arbitrio de sus dueños.

II. Los arrendamientos de cualesquiera fincas serán tambien libres á gusto de los contratantes, y por el precio ó cuota en que se convengan. Ni el dueño ni el arrendatario de cualquiera clase podrán pretender que el precio estipulado se reduzca á tasacion, aunque podrán usar en su caso del remedio de la lesion y engaño con arreglo á las leyes.

III. Los arrendamientos obligarán del mismo modo á los herederos de ambas partes.

IV. En los nuevos arrendamientos de cualesquiera fincas ninguna persona ni corporacion podrá, bajo pretesto alguno, alegar preferencia con respecto á otra que se haya convenido con el dueño.

V. Los arrendamientos de tierras ó dehesas, ó cualesquiera otros predios rústicos por tiempo determinado, fenecerán con este, sin necesidad de mutuo desahucio, y sin que el arrendamiento de cualquiera clase pueda alegar posesion para continuar contra la voluntad del dueño, cualquiera que haya sido la duracion del contrato; pero si tres dias ó mas, despues de concluido el término, permaneciese el arrendatario en la finca con aquiescencia del dueño, se entenderá arrendada por otro año con las mismas condiciones. Durante el tiempo estipulado se observarán religiosamente los arrendamientos; y el dueño, aun con el pretesto de necesitar la finca para sí mismo, no podrá despedir al arrendatario sino en los casos de no pagar la renta, tratar mal la finca, ó faltar á las condiciones estipuladas.

VI. Los arrendamientos sin tiempo determinado durarán á voluntad de las partes; pero cualquiera de ellas que quiera disolverlos, podrá hacerlo asi, avisando á la otra un año antes; y tampoco tendrá el arrendatario, aunque lo haya sido muchos años, derecho alguno de posesion, una vez desahuciado por el dueño. No se entienda sin embargo que este artículo hace novedad alguna en la actual constitucion de los foros de Asturias y Galicia y demas provincias que esten en igual caso.

VII. El arrendatario no podrá subarrendar ni traspasar el todo ni parte de la finca sin aprobacion del dueño; pero podrá sin ella vender ó ceder, al precio que le parezca, alguna parte de los pastos ó frutos, á no ser que en el contrato se estipule otra cosa.

VIII. Asi en las primeras ventas como en las ulteriores ningun fruto ni produccion de la tierra, ni los ganados y sus esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las obras del trabajo y de la industria estarán sujetas á tasas ni posturas, sin embargo de cualesquiera leyes generales ó municipales. Todo se podrá vender y revender al precio y en la manera que mas acomode á sus dueños, con tal que no perjudiquen á la salud pública; y ninguna persona, corporacion ni establecimiento tendrá privilegio de preferencia en las compras; pero se continuará observando la prohibicion de estraer á paises estrangeros aquellas cosas que actualmente no se pueden esportar, y las reglas establecidas en cuanto al modo de esportarse los frutos que pueden serlo.

IX. Quedará enteramente libre y espedito el tráfico y comercio interior de granos y demas producciones de unas á otras provincias de la monarquía, y podrán dedicarse á él los ciudadanos de todas clases, almacenar sus acopios donde y como mejor les parezca, y venderlos al precio que les acomode, sin necesidad de matricularse, ni de llevar libros, ni de recoger testimonios de las compras.

X. En ningun caso ni por ningun título se podrá hacer ejecucion ni embargo en las mieses que despues de segadas existan en los rastrojos ó en las eras, hasta que esten limpios y entrojados los granos; pero se podrá poner interventor cuando el deudor no tenga arraigo y no dé fianza suficiente. Hasta la misma época, y mientras que los granos existan en las eras, no permitirán los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos que se hagan en ellas cuestuaciones ni demandas algunas de granos por ninguna clase de personas, ni aun por los religiosos de las órdenes mendicantes.

XI. Se observará puntualmente todo lo demas que se halla prevenido por las leyes á favor de los labradores y ganaderos, en cuanto no sea contrario á lo que se manda en este decreto.

DECRETO.

DE 8 DE JUNIO DE 1813.

Cómo deben contribuir todos los españoles á la manutencion y servicio de los ejércitos nacionales.

Las córtes generales y estraordinarias, deseando que los ejércitos nacionales reciban mas fácilmente los auxilios necesarios para su subsistencia y comodidad en sus marchas, y que el servicio que para este fin deben prestar los vecinos de los pueblos se

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

les haga mas llevadero, repartiéndolo entre todos, pues todos sin distincion alguna tienen la misma obligacion de contribuir proporcionalmente para las urgencias del estado, han venido en decretar, como decretan:

I. Todos los españoles de cualquiera condicion, estado ó clase, sin distincion alguna, estan igualmente obligados á franquear sus ganados, granos y demas efectos para que se suministre lo necesario á los ejércitos, cuando los suministros se hayan de hacer en especies, y no haya otro medio espedito de proporcionarlas.

II. Para que los suministros de esta clase no graven esclusivamente á los labradores, ganaderos y cualesquiera otros tenedores de las especies suministradas, harán los ayuntamientos de los pueblos respectivos que se tasen por su justo precio en dinero, y á falta de otros fondos destinados para este objeto, repartirán el importe entre todos los vecinos á proporcion de sus facultades para reintegrar á los que dieron las especies, fuera de la parte con que deban contribuir como vecinos.

III. Todos los españoles estan asimismo obligados, sin distincion alguna de clases ni condiciones, á contribuir con sus carros y caballerías para el servicio de bagages, como tambien á franquear sus casas por el tiempo que la ordenanza ó las leyes particulares prescriban para el alojamiento de las tropas, y de los demas individuos que deban disfrutarlo, quedando derogados cualesquiera privilegios que hasta ahora se hayan concedido.

IV. Los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos cuidarán de proporcionar los alojamientos y bagages necesarios por turno riguroso entre todos los vecinos capaces de hacer este servicio. Las juntas particulares, que para estos dos objetos estableció la suprema central en cada poblacion, se tendrán desde luego por estinguidas.

V. Las autoridades respectivas cuidarán de que se observe lo que está mandado acerca de estos ramos, y de evitar los abusos, especialmente en el de bagages, hasta que se arregle de otro modo.

DECRETO.

DE 8 DE JUNIO DE 1813.

Sobre establecimiento de cátedras de agricultura y de sociedades económicas.

Las córtes generales y estraordinarias, ocupadas en procurar todo el beneficio posible á la agricultura y demas ramos de la industria, que constituyen principalmente la felicidad de la nacion; y bien convencidas de que la ilustracion de los que se dedican á ellos, y la proteccion y auxilios que el gobierno les dispensa con los medios mas á propósito para fomentarlos, decretan:

I. En todas las universidades de la monarquía se establecerán, lo mas pronto que sea posible, cátedras de economía civil.

II. En todos los pueblos principales, cuyas circunstancias lo requieran, ó por lo menos en todas las capitales de provincia, se establecerán escuelas prácticas de agricultura, dotadas de los fondos municipales de los respectivos distritos.

III. Las córtes, oyendo por medio del gobierno á la direccion general de estudios, arreglarán el plan que deba observarse en unos y otros establecimientos.

IV. Se pondrán en activo ejercicio las sociedades económicas de amigos del pais donde se hallen establecidas, y se establecerán otras en las capitales de provincia y pueblos principales en que no las haya. El gobierno y las diputaciones provinciales escitarán y protegerán el zelo de los ciudadanos ilustrados para que las formen ó se ascriban á las ya formadas, dejando á los mismos socios la facultad de elegir los oficios de la sociedad, y las personas que en lo sucesivo se hagan dignas de ser admitidas en ella por su instruccion y méritos.

V. Estas sociedades no ejercerán especie alguna de autoridad, y se reducirán sus funciones á la formacion de cartillas rústicas, acomodadas á la inteligencia de los labradores y á las circunstancias de los paises: á la produccion de memorias y otros escritos oportunos para promover y mejorar la agricultura y cria de ganados, y las artes y oficios útiles: á la publicacion y esplicacion de los secretos y máquinas que puedan ser convenientes: á la distribucion gratuita de semillas y plantas que puedan aclimatarse: á proponer y distribuir públicamente algunos premios para escitar la aplicacion y la circulacion de luces; y á ilustrar á las diputaciones provinciales y ayuntamientos con sus observaciones en beneficio de estos ramos.

VI. Las córtes, á propuesta de las diputaciones provinciales por medio del rey ó la regencia, señalarán los arbitrios oportunos para los gastos que necesite cada sociedad, y los premios que haya de distribuir.

DECRETO.

DE 8 DE JUNIO DE 1813.

Sobre el libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria útil.

Las córtes generales y estraordinarias, con el justo objeto de remover las trabas que hasta ahora han entorpecido el progreso de la industria, decretan:

I. Todos los españoles y los estrangeros avecindados, ó que se ave-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cinden en los pueblos de la monarquía podrán libremente establecer las fábricas ó artefactos de cualquiera clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni licencia alguna, con tal que se sujeten á las reglas de policía adoptadas ó que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos.

II. Tambien podrán ejercer libremente cualquiera industria ú oficio útil sin necesidad de examen, título ó incorporacion á los gremios respectivos, cuyas ordenanzas se derogan en esta parte.

DECRETO.

DE 10 DE JUNIO 1813.

Reglas para conservar á los escritores la propiedad de sus obras.

Las córtes generales y estraordínarias, con el fin de proteger el derecho de propiedad que tienen todos los autores sobre sus escritos, y deseando que estos no queden algun dia sepultados en el olvido, en perjuicio de la ilustracion y literatura nacional, decretan:

I. Siendo los escritos una propiedad de su autor, este solo, ó quien tuviere su permiso, podrá imprimirlos durante la vida de aquel cuantas veces le conviniere, y no otro, ni aun con pretesto de notas ó adiciones. Muerto el autor, el derecho esclusivo de reimprimir la obra pasará á sus herederos por el espacio de diez años contados desde el fallecimiento de aquel. Pero si al tiempo de la muerte del autor no hubiese aun salido á luz su obra, los diez años concedidos á los herederos se empezarán á contar desde la fecha de la primera edicion que hicieren.

II. Cuando el autor de una obra fuere un cuerpo colegiado conservará la propiedad de ella por el término de cuarenta años contados desde la fecha de la primera edicion.

III. Pasado el término de que hablan los dos artículos precedentes quedarán los impresos en el concepto de propiedad comun, y todos tendran espedita la accion de reimprimirlos cuando les pareciere.

IV. Siempre que alguno contraviniere á lo establecido en los dos primeros artículos de este decreto, podrá el interesado denunciarle ante el juez, quien le juzgará con arreglo á las leyes vigentes sobre usurpacion de la propiedad agena.

V. Lo mismo se entenderá de los que fraudulentamente hicieren reimpresiones literales de cualquiera papel periódico, ó de alguno de sus números.

ORDEN.

Repitiendo la de 10 de noviembre último, sobre que los gefes políticos no tengan voto en los ayuntamientos, y sí los alcaldes y síndicos.

Exmo. sr.=Habiendo acudido últimamente á las cortes generales y estraordinarias D. José Gonzalez Pardo, procurador síndico de Murcia, esponiendo dudas semejantes á las que ocurrieron al ayuntamiento de esta ciudad sobre si los procuradores síndicos deberian ó no tener voto en los acuerdos de ayuntamiento, se han servido resolver: que se haga estensiva por regla general á todos los del reino la declaracion comunicada á la regencia en 10 de noviembre último con respecto á lo consultado por el de Cádiz; esto es, que ni la constitucion concede voto en los ayuntamientos á los gefes políticos, ni pueden dejar de tenerlo, segun ella, los alcaldes y los procuradores síndicos. Cádiz 13 de junio de 1813.

DECRETO.

DE 14 DE JUNIO DE 1813.

Pueden ser diputados de córtes los catedráticos y regulares secularizados, pero no los profesos de las órdenes militares.

Las cortes generales y estraordinarias decretan:

I. Los catedráticos de las universidades, colegios y seminarios, que tengan sus cátedras por nombramiento real, no deben entenderse escluidos de poder ser diputados á cortes por la provincia en que ejerzan la enseñanza.

II. Tampoco deben entenderse escluidos del derecho de elegir y ser elegidos para este encargo los reculares secularizados.

III. Los caballeros de justicia profesos de la órden de S. Juan de Jerusalen, los freyres clérigos profesos de la misma órden, y los de las cuatro militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa no pueden elegir ni ser elegidos diputados á cortes.

DECRETO.

DE 23 DE JUNIO DE 1813.

Instruccion para el gobierno económico-político de las provincias.

Las cortes generales y estraordinarias decretan la siguiente instruccion para el gobierno económico-político de las provincias.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO I.

De las obligaciones de los ayuntamientos.

ART. I. Estando á cargo de los ayuntamientos de los pueblos la policía de salubridad y comodidad, deberán cuidar de la limpieza de las calles, mercados, plazas públicas, y de la de los hospitales, cárceles y casas de caridad ó de beneficencia: velar sobre la calidad de los alimentos de todas clase: cuidar de que en cada pueblo haya cementerio convenientemente situado: cuidar asimismo de la desecacion, ó bien de dar curso á las aguas estancadas ó insalubres; y por último, de remover todo lo que en el pueblo ó en su término pueda alterar la salud pública ó la de los ganados.

II. Los ayuntamientos enviarán al gefe político de la provincia cada tres meses una nota de los nacidos, casados y muertos en el pueblo, estendida por el cura ó curas párrocos, con especificacion de sexos y edades, de cuya nota conservará el ayuntamiento un registro; y asimismo una noticia de la clase de enfermedades de los que han fallecido, estendida por el facultativo ó facultativos.

III. Si se manifestase en el pueblo alguna enfermedad reinante ó epidémica, dará el ayuntamiento inmediatamente cuenta al gefe político para que se tomen todas las correspondientes medidas, á fin de cortar los progresos del mal, y auxiliar al pueblo con los medicamentos y demas socorros que pueda necesitar; avisándole en el último caso semanalmente, ó aun con mayor frecuencia, si el gefe político lo requiriese, del estado de la salud pública y de la mortandad que se note.

IV. Para cuidar en cada pueblo de la salud pública en los casos de que habla el artículo precedente se formará cada año por el ayuntamiento, donde el vecindario lo permita, una junta de sanidad, compuesta del alcalde primero ó quien sus veces haga, del cura párroco mas antiguo, donde hubiese mas de uno, de uno ó mas facultativos, de uno ó mas regidores, y de uno ó mas vecinos, segun la estension de la poblacion y ocupaciones que ocurran; pudiendo el ayuntamiento volver á nombrar los mismos regidores y vecinos, y aumentar el número en la junta cuando el caso lo requiera. Esta junta de sanidad se gobernará por los reglamentos existentes ó que en adelante existieren; y en las providencias de mayor consideracion procederá con acuerdo del ayuntamiento.

V. Para procurar la comodidad del pueblo cuidará el ayuntamiento, por medio de providencias económicas, conformes á las

leyes de franquicia y libertad, de que esté surtido abundantemente de comestibles de buena calidad; cuidará asimismo de que esten bien conservadas las fuentes públicas; y haya la conveniente abundancia de buenas aguas, tanto para los hombres como para los animales: tambien estenderá su cuidado á que esten empedradas y alumbradas las calles en los pueblos en que pudiere ser; y en fin, de que esten hermoseados los parages públicos en cuanto lo permitan las circunstancias de cada pueblo.

VI. Cuidará cada ayuntamiento de los caminos rurales y de travesía de su territorio, y de todas aquellas obras públicas de utilidad, beneficencia ú ornato que pertenenezcan precisamente al término de su jurisdiccion, y que se dirijan á la utilidad ó comodidad de su vecindario en particular, cualquiera que sea la naturaleza de estas obras; arreglándose sin embargo á las leyes militares los ayuntamientos de aquellos pueblos que ó sean plazas de guerra, ó en que se hallen castillos ó puestos fortificados. En los caminos, calzadas, acueductos ú otras cualesquiera obras públicas que pertenezcan á la provincia en general, cuidará el ayuntamiento del pueblo por donde pasaren, ó á donde se estendieren estas obras públicas, de dar oportunamente aviso al gefe político de cuanto creyere digno de su atencion para el conveniente remedio, y tendrá ademas aquella intervencion que le fuere cometida por el gefe político de la provincia; y lo mismo deberá entenderse de las obras públicas nacionales, como carreteras generales y otros establecimientos públicos, que por interesar al reino en general han de estar al cuidado del gobierno, que encargará á cada provincia ó á cada ayuntamiento lo que en cada caso tenga por conveniente.

VII. Para desempeñar lo que previene el párrafo 6.º del artículo 321 de la constitucion cuidará el ayuntamiento de los hospitales y casas de espósitos ó de beneficencia, que se mantengan de los fondos del comun del pueblo, bajo las reglas que para ello estuvieren dadas, ó se dieren por el gobierno; pero en los establecimientos de esta clase, que fueren de fundacion particular de alguna persona, familia ó corporacion, ó que estuvieren encargados por el gobierno á personas ó cuerpos particulares, con sujecion á reglamentos, solo tocará al ayuntamiento, si observare abusos, dar parte de ellos al gefe político para el conveniente remedio; pero sin perturbar de modo alguno en el ejercicio de sus respectivas funciones á los directores, administradores y demas empleados en ellos.

VIII. En los montes y plantíos del comun estará á cargo del ayuntamiento la vigilancia y cuidado que prescribe la constitucion, procurando con todo esmero la conservacion y repoblacion

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de ellos con la mas esacta observancia de los reglamentos que rigen en la materia, en todo aquello que no esté derogado ó modificado por leyes posteriores.

IX. Tambien estarán al cuidado de cada ayuntamiento los pósitos, entendiéndose en estos puntos con el gefe político de la provincia, y observando las leyes ó instrucciones que rijan en la materia; y respecto de los pósitos que siendo de fundacion particular están encargados á la direccion de personas ó corporaciones determinadas bajo reglamentos, se entenderá lo mismo que queda prevenido en el artículo VII de este capítulo para los demas establecimientos de fundacion particular.

X. Las medidas generales de buen gobierno, que deban tomarse para asegurar y protejer las personas y bienes de los habitantes, serán acordadas en el ayuntamiento, y ejecutadas por el alcalde ó alcaldes; pero tanto en estas providencias, como en las que los alcaldes estan autorizados por las leyes á tomar por sí para conservar el órden y la tranquilidad de los pueblos, serán auxiliados por el ayuntamiento, y por cada uno de sus individuos cuando para ello sean requeridos.

XI. Estará á cargo de cada ayuntamiento la administracion é inversion de los caudales de propios y arbitrios, conforme á las leyes y reglamentos existentes, ó que en adelante existieren, nombrando un depositario en la forma que previene la constitucion. Si el ayuntamiento necesitare para gastos públicos, ó de objetos de utilidad comun, de alguna cantidad mas de las que le estuvieren asignadas de estos fondos, acudirá al gefe político, haciéndole presente la utilidad ó necesidad del gasto; todo lo que este comunicará á la diputacion provincial.

XII. En el caso de que las obras públicas de comun utilidad exijan mas fondos de los que produzcan los propios y arbitrios del pueblo, se solicitarán los necesarios del modo que previene la constitucion.

XIII. Acerca del repartimiento y recaudacion de las contribunes que correspondan á cada pueblo observará el ayuntamiento lo que se previene en la constitucion y en las leyes ó instrucciones que existan ó en adelante existieren.

XIV. Cuidara el ayuntamiento de todas las escuelas de primeras letras y demas establecimientos de educacion, que se paguen de los fondos del comun; celando el buen desempeño de los maestros, y muy especialmente el puntual cumplimiento de lo que previene el artículo 366 de la constitucion por la que deberá tambien enseñarse á leer á los niños, y disponiendo se doten convenientemente los maestros de los fondos del comun, prévia la aprobacion del gobierno, oido el informe de la diputacion provincial; ó en defecto de estos fondos, los que la diputacion acuerde con las formalidades que previene el artículo 322 de la constitucion.

XV. En la ejecucion de lo que sobre el fomento de la agricultura, la industria y el comercio previene la constitucion, cuidará muy particularmente el ayuntamiento de promover estos importantes objetos, removiendo todos los obstáculos y trabas que se opongan á su mejora y progreso.

XVI. Deberá cada ayuntamiento rendir anualmente cuentas documentadas á la diputacion provincial, dirigiéndolas por medio del gefe político, de la recaudacion é inversion de los caudales que administren con arreglo á las leyes é instrucciones.

XVII. Cuidará asimismo cada ayuntamiento de formar y remitir anualmente al gefe político de la provincia una noticia del estado en que se hallen los diferentes objetos que quedan puestos á su cuidado.

XVIII. Si algun vecino se sintiere agraviado por providencias económicas ó gubernativas dadas por el ayuntamiento ó por el alcalde sobre cualquiera de los objetos que quedan indicados, deberá acudir al gefe político, quien por sí, oyendo á la diputacion provincial cuando lo tuviere por conveniente, resolverá gubernativamente toda duda, sin que por estos recursos se exija derecho alguno.

XIX. El alcalde primer nombrado de los ayuntamientos de las cabezas de partido en donde no hubiere gefe político subalterno, hará circular con puntualidad á los demas de su territorio las órdenes que el gefe político le comunique para ser circuladas. Los respectivos alcaldes de los pueblos del partido certificarán por el secretario del ayuntamiento haberlas recibido, y remitirán las certificaciones al alcalde de la cabeza de partido, y este al gefe político; siendo responsables unos y otros de la morosidad que se note en la circulacion de las órdenes ó en la remision de los certificados.

XX. Los alcaldes comunicarán inmediatamente al ayuntamiento las órdenes que deban publicarse, y en seguida las hará publicar en el pueblo por los medios acostumbrados.

XXI. El secretario del ayuntamiento, que no ha de ser ninguno de sus individuos, á menos que la cortedad del vecindario sea un obstáculo, á juicio de la diputacion provincial, podrá ser removido por el ayuntamiento cuando lo estimare conveniente, con el consentimiento de la misma diputacion; y lo que esta decida sobre el particular, se tendrá por definitivamente resuelto, y no se admitirá recurso alguno. Para variar la dotacion que por reglamento ó costumbre tenga el secretario, deberá el ayuntamiento obtener la aprobacion de la diputacion pro-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vincial, y despues deberá recaer la del gobierno, sin cuya anuencia no podrá hacerse alteracion en este punto.

XXII. Estará á cargo de cada ayuntamiento, bajo su responsabilidad, cuidar de que se renueven sus individuos en el tiempo, modo y forma que previenen la constitucion y el decreto de 23 de mayo de 1812, dando parte al gefe político de haberlo asi ejecutado; debiendo nombrarse por cada junta parroquial dos escrutadores para que concurran á todos los actos de la eleccion con el presidente y secretario, y cuidando muy particularmente el ayuntamiento de que se avise á todos los vecinos con anticipacion suficiente al dia de la eleccion por aquel medio que estuviere en uso, para que concurran á ella. Para la eleccion de los individuos del ayuntamiento, los electores nombrarán de entre ellos mismos dos que hagan de escrutadores.

XXIII. El último domingo de noviembre de 1813 en ultramar, y el último domingo de setiembre de 1814 en la Península, islas y posesiones adyacentes, y asi sucesivamente cada dos años, en que deben celebrarse las juntas electorales de parroquia de que habla el capítulo III, título III de la constitucion, el que presida el ayuntamiento de cada pueblo deberá bajo la mas estrecha responsabilidad, avisar á los vecinos por los medios que esten en uso, de que en el próximo domingo se han de celebrar, con arreglo á la constitucion, la junta ó juntas electorales de parroquia, para nombrar el elector ó electores que correspondan al pueblo, y que han de concurrir en el dia señalado por la misma constitucion á las elecciones de partido. A este efecto el que presida el ayuntamiento le convocará en el dia en que ha de darse este anticipado aviso á los vecinos, para que en el mismo ayuntamiento se designen las personas que con arreglo á lo que previene el artículo 46 de la constitucion deban presidir las juntas electorales de parroquia. Celebradas que sean estas juntas, dará el que presida el ayuntamiento parte al gefe político de la provincia de haberse ejecutado.

XXIV. Cada ayuntamiento cuidará de que los bagages, alojamientos y demas suministros para la tropa se repartan con igualdad y equitativamente entre los vecinos, conforme á la ordenanza y reglamentos; y asimismo de que se observe la mas esacta cuenta y razon para los correspondientes abonos En todos estos puntos observará el ayuntamiento con escrupulosidad las órdenes que reciba del gefe político superior ó del subalterno.

XXV. Por último, pertenece á los ayuntamientos cuidar de todos los demas objetos que les estan encomendados por leyes, reglamentos ú ordenanzas municipales, en todo lo que no se oponga á la presente instruccion.

CAPITULO II.

De las obligaciones y cargos de las diputaciones provinciales.

ART. I. Siendo del cargo de las diputaciones provinciales cuidar del establecimiento de ayuntamientos en los pueblos donde no le haya, en los términos que previene el artículo 335 de la constitucion, deberán tomar razon esacta del vecindario de cada pueblo donde haya de establecerse ayuntamiento, para que si llegare por sí ó con su comarca á las mil almas, se establezca desde luego; y si no llegare á ese número, pero por otras razones de bien público conviniere establecerlo, se forme el espediente instructivo que las haga constar: este espediente y el que la diputacion forme, tambien instructivamente, y previos los convenientes informes de los pueblos comarcanos sobre señalamiento de término á cualquier pueblo donde haya de establecerse de nuevo ayuntamiento, serán remitidos por el gefe político, con el parecer de la misma diputacion, al gobierno.

II. Luego que se comunique á cada provincia el repartimiento hecho por las cortes de las contribuciones que deba pagar cada una, cuidará el intendente, con su contaduria, de hacer el justo repartimiento del cupo que corresponda á cada pueblo; le pasará á la diputacion provincial para que esta le intervenga y apruebe, si le halla equitativo; y el intendente le circulará á los pueblos, y cuidará de su ejecucion, haciéndola llevar á efecto, si hubiere demora, por los medios legales que esten establecidos. Lo mismo se observará para el repartimiento de contribuciones estraordinarias, á menos que haya un método especial establecido por la ley, en cuyo caso tendrá la diputacion aquella intervencion que determinen las cortes.

III. Toda queja ó reclamacion que hagan los pueblos sobre agravios en el repartimiento del cupo de contribuciones que les haya cabido, se dirigirá por medio del gefe político á la misma diputacion provincial, quien, sin perjuicio de que se lleve á efecto el repartimiento hecho, examinará maduramente la reclamacion, y confirmará ó reformará el repartimiento para la debida indemnizacion en el repartimiento inmediato; todo sin ulterior recurso. Del mismo modo las quejas de los particulares sobre agravios en el repartimiento que á cada uno haya hecho el ayuntamiento de su pueblo, si aquel no las hubiese satisfecho, serán dirigidas á la diputacion provincial por medio del gefe político, para que con la debida instruccion las resuelva sin ulterior recurso. Lo mismo se observará con las reclamaciones y dudas que ocurran sobre abastos, mientras subsistan, siempre que estas con-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

serven el carácter de gubernativas. Igualmente resolverá por ahora, y mientras las cortes otra cosa no determinaren, en virtud del artículo 357 de la constitucion, todas las dudas y quejas que se suscitaren en los pueblos por el pueblo mismo ó por particulares sobre el reclutamiento ó reemplazo para el ejército, por el mismo método de que habla este artículo para las contribuciones; sin perjuicio de que la autoridad militar ejerza la intervencion conveniente acerca de la aptitud y robustez de los individuos.

IV. Tendrá la diputacion provincial un secretario nombrado por ella, conforme previene la constitucion. La dotacion del secretario será propuesta por la diputacion, y con el informe del gobierno aprobada por las cortes. El secretario podrá ser removido por la diputacion con anuencia del gobierno.

V. Siendo del cargo de la diputacion provincial velar sobre la buena inversion de los fondos de propios y arbitrios de los pueblos, y examinar sus cuentas, segun previene la constitucion, deberán estas pasar á la contaduría de propios y arbitrios de la provincia para que las examine y glose. Esta contaduría dará despues cuenta á la diputacion para que ponga su V.° B.° si las hallase documentadas y conformes á las leyes y reglamentos; y con estos requisitos se pasarán á la aprobacion del gefe político superior. Este hará formar por la misma contaduría un finiquito general comprensivo de las cuentas de todos los pueblos de la provincia, y le remitirá cada año al gobierno para su conocimiento y efectos que puedan convenir. En este finiquito general deberán constar la aprobacion del gefe político superior, y el V.° B.° de la diputacion provincial, con espresion de los caudales sobrantes que existan en caja, y en la forma que previene la instruccion que rige. Por lo relativo á ultramar las diputaciones provinciales pondrán el V.° B°. en las cuentas despues de examinadas y glosadas del modo que se halla establecido por ordenanzas, pasándose igualmente á la aprobacion del gefe político superior.

VI. Cuando un ayuntamiento hubiere recurrido á la diputacion provincial, en el modo y para los fines de que trata el artículo XI del capítulo I de esta instruccion, podrá la diputacion en los términos que le parezca, conceder al ayuntamiento la facultad de disponer de la cantidad que solicite del fondo de propios y arbitrios, con tal que no esceda el duplo de la que le esté señalada para gastos estraordinarios y alterables; pero si escediere, se solicitará por medio del gefe político la aprobacion del gobierno, acompañando á la solicitud el informe de la diputacion. En ultramar, por razon de la distancia, cuando ocurra este último caso no se necesitará la licencia del gobierno, y bastará en su lugar el espreso consentimiento del gefe político superior.

VII. Las cuentas de pósitos, mientras estos subsisten, serán examinadas y glosadas por las contadurías de propios y arbitrios, y en ellas recaerá el V.° B.° de la diputacion, y despues se pasarán á la aprobacion del gefe político. Se remitirá anualmente al gobierno un finiquito general, en la forma y para los efectos que quedan espresados en el artículo V de este capítulo.

VIII. Cuando ocurriere que los arbitrios establecidos para la construccion de obras nuevas ó reparacion de las antiguas de utilidad comun de la provincia no alcancen á cubrir los gastos, la diputacion provincial, para proveerse de fondos, procederá por el método y en los términos que previene la constitucion.

IX. Estará á cargo de la diputacion provincial velar sobre la conservacion de las obras públicas y establecimientos de beneficencia de comun utilidad de la provincia, y promover, haciéndolo presente al gobierno, la construccion de nuevas obras, la formacion de cualquiera establecimiento beneficioso de general utilidad, y muy señaladamente la navegacion interior de la misma provincia, donde hubiere proporcion. Si el establecimiento público fuese de fundacion particular, y regido por reglas ya establecidas, se limitará la vigilancia de la diputacion provincial á lo que se previene en el párrafo VIII del artículo 335 de la constitucion. Toca tambien á la diputacion velar en la observancia de lo que se previene á los ayuntamientos en los artículos VI, VII y VIII del capítulo I de esta instruccion. En las obras nacionales que por su estension ó importancia, y por interesar al reino en general estan inmediatamente á cargo del gobierno, y por tanto emprendidas á costa del erario nacional, tendrán las diputaciones provinciales respectivamente aquella intervencion especial que les diere el gobierno, y ademas aquella vigilancia general, en virtud de la cual deben avisar al gobierno de los abusos que observaren, sin entrometerse en ningun caso en la direccion de las obras, ni embarazar de modo alguno á sus directores.

X. El fondo de que usará la diputacion provincial para la reparacion de obras públicas de la provincia, ó construccion de las nuevas y demas gastos de ella, será el sobrante de propios y arbitrios de la misma despues de satisfechas las necesidades de los pueblos. Las cuentas de la inversion, asi de estos fondos como de los arbitrios nuevos que las cortes concedan, serán examinadas por la diputacion provincial, como la constitucion previene, remitidas despues al gobierno para que las haga reconocer y glosar por la contaduría mayor de cuentas, y finalmente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

presentadas á las córtes para su aprobacion. En las provincias de ultramar, despues de examinadas las cuentas por la diputacion provincial, y puesto por ella el V.° B.°, se observará para su examen y glosa el método que al presente rige; remitiéndolas por último á las cortes para su aprobacion.

XI. La diputacion provincial auxiliará al gefe político cuando ocurriere en algun pueblo de la provincia cualquier enfermedad contagiosa ó epidémica. En la capital de cada provincia habrá una junta de sanidad, compuesta del gefe político, del intendente, del R. obispo ó su vicario general, y en ausencia de ambos de uno de los párrocos del pueblo, prefiriendo el mas antiguo, de un individuo de la diputacion, y del número de facultativos y vecinos que esta estime conveniente. Esta junta de sanidad en el desempeño de sus funciones observará los reglamentos existentes, en cuanto no esten derogados per la constitucion y resoluciones posteriores.

XII. Velará la diputacion sobre el cumplimiento de lo que está prevenido á los ayuntamientos acerca del establecimiento de escuelas de primeras letras é instruccion de la juventud, conforme á los planes aprobados por el gobierno. La diputacion provincial, por ahora y hasta que se apruebe la direccion general de estudios, hará examinar, si pudiere ser, en su presencia por las personas que tenga por conveniente los que aspiren á ser maestros públicos de leer, escribir y contar, procurando que reunan los que hayan de ser aprobados la competente instruccion á la moralidad mas acreditada. La misma diputacion aprobará estos maestros; y el título donde ha de constar este requisito será firmado por el gefe político, por un individuo de la diputacion, y refrendado por el secretario de esta: se despachará gratis, y servirá para ejercer esta enseñanza en cualquier pueblo de la provincia.

XIII. Cada diputacion provincial cuidará de formar el censo y la estadística de su provincia con la mayor esactitud, valiéndose para ello de todas las noticias que los ayuntamientos deben remitir periódicamente al gefe político, y de todos los demas datos que por medio del mismo deberán pedirse, segun se necesite, á todas y cualesquiera personas, corporaciones ó pueblos. Estos censos y planos de estadística serán puntualmente remitidos al gobierno, y ademas cada diputacion conservará en su archivo todas estas noticias.

XIV. Para fomentar la agricultura, la industria, las artes y el comercio, la diputacion provincial presentará al gobierno los planes y proyectos que le parezcan mas oportunos.

XV. Para desempeñar la diputacion provincial el encargo que

le está hecho en los párrafos 6.° y 9.° del artículo 335 de la constitucion deberá recurrir á las córtes ó al gobierno por la reparacion de los abusos de que tenga noticia, presentándoles datos suficientes y bien calificados, sin que con pretesto de estos encargos pueda entrometerse en las funciones de los empleos públicos.

XVI. Ademas de lo que se previene en el párrafo 10 del artículo 335 de la constitucion, cuidarán las diputaciones de ultramar de que los habitantes dispersos en los valles y montes, en los parages en que esto ocurra, se reduzcan á vivir en poblado, en conformidad de lo dispuesto por las leyes; proponiendo al gobierno las medidas que estime mas oportunas, á fin de facilitarles tierras y medios de cultivarlas, con arreglo á lo dispuesto por las córtes en el decreto de 4 de enero de este año.

XVII. Debiendo la diputacion provincial consultar con el gobierno, esperar su autorizacion para todas las providencias en que la ley exige este requisito, y en general para todos los casos y medidas de mayor importancia, se dirigirán todos sus recursos y comunicaciones por el conducto del gefe político su presidente.

XVIII. Las diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de *Excelencia.*

CAPITULO III.

De los gefes políticos.

ART. I. Estando el gobierno político de cada provincia, segun el artículo 324 de la constitucion, á cargo del gefe superior político nombrado por el rey en cada una de ellas, reside en él la superior autoridad dentro de la provincia para cuidar de la tranquilidad pública, del buen órden, de la seguridad de las personas y bienes de sus habitantes, de la ejecucion de las leyes y órdenes del gobierno, y en general de todo lo que pertenece al órden público y prosperidad de la provincia; y asi como será responsable de los abusos de su autoridad, deberá ser tambien puntualmente respetado y obedecido de todos. No solo podrá ejecutar gubernativamente las penas impuestas por las leyes de policía y bandos de buen gobierno, sino que tendrá facultad para imponer y exigir multas á los que le desobedezcan ó le falten al respeto, y á los que turben el órden ó el sosiego público.

II. Hasta que se verifique la conveniente division de las provincias del reino, de que habla el artículo 11 de la constitucion, habrá un gefe político en todas aquellas en que haya diputacion provincial.

III. Podrá haber un gefe político subalterno al de la provin-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cia en los principales puertos de mar, que no sean cabezas de provincia, é igualmente en las capitales de partido de provincias muy dilatadas ó muy pobladas, donde el gobierno juzgue ser conveniente establecerlos para la mejor direccion de los negocios públicos, despues de haber oido á la diputacion provincial respectiva y al consejo de estado, y dando parte á las córtes para su aprobacion.

IV. Cada gefe político superior tendrá un secretario nombrado por el rey ó la regencia del reino, y donde parezca conveniente, el subalterno ó subalternos de la secretaría que sean absolutamente indispensables, sobre cuyo número y sueldos espondrá el gobierno á las córtes lo que le parezca para su aprobacion; entendiéndose que el del secretario no bajará de quince mil reales, ni pasará de cuarenta.

V. El cargo del gefe político estará por regla general separado de la comandancia de las armas en cada provincia; pero en las plazas que se hallaren amenazadas del enemigo, ó en cualquiera caso en que la conservacion ó restablecimiento del órden público y de la tranquilidad y seguridad general asi lo requieran, podrá el gobierno, á quien está encargada por la constitucion la seguridad interior y esterior del estado, reunir temporalmente el mando político al militar, dando cuenta á las córtes de los motivos que para ello haya tenido.

VI. El gefe político tendrá su residencia ordinaria en la capital de la provincia, debiendo hallarse precisamente en ella en los dias señalados por la constitucion para el nombramiento de los electores de partido de la capital, de los diputados de córtes y diputacion provincial; y tambien en las épocas y dias en que esté reunida la diputacion provincial, á cuyas sesiones deberá asistir como individuo presidente.

VII. El sueldo de los gefes políticos en la Península no bajará de cincuenta mil reales anuales, ni pasará de cien mil, arreglándose en cada provincia lo que dentro de esta base deba pertenecer á cada uno, atendida la estension del mando y las circunstancias particulares del pais; pero mientras existan las presentes de penuria pública, ninguno podrá disfrutar mas de cuarenta mil reales. Cuando llegare el caso del correspondiente señalamiento de sueldo, lo propondrá el gobierno á las córtes, para que con su aprobacion quede definitivamente establecido. El gefe político de la corte tendrá de sueldo ciento veinte mil reales. El sueldo de los gefes políticos subalternos se señalará cuando se apruebe por las córtes el establecimiento de cada uno donde convenga, previo el parecer del gobierno, que le regulará por el principio que queda establecido para los gefes políticos superiores, recayendo la aprobacion de las mismas. Para el señalamiento de sueldos de estos empleados, de los secretarios y subalternos en ultramar, el gobierno presentará á las córtes para su aprobacion la cuota que crea mas conveniente establecer, atendidas todas las circunstancias.

VIII. Los gefes políticos de las provincias tendrán el tratamiento de *señoría*, á menos que les corresponda otro mayor por alguna otra razon. El gefe político de la corte, que ejerza este destino en propiedad, tendrá, mientras le obtenga, el tratamiento de *excelencia*.

IX. Los gefes políticos de las provincias y los subalternos podrán continuar en el mando por un tiempo indeterminado, ser removidos ó trasladados á voluntad y juicio del gobierno, teniendo siempre á la vista la utilidad pública y el mejor servicio del estado.

X. En caso de vacante, y mientras se provea, ó en caso de imposibilidad temporal del gefe político de la provincia, hará sus veces el intendente, si no se hallare designada de antemano por el gobierno la persona que deba desempeñar el cargo. Cuando ocurran iguales casos con los gefes políticos subalternos, hará las suyas el alcalde primer nombrado de la capital ó pueblo donde haya gefe político subalterno.

XI. Para ser nombrado gefe político se requiere haber nacido en el territorio español, ser mayor de veinte y cinco años, gozar de buen concepto en el público, haber acreditado desinteres, moralidad, adhesion á la constitucion y á la independencia y libertad política de la nacion, sin que sirva de impedimento el que sea natural de la provincia ó partido en que haya de ejercer sus funciones.

XII. Cuidará el gefe político de que se proceda desde luego al nombramiento de los ayuntamientos, con arreglo á la constitucion y á la ley de 23 de mayo de 1812, como tambien de que las elecciones para estos se verifiquen periódicamente, como está mandado.

XIII. El gefe político presidirá sin voto el ayuntamiento de la capital de la provincia, y del mismo modo el subalterno el ayuntamiento de la capital ó pueblo en donde tenga su residencia; pero uno y otro tendrán voto para decidir en caso de empate. Cuando el gefe político superior ó el subalterno se hallaren por cualquiera razon en algun pueblo de su provincia ó partido, podrán presidir el ayuntamiento, siempre que lo crean conveniente.

XIV. Como presidente de la diputacion provincial cuidará el gefe político de la provincia de que se guarde el mayor órden en el modo de tratarse los negocios que esta desempeñe sus obli-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

gaciones y encargos; y que se reuna en las épocas que ya estan indicadas, ó en que lo exijan los negocios, ó bien la necesidad de tratar de alguno particular que ocurra en la provincia, ó se encargue por el gobierno, siempre que sea de la naturaleza de aquellos en que el consejo y la intervencion de la diputacion sean requeridos por las leyes ó reglamentos, ó por la conveniencia pública, á juicio del mismo gefe.

XV. A fin de asegurar convenientemente la responsabilidad por las providencias que se tomen en la provincia, y de dar á la ejecucion de las medidas gubernativas toda la uniformidad y energía que son tan necesarias, se observará en los negocios que se traten por la diputacion, que cuando versen en la intervencion y aprobacion de cuentas y el repartimiento de contribuciones, se entienda acordado por la diputacion aquello en que conviniere la mayor parte de los vocales, y en estos casos la responsabilidad recaerá sobre la diputacion; pero cuando sean de aquellos en que estuviere encargado á las diputaciones por la constitucion ó las leyes solo el cuidar, velar ó promover ó fomentar las cosas pertenecientes al bien público, la autoridad para las resoluciones y la responsabilidad será toda del gefe político, oyendo en los casos señalados y graves el consejo de la diputacion, y valiendose de sus luces, sin perjuicio de las prontas providencias gubernativas que pueda exigir la urgencia de las ocurrencias.

XVI. El gefe político será el único conducto de comunicacion entre los ayuntamientos y la diputacion provincial, como asimismo entre esta y el gobierno, al que remitirá para la determinacion competente los proyectos, propuestas, informes y planes que aquella formare sobre los objetos encargados á su vigilancia, quedando responsable de cualquiera omision ó dilacion que hiciere con el fin de que no lleguen al gobierno.

XVII. Solo el gefe político circulará por toda la provincia todas las leyes y decretos que se espidieren por el gobierno, haciendo se publiquen en la capital de la provincia, y se entere de ellas la diputacion provincial, y cuidando de remitir las leyes y decretos á los gefes políticos subalternos, si los hubiere, para que los hagan circular en su territorio, ó á los alcaldes primeros de las cabezas de partido para el mismo efecto. Siendo de la responsabilidad del gefe político la circulacion de las leyes y decretos, exigirá recibos de aquellas autoridades á quienes los comunicare.

XVIII. Con arreglo á lo prevenido en el decreto de 14 de abril próximo pasado, el gefe superior político de cada provincia ejercerá en ella la facultad que en los casos y términos que espresa la pragmática de 10 de abril de 1803 ejercian los presi-

dentes de las chancillerías y audiencias y el regente de la de Asturias, concediendo ó negando á los hijos de familia la licencia para casarse.

XIX. El rey, y la regencia en su caso, podrán delegar á los gefes políticos de ultramar el ejercicio de las facultades del real patronato, segun y como hasta ahora se ha practicado con los gobernadores de aquellas provincias en toda su estension, conforme á las leyes y disposiciones posteriores.

XX. Los gefes políticos, como primeros agentes del gobierno en las provincias, podrán ejercer en ellas la facultad que concede al rey el párrafo 11 del artículo 172 de la constitucion en solo el caso que alli se previene Tambien podrán arrestar á los que se hallen delinquiendo en fraganti; pero en estos casos los gefes políticos entregarán los reos á disposicion del juez competente en el preciso término de veinte y cuatro horas.

XXI. Deberá el gefe político remitir al gobierno cada año un estado de los nacidos, casados y muertos en toda la provincia, para que el gobierno pueda tener á la vista en caso necesario los resultados generales sobre esta materia en todo el reino.

XXII. Cuando ocurriere en alguna parte epidemia ó enfermedades contagiosas ó endémicas, el gefe político tomará por sí, ó de acuerdo con la junta de sanidad, y aun de la diputacion provincial si se hallare reunida, todas las medidas convenientes para atajar el mal y para procurar los oportunos auxilios Dará frecuentemente aviso al gobierno de lo que ocurra en este punto, de las precauciones que se tomen, y de los socorros que se necesiten; y asimismo le instruirá de lo que los facultativos de la junta provincial de sanidad opinaren sobre la naturaleza del mal, y su método curativo, de los efectos que se observen, y de la mortandad diaria que se note.

XXIII. Corresponde al gefe político el conocimiento de los recursos ó dudas que ocurran sobre elecciones de los oficios de ayuntamiento, y las decidirá gubernativamente y por via instructiva sin pleito ni contienda judicial. El que intentare decir de nulidad de las elecciones, ó de tachas en el nombramiento de alguno, deberá hacerlo en el preciso término de ocho dias despues de publicada la eleccion; y pasado aquel, no se admitirá la queja; pero en ningun caso se suspenderá dar la posesion á los nombrados en el dia señalado por la ley á pretesto de los recursos y quejas que se intenten.

XXIV Para que pueda tener efecto, si alguna vez ocurriere con urgencia ó en gran distancia, la facultad que la constitucion da al rey en el artículo 336 de suspender á los individuos de las diputaciones provinciales cuando abusaren de sus facultades, los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gefes políticos se limitarán en esta parte á ejecutar puntualmente las órdenes que preventivamente les haya comunicado el gobierno.

XXV. Toca al gefe político aprobar las cuentas de propios y arbitrios y de los pósitos, que remitan los ayuntamientos despues de puesto el V.° B.° por la diputacion provincial, y en caso de tener algun inconveniente en su aprobacion, consultará con el gobierno para la resolucion conveniente.

XXVI. Propondrá el gefe político al gobierno todos los medios que crea convenientes para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y todo cuanto sea útil y beneficioso á la provincia.

XXVII. Siendo el gefe político responsable del buen órden interior de la provincia, requerirá del comandante militar de ella el auxilio de la fuerza armada que necesite para conservar ó restablecer la tranquilidad de las poblaciones y la seguridad de los caminos.

XXVIII. Tocará al gefe político visar y espedir, conforme á las leyes, los pasaportes en las provincias fronterizas á los viageros que vengan ó vayan á pais estrangero; y asi los gefes políticos como los alcaldes, cada uno de por sí, podrán concederlos, y lo harán *gratis* á los que viagen por las provincias interiores cuando lo pidan los interesados, ó cuando el gobierno lo haya dispuesto para conservar el órden y seguridad pública; pero en la milicia se observará lo prevenido en la ordenanza y decretos que á ella pertenezcan.

XXIX. Para formar el proceso que le está encargado por el artículo 261 de la constitucion podrá asesorarse el gefe político de un letrado de conocida instruccion y probidad; y concluido, le remitirá al supremo tribunal de justicia, cesando desde este punto en toda diligencia ulterior.

XXX. Pertenece al gefe político la superior inspeccion sobre los ramos de bagages, alojamientos y subsistencias que deban darse á las tropas, arreglándose á lo que prevenga la ordenanza general del ejército, ó los reglamentos, ó bien las órdenes que recibiere del gobierno en ejecucion de las leyes, y entendiéndose con los ayuntamientos y alcaldes de los pueblos en cuantos casos ocurran para facilitar el servicio.

XXXI. Cuidará el gefe político de que el plan estadístico de la provincia, que él debe remitir al gobierno en el mes de enero de cada año, y cuya formacion está encargada á la diputacion provincial, comprenda todos los objetos que el mismo gobierno le indique, sin perjuico de añadir todas las noticias y datos que crea convenientes.

XXXII. En los años en que deban celebrarse con arreglo á la constitucion las juntas electorales de parroquia para la eleccion de diputados de córtes, deberá el gefe político de la provincia, bajo su responsabilidad, circular, á lo menos un mes antes del dia en que han de celebrarse las citadas juntas electorales, un recuerdo á toda la provincia de la obligacion constitucional de proceder á estas elecciones en el dia y forma prescritos por la constitucion. Este recuerdo no será sin embargo necesario para que en todos los pueblos se proceda á estas elecciones del modo que está mandado en la constitucion y en el artículo XXIII del capítulo I de esta instruccion.

XXXIII. El gefe político subalterno será el conducto por donde el superior de la provincia comunicará las leyes, decretos y órdenes que hubieren de publicarse en su territorio, cuidando de su observancia, y de mantener el órden y tranquilidad de los pueblos, para lo cual podrá valerse del apremio, del arresto y multas, del modo que queda espresado para los gefes superiores; y pedirá el auxilio de la fuerza, si fuere necesario, consultando las dudas que se le ofrezcan al gefe de la provincia, y haciendo cumplir las órdenes que este comunicare En materia de cuentas se limitará á remitir las de los pueblos de su territorio á la contaduría de propios y arbitrios de la provincia; y no podrá emprender ninguna obra pública sin noticia y consentimiento del gefe político superior. Será el conducto por donde se entiendan los ayuntamientos de su territorio con el gefe político y la diputacion provincial.

XXXIV. Toda providencia gubernativa sobre quejas, dudas ó reclamaciones de pueblos ó particulares, se espedirá *gratis* en la provincia.

XXXV. El gefe político presidirá todas las funciones públicas; y cuando concurra la diputacion provincial, esta tendrá lugar preferente al ayuntamiento. Cuidará el gefe político de que se celebren con el conveniente decoro y en los dias señalados las funciones públicas que hubieren decretado las córtes, y que lo mismo se ejecute por los ayuntamientos en los pueblos.

DECRETO.

DE 8 DE JULIO DE 1813.

Premio de las tropas de ultramar.

Las cortes generales y estraordinarias, conformándose con el dictámen de la regencia del reino, decretan: será estensivo á las tropas veteranas de ultramar lo que con respecto á premios es-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tá prevenido para las de la Península en el reglamento de 1.° de enero de 1810, y órden de 8 de julio de 1811.

ORDEN.

Para asegurar las cantidades que deban los poseedores de vínculos cuando soliciten permiso para enagenarlos.

Exmo. sr.=Las cortes generales y estraordinarias, con el fin de afianzar á los acreedores de los que poseen bienes vinculados el pago de las cantidades de que le sean deudores, cuando con el objeto de satisfacérselas soliciten y obtengan estos el soberano permiso para enagenar dichos bienes; se han servido resolver por punto general: que en todos los negocios de esta clase los espresados deudores, dueños de aquellos, aseguren, obtenido que hayan el indicado permiso, la legítima inversion del producto de la venta, entrando desde luego el valor en poder de sus acreedores, ó bien en el de un depositario abonado, de cuyas manos lo perciban. Cádiz 14 de julio de 1813.

DECRETO.

DE 17 DE JULIO DE 1813.

Sobre el recurso de nulidad en las causas criminales.

Las cortes generales y estraordinarias, habiendo tomado en consideracion la consulta del supremo tribunal de justicia de 20 de mayo último acerca de la admision del recurso de nulidad en las causas criminales, y teniendo presente el artículo 286 de la constitucion, han venido en decretar y decretan: En las causas criminales no habrá lugar al recurso de nulidad de la sentencia que cause ejecutoria, no obstante lo que en contrario se halle prevenido en la ley de 24 de marzo de este año, y en cualquiera otra, sin que por esto se entiendan eximidos los jueces y magistrados de la responsabilidad por la falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso, conforme á la constitucion y á los decretos de las cortes.

ORDEN.

Se manda que el montepio militar pague las pensiones correspondientes á las viudas de los oficiales que mueren de epidemia en los lugares donde esten acantonados los ejércitos.

Exmo. sr =Las cortes generales y estraordinarias, habiendo tomado en consideracion la consulta del tribunal especial de guerra y marina fecha 11 de marzo último, y lo espuesto por el antecesor de V. E. de órden de la regencia del reino en papel de 25 del mismo acerca de la solicitud de Doña Antonia Bruin de Renovan, contraida á que sin embargo de estar privada por reglamentos del derecho al montepio militar, se le conceda la pension correspondiente como viuda del mariscal de campo D. Agustin Bueno, director subinspector del cuerpo nacional de ingenieros, por haber este fallecido de resultas de la epidemia que en el año próximo pasado afligió á la provincia de Murcia; han tenido á bien declarar: que la órden de 5 de julio de 1809, en que por punto general se mandó que todos los militares que mueran de epidemia en plazas sitiadas sin dejar á sus familias derecho á los beneficios del montepio militar, sean considerados como muertos en accion de guerra, es estensiva á la espresada Daña Antonia Bruin de Renovan y á las demas mugeres de los militares que mueren en los ejércitos que se hallan en pais epidemiado, desde que se declare epidémica la enfermedad reinante en dicho pais hasta que se declare haber cesado por los facultativos, pagándose las viudedades que les correspondan por el último empleo de sus maridos, de los fondos del erario nacional. Cádiz 29 de julio de 1813.

DECRETO.

DE 11 DE AGOSTO DE 1813.

Varias reglas para gobierno de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de los pueblos.

Las cortes generales y estraordinarias, para resolver las dudas que se han propuesto por varias autoridades encargadas respectivamente del gobierno económico-político de las provincias, han tenido á bien decretar las reglas siguientes.

I. Las personas que por reglamento substituyan á los intendentes en sus destinos, harán las veces de estos en las diputaciones provinciales; pero no podrán presidirlas.

II. Ningun vocal de ayuntamiento podrá nombrar substituto, ni aun con acuerdo del mismo ayuntamiento, debiendo el regidor ó regidores mas modernos suplir las ausencias, enfermedades y vacantes del procurador ó procuradores síndicos, asi como deben suplir las de los alcaldes el regidor ó regidores mas antiguos. Si llegare el caso de que se suspenda todo el ayuntamiento, ó la mayor parte de él, deberán ocupar su lugar los de las respectivas clases del año anterior, hasta que sean legítimamente declarados inhábiles ó repuestos en sus oficios.

III. Los que ejerzan cargos concejiles pueden ser elegidos di-

putados de córtes ó individuos de la diputacion provincial; pero en el hecho mismo de tomar posesion de sus nuevos cargos quedan vacantes los que antes obtenian, entendiéndose asi en la Península, y en ultramar luego que emprendan el viage para sus destinos.

IV. Si faltare algun elector para hacer el reemplazo de las vacantes que ocurran en los ayuntamientos, segun el decreto de 10 de marzo de este año, se harán sin embargo las elecciones para la vacante ó vacantes del ayuntamiento por los demas electores, siempre que exista el mayor número, formándose únicamente nuevas juntas de parroquia en los casos en que falte la mayoría, y para nombrar solamente los que resten hasta la correspondiente totalidad de electores.

V. Los individuos que sean nombrados para reemplazar las vacantes de ayuntamiento, ocuparán el último lugar, quedando de mas antiguos los que antes existian.

VI. Se suprimen los sueldos que en algunos pueblos de la monarquia disfrutaban los alcaldes, regidores y procuradores síndicos; y los que en adelante se nombren para estos cargos los desempeñarán gratuitamente, y sin emolumento alguno.

DECRETO.

DE 17 DE AGOSTO DE 1813.

Prohibicion de la correccion de azotes en escuelas y colegios.

Las cortes generales y estraordinarias, queriendo desterrar de entre los españoles de ambos mundos el castigo ó correccion de azotes, como contrario al pudor, á la decencia y á la dignidad de los que son, ó nacen y se educan para ser hombres libres y ciudadanos de la noble y heroica nacion española, han tenido á bien decretar lo siguiente: Se prohibe desde el dia de hoy la correccion de azotes en todas las enseñanzas, colegios, casas de correccion y reclusion, y demas establecimientos de la monarquia, bajo la mas estrecha responsabilidad.

DECRETO.

DE 1.º DE SETIEMBRE DE 1813.

Declaracion del decreto de 24 de marzo de este año, sobre que el supremo tribunal de justicia conozca de las reclamaciones de los magistrados y jueces de que habla el artículo 8 del mismo decreto.

Las córtes generales y estraordinarias, á consecuencia de haber consultado el supremo tribunal de justicia, con motivo de

la súplica interpuesta por D. Pedro Garrido, D. Isidoro Saenz de Velasco y D. José Villanueva, magistrados de la audiencia de Sevilla, y D. Manuel de Siles, juez tercero de primera instancia de la misma ciudad, sobre habérseles declarado comprendidos en el artículo VII, capítulo I del decreto de 24 de marzo de este año, si la sala que hizo esta declaracion deberá conocer de la reclamacion que han hecho el referido juez y magistrados de Sevilla, con arreglo al artículo VIII del propio decreto, y si ha de concedérseles instancia de súplica en el mismo asunto, como está declarado para con los que incurren en los delitos de que tratan los seis anteriores artículos del propio capítulo, declaran por punto general, y decretan: que en los casos en que alguna sala del supremo tribunal de justicia imponga la pena de que habla el artículo VII, capítulo I del decreto de 24 de marzo del presente año de 1813, en el mismo auto por el que declare la nulidad y reposicion del proceso, podrá tambien conocer de las reclamaciones que se conceden á los magistrados y jueces por el artículo VIII del propio capítulo de aquel decreto; y que tengan y se les conceda segunda instancia en este nuevo juicio.

DECRETO.

DE 8 DE SETIEMBRE DE 1813.

Abolicion de la pena de azotes: se prohibe usar de este y otros castigos con los indios.

Las cortes generales y estraordinarias, convencidas de la utilidad de abolir aquellas leyes por las cuales se imponen á los españoles castigos degradantes, que siempre han sido símbolo de la antigua barbarie, y vergonzoso resto del gentilismo, han venido en decretar y decretan:

I. Se declara abolida la pena de azotes en todo el territorio de la monarquia española.

II. Que en lugar de la pena de azotes se agrave la correspondiente al delito por que el reo hubiere sido condenado; y si esta fuere la de *presidio ú obras públicas*, se verifique en el distrito del tribunal cuando esto sea posible.

III. La prohibicion de azotes se estiende á las casas ó establecimientos públicos de correccion, seminarios de educacion y escuelas.

IV. Estando prohibida la pena de azotes en toda la monarquia, los párrocos de las provincias de ultramar no podrán valerse de ella, ni por modo de castigo para con los indios, ni por el de correccion, ni en otra conformidad, cualquiera que sea.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

v. Los M. RR. arzobispos, RR. obispos y demas prelados ejercitarán con toda actividad el lleno de su celo pastoral para arrancar de su diocesis cualquiera abuso que en esta materia advirtieren en sus párrocos, y procederán al castigo de los contraventores con arreglo á sus facultades.

vi. Del mismo modo procederán los prelados eclesiásticos contra aquellos párrocos que, traspasando los límites de sus facultades, se atrevieren á encarcelar ó tratar mal á los indios.

DECRETO.

DE 9 DE SETIEMBRE DE 1813.

Se hace estensivo á la armada el reglamento de sueldos del ejército.

Las cortes generales y estraordinarias, conformándose con lo propuesto por la regencia del reino, han decretado lo siguiente: se hace estensivo á la armada nacional el reglamento de sueldos para los oficiales y demas clases del ejército que se retiran del servicio, espedido por la junta central en 1.º de enero de 1810.

DECRETO.

DE 13 DE SETIEMBRE DE 1813.

En que se mandan entregar y quedar á disposicion de los ordinarios los lugares de indios reducidos al cristianismo por los regulares de ultramar.

Las cortes generales y estraordinarias, á consecuencia de lo que les ha espuesto D. José de Olazarra, á nombre del R. obispo electo de Guayana D. José Ventura Cabello, acerca de los males que asi en lo moral como en lo político afligen á aquella provincia con motivo de que las reducciones de indios encargadas á las misiones, en que se emplean los religiosos capuchinos y descalzos, no se entregan al ordinario eclesiástico aun pasados treinta, cuarenta, cincuenta y mas años de su reduccion del gentilismo á nuestra católica religion; han venido en decretar y decretan:

I. Todas las nuevas reducciones y doctrinas de las provincias de ultramar, que esten á cargo de religiosos misioneros, y tengan diez años de reducidas, deberán entregarse inmediatamente á los respectivos ordinarios eclesiásticos, sin escusa ni pretesto alguno, conforme á las leyes y cédulas concordantes.

II. Asi estas doctrinas como todas las demas que estuvieren erigidas en curatos, deberán proveerse canónicamente por los mismos ordinarios, observándose las leyes y cédulas del real patronato, en ministros idoneos del clero secular.

III. Los religiosos misioneros desocupados de los pueblos reducidos, que se entregaren al ordinario, se aplicarán á estender por los otros lugares incultos la religion en beneficio de sus habitantes, procediendo en el ejercicio de sus misiones conforme á lo mandado en el párrafo 10, artículo 335 de la constitucion.

IV. Los RR. obispos y prelados eclesiásticos, en virtud de la jurisdiccion ordinaria que les compete, podrán destinar á los religiosos idoneos, segun juzgaren convenir, para tenientes de curas de los párrocos seculares, y en calidad de interinos en las parroquias donde la necesidad lo exigiere, sin que por esto puedan jamás aspirar á la propiedad, ni continuar en el servicio de las parroquias mas tiempo del que pareciere á los ordinarios con arreglo á las leyes.

V. Por ahora, y hasta tanto que las cortes con mas conocimiento otra cosa resuelvan, á las órdenes religiosas que estuvieren en posesion de servir algunos curatos, se les continúa la gracia á cada una de ellas de servir una ó dos doctrinas ó curatos en todo el distrito de los conventos que esten bajo el mando de cada provincial, de modo que el número de estos curatos que se les continúa, deberá contarse no por el de conventos que tuvieren en diversos lugares, sino por el de cada provincia del instituto regular bajo cuyo mando y potestad estuvieren los respectivos conventos, aunque estos se hallen repartidos en diferentes obispados.

VI. Los religiosos misioneros deberán cesar inmediatamente en el gobierno y administracion de las haciendas de aquellos indios, quedando al cuidado y eleccion de estos disponer por medio de sus ayuntamientos, y con intervencion del gefe superior político, se nombren entre ellos mismos los que fueren de su satisfaccion, y tuvieren mas inteligencia para administrarlas, distribuyéndose los terrenos, y reduciéndolos á propiedad particular, con arreglo al decreto de 4 de enero de 1813 sobre reducir los baldíos y otros terrenos á dominio particular.

ORDEN.

Se resuelven las dudas propuestas por el consejo de generales del puerto de Santa Maria.

Las cortes han examinado detenidamente la representacion que el consejo de generales establecido en el puerto de Santa Maria elevó á las mismas con fecha 13 de julio último, consultán-

doles cuatro dudas; sin cuya resolucion, dice, no podia dar principio á sus tareas, y manifestando la necesidad de un reglamento para llenar las funciones de su encargo: han visto igualmente la consulta que sobre este particular ha hecho el tribunal especial de guerra y marina, y el dictámen que, apoyada en ella, da la regencia del reino; y con presencia de todo han resuelto: 1.° Las sentencias pronunciadas por los consejos de generales se ejecutarán inmediatamente, siempre que las penas que por ellas se impongan no sean la de privacion de empleo, muerte ó degradacion; pues en este caso deberán remitirse los procesos al tribunal especial de guerra y marina con arreglo al decreto de 1.° de junio de 1812, para que consultando á la regencia, apruebe la sentencia si la estimase justa, entendiéndose lo dicho con los oficiales de guerra, pues por lo respectivo á intendentes y demas del fuero político militar deberá dejárseles espedito el recurso de apelacion que la ordenanza les permite y el decreto de 8 de abril les confirma. 2.° Se establecerá en cada capital de comandancia general un consejo de generales, compuesto de seis vocales de las clases de mariscales de campo, brigadieres y coroneles; presidido por su respectivo comandante general, y en su defecto por cualquiera otro de igual clase. 3.° Estos consejos juzgarán á todos los que comprende el decreto de 8 de abril en la estension de su respectiva comandancia general hasta la clase de tenientes coroneles inclusive y coroneles retirados, cuando estos últimos en sus purificaciones no resulten reos, pues en este caso deberá pasar la causa al consejo de generales del puerto de Santa María; y desde los de esta clase en los vivos hasta la de general serán juzgados por el dicho consejo del puerto, juzgando ademas este, aun en sumarias de mera purificacion, á todos los oficiales que se hallen en el distrito de su respectiva comandancia general, inclusos en ellos los que puedan pertenecer á otras, y se hallen ya en el puerto de Santa María con sus causas, devolviendo á sus comandancias las de aquellos que aun no se hubiesen presentado á este consejo, para que sean juzgados por el que se establezca en su respectiva comandancia. 4.° Los consejos de generales podrán determinar las causas en sumaria cuando no haya de imponerse pena de muerte, degradacion ó privacion de empleo, recibiendo la declaracion con cargos, y conformándose el interesado con la sentencia, pues no conformándose, deberá oírsele en toda forma, asi como cuando haya de imponérsele alguna de las penas espresadas. 5.° Los consejos de generales deberán ver las causas en el estado que se las remitan, exigiendo el juez de quien proceden la ampliacion que juzgue necesaria, y caso de ser estos comisiones militares ó consejos permanentes que ya no existan, de los que los hayan reemplazado, y en su defecto de los comandantes de armas respectivos. 6.° Ultimamente, el consejo de generales del puerto de Santa María no necesita de otro reglamento que el que le prescriben las ordenanzas con las aclaraciones que quedan hechas. Isla de Leon 22 de octubre de 1813.

ORDEN.

Se declara que en las causas criminales en que empezó la pendencia por injurias verbales terminándose con alguno de los delitos que turban la seguridad personal, ó la tranquilidad pública no ha lugar al juicio de conciliacion.

Las cortes, con vista de una consulta del supremo tribunal de justicia, en que, á consecuencia de otra de la audiencia de Galicia, pide se declare si el juicio de conciliacion que establece la constitucion política de la monarquia en el artículo 282 deberá tener lugar en las causas criminales, cuyos reos empezaron la pendencia con injurias verbales, terminándola con heridas de arma blanca; se han servido declarar que no ha lugar al juicio de conciliacion en las causas que, habiendo comenzado por injurias, terminan con alguno de los delitos que turban la seguridad personal ó la tranquilidad pública, y que las injurias de que habla el artículo 282 de la constitucion son aquellas, en que con sola la condenacion de la parte ofendida se repara la ofensa, sin detrimento de la justicia ni menoscabo de la vindicta pública. Isla de Leon 28 de octubre de 1813.

ORDEN.

Se declara que á los jueces de primera instancia toca acordar por via de providencia el destino ó correccion de los reos en los casos y forma que previene el artículo 5.° de la ley 6.ª tít. 4.° lib. 1.° de la Recopilacion.

Las cortes, en vista de una consulta del supremo tribunal de justicia sobre la duda propuesta por la audiencia de Sevilla acerca de si en los sumarios de reos estraidos de sagrado, en que ha de recaer el destino ó correccion de que habla la real cédula de 11 de noviembre de 1800, han de ser las audiencias las que lo impongan ó pronuncien sobre él, ó los jueces de primera instancia, consultando con las mismas; han venido en declarar por punto general: que á los jueces de primera instancia toca acordar, por via de providencia, el destino ó correccion de los reos en los casos y forma que previene el artículo 5.° de la ley

6.ª, título 4.º, libro 1.º de la Recopilacion, dando cuenta con el proceso antes de su ejecucion á la audiencia territorial, con arreglo al 20 del capítulo 2.º de la ley de 9 de octubre de 1812. Isla de Leon 28 de octubre de 1813.

DECRETO.

DE 29 DE OCTUBRE DE 1813.

Se concede el título de ciudad al pueblo de Comitán y otros de Chiapa.

Las córtes, en consideracion á los buenos servicios y cuantiosos donativos en que se han distinguido varios pueblos de la provincia de Chiapa, han tenido á bien decretar lo siguiente: Se concede el título de ciudad de Santa María al pueblo de Comitán, y el de villas á los de Tusta, Tonalá, Tapachula y Palenque, todos de la citada provincia.

ORDEN.

Se recuerda la observancia de las leyes prohibitivas de los enterramientos en sagrado bajo la responsabilidad de los que las entorpezcan.

Las córtes han resuelto que la regencia del reino circule inmediatamente á los gefes políticos las órdenes mas terminantes para que se pongan en esacta observancia, donde no lo esten, las leyes de nuestros códigos, que prohiben los enterramientos dentro de poblado bajo ningun pretesto, previniéndoles de que cualquiera autoridad, sin distincion de clase, que intentare entorpecer la ejecucion de esta urgente y saludable disposicion, será personalmente responsable, y se hará efectiva su responsabilidad, conforme á la constitucion y á la ley de 11 de noviembre de 1811; en el concepto de que las córtes han señalado el preciso término de un mes para que puedan tomarse las disposiciones necesarias á preparar los cementerios provisionales fuera de poblado y en parages ventilados, mientras se construyen los permanentes, con arreglo á las leyes recopiladas. Isla de Leon 1º. de noviembre de 1813.

ORDEN.

Declarando que en Granada y demas capitales de provincia debe haber la junta municipal de sanidad ademas de la provincial.

El ayuntamiento constitucional de Granada ha acudido á las córtes quejándose de la junta superior de sanidad de la provincia por el modo y términos con que le invitaba á que formase la junta municipal de sanidad, que en concepto del mismo ayuntamiento no era necesaria, por existir en la propia ciudad la superior; y solicitaba se declarase si debia ó no elegir la municipal, y que á la superior se le recordase la urbanidad y decoro con que debia proceder respecto del ayuntamiento, sin introducirse en sus facultades y atribuciones. Las córtes en vista de todo se han servido declarar que en Granada, como en las demas capitales de provincia, deben formarse dos juntas de sanidad, la municipal de la ciudad y la provincial; y que de consiguiente el ayuntamiento de Granada debe proceder á formar la municipal.

Asimismo ha resuelto el congreso que se remitan á la regencia, como lo hacemos por mano de S. V., las esposiciones del ayuntamiento y documentos que incluyen para los fines á que haya lugar; en el concepto de que las córtes desean que las corporaciones y demas autoridades se traten unas á otras con decoro, y que se guarde la mejor armonía entre el ayuntamiento y la junta provincial de sanidad de Granada. Isla de Leon 1.º de noviembre de 1813.

ORDEN.

Restablecimiento del montepio militar y reglas para su gobierno.

Las córtes, á consecuencia de las diferentes reclamaciones que han hecho las viudas de oficiales que tienen opcion al montepio militar, á fin de que se les satisfagan con puntualidad sus respectivos haberes, han resuelto: 1.º Que desde luego se restablezca la junta del montepio militar, con arreglo á la constitucion y á las leyes, encargándose á la regencia del reino que presente á las córtes á la mayor brevedad la planta bajo la que deba establecerse. 2.º Los fondos de ultramar señalados al montepio vendrán consignados separadamente en lo sucesivo, y enteramente independientes de los caudales de la hacienda pública. 3º. La tesorería general cesará inmediatamente en la recaudacion de los caudales del monte, dando cuenta y razon, como está determinado en la resolucion de 31 de julio de 1811. 4.º Entre tanto se recaudan algunos caudales, y hasta que puedan hacerse por el monte los pagos de pensiones concedidas á viudas, hijos y madres viudas de los militares, continuará á estas sus asignaciones la tesorería general á cuenta de los 52.958 771 rs. y 11 mrs. de vellon que debia al monte en fin del año de 1811. 5.º Los agentes del gobierno que autoricen ó ejecuten alguna orden para invertir en otro objeto, cualquiera que sea, los caudales pertenecientes á dicho montepio, serán declarados reos de atentado contra la propiedad individual,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y castigados como tales con arreglo á las leyes. Isla de Leon 3 de noviembre de 1813.

ORDEN.

Declarando las córtes que solo debe haber en las capitales y pueblos la junta municipal de sanidad y la superior de la provincia.

Exmo. sr.=Habiendo espuesto á las córtes el conde de Maule, alcalde primero constitucional de Cádiz, que en virtud de la instruccion de 23 de junio de este año se habia formado en dicha ciudad la junta municipal de sanidad, de que es presidente; y el entorpecimiento que se notaba en el desempeño de sus atribuciones por la existencia de la antigua junta de sanidad, conocida por marítima ó del puerto, ademas de la superior de la provincia, pidiendo declarase el congreso si deberia haber en los pueblos, sean ó no puertos, mas que una junta subalterna de sanidad, se han servido declarar: que despues de la ley de 23 del citado junio no puede haber mas juntas de sanidad que la municipal y la superior de provincia, formadas con arreglo al artículo 4.°, capítulo 1°, y al II, capítulo 2.° de la misma ley, y compuestas de las personas que en ella se designan; debiendo cesar por consiguiente en sus funciones cualesquiera otras corporaciones que existen en fuerza de los anteriores reglamentos, hoy virtualmente derogados. Isla de Leon 20 de noviembre de 1813.

DECRETO.

DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se declaran anexas para siempre á los comandantes de buques de guerra las maestrías de plata de los mismos.

Las córtes, habiendo tomado en consideracion la propuesta que en 20 de diciembre de 1811 hizo la regencia del reino para que se declarase para siempre inherente á los comandantes de buques de guerra la maestría de plata de los mismos; y teniendo presentes cuantas órdenes y disposiciones hay dadas sobre la materia desde el año de 1598, de las cuales resulta que la principal seguridad que prestan los maestres de plata de comercio es la fianza de 25ŋ ducados, la que se subroga con usura respecto de los comandantes de buques de guerra con la garantía de su empleo, honor y aun existencia, han tenido á bien decretar lo siguiente: Las maestrías de plata de todos los buques de guerra quedan para siempre anexas á sus comandantes, los que se encargarán y responderán de la manera que va significada, asi de todos los caudales que se embarquen á su bordo, como de los puntos que ha sido siempre de costumbre que vengan á cargo de los maestres de buques de guerra, y reportando los comandantes las mismas utilidades que reportaban los maestres comerciantes.

DECRETO.

DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se declaran libres de derecho de alcabalas las ventas, cambios y permutas de esclavos.

Las córtes han tenido á bien decretar: Quedan libres del derecho de alcabala, las ventas, cambios y permutas de esclavos en toda la monarquía.

DECRETO.

DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se declara el haber y consideracion de los ex-secretarios del despacho.

Las córtes á consecuencia de lo que con motivo de la dimision hecha por D. José Vazquez Figueroa de su empleo de secretario de estado y del despacho de marina, y admitida por la regencia del reino, les ha hecho presente esta sobre lo justo que seria que al citado Figueroa, en atencion á la suerte á que ha quedado reducido, y á los demas secretarios del despacho que se hallen en su caso, se les declarase el haber y consideracion que deban tener cuando sean exonerados por dimision espontánea por falta de salud, ó porque el gobierno en uso de sus facultades eligiese otros, han venido en declarar: 1.° Que á los ex-secretarios del despacho que tuviesen destino antes de ascender á este encargo se les conserven los goces de su anterior empleo, sujeto á los descuentos prevenidos: 2.° Que cuando se exonerase á algun secretario que no hubiese tenido anteriormente destino alguno, ó que fuese de corta consideracion en concepto del gobierno, proponga este á las córtes el haber que deba señalársele: 3.° Que los secretarios del despacho cuando sean exonerados ó dejen su encargo, conservarán el tratamiento que les pertenecia por el destino que ocupaban antes de ser nombrados.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETO.

DE 19 DE FEBRERO DE 1814.

Se declara que los empleados de la hacienda militar son subalternos del ministerio de la guerra.

Las córtes, despues de tomar en la debida consideracion la memoria que el secretario del despacho de guerra leyó en la sesion del dia 3 de octubre último, han decretado lo siguiente: 1.° El número de comisarios de guerra y ordenadores será únicamente el preciso y correspondiente á la fuerza de que haya de constar el ejército nacional. 2.° Como esta fuerza no se haya aun fijado por las córtes, y su plan pende de la constitucion militar, no se proveerá empleo alguno de comisario hasta sentar aquellas bases, mediante á que el escesivo número que en la actualidad hay de ellos no deja recelar que entre tanto falten los necesarios. 3.° Cuando llegue el caso de proveerlos, su nombramiento se hará esclusivamente por la secretaría de guerra, de la que únicamente serán subalternos todos los empleados de la hacienda militar del ejército. 4.° Se señalará un breve y perentorio plazo á juicio del gobierno, si no lo estuviere ya, para la purificacion de los comisarios ordenadores y de guerra que permanecieron en pais ocupado por el enemigo, así como para la revalidacion de los que obtuvieron sus títulos de las juntas ú otras autoridades; y pasado dicho plazo no serán reconocidos ni admitidos bajo el caracter de tales comisarios por ningun motivo. 5.° Se observará rigorosamente en estos destinos la escala que debe preceder para llegar á ellos. 6.° El número de auditores de guerra en los ejércitos y provincias deberá tambien fijarse en proporcion determinada al número y necesidad de sus destinos en la fuerza armada nacional, sin que puedan ser distraidos á otras comisiones que á las peculiares de su instituto en la administracion de justicia, á la manera que está mandado respecto á los magistrados de las audiencias. 7.° Para ningun destino de los estados mayores de plazas será propuesto ni provisto oficial alguno que no haya servido en el ejército activo, y careciese ya de suficiente aptitud para seguir en él. 8.° Se recomienda al gobierno el que procure por todos los medios posibles que el surtimiento de vestuarios y monturas se provea dentro de la Península ó sus islas. 9.° El prest y gratificacion del soldado se pagará indefectiblemente en dinero, aboliendo el método perjudicial de raciones fuera de los casos y términos que previene la ordenanza. 10. El ramo de bagages se

arreglará de suerte que sea una carga general en lo absolutamente indispensable, pagada por provincias ó partidos del fondo de las contribuciones comunes. 11. El número de colegios militares y el de sus alumnos se reducirá en razon de los oficiales que correspondan y sean necesarios para las tropas de continuo servicio, situándolos en los parages de la Península ó islas que se gradúen mas á propósito por el clima, salubridad, abundancia de mantenimientos, y distancia ó localidad respectiva, cuidándose con particular empeño de su asistencia y métodos uniformes de enseñanza; determinándose y dotándose asimismo en cada colegio el número de plazas para los alumnos que por distinguidos servicios de sus padres hubieren de costearse á espensas del estado. 12. La edad para la admision y permanencia en estos colegios se asignará de modo que los alumnos, cuando tengan la correspondiente para los alistamientos del ejército, hayan dado ya pruebas de su idoneidad ó ineptitud, continuando en el primer caso en los colegios, y siendo escluidos en el segundo para comprenderse en los reemplazos.

DECRETO.

DE 26 DE MARZO 1814.

Se habilita á comercio el puerto de Guaimas.

Las córtes han tenido á bien decretar lo siguiente: 1.° Se habilita para el comercio nacional al puerto de Guaimas, situado en las costas del mar del Sur de las provincias internas de occidente en la América septentrional. 2.° Por espacio de diez años serán esentos de todo derecho los efectos de comercio libre nacional que se introduzcan ó estraigan por el espresado puerto de Guaimas. 3.° Se concede la celebracion de una feria anual en la villa del Saltillo de las provincias internas de oriente de Nueva-España en la época y dias que señale la diputacion provincial: y la de otra en las provincias de occidente, en el lugar, época y dias que tambien fije su respectiva diputacion 4.° Ambas ferias gozarán de libertad de derechos por ahora, quedando sujetas al plan general de ferias y rentas.

DECRETO.

DE 30 DE ABRIL DE 1814.

Se manda abrir un canal entre los rios de Chimipila y Goazacoalcos.

Las córtes, con el fin de facilitar el comercio desde el seno mexicano con los puertos del mar del Sur, y conformándose con

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el dictamen de la regencia del reino, han tenido á bien conceder su permiso para la construccion de un canal entre los rios de Chimipila y Goazacoalcos, en el istmo de Tehuantepec, costeándose de los fondos del consulado de Guadalajara, y confiriéndose por el gobierno esta comision al sugeto ó sugetos que estuviere en sus facultades, y tengan la aptitud y demas requisitos necesarios para el acierto de tan importante empresa.

ORDEN.

Se declara que la mayoría del número de diputados de provincia basta para instalarse la diputacion provincial.

Exmo. sr.=Habiéndose enterado las córtes de la considerable dilacion que hubo en Goatemala desde el nombramiento de los vocales para la diputacion provincial hasta su instalacion. á pretesto de faltar uno de los siete elegidos; y queriendo que en lo sucesivo no sufra el menor retardo la instalacion y ejercicio de las diputaciones provinciales, de cuya sabia institucion deben esperar los pueblos grandes ventajas, han tenido á bien declarar espresamente, que la mayoría del número de los diputados provinciales basta para que se verifique en el tiempo prevenido la instalacion de las diputaciones provinciales, especialmente hallándose presentes algunos de los suplentes. Madrid 4 de mayo de 1814.

DECRETO.

DE 5 DE MAYO DE 1814.

Se señalan los derechos por los juicios de conciliacion.

Con presencia de la consulta del supremo tribunal de justicia acerca de la representacion de la audiencia de Sevilla sobre si los alcaldes constitucionales y secretarios de ayuntamientos han de percibir derechos por los juicios de conciliacion, y si pueden celebrarse por cualquiera escribano; é igualmente sobre las esposiciones del gefe político de Cádiz y los alcaldes constitucionales de san Lucar de Barrameda, relativas á que se faculte á estos para que señalen la cuota que deberán satifacer los litigantes por los referidos juicios de conciliacion para reintegrar á los escribanos que concurran á ellos; han tenido á bien las córtes decretar lo siguiente: Con arreglo á lo prevenido en el artículo 1.° del capítulo 3.° del decreto de 9 de octubre de 1812 los alcaldes pueden nombrar la persona que sea apta para sentar en el libro de determinaciones de conciliacion lo resultante del juicio sin que se contemple necesario sea escribano; y por la certificacion se llevará de derechos para el que la estienda cuatro reales de vellon en la Península, y en ultramar dos de plata. En estos juicios conciliatorios por ningun título intervendrán mas personas que las señaladas en el artículo 283 de la constitucion.

AÑO DE 1820.

ORDEN.

Declarando las dudas ocurridas al alcalde constitucional de la villa de Torre de Miguel Sesmero sobre los procedimientos en causas livianas.

Exmo. sr.=El encargado del despacho de gracia y justicia remitió en 28 de febrero de 1814, para la resolucion de las cortes, una consulta del supremo tribunal de justicia, proponiendo la duda promovida por el alcalde constitucional de la villa de Torre de Miguel Sesmero, con motivo del robo de una fanega de trigo, de si por la ley de 9 de octubre de 1812, se habia privado á los jueces subalternos de sobreseer, como lo tenia canonizado la práctica forense en las causas livianas, y de la naturaleza que daba margen á dicha consulta; y si las dudas de ley que ocurriesen á los alcaldes constitucionales las debian proponer estos inmediatamente al referido supremo tribunal, omitiendo el medio del tribunal superior de su provincia. Las últimas cortes tomaron conocimiento de este asunto, y le discutieron, y determinaron por último en 9 de mayo del mismo año; mas no pudo trasladarse al gobierno su resolucion por los inesperados y notorios acaecimientos de aquellos dias. Reunidas ahora las de la presente legislatura, han tenido por conveniente volver á examinar este negocio, y coincidiendo con el modo de pensar de las citadas cortes, han aprobado lo determinado por las mismas en el citado dia 9 de mayo, reducido: 1.° A que las causas sobre robo no deben reputarse livianas, y sí continuarse hasta definitiva con arreglo á la constitucion y á las leyes. 2.° Que no estando espresamente derogada la práctica de sobreseer en las causas livianas, se continúe por ahora en ella, sin perjuicio de lo que se arregle en este punto en el código criminal. 3.° Que los jueces de primera instancia deben dirigir las consultas fundadas sobre duda de ley al tribunal supremo de justicia por medio de las audiencias territoriales, que las acompañarán con su informe. De órden de las cortes lo trasladamos á V. E. para que lo haga á S. M., á fin de que se sirva disponer lo conveniente á su cumplimiento. Madrid 18 de julio de 1820.

el dictamen de la regencia del reino, han tenido á bien conceder su permiso para la construccion de un canal entre los rios de Chimipila y Goazacoalcos, en el istmo de Tehuantepec, costeándose de los fondos del consulado de Guadalajara, y confiriéndose por el gobierno esta comision al sugeto ó sugetos que estuviere en sus facultades, y tengan la aptitud y demas requisitos necesarios para el acierto de tan importante empresa.

ORDEN.

Se declara que la mayoría del número de diputados de provincia basta para instalarse la diputacion provincial.

Exmo. sr.=Habiéndose enterado las córtes de la considerable dilacion que hubo en Goatemala desde el nombramiento de los vocales para la diputacion provincial hasta su instalacion. á pretesto de faltar uno de los siete elegidos; y queriendo que en lo sucesivo no sufra el menor retardo la instalacion y ejercicio de las diputaciones provinciales, de cuya sabia institucion deben esperar los pueblos grandes ventajas, han tenido á bien declarar espresamente, que la mayoría del número de los diputados provinciales basta para que se verifique en el tiempo prevenido la instalacion de las diputaciones provinciales, especialmente hallándose presentes algunos de los suplentes. Madrid 4 de mayo de 1814.

DECRETO.

DE 5 DE MAYO DE 1814.

Se señalan los derechos por los juicios de conciliacion.

Con presencia de la consulta del supremo tribunal de justicia acerca de la representacion de la audiencia de Sevilla sobre si los alcaldes constitucionales y secretarios de ayuntamientos han de percibir derechos por los juicios de conciliacion, y si pueden celebrarse por cualquiera escribano; é igualmente sobre las esposiciones del gefe político de Cádiz y los alcaldes constitucionales de san Lucar de Barrameda, relativas á que se faculte á estos para que señalen la cuota que deberán satifacer los litigantes por los referidos juicios de conciliacion para reintegrar á los escribanos que concurran á ellos; han tenido á bien las córtes decretar lo siguiente: Con arreglo á lo prevenido en el artículo 1.° del capítulo 3.° del decreto de 9 de octubre de 1812 los alcaldes pueden nombrar la persona que sea apta para sentar en el libro de determinaciones de conciliacion lo resultante del juicio sin que se contemple necesario sea escribano; y por la certificacion se llevará de derechos para el que la estienda cuatro reales de vellon en la Península, y en ultramar dos de plata. En estos juicios conciliatorios por ningun título intervendrán mas personas que las señaladas en el artículo 283 de la constitucion.

AÑO DE 1820.

ORDEN.

Declarando las dudas ocurridas al alcalde constitucional de la villa de Torre de Miguel Sesmero sobre los procedimientos en causas livianas.

Exmo. sr.=El encargado del despacho de gracia y justicia remitió en 28 de febrero de 1814, para la resolucion de las cortes, una consulta del supremo tribunal de justicia, proponiendo la duda promovida por el alcalde constitucional de la villa de Torre de Miguel Sesmero, con motivo del robo de una fanega de trigo, de si por la ley de 9 de octubre de 1812, se habia privado á los jueces subalternos de sobreseer, como lo tenia canonizado la práctica forense en las causas livianas, y de la naturaleza que daba margen á dicha consulta; y si las dudas de ley que ocurriesen á los alcaldes constitucionales las debian proponer estos inmediatamente al referido supremo tribunal, omitiendo el medio del tribunal superior de su provincia. Las últimas cortes tomaron conocimiento de este asunto, y le discutieron, y determinaron por último en 9 de mayo del mismo año; mas no pudo trasladarse al gobierno su resolucion por los inesperados y notorios acaecimientos de aquellos dias. Reunidas ahora las de la presente legislatura, han tenido por conveniente volver á examinar este negocio, y coincidiendo con el modo de pensar de las citadas cortes, han aprobado lo determinado por las mismas en el citado dia 9 de mayo, reducido: 1.° A que las causas sobre robo no deben reputarse livianas, y sí continuarse hasta definitiva con arreglo á la constitucion y á las leyes. 2.° Que no estando espresamente derogada la práctica de sobreseer en las causas livianas, se continúe por ahora en ella, sin perjuicio de lo que se arregle en este punto en el código criminal. 3.° Que los jueces de primera instancia deben dirigir las consultas fundadas sobre duda de ley al tribunal supremo de justicia por medio de las audiencias territoriales, que las acompañarán con su informe. De órden de las cortes lo trasladamos á V. E. para que lo haga á S. M., á fin de que se sirva disponer lo conveniente á su cumplimiento. Madrid 18 de julio de 1820.

ORDEN.

Se declara la duda ocurrida al supremo tribunal de justicia sobre si debe dirimir una competencia suscitada entre el alcalde constitucional de Belmonte y el provisor eclesiástico de Cuenca acerca del conocimiento de un artículo posesorio.

Exmo. sr.=Con motivo de haber sido despojado D. Tomas Meliton Hernandez por el cabildo de la colegiata de Belmonte de su empleo de tercer colector de diezmos, se suscitó entre el alcalde constitucional de la misma villa y el provisor eclesiástico de Cuenca, competencia que elevada al supremo tribunal de justicia, le obligó á consultar á las cortes en 22 de noviembre de 1813 por conducto del gobierno, si era de sus atribuciones el dirimir una competencia acerca del conocimiento de un artículo posesorio. Para fundar esta duda el referido supremo tribunal hizo mencion por una parte, de que, conforme al artículo 2.° del decreto de 19 de abril de 1813, era de su atribucion dirimirla entre un juez ordinario y un tribunal especial que no estuviese sujeto á la jurisdiccion de la audiencia, bajo cuyo aspecto consideraba en aquel caso al provisor de Cuenca. Por otra, se hacia cargo de que el asunto sobre que versaba la competencia, si fuera por recurso de fuerza de conocer y proceder, pertenecia sin duda alguna á la audiencia del territorio; y declarando que la hacia el provisor de Cuenca, quedaba por consiguiente el conocimiento del mismo asunto al alcalde de Belmonte; á que se agregaba que, siendo el litigio promovido de un interdicto puramente posesorio, este era de la inspeccion de la jurisdiccion ordinaria sin diferencia de cosas ni personas, conforme al artículo 12, capítulo 2.° de la ley de 9 de octubre de 1812. Habiendo quedado este asunto pendiente de la resolucion de las últimas cortes cuando la disolucion de estas acaecida en mayo de 1814, lo han examinado las presentes; y en su consecuencia han decidido que no hay necesidad de la declaracion suscitada por el tribunal supremo de justicia; pues asi en el caso de que se trata, como en los demas semejantes, no cabe competencia entre las dos jurisdicciones, sino el recurso ordinario de fuerza en conocer y proceder, cuya decision pertenece á las audiencias territoriales. Madrid 22 de julio de 1820.

ORDEN.

Declarando innecesaria la consulta de la mayoria de la sala primera del supremo tribunal de justicia, relativa á si con motivo de la formacion de causa al marques de Campo Sagrado mandada formar por las córtes estraordinarias, deberia pasar para instruir el sumario el ministro mas antiguo de la sala al pueblo de la residencia del tratado como reo, ó presentarse este ante el tribunal &c.

Exmo. sr.=En 15 de julio próximo ha representado á las cortes el marques de Campo Sagrado, quejándose de la lentitud que esperimentó en la formacion de la causa á que declararon las cortes estraordinarias en 22 de marzo de 1813 habia lugar por su conducta con los individuos del ayuntamiento de S. Martin de Moaña y S. Pedro Domayo, y por el retraso en el establecimiento de las autoridades constitucionales en Galicia; hallándose entre tanto vacilante su opinion, y habiendo sufrido desaires públicos en la junta electoral de Oviedo: en el espediente relativo á este negocio se ha encontrado una consulta del supremo tribunal de justicia, remitida por el ministerio del cargo de V. E. en 8 de mayo del citado año, en la cual proponia la duda que le ocurrió de si en este caso ú otros semejantes deberia pasar el ministro mas antiguo de la sala al pueblo de la residencia del tratado como reo, ó presentarse este ante el tribunal, ó encargarse la instruccion del sumario á otra persona, cuyos puntos quedaron sin resolverse á la disolucion de las anteriores cortes. Penetradas las actuales de la justicia con que clama el citado marques por la pronta terminacion del juicio; y enteradas de todos los antecedentes, han acordado que la consulta de la mayoria de la sala primera del supremo tribunal de justicia, arriba citada, ha sido innecesaria, estando prevenido, como lo está por la ley de 24 de marzo de 1813, que en las causas contra los gefes políticos por delitos cometidos en el desempeño de su oficio instruya el sumario y las demas actuaciones del plenario el ministro mas antiguo de la sala respectiva del tribunal supremo; y consiguientemente es muy claro que queda á disposicion de este el procesado para que se le haga comparecer siempre que convenga, valiéndose el juez de los medios ordinarios para la evacuacion de citas y demas diligencias que puedan y deban practicarse fuera de la corte. Madrid 11 de agosto de 1820.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETO.

DE 17 DE AGOSTO DE 1820.

Supresion de la compañia de Jesus, y restitucion al cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta córte de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su ereccion.

Las cortes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: 1.° Se establece en su fuerza y vigor la ley cuarta, título veinte y seis, libro primero de la Novísima Recopilacion, y en su consecuencia queda suprimida en toda la monarquia española la órden conocida con el nombre de compañia de Jesus. 2.° Los antiguos ex-jesuitas españoles que vinieron de Italia en virtud de las reales órdenes comunicadas al efecto. y que disfrutaban la pension que se les señaló en el año de mil setecientos sesenta y siete, se restituirán á los pueblos que elijan de la Península, con aprobacion del gobierno, donde vivirán en la clase de clérigos seculares, sujetos á los respectivos ordinarios, y con prohibicion de usar el trage de su antigua órden, y de tener relacion ni dependencia alguna de los superiores de la compañia que existan fuera de España. 3.° En lugar de la pension que los referidos antiguos ex-jesuitas españoles disfrutaban, se les señalan trescientos ducados al año, que cobrarán de los fondos de temporalidades, y perderán si saliesen de la Península con cualquiera motivo, aunque obtengan licencia del gobierno. 4.° Todos los que hayan entrado en la compañia desde el año de mil ochocientos quince se restituirán á los pueblos que elijan de las diócesis de su naturaleza; y si estuviesen ordenados *in sacris*, vivirán sujetos á los respectivos ordinarios, que cuidarán de su conducta y colocacion, segun sus méritos y suficiencia. 5.° Los que se hayan ordenado *in sacris* sin congrua alguna, despues de haber entrado en la compañia desde el año referido de mil ochocientos quince, gozarán de la pension de mil y quinientos reales vellon al año, hasta que obtengan beneficio ó destino que les produzca igual cantidad. 6.° Los que no estuvieren ordenados *in sacris* quedarán en la clase de seglares, sujetos á las justicias ordinarias; y si hubiese algunos estrangeros, se restituirán á sus paises á cuyo efecto se les facilitarán los correspondientes pasaportes y el socorro que el gobierno estime necesario para su viage. 7.° Se restituye el cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta corte al sér y estado que tenia al tiempo en que se disolvió; y continuará en el ejercicio de sus derechos y funciones conforme á las bulas y reales órdenes de su ereccion. 8.° Se entregarán al citado cabildo por los padres jesuitas ó junta de su restablecimiento todos los bienes, efectos, alhajas, dinero y demas que recibieron pertenecientes al mismo cabildo. 9.° La misma entrega se hará á los padres misioneros del oratorio del Salvador; quedando, tanto estos como el cabildo de S. Isidro, en los mismos términos en que se hallaban cuando ocuparon sus respectivas casas, iglesias y bienes los jesuitas. 10. Se devolverán al crédito público todos los demas bienes que antes administraba pertenecientes á temporalidades, para que proceda inmediatamente á su venta con arreglo á lo mandado últimamente por las cortes, tomando cuentas á los padres jesuitas, junta de restablecimiento, ó personas que hayan corrido con su administracion; y exigiendo los alcances y responsabilidades que resulten, satisfará las cargas de justicia.

ORDEN.

Sobre que los jueces de primera instancia en los casos de apelacion, y demas en que deban remitir y remitan á las audiencias territoriales los procesos, lo ejecuten sin los presos, como no preceda espresa órden de dichas audiencias para ello.

Exmo. sr.=El tribunal supremo de justicia consultó en 1813 á la regencia del reino la duda propuesta por la audiencia de Cataluña, en órden á si con arreglo á lo prevenido por el artículo 60, capítulo 1.°, y por el 19, capítulo 2.° de la ley de 9 de octubre de 1812, sobre arreglo de tribunales, deben trasladarse á las cárceles del pueblo donde resida la audiencia territorial todos los presos cuyas causas la remitan los jueces de primera instancia en consulta ó en apelacion, ó si podrán permanecer en las de aquel juzgado no obstante remitirse los procesos.

Esta consulta se hallaba informada por la comision de legislacion, y á punto de resolverse por la segunda legislatura de las cortes ordinarias cuando ocurrió la disolucion de estas. Y habiéndola tomado en consideracion las presentes, se han servido resolver, que no habiendo artículo alguno en la ley de 9 de octubre, ni disposicion que obligue á remitir con los procesos los reos á las cárceles del pueblo en que resida la audiencia cuando por apelacion ó de otro modo legal se hallen alli pendientes sus causas en segunda y tercera instancia, siendo por otra parte cuanto previene el referido artículo 60 limitado para los presos que lo estén en aquellas cárceles: y pudiendo ademas ocurrirse fácilmente á oir á los reos cuando lo soliciten, y aun practicarse cualquiera diligencia judicial que ocurra por el juez de

su residencia, en el modo y forma prevenidos para estos casos en el artículo 17 del capítulo 2.° de dicha ley de 9 de octubre, sin tropezar en los muchos é insuperables inconvenientes que de lo contrario habian de oponerse para embarazar y entorpecer necesariamente la buena y mas pronta administracion de justicia con graves incomodidades y aun perjuicios de los mismos presos, como la misma audiencia que consulta lo manifiesta: los jueces de primera instancia en los casos de apelacion y en los demas en que conforme á lo mandado en la citada ley de 9 de octubre de 1812 deben remitir y remitan de hecho los procesos á las audiencias territoriales, lo ejecuten sin los presos á no preceder espresa órden de aquellas para ello; oyendo por sí mismos á estos últimos cuando en uso del beneficio que les dispensa el artículo 60 del capítulo 1.° de dicha ley, asi lo reclamen, y dando cuenta inmediatamente á la audiencia de cuanto aquellos les manifiesten para su conocimiento y demas efectos que convengan. Madrid 28 de agosto de 1820.

ORDEN.

Se aprueba el dictámen del supremo tribunal de justicia sobre los trámites de una causa seguida en Cataluña contra D. Ramon Domingo encargado de la abogacía de pobres.

Exmo. sr.=En la visita particular de cárceles que practicó la audiencia de Cataluña en 9 de enero de 1813, los ministros de dicha visita impusieron la multa de quince libras francas al licenciado D. Ramon Domingo, encargado de la abogacia de pobres, por haberse negado á asistir á aquel acto. Notificada esta providencia á dicho Domingo, depositó la cantidad, y pidió se le alzase la multa por varias razones que espuso. El fiscal, á quien se pasó este recurso, apoyándose en varios artículos de la ordenanza de aquella audiencia, conformes con las leyes generales del reino, dijo que esta no podia conocer de las providencias de visita, y pidió que de lo que se determinase se le librase testimonio para elevarlo á la regencia del reino. Habiéndose dado traslado de este dictámen á Domingo, contestó á él, y el fiscal insistió en que se despreciase la solicitud de este; en cuyo estado el tribunal, en providencia de 8 de febrero del mismo año, acordó que se consultasen á la regencia las dudas que se ofrecian á la pluralidad de sus ministros sobre la verdadera inteligencia de la ordenanza.

Los artículos de esta, en que se fundan las dudas de la audiencia, son el 513 y el 522, que dicen asi: „Lo proveido en visita se cumpla sin embargo de suplicacion."=„Todo lo que se

„acordare y proveyere en la visita se ejecutará sin dilacion ni „suplicacion.=Lo mandado por la visita se ejecute con brevedad sin „recurso.=Informarán y sabrán la causa y razon por qué se ha„llan presos, y harán justicia brevemente; y lo que se proveye„re y mandare por los oidores en visita de cárcel se cumpla y „ejecute sin dilacion, y que sobre ello no haya suplicacion." Las dudas de la audiencia son dos. Primera: si en virtud de los citados artículos queda privada la sala de conocer de la justicia ó injusticia de las providencias de visita, supuesto que al paso que en dichos artículos se previene que lo que se acordare en visita se ejecute sin dilacion ni suplicacion; parece limitarse esta prevencion á las providencias relativas al alivio de los presos, sin estenderse á privar del recurso á la sala de las que tomare la visita contra el abogado ó procurador de pobres. Segunda: si cuando la citada ordenanza inhabilitase á la sala para poder conocer de la justicia ó injusticia de una providencia contra el abogado ó procurador de pobres, podria y deberia conocer de ella en virtud del artículo 262 de la constitucion, que dispone que todas las causas civiles y criminales se fenezcan dentro del territorio de cada audiencia.

Pasada esta consulta por la regencia al tribunal supremo de justicia, opinó este que no habia duda legal en que la sala ordinaria no podia conocer de las providencias de visita ni en el caso propuesto ni en otro alguno; y que el alivio de los presos, objeto que determinan espresamente los dos artículos citados, comprende sin duda alguna la asistencia del abogado y procurador de pobres, que sábia y terminantemente previene la ley 6.ª, libro 2.°, título 39 de la Novísima Recopilacion; prescribiéndola igualmente el auto acordado que se cita en la nota 5 á la ley 4.ª de los mismos títulos y libro, con conminacion de la multa de 50 ducados al que no asistiere, espresando que sea de irremisible esaccion. Al mismo tiempo propuso dicho supremo tribunal, que conviniendo al espíritu de proteccion que el nuevo sistema dispensa á todos los ciudadanos el que se modere el sumo rigor con que en su concepto estan dictadas las referidas leyes concernientes á los autos de visita de cárceles, puedan recurrir de plano en la próxima visita, en donde se provea en la misma forma.

Este espediente pendia de resolucion de las cortes cuando se verificó la disolucion de las que componian la segunda legislatura en mayo de 1814; y habiéndolo tomado en consideracion las presentes, han encontrado muy fundado el dictámen del supremo tribunal de justicia en la parte que dice no haber duda legal en que la sala ordinaria no podia conocer de las providen-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cias de la visita, ni en el caso que motivó la consulta ni en otro alguno, por ser terminantes las leyes que prohiben toda suplicacion y recurso de dichas providencias; mas no en cuanto á que se adopte la nueva medida propuesta por el mismo tribunal de que se permita al agraviado acudir de plano á la próxima visita, por no reconocerse el rigor que se supone en la ordenanza y leyes actuales, sino por el contrario, mucha conformidad con otros puntos de nuestra legislacion, en que tampoco se da lugar á suplicaciones y recursos. Madrid 2 de setiembre de 1820.

DECRETO.

DE 2 DE SETIEMBRE DE 1820.

Acerca de los sueldos que han de gozar los eclesiásticos que sirven empleos civiles, y que no puedan obtener mas de un beneficio.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: 1.° Que los eclesiásticos agraciados con empleos ó sueldos civiles los sirvan por la renta de sus beneficios; y si esta no llegase al valor de la dotacion de los empleos, se les pague lo que falte, ó se les dé por entero, y el gobierno recoja los frutos de la prebenda ó beneficio. 2.° Que el gobierno, como protector de los cánones de la iglesia, haga llevar á efecto con todos los eclesiásticos sin distincion lo dispuesto por aquellos, por las leyes del reino, y por circulares de la estinguida cámara de Castilla en razon de pluralidad de beneficios, precisando á los que se hallen en este caso á que elijan el que mas les acomode, siendo cóngruo, y todos los demas queden vacantes, y sus productos entren en tesoreria general. 3.° Debiendo tener efecto tambien con los capellanes de honor de S. M. y demas eclesiásticos de la capilla real lo dispuesto en los artículos anteriores; y estando comprendidos en la dotacion de la real casa los sueldos de aquellos y todos los gastos de la capilla sobre que el rey podrá hacer lo que le pareciere, el gobierno dispondrá inmediatamente que entren en tesoreria los quinientos mil reales de pensiones sobre diferentes iglesias, el canonicato de Santiago, la mitad de las medias anatas de dignidades y canongias, y todas las demas consignaciones que con ellas ó sin ellas han servido de dotacion á la real capilla.

DECRETO.

DE 3 DE SETIEMBRE DE 1820.

Sueldos que han de disfrutar los empleados cesantes.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado lo siguiente: *Artículo* 1.° Con los militares sobrantes, cesantes y reformados no se hará mas novedad que la de que el *maximum* entre ellos continuará siendo el de 40ɣ rs. 2.° Los que han sido ministros efectivos de los consejos suprimidos gozarán 30ɣ rs., 24ɣ los alcaldes de casa y córte; y regentes de las chancillerías y audiencias, y 16ɣ los ministros de estas mismas. 3.° Los empleados cesantes pertenecientes á los demas ministerios y sus dependencias, y tambien los que pertenezcan á los dos indicados de guerra y gracia y justicia que no se espresan en los artículos anteriores, gozarán medio sueldo del último empleo, ó por otro que hayan servido con título legítimo del gobierno, los que tengan de 12 á 20 años de servicio; dos tercios los que hayan servido de 20 á 30, y el sueldo entero de 30 en adelante; no entendiéndose por cesantes los que fueron privados de un destino por adictos al sistema constitucional, y no se hallan repuestos. 4.° Las rebajas de que habla el artículo anterior no se entenderán con los que por su último destino tengan de 6ɣ rs. abajo, ni dejarán á nadie con menos de esta suma. 5.° Los que esten incorporados en el montepio respectivo sufrirán los descuentos correspondientes á las cantidades que les queden y perciban, siendo sin embargo las viudedades con arreglo al sueldo mayor que gozaron antes. 6.° Sufrirán ademas la contribucion establecida ó que se establezca sobre sueldos de empleados en la parte que no quede cubierta con la rebaja que se les hace por los artículos precedentes. 7.° Para los que no tengan doce años de servicio se establecerá la rebaja por una escala de progresion comparada con la regla establecida en el artículo 3.° para los que tengan mas sueldo de 6ɣ rs.; de suerte que perciban lo mismo que aquellos, en proporcion de los años de servicio de cada uno. 8.° Los jubilados existentes, y que lo hayan sido sin observar las reglas que van determinadas, se reducirán al haber que les toque por ellas, y á los mismos descuentos y contribucion sin diferencia alguna. 9.° El cesante ó jubilado que quiera capitalizar por reglas de vitalicios, consultando las tablas de la probabilidad de la vida, el sueldo que le corresponda, podrá hacerlo, y tomar por ello el competente documento para emplear en fincas ó bie-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nes nacionales; y el que lo ejecutase no podrá disfrutar si vuelve al servicio mas sueldo que la diferencia que haya entre el de su nuevo destino y el que correspondia al de su jubilacion. 10. En el caso que el gobierno nombre á alguno de los cesantes para cosa correspondiente á su rango en la esfera de empleados, á los que hayan servido en la Península dentro de ella, y en América á los que hayan servido alli y no quisiesen aceptarla, se quedarán sin el sueldo que gocen. 11. El gobierno consignará el pago de estos haberes ó sueldos sobre las tesorerias de las provincias que mejor le pareciere convenir al servicio, y á los que queden en la córte será precisamente sobre la tesoreria general, y de ninguna manera sobre correos, cruzada, loterías y demas rentas que se dirigen por separado, y que deben entrar íntegramente en tesoreria mayor, sin mas descuento que los gastos y sueldos de la renta misma, como está mandado. 12. El artículo anterior se pondrá tambien inmediatamente en ejecucion por lo que toca á pensiones, de cualquiera clase ó naturaleza que sean, cesando las consignaciones de toda especie que hasta aqui se hubiesen hecho contra el tenor de estas disposiciones, sin perjuicio de lo que las cortes resuelvan sobre las pensiones que hayan de quedar. 13. Para hacer aplicacion de todas estas reglas, y saber el *maximum* del sueldo á que pueden llegar los cesantes, se dividirán en dos clases: primera, jubilados por imposibilidad ó en premio de largos años de servicio; y segunda, reformados por supresion del destino en que han servido, para reponer otros, ó por el gobierno libremente. El *maximum* de la primera clase será de 40ų rs., y el de la segunda 30ų: 14. Se esceptuan de estas disposiciones los regulares que obtenian plaza en los tribunales de la estinguida inquisicion, los cuales no gozarán en adelante por ello sueldo ni pension alguna.

DECRETO.

DE 11 DE SETIEMBRE DE 1820.

Se establecen diferentes reglas para la sustanciacion de las causas criminales.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: 1.° Todos sin distincion alguna estan obligados, en cuanto la ley no les exima, á ayudar á las autoridades cuando sean interpelados por ellas para el descubrimiento, persecucion y arresto de los delincuentes. 2.° Toda persona, de cualquiera clase, fuero y condicion que sea, cuando tenga que declarar como testigo en una causa

criminal, está obligada á comparecer para este efecto ante el juez que conozca de ella, luego que sea citado por el mismo, sin necesidad de previo permiso del gefe ó superior respectivo. Igual autoridad tendrá para este fin el juez ordinario respectivo á las personas eclesiásticas y militares, que los jueces militares y eclesiásticos respecto á las de los otros fueros, los cuales no pueden ni deben considerarse perjudicados por el mero acto de decir lo que se sabe, como testigo, ante un juez autorizado por la ley. 3.° Toda persona en estos casos, cualquiera que sea su clase, debe dar su testimonio, no por certificacion ó informe, sino por declaracion bajo juramento en forma, que deberá prestar segun su estado respectivo ante el juez de la causa ó autorizado por este. 4.° Debiéndose entender que los desertores renuncian en el mero hecho á los fueros y privilegios de su clase, se declara que todo desertor del ejército ó de la armada, que solo ó acompañado cometa un delito, por el cual sea aprendido por la jurisdiccion ordinaria, debe ser juzgado sobre él por la misma jurisdiccion esclusivamente; pero si la sentencia que esta le impusiese no fuere de pena capital, deberá remitirlo despues con testimonio de ella al juez militar competente, para que conozca, y castigue el delito de desercion, segun se halla mandado. 5.° Si por delitos cometidos despues de su desercion resultase algun desertor complicado en causa de que conozcan jueces ordinarios, lo reclamarán estos de la autoridad militar, la cual les entregará el desertor para que lo juzguen y castiguen, aunque se haya vuelto á incorporar al cuerpo de que hubiese desertado, con arreglo á la resolucion de 19 de enero de 1795. 6.° Contribuyendo en gran manera á dilatar las causas criminales las competencias de jurisdiccion, maliciosas muchas veces, ó enteramente voluntarias por capricho de parte de algunos jueces, se declara que los que las promuevan y sostengan contra ley espresa y terminante incurren en la pena señalada por el artículo 7 de la ley de responsabilidad de 24 de marzo de 1813. El tribunal que dirima la competencia, conforme al de 19 de abril del mismo año, impondrá al tiempo de resolverla, y hará efectiva esta pena: ejecutándola irremisiblemente desde luego, sin perjuicio de que despues se oiga al juez que la sufra si reclamase. 7.° Los despachos, exhortos ú oficios que se libren para evacuacion de citas, prisiones ú otras diligencias, serán ejecutados por los jueces á quienes se cometan, sin pérdida de momento y con preferencia á todo. Los tribunales superiores y los jueces velarán mucho sobre esto, y castigarán irremisiblemente en sus respectivos subalternos cualquiera morosidad que adviertan. 8.° Siendo la evacuacion de citas impertinentes é inútiles un abuso introducido con grave perjuicio de la brevedad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de las causas, se declara por regla general, que los jueces no deben evacuar mas citas que aquellas que sean necesarias ó convenientes para la averiguacion de la verdad en el asunto de que se trate, observándose lo mismo en cuanto á careos, reconocimientos y demas diligencias de instruccion. 9.° En el caso de que por circunstancias particulares creyese el juez que no es conveniente al bien público encargar al alcalde del respectivo pueblo la evacuacion de alguna diligencia en causa criminal, podrá dar este encargo á otra persona de su confianza, no obstante lo prevenido en el artículo 10 del capítulo 3.° de la ley de 9 de octubre de 1812. 10. Como el único objeto de los sumarios es y debe ser la averiguacion de la verdad, averiguada que sea plenamente por la comprobacion del cuerpo del delito y por la confesion del reo, ó por el dicho conteste de testigos presenciales, de modo que se pueda dar cierta sentencia, debe terminarse el sumario, y procederse al plenario desde luego. 11. Los jueces, conforme á las leyes del reino, cuya observancia se les reencarga, no deben admitir á los reos pruebas sobre puntos que probados no pueden aprovecharles, y serán responsables de la dilacion y de las costas en caso contrario. 12. Asi los términos de ochenta y ciento y veinte dias como el ultramarino, señalados por las leyes para las probanzas, no son sino el *maximum* de los que pueden conceder los jueces. Pueden estos, y deben con arreglo á las mismas leyes, reducirlos tanto como prudentemente les parezca, segun la calidad de las causas y de las pruebas que se propongan, y segun las personas que hayan de ser examinadas, y la distancia de los lugares, negando las prórogas que maliciosamente ó sin verdadera necesidad pidan las partes. 13. La recepcion á prueba en todas las causas criminales debe ser con la precisa calidad de todos cargos. 14. Las tercerías dotales ó de dominio sobre los bienes embargados ó aprendidos á los reos, las averiguaciones de efectos pertenecientes á estos cuando hay embargo, y cualesquiera otros particulares independientes de la causa principal, no embarazará nunca el curso de esta, y deberán seguirse en piezas separadas. 15. En las causas de cómplices en que convenga hacer un pronto y saludable escarmiento, deberán los jueces proseguirlas y determinarlas rápidamente con respecto al reo ó reos principales que se hallen convencidos, sin perjuicio de continuar las averiguaciones en pieza separada para la averiguacion y castigo de los demas culpados. 16. Las audiencias por el medio que les concede el artículo 276 de la constitucion cuidarán eficacísimamente de promover la mas pronta administracion de justicia, teniendo presente lo dispuesto por la ley de 24 de marzo de 1813. 17. En las segundas y terceras instancias no concederán nunca

nuevo término de prueba, sino sobre hechos que la exijan, siendo de aquellos que sin malicia se dejaron de proponer en la primera instancia, ó que propuestos no fueron admitidos.

DECRETO.

DE 11 DE SETIEMBRE DE 1820.

Haciendo varias aclaraciones para poder proceder á la prision ó detencion de cualquier español.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: *Artículo* 1.° Para proceder á la prision de cualquier español, previa siempre la *informacion sumaria del hecho*, no se necesita que esta produzca una prueba plena ni semiplena del delito, ni de quién sea el verdadero delincuente. 2.° Solo se requiere que por cualquier medio resulte de dicha *informacion sumaria*: primero, el haber acaecido *un hecho que merezca, segun ley, ser castigado con pena corporal*; y segundo, que resulte igualmente algun motivo ó indicio suficiente, segun las leyes, para creer que tal ó tal persona ha cometido algun hecho. 3.° Si la urgencia ó la complicacion de circunstancias impidieren que se pueda verificar la *informacion sumaria del hecho*, que debe siempre preceder, ó el *mandamiento del juez por escrito*, que debe notificarse *en el acto mismo de la prision*, no podrá el juez proceder á ella; pero esto no impide que pueda mandar *detener* y custodiar, *en calidad* de detenida, á cualquiera persona que le parezca sospechosa, mientras hace con la mayor brevedad posible la precisa *informacion sumaria*. 4.° Esta detencion no es prision, ni podrá pasar á lo mas del término de veinte y cuatro horas; ni la persona asi detenida deberá ser puesta en la cárcel hasta que se cumplan los requisitos que exige el artículo 287 de la constitucion.

DECRETO.

DE 11 DE SETIEMBRE DE 1820.

Se previene que los jueces de primera instancia no puedan ejercer la abogacía, escepto en la defensa de sus propias causas con lo demas que se espresa.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: *Artículo* 1.° Ningun juez de primera instancia, bien sea propietario ó interino, puede ejercer la abogacía mientras desempeñe la judicatu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ra, escepto en la defensa de sus propias causas. 2.º Los mismos jueces, tanto propietarios como interinos, pueden reclamar del gobierno la dotacion de once mil reales que les señala el decreto de 9 de octubre de 1812, con tal que hayan ejercido su cargo en partidos formados por las juntas provisionales ó diputaciones provinciales, segun lo prescrito en los artículos 1.º 2.º, 4.º y 5.º del capítulo 2.º del mencionado decreto.

DECRETO.

DE 11 DE SETIEMBRE DE 1820.

Se prescribe la conducta de los gefes políticos y ayuntamientos con los que no tienen modo de vivir conocido, gitanos &c.

Las córtes, despues de haber observado las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: *Artículo* 1.º Los gefes políticos, alcaldes y ayuntamientos constitucionales deben velar muy eficazmente, y bajo su responsabilidad, acerca de los que no tienen empleo, oficio ó modo de vivir conocido, los cuales estan suspensos por la constitucion de los derechos de ciudadano. 2.º Los antes llamados gitanos, vagantes, ó sin ocupacion útil; los demas vagos, holgazanes y mal entretenidos, calificados en la real órden de 30 de abril de 1745, y en el real decreto de 7 de mayo de 1775 (ley 7, título 31, libro 12 de la Novísima Recopilacion, y su nota 6.ª), serán perseguidos y presos, previa la informacion sumaria que justifique sus malas calidades; y sin dárseles mas que ocho dias precisos para probar sus escepciones en el modo que previene el artículo 14 de dicho real decreto, serán destinados por via de correcion á las casas de esta clase, ó á las de misericordia, hospicios, arsenales, ó cualesquiera otros establecimientos en que puedan trabajar sin hacerse peores ni ser gravosos al estado, escluyéndose los presidios de Africa. Tambien podrán ser destinados á las obras públicas de los pueblos respectivos, ó de los mas inmediatos en que las haya. 3.º Estas penas correccionales no podrán pasar de dos años; dejándose al prudente arbitrio de los jueces imponerlas por menos tiempo, segun los casos y las circunstancias de las personas: y nunca se ejecutarán sin consultar antes la determinacion con el proceso original, á la audiencia de la provincia, la cual deberá confirmarla, revocarla ó modificarla en el preciso término de octavo dia, oyendo al fiscal y á la parte. 4.º Los que reincidan despues de haber sido corregidos una vez, sufrirán irremisiblemente una pena doble de la que se les impuso en la primera sentencia.

DECRETO.

DE 13 DE SETIEMBRE DE 1820.

Aumento de sueldo y prest á los oficiales y tropa que se espresan, y licencias que podrán concederse á las clases desde coronel á subteniente inclusive.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado lo siguiente: 1.º Los individuos de todos los cuerpos del ejército, desde la clase de soldado hasta la de teniente inclusive, disfrutarán desde el dia primero de octubre proximo el aumento de sueldo mensual que á continuacion se espresa.

El teniente y ayudante subalterno ciento y veinte reales, el subteniente ciento, el sargento primero cuarenta, el sargento segundo diez y ocho, el cabo primero ocho, el cabo segundo cinco, y el soldado, tambor, pito, corneta y trompeta tres reales y diez ocho maravedís.

2.º Se concederá licencia temporal indefinida con medio sueldo á todo oficial efectivo, agregado ó supernumerario, desde coronel á subteniente inclusive, que la solicite dentro del término que fijará el gobierno.

3.º Los oficiales que disfruten estas licencias cobrarán mensualmente sus haberes por las cajas de sus cuerpos, ó por las tesorerías de ejército en las provincias en que fijen su residencia, segun mas les acomode.

4.º Si el número de licencias que se pidan fuese mayor que el de los oficiales sobrantes de cada clase en las respectivas armas, solo disfrutarán esta gracia los primeros que la soliciten, hasta que su número sea igual al de los sobrantes, debiendo quedar siempre presente en cada cuerpo la dotacion completa de oficiales que señalen los reglamentos.

5.º Se concederán estas licencias indefinidas para todas las provincias de la Península é islas adyacentes, escepto la de Madrid, donde solo podrán disfrutarla los naturales ó establecidos en ella.

6.º Las vacantes que vayan resultando se proveerán interinamente con los oficiales sobrantes de los mismos cuerpos.

7.º Concluido el término que se prefije para solicitar estas licencias, se reemplazarán en propiedad las vacantes con los oficiales que permanezcan en los cuerpos, formándose para ello una escala general de cada arma con arreglo á los reglamentos que rigen, ó en adelante rigieren.

8.º Verificado este primer reemplazo, se formará en iguales

términos una escala general de todos los oficiales sobrantes de cada arma, comprensiva de los que permanezcan en los cuerpos, y de los que usen licencia indefinida para reemplazar por ella las nuevas vacantes que ocurran; por manera que los que disfruten licencia no sufrirán jamás ningun perjuicio, ni para ser reemplazados en plazas efectivas, ni mucho menos para ser ascendidos cuando les corresponda.

9.° El oficial que no se presente en el término perentorio que se le señale cuando le toque ser reemplazado, ó en cualquier otro caso que el gobierno se lo mande, recibirá su retiro con arreglo á los reglamentos vigentes, que se formen en lo sucesivo.

ORDEN.

Se manda admitir por el supremo tribunal de justicia la súplica que Doña Maria Ines de Jáuregui, viuda del teniente general D. José de Iturrigaray, interpuso en el estinguido consejo de Indias.

Exmo. sr.=En vista de una instancia de Doña Maria Ines de Jáuregui, viuda del teniente general D. José de Iturrigaray, virey que fue de Nueva-España, pidiendo se declare debérsele admitir en el supremo tribunal de justicia la súplica que en el estinguido consejo de Indias interpuso de la sentencia dictada en él á consecuencia de la que se pronunció en México en el juicio de residencia del espresado su marido; han resuelto las córtes, que por el tribunal supremo de justicia se admita dicha súplica. Madrid 25 de setiembre de 1820.

DECRETO.

DE 27 DE SETIEMBRE DE 1820.

Supresion de toda especie de vinculaciones.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: *Artículo* 1.° Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos, y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raices, muebles, semovientes, censos, juros, foros ó de cualquiera otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora á la clase de absolutamente libres. 2.° Los poseedores actuales de las vinculaciones suprimidas en el artículo anterior podrán desde luego disponer libremente como propios de la mitad de los bienes en que aquellas consistieren; y despues de su muerte pasará la otra mitad al que debia suceder inmediatamente en el mayorazgo, si subsistiese,

para que pueda tambien disponer de ella libremente como dueño. Esta mitad que se reserva al sucesor inmediato no será nunca responsable á las deudas contraidas ó que se contraigan por el poseedor actual. 3.° Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el artículo precedente, siempre que el poseedor actual quiera enagenar el todo ó parte de su mitad de bienes vinculados hasta ahora, se hará formal tasacion y division de todos ellos con rigurosa igualdad, y con intervencion del sucesor inmediato; y si este fuere desconocido, ó se hallare bajo la pátria potestad del poseedor actual, intervendrá en su nombre el procurador síndico del pueblo donde resida el poseedor, sin exigir por esto derechos ni emolumento alguno. Si faltasen los requisitos espresados, será nulo el contrato de enagenacion que se celebre. 4.° En los fideicomisos familiares, cuyas rentas se distribuyen entre los parientes del fundador, aunque sean de líneas diferentes, se hará desde luego la tasacion y repartimiento de los bienes del fideicomiso entre los actuales perceptores de las rentas á proporcion de lo que perciban, y con intervencion de todos ellos; y cada uno en la parte de bienes que le toque podrá disponer libremente de la mitad, reservando la otra al sucesor inmediato para que haga lo mismo, con entero arreglo á lo prescrito en el artículo 3.° 5.° En los mayorazgos, fideicomisos ó patronatos electivos, cuando la eleccion es absolutamente libre, podrán los poseedores actuales disponer desde luego como dueños del todo de los bienes; pero si la eleccion debiese recaer precisamente entre personas de una familia ó comunidad determinada, dispondrán los poseedores de sola la mitad, y reservarán la otra para que haga lo propio el sucesor que sea elegido; haciéndose con intervencion del procurador síndico la tasacion y division prescritas en el artículo 3.° 6.° Asi en el caso de los dos precedentes artículos como en el del 2.°, se declara que en las provincias ó pueblos en que por fueros particulares se halla establecida la comunicacion en plena propiedad de los bienes libres entre los cónyuges, quedan sujetos á ella de la propia forma los bienes hasta ahora vinculados, de que como libres puedan disponer los poseedores actuales, y que existan bajo su dominio cuando fallezcan. 7.° Las cargas, asi temporales como perpetuas, á que estén obligados en general todos los bienes de la vinculacion sin hipoteca especial, se asignarán con igualdad proporcionada sobre las fincas que se repartan y dividan, conforme á lo que queda prevenido, si los interesados de comun acuerdo no prefiriesen otro medio. 8.° Lo dispuesto en los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° no se entiende con respecto á los bienes hasta ahora vinculados, acerca de los cuales pendan en la actualidad juicios de incorporacion ó reversion á la nacion, tenuta, administracion, posesion, propiedad, incompatibilidad, incapacidad de poseer,

nulidad de la fundacion, ó cualquiera otro que ponga en duda el derecho de los poseedores actuales. Estos en tales casos, ni los que les sucedan no podrán disponer de los bienes hasta que en última instancia se determinen á su favor en propiedad los juicios pendientes, los cuales deben arreglarse á las leyes dadas hasta este dia, ó que se dieren en adelante. Pero se declara para evitar dilaciones maliciosas, que si el que perdiese el pleito de posesion ó tenuta no entablase el de propiedad dentro de cuatro meses precisos contados desde el dia en que se le notificó la sentencia, no tendrá despues derecho para reclamar, y aquel en cuyo favor se hubiese declarado la tenuta ó posesion, será considerado como poseedor en propiedad, y podrá usar de las facultades concedidas por el artículo 2.° 9.° Tambien se declara que las disposiciones precedentes no perjudican á las demandas de incorporacion y reversion, que en lo sucesivo deban restaurarse, aunque los bienes vinculados hasta ahora hayan pasado como libres á otros dueños. 10. Entiéndase del mismo modo que lo que queda dispuesto es sin perjuicio de los alimentos ó pensiones que los poseedores actuales deban pagar á sus madres viudas, hermanos, sucesor inmediato ú otras personas, con arreglo á las fundaciones, ó á convenios particulares, ó á determinaciones en justicia. Los bienes hasta ahora vinculados, aunque pasen como libres á otros dueños, quedan sujetos al pago de estos alimentos y pensiones mientras vivan los que en el dia los perciben, ó mientras conserven el derecho de percibirlos, escepto si los alimentistas son sucesores inmediatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos luego que mueran los poseedores actuales. Despues cesarán las obligaciones que existan ahora de pagar tales pensiones y alimentos; pero se declara, que si los poseedores actuales no invierten en los espresados alimentos y pensiones la sesta parte líquida de las rentas del mayorazgo, están obligados á contribuir con lo que quepa en ella para dotar á sus hermanas y auxiliar á sus hermanos, con proporcion á su número y necesidades; é igual obligacion tendrán los sucesores inmediatos por lo respectivo á la mitad de bienes que se les reservan. 11 La parte de renta de las vinculaciones que los poseedores actuales tengan consignada legítimamente á sus mugeres para cuando queden viudas, se pagará á estas mientras deban percibirla, segun la estipulacion, satisfaciéndose la mitad á costa de los bienes libres que deje su marido, y la otra mitad por la que se reserva al sucesor inmediato. 12. Tambien se debe entender que las disposiciones precedentes no obstan para que en las provincias ó pueblos en que por fuero particular se suceden los cónyuges uno á otro en el usufruto de las vinculaciones por via de viudedad, lo ejecuten asi los que en el dia se hallan casados por lo relativo á

los bienes de la vinculacion, que no hayan sido enagenados cuando muera el cónyuge poseedor, pasando despues al sucesor inmediato la mitad íntegra que le corresponde, segun queda prevenido. 13. Los títulos, prerogativas de honor, y cualesquiera otras preeminencias de esta clase que los poseedores actuales de vinculaciones disfrutan como anexas á ellas, subsistirán en el mismo pie y seguirán el órden de sucesion prescrito en las concesiones, escrituras de fundacion, ú otros documentos de su procedencia. Lo propio se entenderá por ahora con respecto á los derechos de presentar para piezas eclesiásticas ó para otros destinos, hasta que se determine otra cosa. Pero si los poseedores actuales disfrutasen dos ó mas grandezas de España ó títulos de Castilla, y tuviesen mas de un hijo, podrán distribuir entre estos las espresadas dignidades, reservando la principal para el sucesor inmediato. 14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por via de mejora, ni por otro título ni pretesto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pia, ni vinculacion alguna sobre ninguna clase de bienes ó derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su enagenacion. Tampoco podrá nadie vincular acciones sobre bancos ú otros fondos estrangeros. 15. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera comunidades eclesiásticas, asi seculares como regulares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de enseñanza, las cofradías, hermandades, encomiendas y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos ó laicales, conocidos con el nombre de *manos muertas*, no puedan desde ahora en adelante adquirir bienes algunos raices ó inmuebles en provincia alguna de la monarquía, ni por testamento, ni por donacion, compra, permuta, decomiso en los censos enfitéuticos, adjudicacion en prenda pretoria ó en pago de réditos vencidos, ni por otro título alguno, sea lucrativo ú oneroso. 16. Tampoco puedan en adelante las *manos muertas* imponer ni adquirir por título alguno, capitales de censo de cualquiera clase impuestos sobre bienes raices, ni impongan ni adquieran tributos ni otra especie de gravámen sobre los mismos bienes, ya consista en la prestacion de alguna cantidad de dinero ó de cierta parte de frutos, ó de algun servicio á favor de la *mano muerta*, y ya en otras responsiones anuales.

DECRETO.

DE 1.° DE OCTUBRE DE 1820.

Supresion de monacales y reforma de regulares.

Las cortes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: *Artí-*

culo 1.° Se suprimen todos los monasterios de las órdenes monacales; los de canónigos reglares de S. Benito, de la congregacion claustral Tarraconense y Cesaraugustana, los de S. Agustin y los Premostratenses; los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; los de la de S. Juan de Jerusalén; los de la de S. Juan de Dios y Betlemitas, y todos los demas de hospitalarios de cualquier clase. 2.° Para conservar la permanencia del culto divino en algunos santuarios célebres desde los tiempos mas remotos, el gobierno podrá señalar el preciso número de ocho casas, y dejarlas al cargo de los monges que tenga por conveniente; pero con sujecion al ordinario respectivo y al prelado superior local que eligieren los mismos, y con prohibicion de dar hábitos y profesar novicios: proveyendo á la subsistencia de los individuos por los medios que espresan los artículos 5.° y 6.°, y al culto con la cuota que estime necesaria. 3.° Los beneficios unidos á los monasterios y conventos que se suprimen por esta ley quedan restituidos á su primitiva libertad y provision real y ordinaria respectivamente; pero los actuales poseedores de curatos, prebendas, encomiendas, oficios ú otras cualesquiera piezas de presentacion real, continuarán en el ejercicio y disfrute de ellas, y en el pago de pensiones alimenticias con que se hallen gravadas á favor de individuos, depositando en tesoreria las de otra naturaleza, previa la correspondiente liquidacion y examen. 4.° Los méritos contraidos en sus respectivos institutos, y las graduaciones que hayan obtenido en ellos los religiosos, serán atendidos muy particularmente por el gobierno en la provision de arzobispados, obispados, prebendas y demas beneficios eclesiásticos. 5.° A todo monge ordenado *in sacris*, que no pase de cincuenta años al tiempo de la publicacion del presente decreto, se abonarán anualmente trescientos ducados; al que esceda de cincuenta, pero no llegue á sesenta, se le obonarán cuatrocientos; y seiscientos á los mayores de sesenta. 6.° Los demas monges profesos percibirán anualmente cien ducados, no llegando á la edad de cincuenta años, y doscientos si pasaren. Quedan ademas habilitados para obtener empleos civiles en todas las carreras, asi como estarán sujetos á las cargas de legos. 7.° Los dos artículos anteriores se aplicarán respectivamente en su caso á los freires de las órdenes militares é individuos conventuales de obediencia de la de S. Juan de Jerusalén, y á los comendadores hospitalarios. A los de S. Juan de Dios, y á los betlemitas y demas hospitalarios, bien sean sacerdotes ó legos, se abonarán doscientos ducados, sin distincion de edad; y ciento á los donados profesos. 8.° Las asignaciones señaladas en los tres artículos precedentes

cesarán desde el momento en que sus poseedores obtengan renta eclesiástica ó del estado mayor ó igual á la de la pension; pero si fuese menor, continuarán percibiendo la diferencia, 9.° En cuanto á los demas regulares la nacion no consiente que existan sino sujetos á los ordinarios. 10. No se reconocerán mas prelados regulares que los locales de cada convento, elegidos por las mismas comunidades. 11. Si el gobierno considerase conveniente la concurrencia de la autoridad eclesiástica para la mas fácil ejecucion de los dos artículos anteriores, dictará al efecto las providencias oportunas. 12. No se permite fundar ningun convento, ni dar por ahora ningun hábito, ni profesar á ningun novicio. 13. El gobierno protegerá por todos los medios que esten en sus facultades la secularizacion de los regulares que la soliciten, impidiendo toda vejacion ó violencia de parte de sus superiores; y promoverá que se les habilite para obtener prebendas y beneficios con cura de almas ó sin ella. 14. La nacion dará cien ducados de cóngrua á todo religioso ordenado *in sacris* que se secularice, la cual disfrutará hasta que obtenga algun beneficio ó renta eclesiástica para subsistir. 15. El religioso que quiera secularizarse se presentará por sí ó por medio de apoderado al gefe superior político de la provincia de su residencia para que le acredite la cóngrua de que habla el artículo anterior. 16. No podrá haber mas que un convento de una misma órden en cada pueblo y su término, esceptuando el caso estraordinario de alguna poblacion agrícola que haga parte del vecindario de una capital, y que á juicio del gobierno necesite la la conservacion de algun convento que hubiese en el campo, hasta que se erija la correspondiente parroquia. 17. La comunidad que no llegue á constar de veinte y cuatro religiosos ordenados *in sacris* se reunirá con la del convento mas inmediato de la misma órden, y se trasladará á vivir en él; pero en el pueblo donde no haya mas que un convento, subsistirá este si tuviere doce religiosos ordenados *in sacris*. 18. Si la comunidad á que se reuniere la mas inmediata no tuviese rentas suficientes para mantener los individuos de entrambas, deberá el gobierno asignarla sobre el crédito público el situado que juzgue necesario. 19. El gobierno resolverá las dudas sobre supresion ó permanencia de algunos conventos, á que pudiesen dar lugar los dos artículos anteriores, consultando siempre la conveniencia del público y la de los mismos religiosos. 20. Por ahora, y hasta que el congreso resuelva sobre los planes de instruccion pública y de misiones, los clérigos reglares de las escuelas pias y el colegio de misioneros para las provincias de Asia que existe en Valladolid quedan esceptuados de lo dispuesto en el artículo

17, y de la parte del 12 que prohibe dar hábitos y profesar novicios. Y la sujecion al ordinario, de que habla el artículo 9.°, se entenderá para con los esculapios sin perjuicio de la traslacion de maestros de una casa á otra, y demas relativo á su régimen económico literario, segun lo exija el mejor desempeño de su instituto, y juzgue conveniente el gobierno. 21. Los artículos 9.°, 10, 12 y 13 se estienden tambien á los conventos y comunidades de religiosas en su caso y lugar; y cada una de las que se secularicen disfrutará doscientos ducados anuales de pension. 22. Los ducados de que hablan el artículo anterior y los artículos 5.°, 6.° y 14 se entenderán pesos fuertes para las provincias de ultramar. 23. Todos los bienes muebles é inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se suprimen ahora, ó que se supriman en lo sucesivo en virtud de los artículos 16, 17, 19 y 20, quedan aplicados al crédito público; pero sujetos como hasta aqui á las cargas de justicia que tengan, asi civiles como eclesiásticas. 24. Si alguna de las comunidades religiosas de ambos sexos que deben subsistir resultase tener rentas superiores á las precisas para su decente subsistencia y demas atenciones de su instituto, se aplicarán al crédito público todos sus sobrantes. 25. Todo regular que se secularice, ó cuya casa quede suprimida, podrá llevar consigo los muebles de su uso particular. 26. El gobierno podrá destinar para establecimientos de utilidad pública los conventos suprimidos que crea mas á propósito. 27. Los gefes políticos custodiarán todos los archivos, cuadros, libros y efectos de biblioteca de los conventos suprimidos, y remitirán inventarios al gobierno, quien los pasará originales á las cortes, para que estas destinen á su biblioteca lo que tengan por conducente, segun el reglamento aprobado por las ordinarias. 28. Será cargo del gobierno aplicar el residuo de los efectos mencionados en el artículo anterior á las bibliotecas provinciales, museos, academias y demas establecimientos de instruccion pública. 29. Queda al arbitrio de los respectivos ordinarios disponer en favor de las parroquias pobres de sus diócesis de los vasos sagrados, alhajas, ornamentos, imágenes, altares, órganos, libros de coro y demas utensilios pertenecientes al culto. 30. Los ordinarios eclesiasticos podrán, con la aprobacion del gobierno, habilitar interinamente, y hasta la nueva division de parroquias, las iglesias que resulten vacantes, y se juzguen precisas para la cura de almas.

DECRETO.

DE 2 DE OCTUBRE DE 1820.

Asegurando el derecho de propiedad á los que inventen perfeccionen ó introduzcan algun ramo de industria.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: *Artículo* 1.° Todo el que invente, perfeccione ó introduzca un ramo de industria tiene derecho á su propiedad por término, y bajo las condiciones que esta ley le señala. *Art.* 2.° Al gobierno no le toca examinar si los inventos, perfecciones ó introducciones son ó no útiles, sino solamente si son contrarios á las leyes, á la seguridad pública, á las buenas costumbres, ó á las órdenes ó reglamentos; y no siéndolo, no puede negar su proteccion al que se crea inventor, perfeccionador ó introductor. *Art.* 3.° El que invente, perfeccione, mejore ó introduzca algun ramo de industria, si quiere que el gobierno le asegure su propiedad, presentará ante el ayuntamiento de su domicilio, ó ante el gefe político de la provincia, la descripcion esacta, acompañada de los dibujos, modelos y cuanto juzgue necesario para la esplicacion del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades estarán obligadas á darle un testimonio en relacion de todo, segun el modelo número 1. *Art* 4.° La autoridad local estará obligada á remitir este espediente con todos sus documentos al gefe político de la provincia, y este al secretario de la gobernacion, en el término mas corto posible, bajo su responsabilidad á los perjuicios que puedan resultar de la detencion. *Art.* 5.° El inventor, perfeccionador ó introductor, al tiempo de pedir la proteccion de la autoridad, presentando los documentos de que habla el artículo 3.°, entregará mil reales en el primer caso, setecientos en el segundo, y quinientos en el tercero: estas cantidades se pasarán á las respectivas tesorerías de provincia *Art.* 6.° Recogido el testimonio de que habla el artículo 3.°, y hecha la entrega de que habla el 5.°, el inventor, perfeccionador ó introductor establecido en las provincias de ultramar podrá comenzar á usar de su invencion, perfeccion ó introduccion, sin perjuicio de proveerse del certificado del gobierno. *Art.* 7.° El secretario de la gobernacion está obligado á espedir al inventor, perfeccionador ó introductor el certificado correspondiente, segun el modelo número 2., dirigiéndoselo por conducto del gefe político y ayuntamiento local, sin preceder para ello otro examen ni reconocimiento que el designado en el artículo 2.° *Art.* 8.° Este certificado contendrá una copia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

esacta de los documentos y dibujos qua haya presentado el interesado, y las descripciones de los modelos. *Art.* 9.° Al tiempo de recoger del ayuntamiento ó del gefe político el inventor, perfeccionador ó introductor el certificado que le haya espedido el secretario de la gobernacion, entregará otra cantidad igual á la que entregó al tiempo de pretender dicho certificado: estas cantidades pasarán á las respectivas tesorerías de provincia, segun se ha dicho para las del artículo 5.° *Art.* 10. Los espedientes originales de invencion, perfeccion ó introduccion se pasarán despues de concluidos al establecimiento de la direccion del fomento general del reino, y en adelante donde deban corresponder; y alli quedarán depositados, registrándolos por orden numérico, segun sus fechas, en un libro que se llevará al efecto. *Art.* 11 En el caso que á juicio del inventor haya razones políticas ó comerciales que exijan el secreto de su descubrimiento, presentará directamente su peticion con los motivos en que funda el secreto al gefe de la direccion del fomento general del reino, ó al que en adelante determine el gobierno, el cual hará trasladar á presencia suya, y por mano del interesado, ó de persona de su confianza, las descripciones en un registro particular, que se cerrará y sellará, y permanecerá asi el tiempo que haya de durar secreto, poniendo en el sobre ó cubierta el nombre del inventor, la fecha, y los objetos que encierra el paquete, y dando al inventor una copia de esta relacion, á fin de que en virtud de ella se le espida por el secretario de la gobernacion el certificado correspondiente que le asegure la propiedad. *Art.* 12. El gefe de la direccion del fomento general del reino cuidará de que toda invencion, perfeccion ó introduccion, cuyo depósito le confie el gobierno, se publique inmediatamente en la gaceta, á fin de que llegue á noticia de todos, y ademas estará obligado á manifestar á todo el que lo solicite el catálogo ó registro de todos los certificados espedidos, y las cubiertas de las invenciones a fin de que cualquiera pueda juzgar si debe decidirse á pedir certificado de alguna invencion, mejora ó introduccion que piense haber hecho. *Art.* 13. Los certificados de invencion tendrán fuerza y vigor durante diez años; los de mejora durante siete, y las de introduccion durante cinco, contados desde el dia de la fecha del certificado; y solo á propuesta del gobierno aprobada por las córtes, podrán esceder de este término; el cual nunca se estenderá á mas de quince años para los primeros, diez para los segundos, y siete para los terceros. *Art.* 14. Todo inventor tiene derecho á mejorar su invencion, bajo los mismos trámites y formalidades prescritas para las mejoras. *Art.* 15. Toda persona tiene derecho á perfeccionar la invencion de otro; pero no á usar de la invencion principal sin concertarse para

ello con el inventor, asi como tampoco el inventor á usar de las perfecciones y mejoras hechas por otro sin concertarse con el perfeccionador. *Art.* 16. Por inventor se entiende aquel que hace por primera vez una cosa que hasta entonces no se habia hecho, ó se habia hecho de otro modo; y por mejorador el que añade, quita ó varía algo esencial á las invenciones, con el objeto de hacerlas mas útiles. Por consiguiente será inventor el que idee una máquina, aparato ó procedimiento desconocido; lo será tambien el que haga la aplicacion de las invenciones á mecanismos ó métodos ya conocidos; pero no lo será el que haga la aplicacion de cosas ya conocidas á mecanismos ó métodos conocidos tambien. *Art.* 17. En caso de contestacion, si hubiese una semejanza absoluta entre dos descubrimientos, será válido el que se haya presentado antes á la autoridad local ó de provincia; pero si hubiese desemejanza, el posterior se considerará como mejora, sin pagar por ello nueva contribucion. *Art.* 18 Los certificados de invencion, mejora ó introduccion no pueden recaer ni sobre las formas, ni sobre las proporciones indiferentes al objeto, ni sobre los adornos de cualquiera género que sean. *Art.* 19. El propietario de una invencion, mejora ó introduccion podrá ceder su derecho en todo ó parte, unirse en sociedad, vender, permutar ó contratar en los términos establecidos por las leyes para los contratos. *Art.* 20. El propietario de una invencion, mejora ó introduccion tiene el derecho de perseguir ante los tribunales civiles á cualquiera que le turbe en el uso esclusivo de su propiedad. *Art* 21. El certificado del secretario de la gobernacion será el título de propiedad del inventor, mejorador ó introductor, y por tanto obrarán en su favor ó en contra las descripciones, planes, modelos y demas que haya presentado. *Art.* 22. Las penas que el tribunal impondrá á actores ó reos se limitarán á las costas del proceso, y á los perjuicios cuando no haya intervenido mala fe; y á las costas y al cuatro tantos del perjuicio cuando el actor ó el reo hayan procedido de mala fe. *Art.* 23 Los privilegios concedidos antes de esta época por invenciones, perfecciones ó introducciones gozarán de la proteccion que concede este decreto, hasta cumplir el tiempo que en él se señala, comenzando á contarlo desde la época de la concesion. Los agraciados tendrán que evacuar las diligencias que se prescriben, y proveerse del correspondiente certificado; pero sin pagar derecho alguno. *Art.* 24. El inventor, mejorador ó introductor dejan de considerarse como propietarios: primero, si ceden en beneficio público su derecho: segundo, si dejan transcurrir seis meses sin recoger el certificado; y tercero, si dejan pasar dos años sin poner en ejecucion su invento, perfeccion ó mejora. *Art.* 25. El que trate de llevar á efecto cual

quier invencion ó mejora, y tema que por haber de valerse de manos intermedias, por ser precisos ensayos en público, ó por otro cualquier motivo haya quien se le anticipe á reclamar su propiedad, podrá consignar en manos del gefe político de la provincia su pensamiento, espresándolo de manera que se dé una idea clara del objeto; y el gefe político, sin exigirle por esto contribucion alguna, le dará un testimonio ó certificado de ello, y le prescribirá el tiempo necesario para la ejecucion, el cual no escederá de seis meses. Durante ellos se decidirá el aspirante á solicitar ó no la patente, y no se le podrá anticipar otro á reclamar la propiedad.

NUMERO 1.

Modelo de una certificacion de depósito.

F... alcalde del ayuntamiento, ó gefe político de T... certifico: que hoy dia tantos, de tal mes y año F. de T. me ha (ó F. de T. y F. de T. me han) entregado un paquete cerrado y sellado, que segun ha (ó han) dicho, contiene todas las piezas descriptivas (aquí espondrá fielmente el objeto de que se trata, y esta esposicion será el rótulo que acto continuo se pondrá al paquete, con el nombre del inventor, y el dia y hora de su entrega). Habiéndome dicho que es (ó son) inventor (ó inventores), perfeccionador (ó perfeccionadores), introductor (ó introductores), ha (ó han) puesto en mi poder la suma de mil rs. (setecientos ó quinientos), recomendándome haga pasar al gobierno este espediente cuanto antes sea posible, á fin de obtener el certificado correspondiente, y ha (ó han) firmado conmigo por duplicado el presente, recogiendo uno y dejando otro en esta secretaria.

NUMERO 2.

Modelo de certificacion de invencion.

D. Fernando VII por la gracia de Dios y por la constitucion de la monarquia española rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que habiéndonos declarado (F. ó FF.) ser inventor (ó inventores), perfeccionador (ó perfeccionadores), introductor (ó introductores), segun resulta del memorial que acompaña al paquete que nos ha remitido el gefe político de T. parte, con los documentos, planes, dibujos y descripciones del tenor y copia siguiente. (Aqui se copiarán las descripciones, planos y dibujos, y se hará mencion de si acompañan modelos). Aseguramos por el presente decreto á F. (ó FF.)

la propiedad de su invencion (mejora ó introduccion), en los términos y por el tiempo que prescribe la ley en todos los dominios de la monarquia española: sirviéndole de justo título este decreto, que se le (ó se les) entregará y satisfará (ó satisfarán) en el acto de recogerlo igual cantidad á la que entregaron al tiempo de solicitarlo. Por tanto &c.

DECRETO.

DE 8 DE OCTUBRE DE 1820.

Se estinguen las matrículas de mar, y se establecen las reglas para la navegacion y pesca, y servicio militar de marina.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: *Artículo* 1.° Todos los españoles tendrán libertad de navegar y pescar en todos los mares y rios, y de trabajar en todos los puertos y costas del mar para la habilitacion, estiva, carga y descarga de los buques, y en todos los objetos del ejercicio de la marina, con sujecion á las reglas establecidas ó que en adelante se establecieren para mayor fomento y seguridad de la navegacion y de la pesca. 2.° Todos los que quieran usar de esta libertad, y aprovecharse de las utilidades de la profesion ó del ejercicio de la marina, deberán hacer escribir su nombre y apellido, edad, naturaleza y pueblo de su residencia en la lista especial de hombres de mar, que estará á cargo de los ayuntamientos mas inmediatos al mar en los distritos donde respectivamente ejerzan la profesion marítima. Recibirán y conservarán una boleta espresiva de las mismas calidades sentadas en la lista, y demas circunstancias esenciales, autorizadas por el alcalde primero constitucional y un celador de mar de los que establece el artículo 11; cuyas boletas se entregarán y renovarán cada año despues de las convocatorias sin coste alguno de los hombres de mar, esceptuándose de escribirse en la clase de tales los terrestres, que como los hombres de mar podrán pescar en el interior de los rios hasta la embocadura del mar en el punto que en cada uno de aquellos fijarán las diputaciones provinciales, oyendo á los respectivos ayuntamientos, y los que desde tierra pesquen en el mar sin auxilio de barco ó por mera diversion, sin emplearse en otros actos de la profesion marítima. 3.° Los hombres de mar cuyos nombres esten escritos en la forma dicha, y quieran trasladarse á otro pueblo ó distrito, podrán hacerlo sin mas requisito que el de participarlo al ayuntamiento en que esten escritos para que cons-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

te; y presentarán la boleta para escribirse en la lista del pueblo á que se trasladen, sin que por ellos se les causen gastos ni detenciones. 4.° Todos los hombres de mar cumplirán la obligacion comun á todos los españoles del servicio militar, haciéndolo en la armada naval cuando sean llamados por la ley, y serán esentos de él en tierra. 5.° Hasta la edad de 18 años podrán todos los españoles aprovecharse de las utilidades del mar sin estar obligados al servicio militar naval; pero lo estarán si despues de cumplida dicha edad continúan en el aprovechamiento de esta carrera. 6.° Se declaran esceptuados del servicio personal militar naval sin sujecion al de tierra: primero, los capitanes ó patrones que fueren propietarios de un buque cualquiera que sea su tamaño, con tal de que se ocupen en él cuatro hombres, incluso el propietario, y navegue este ó pesque con el mismo buque, mas no si fuere con otro; y segundo, los empresarios capitaces de cualquier especie de pesca en grande, ó sean armadores de las grandes pesquerías, que serán protegidas por el gobierno; entendiéndose esta escepcion mientras las tengan en ejercicio. 7.° La profesion marítima no priva á ningun hombre de mar del ejercicio de cualquiera otra industria terrestre. 8.° La obligacion de concurrir al servicio de la marina militar cuando sean llamados legalmente los hombres de mar se circunscribe á la edad desde diez y ocho á cuarenta años cumplidos, sin que despues de esta deba ningun hombre de mar servir, á no ser en pena de desercion, ó de haber defraudado su obligacion del servicio militar. 9.° Mientras que los hombres de mar esten en el servicio efectivo de la marina militar, lo cual se entiende desde que lleguen al departamento ó apostadero adonde sean convocados, hasta que se les espida su licencia, gozarán del fuero militar, y estarán sujetos á la ordenanza y disciplina de la armada, como igualmente á las leyes penales marítimas establecidas en las ordenanzas vigentes, ó que se establecieren, singularmente las espresadas en el título XIV de la ordenanza de matrículas de 12 de agosto de 1802, por ahora, y en cuanto no se opongan al presente decreto, ni á la jurisdiccion ordinaria de los distritos en que se cometan los delitos, ó se aprehendan los que sean delincuentes fuera del servicio militar de la armada. No estando en dicho servicio efectivo no gozarán de privilegio alguno, de fuero militar ni esencion de ninguna especie, y participarán de los derechos y de las obligaciones comunes á los demas españoles, sin perjuicio de lo prevenido en este decreto. 10. Ningun hombre de mar podrá continuar gozando de los beneficios de la profesion marítima, ni quedar libre del servicio militar de tierra, sin haber hecho por sí ó por suplente á costa suya, ó de quien por él la presente, las campañas que le toquen, si fuere llamado en la edad prescrita de diez y ocho á cuarenta años; pero despues de haber hecho una campaña podrá retirarse, quedando privado de los beneficios del mar, y precisado á cumplir en el ejército la obligacion del servicio militar; pues de lo contrario deberá cumplirla en la armada. 11. Luego que los alcaldes y ayuntamientos reciban este decreto procederán á formar listas de los hombres de mar, convocando todos los de su distrito para el primer dia festivo. Los que asistieren, presididos por los mismos alcaldes y ayuntamientos, nombrarán á pluralidad de votos, en escrutinio secreto, celadores de su profesion ó de otras que sean de su confianza, en número igual al de los regidores del respectivo ayuntamiento. 12. Las facultades de los celadores de mar serán las de concurrir con voz y voto en el ayuntamiento á la formacion, conservacion y rectificacion de las listas de hombres de mar, de intervenir las boletas de que trata el artículo 2.°, de asistir á todos los actos de las convocatorias y á las disposiciones para el cumplimiento del servicio militar de marina y apronto del contingente respectivo, y á los demas actos que interesen á los hombres de mar, con sujecion á la observancia de los artículos de este decreto. Será del cargo de los celadores, bajo la mas estrecha responsabilidad, que en sus distritos no se utilice de la profesion de los hombres de mar ninguno que no esté alistado como tal, escitando á los alcaldes y ayuntamientos para las providencias convenientes contra los infractores de este decreto, y no tolerar los que sean desertores de la armada, ó que se hayan substraido de las convocatorias, haciendo prender á unos y otros para que sean conducidos y entregados á los capitanes de puerto, á fin de que sufran las penas establecidas ó que en adelante se establecieren en las ordenanzas de la armada. Por último, estarán particularmente obligados los celadores á promover en los ayuntamientos las reclamaciones contra las retenciones arbitrarias ú opuestas á este decreto de los hombres de mar de sus distritos en el servicio de la armada, y cuanto convenga á los derechos de los hombres de mar, y al fomento de la marina mercante, debiendo dichos celadores servir su encargo sin sueldo, emolumento ni esencion alguna de las obligaciones comunes. 13. Cada año en el dia segundo de la pascua de Navidad, se renovarán los celadores, eligiéndose del modo prevenido en el artículo 11 otros sugetos para este encargo; y si en los intermedios del año se ausentare algun celador, el alcalde primero nombrará un suplente, para que sirva hasta que se restituya el propietario ó se haga nueva eleccion. 14. Para proceder con mas acierto á la formacion de las prime-

tas listas, los ayuntamientos, con asistencia de los celadores, pedirán á los actuales comandantes de matrículas, y estos entregarán relacion esacta y circunstanciada de los matriculados actualmente, con vista de la cual, y de lo demas que conduzca á facilitar la operacion, formarán los ayuntamientos listas de los hombres de mar, dividiéndolos en cinco clases. En la primera anotarán todos los propietarios y empresarios de que trata el artículo 6.º: en la segunda todos los individuos de la clase de pilotos habilitados competentemente: en la tercera los marineros útiles para el servicio militar de la armada desde la edad de diez y ocho años; en que empieza la obligacion del servicio personal, hasta la de cuarenta cumplidos, en que enteramente cesa: en la cuarta los menores de diez y ocho años; y en la quinta los mayores de cuarenta años, los inútiles y los inválidos. En estas listas clasificadas se guardará el mas riguroso método cronológico ú orden de fechas, de modo que sin dejar espacios de blanco, sean anotados los hombres de mar por el órden de antigüedad de sus alistamientos desde los diez y ocho años á los cuarenta en la tercera lista, y por el mismo órden en las demas, á fin de que en los pedidos de marineros útiles, puedan distinguirse particularmente los de mas ó menos tiempo de práctica ó ejercicio en las artes marítimas. De estas listas se sacarán cuatro cópias testimoniadas y firmadas por los alcaldes, regidores, síndicos y celadores de mar; se pasarán dos al gefe político de la provincia, que remitirá una al secretario del despacho de la gobernacion de la península, y otras dos á los capitanes de puerto mas inmediatos, de las cuales quedará una en su archivo, y enviarán la otra con su V.º B.º al capitan general del departamento respectivo. Para mayor claridad, esactitud y brevedad en este punto, dispondrá el gobierno se establezca un formulario uniforme é impreso para estas listas, asi como de las boletas, que se costeará de los propios ó arbitrios de los pueblos. 15. Cada dos años se remitirán en dichos formularios impresos nuevas listas corregidas, con espresion sucinta de las calidades notadas é individual de los que se hallen en campaña, y desde cuándo, si han hecho antes otras, y cuánto tiempo hayan servido por sí ó por medio de suplentes por obligacion propia, y lo que hayan servido por suplir la de otro. En las listas se pasarán de una clase á otra los individuos alistados, segun los años que vayan cumpliendo, y ademas avisarán los ayuntamientos á los capitanes de puerto los alistados nuevamente en los intermedios de la rectificacion de las listas. 16. Todo marinero estrangero podrá alistarse como hombre de mar en cualquier pueblo, sujetándose á la obligacion del servicio militar de marina en cuanto individualmente le toque, y al cumplimiento de las leyes del pais, renunciando el fuero de estrangero con acto público, que se verificará ante el alcalde, y será autorizado por el secretario del ayuntamiento, con lo cual se permitirán al marinero estrangero el ejercicio y beneficios de hombre de mar español. 17. El gobierno, al presentar á las córtes el presupuesto de la fuerza de armamento ordinario para tiempo de paz, y estraordinario para el de guerra, fijará el número de hombres de mar necesarios para las faenas de la marina militar en ambos casos, segun las noticias de los comandantes ó capitanes generales de los departamentos. 18. Aprobado por las córtes el número de hombres de mar que haya de pedirse ó convocarse en la Península para el servicio de la marina militar, lo avisará el secretario del despacho de este ramo al de la gobernacion; y ambos, en los seis dias primeros despues de este aviso, harán de comun acuerdo la distribucion de los hombres de mar que correspondan á cada uno de los tres departamentos y á sus respectivas provincias, avisando el secretario de la gobernacion á los gefes políticos los hombres de mar señalados á sus distritos, y el de marina avisará dicha distribucion á los capitanes generales y comandantes de los departamentos. 19. Estos gefes de marina, con noticia del número de hombres de mar que han de emplear, determinarán el de cada clase y edades, segun el servicio para que los necesiten, y lo avisarán á los gefes políticos. 20. Para graduar el número de los individuos de cada clase y edad que hayan de pedir, observarán los comandantes generales la misma proporcion que guardan en las tripulaciones de los buques entre marineros y grumetes, por ejemplo; y si esta se variase por nuevo reglamento, guardarán la que se establezca. 21. Los gefes políticos, con arreglo á las listas de hombres de mar de sus provincias, y de acuerdo con las diputaciones provinciales, harán con escrupulosa esactitud en el término de seis dias la distribucion entre los pueblos para llenar el cupo de sus provincias. 22. Los ayuntamientos y celadores de cada pueblo, asi que reciban el aviso de los gefes políticos, resolverán el modo de verificar su contingente, ya sea por sorteo, por admision voluntaria, por enganche, por substitucion, ó como quieran, siempre que no falten ni en el número ni en la clase de los hombres pedidos, entregándolos en el término de treinta dias. 23. Siendo posible que por ausencias ú otras causas momentáneas falten ó escaseen en algun pueblo pequeño individuos para llenar alguna de las clases ó edades pedidas, podrán los hombres de mar del mismo, por medio de sus ayuntamientos y celadores respectivos, enganchar ó procurar suplentes de entre los hombres de mar de otros pueblos y provincias; entendiéndose sin perjuicio del servicio á que esten obligados estos en los suyos respectivos. 24. Dejándose al arbitrio de los gefes políticos, diputaciones provinciales, ayuntamientos y celado-

res, las disposiciones para la distribucion y eleccion de los hombres llamados al servicio militar naval, deberán tomar todas las necesarias y que tengan por conveniente, para precaver fraudes en perjuicio del servicio nacional, ó de los interesados, y para que haya la mas rigurosa igualdad entre los hombres de mar en el desempeño de su obligacion, y en el turno con que deben soportarla para hacerla mas llevadera. Por consiguiente, los ayuntamientos y los celadores, y en último recurso las diputaciones provinciales, resolverán todas las dudas y quejas que ocurran sobre el servicio militar de los hombres de mar. 25. Los hombres de mar de cada pueblo estarán obligados á hacer efectivo su contingente en cada convocatoria, y á reemplazar en los intermedios las bajas que resulten por desercion ó inutilidad de los que hayan presentado. 26. Los ayuntamientos y celadores podrán tomar las mas ejecutivas providencias para que sean cumplidas las obligaciones de los hombres de mar espresadas en el artículo anterior; y asi serán responsables de cualquier defecto ú omision que se esperimente en este punto tan interesante á la nacion. Tambien lo serán los gefes políticos si tolerasen la menor falta en detrimento de este servicio; y en caso de que sea grave ó de reincidencia tendrá lugar la responsabilidad, suspension de empleo y formacion de causa, con las penas correspondientes á las faltas y á los daños que causaren. 27. Verificada la reunion de los destinados al servicio, que deberá ser lo mas á los treinta dias despues de haber recibido la órden los ayuntamientos, se conducirán por mar y tierra, y se entregarán á los capitanes de puerto ó comisionados que señalarán y avisarán los comandantes ó capitanes generales de marina á los gefes políticos; procurando los de marina que sea con la mayor comodidad de los pueblos y economía de la hacienda nacional. 28. Para que los capitanes de puerto ó comisionados puedan recibir la gente destinada al servicio de la armada, se les pasarán por los demas capitanes ó ayudantes de puerto del distrito, cópias autorizadas de las listas generales, y de las clases ó edades convocadas, á fin de que al llegar los comisionados de los ayuntamientos y celadores para hacer la entrega de sus contingentes, puedan cotejarse los individuos con sus asientos en las listas, ó con sus boletas, si hubiese forasteros; y resultando ser de las clases y edades pedidas y sanos, se admitirán; y si no se desecharán, y se reemplazarán inmediatamente. Los receptores darán á los comisionados de los ayuntamientos recibos circunstanciados de los que fueren admitidos. 29. Desde el dia en que por acto voluntario, ó por enganche ó por sorteo sean admitidos los hombres de mar por los comisionados de la armada, se les satisfará lo que por ordenanza corresponda á sus clases. 30. Los hombres de mar destinados al servicio militar de marina podrán asignar en favor de sus familias la mitad de los salarios que por su aptitud obtengan, y quedarán los ayuntamientos encargados de satisfacer dichas asignaciones á cuenta de las contribuciones de los pueblos, bajo las reglas que para la puntual ejecucion de este artículo establezca el gobierno; y por el mismo órden costearán los ayuntamientos la conduccion de los que vayan al servicio desde sus pueblos hasta ser entregados. 31. El servicio de ordinaria campaña durará un año, y solo en el caso de que no hubiere con quien reemplazar al cumplido, y fuese indispensable su permanencia, continuará sirviendo hasta que lleguen á sus puestos los reemplazos, con tal de que no pase este tiempo de tres años, que será el término máximo é improrogable de una campaña. 32. Los marineros que sean despedidos del servicio de la armada, no volverán á ser llamados á otra campaña para concluir la que les falte hasta que haya corrido otro tanto tiempo como el que hubiesen estado empleados en la anterior, escepto si ellos la quisieren cumplir mas presto. 33. Al despedir á los marineros que hayan cumplido su campaña, se les dará por el gefe de su mando, con intervencion del de mayor graduacion ó del capitan del puerto del distrito, una certificacion espresiva del tiempo que han servido, contado desde que llegaron y fueron entregados en el departamento ó sitio señalado, hasta el dia en que se les despida; y con esta certificacion obtendrán su licencia absoluta, que debe dárseles sin obligarlos á viages, detenciones ni gasto alguno, bajo pena de privacion de empleo ú oficio al contraventor. 34. Cuando un hombre de mar haya servido seis años continuos, ó con interrupcion, se le espedirá su licencia absoluta en el modo prescrito en el artículo anterior; y quedando libre de ser nuevamente llamado á servir, gozará todos los beneficios de hombre de mar del mismo modo que los que cumplan cuarenta años, aunque no hayan hecho los seis de campaña, siempre que no haya sido por culpa suya y en perjuicio de otros. 35. Solo en un caso estraordinario de guerra, y en que se decrete por las córtes un armamento general, podrá obligarse á los hombres de mar que hayan cumplido los seis años de servicio, á servir el tiempo que les falte para llegar á los cuarenta de edad; pero este servicio estraordinario nunca pasará de tres años, y los que en él fueren empleados lo serán en los puntos mas cercanos á sus domicilios. 36. El hombre de mar que quiera servir los seis años continuos podrá hacerlo si fuere necesario en la armada, y se retirará á disfrutar los beneficios de su clase, con obligacion únicamente del servicio estraordinario en el caso y modo prescrito en el artículo anterior. 37. Cuando los gefes de la armada no tuviesen el número de reemplazos suficiente para despedir todos los

cumplidos, lo harán despidiendo con preferencia á los mas antiguos cumplidos en cada clase. 38. El gefe de buque, division, escuadra ó departamento que detuviere un hombre de mar despues de los términos prescritos en los artículos 31, 34 y 35, será responsable del perjuicio que cause al detenido, y si reincidiese por tres veces en esta falta, será privado de empleo. Si al fin de los términos prescritos se hallase en alta mar ó en parages en que sea imposible ó de muy grave daño al servicio nacional ó al mismo hombre de mar el despedirle, no se le despedirá ni en uno ni en otro caso hasta que haya oportunidad; pero el esceso de tiempo que por tal causa sirviere se le rebajará en el caso de servicio estraordinario por armamento general. 39. Los gefes políticos, á peticion de los ayuntamientos y celadores de mar ó de las personas interesadas, deberán reclamar contra las retenciones arbitrarias esplicadas en el artículo anterior al gobierno; y este, oyendo al gefe que causare la retencion, remitirá el espediente á la autoridad superior judicial de marina para que se declare sobre la responsabilidad, y se aplique la pena condigna. 40. En todo gefe de la armada será accion meritoria, que se notará en su hoja de servicio, conseguir que los marineros hayan permanecido voluntariamente bajo su mando despues de haber cumplido su tiempo de servicio; y esta circunstancia, que debe constar por declaracion espontánea de los hombres de mar, será muy atendida para la ventaja y preferencia de mandos. 41. Se conservan los capitanes de puerto y de fondeaderos para la policía de los mismos, segun les corresponde por el título 7.° del tratado 5.° de las ordenanzas generales de la armada vigentes, ó por las que en adelante se formaren. Tendrán ademas á su cargo el desempeño de las funciones que posteriormente estuvieron al de los comandantes de matrículas; pero únicamente para los casos siguientes: 1.° Para formar los roles de las tripulaciones de cada buque que empiece viage en su distrito. 2.° Para visar los roles de los buques de tránsito. 3.° Para entregar las patentes reales y contraseñas. 4.° Para recibir y destinar los hombres de mar que les entreguen los ayuntamientos y celadores para el servicio de la armada. En todos estos encargos deberán proceder con arreglo á las instrucciones establecidas ó que estableciere el gobierno, sin causar detenciones, molestias ni gastos de ninguna especie, formando los roles segun las nóminas que con entera libertad les presenten los capitanes ó patrones de los hombres de mar de todas clases que quieran llevar en sus respectivos buques, no siendo desertores de la armada, prófugos de convocatorias, ó que no esten escritos en las listas de hombres de mar de cualquier pueblo de los paises de España, y lo acrediten con sus correspondientes bo-

letas ó con testimonio equivalente. 42. A fin de que por falta de asistencia de los capitanes de puerto y de fondeaderos no sufran detenciones ó perjuicios la marina mercante y el comercio, destinará el gobierno algunos comandantes ó ayudantes cesantes de matrículas á los puntos que acaso fuesen necesarios para los objetos de su instituto, y dispondrá lo que tenga por conveniente para el destino ulterior de los papeles que existan en las actuales comandancias de matrículas. 43. Ademas de las cópias esactas de las listas de hombres de mar que deben pasarles los ayuntamientos de los respectivos distritos, tendrán los capitanes de puerto y de fondeaderos un registro, en que se anoten los buques de navegacion, de pesca, de descarga, de recreo y de toda clase que pertenezcan á sus distritos, á cuyo fin podrán pedir á los ayuntamientos, y deberán estos darles ó mandar que se les den las noticias necesarias. 44. Las escrituras de propiedad de toda clase de buques nacionales ó nacionalizados, los contratos de fletamento, de salarios, de compañía, de cambios y demas marítimos continuarán otorgándose por ahora ante los escribanos que fueron de matrículas, percibiendo los derechos del arancel que rige hasta la promulgacion de otro; y será obligacion de estos escribanos pasar al capitan del puerto ó fondeadero del distrito una sucinta, pero circunstanciada noticia de las escrituras sobre construccion, compras, ventas ó permutas de buques inmediatamente que las autoricen. 45. Los oficios de dichos escribanos estarán, mientras subsistan bajo la proteccion y autoridad de los ayuntamientos, asi como lo estaban bajo la de los comandantes de matrículas. 46. En consecuencia de este decreto quedará estinguida la ordenanza de matrículas de mar del año de 1802, y cualesquiera otras providencias contrarias al objeto del presente decreto, y suprimidas todas las plazas de las comandancias, ayudantías, auditorías y tenencias, las de escribanos, cabos, prohombres, alguaciles, porteros y demas empleos que por dicha ordenanza ó cualquiera otra órden se hayan establecido para el régimen de las matrículas de mar y de los gremios de mareantes. 47. El presente decreto deberá observarse desde el dia 1.° de enero de 1841, sin atraso ó perjuicio de lo que se previene en el artículo 11.

ORDEN.

Mandando se destruyan los calabozos subterráneos y mal sanos, con lo demas que se espresa.

Exmo. sr.=Las córtes han acordado que el gobierno escitande su zelo disponga inmediatamente que se quiten y queden sin uso los calabozos subterráneos y mal sanos que existan en las cár-

celes, cuarteles y fortalezas, haciendo que todas las prisiones esten situadas de modo que tengan luz natural: que no se pongan grillos á los presos, y en caso de ser necesaria alguna seguridad, sea solo grillete, precediendo mandato del juez respectivo: últimamente, que si no se hubiesen destruido ya los potros y demas instrumentos que antes se acostumbraban para dar tormentos á los presos, mande se verifique inmediatamente su destruccion; cuyas resoluciones se entiendan por regla general. Madrid 12 de octubre de 1820.

DECRETO.

DE 21 DE OCTUBRE DE 1820.

Sobre las reuniones de individuos para discutir en público asuntos políticos.

Las córtes, despues de haber observado todas formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: 1.° No siendo necesarias para el ejercicio de la libertad de hablar de los asuntos públicos las reuniones de individuos constituidos y reglamentados por ellos mismos, bajo los nombres de sociedades, confederaciones, juntas patrióticas ó cualquiera otra sin autoridad pública, cesarán desde luego con arreglo á las leyes que prohiben estas corporaciones. 2.° Los individuos que en adelante quieran reunirse periódicamente en algun sitio público para discutir asuntos políticos, y cooperar á su recíproca ilustracion, podrán hacerlo con previo conocimiento de la autoridad superior local, la cual será responsable de los abusos, tomando al efecto las medidas que estime oportunas, sin escluir la de suspension de las reuniones. 3.° Los individuos así reunidos no podrán jamás considerarse corporacion, ni representar como tal, ni tomar la voz del pueblo, ni tener correspondencia con otras reuniones de igual clase.

DECRETO.

DE 22 DE OCTUBRE DE 1820.

Reglamento acerca de libertad de imprenta.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades perscritas por la constitucion, han decretado lo siguiente:

TITULO. I.

Estension de la libertad de imprenta.

ART. 1. Todo español tiene derecho de imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura.

2. Se esceptuan solamente de esta disposicion general los escritos que versen sobre la sagrada escritura y sobre los dogmas de nuestra santa religion, los cuales no podrán imprimirse sin licencia del ordinario.

3. No podrá negar el ordinario esta licencia sin previa censura, de la cual se dará traslado al autor ó editor; y si este no se conformase con ella, podrá contestar, esponiendo sus razones para que recaiga sobre el escrito segunda censura.

4. Si esta fuere contraria á la obra, podrá recurrir el interesado á la junta de proteccion de libertad de imprenta, de que se hablará despues, la cual pasará el escrito con su dictamen al ordinario, para que este con mayor instruccion conceda ó niegue la licencia; lo que deberá hacer en el término de tres meses cuando mas, contados desde que el autor presente por primera vez la obra.

5. En el caso de que el ordinario reusare dar ó negar la licencia, ó faltare de cualquier modo á lo prescrito en los artículos anteriores, el interesado podrá recurrir á la junta de proteccion de libertad de imprenta, la que lo elevará al conocimiento de las córtes.

TITULO II.

De los abusos de la libertad de imprenta.

ART. 6. Se abusa de la libertad de imprenta, espresada en el artículo 1°., de los modos siguientes: Primero: publicando máximas ó doctrinas que conspiren de un modo directo á destruir ó trastornar la religion del estado, ó la actual constitucion de la monarquía. Segundo: cuando se publican máximas ó doctrinas dirigidas á escitar la rebelion ó la perturbacion de la tranquilidad pública. Tercero: incitando directamente á desobedecer alguna ley ó autoridad legítima, ó provocando á esta desobediencia con sátiras ó invectivas. Cuarto: publicando escritos obscenos ó contrarios á las buenas costumbres. Quinto: injuriando á una ó mas personas con libelos infamatorios que tachen su conducta privada y mancillen su honor ó reputacion.

7. En el caso de que un autor ó editor publique un libelo infamatorio, no se eximirá de la pena que mas adelante se establece en esta ley, aun cuando ofrezca probar la imputacion injuriosa; quedando ademas al agraviado la accion espedita para acusar al injuriante de calumnia ante los tribunales competentes.

8. Pero si en algun escrito se imputaren delitos cometidos por alguna corporacion ó empleado en el desempeño de su destino, y el autor ó editor probare su aserto, quedará libre de toda pena.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

9. Lo mismo se verificará en el caso de que la inculpacion contenida en el impreso se refiera á crímenes ó maquinaciones tramadas por cualquier persona contra el estado.

TITULO. III.

Calificacion de los escritos segun los abusos especificados en el título anterior.

ART. 10. Para la censura de toda clase de escritos denunciados como abusivos de la libertad de imprenta, se usará de las calificaciones siguientes.

11. Los escritos que conspiren directamente á trastornar ó destruir la religion del estado, ó la constitucion actual de la monarquía, se calificarán con la nota de *subversivos*.

12. Esta nota de *subversion* se graduará segun la mayor ó menor tendencia que tenga el escrito á trastornar ó destruir la religion del estado, ó la actual constitucion de la monarquia. Esta graduacion se hará del modo siguiente: *subversivo en grado primero, en segundo y en tercero.*

13. Los escritos en que se publiquen máximas ó doctrinas dirigidas á escitar la rebelion ó la perturbacion de la tranquilidad pública, se calificarán con la nota de *sediciosos*, siguiéndose la misma graduacion que en el artículo antecedente.

14. El impreso en que se incite directamente á desobedecer las leyes ó autoridades legítimas se calificará de *incitador á la desobediencia en primer grado*, y aquel en que se provoque á esta desobediencia con sátiras ó invectivas, de *incitador en grado segundo.*

15. Las obras escritas en lengua vulgar, que ofendan á la moral ó decencia pública, se calificarán con la nota de *obscenas, ó contrarias á las buenas costumbres.*

16. Finalmente, los escritos en que vulnere la reputacion ó el honor de los particulares, tachando su conducta privada, se calificarán de *libelos infamatorios.*

17. Todo impreso en que se injurie á las augustas personas de los monarcas ó gefes supremos de otras naciones, ó en que se escite directamente á sus súbditos á la rebelion, será tambien calificado por los jueces de hecho con las notas de *injurioso ó sedicioso*; imponiéndose á la persona responsable del impreso las penas que se designarán en esta ley para estas dos calificaciones y sus varios grados.

18. No se podrá usar bajo ningun pretesto de otra calificacion mas que de las espresadas en los artículos anteriores; y cuando los jueces de hecho no juzguen aplicable á la obra ninguna de dichas calificaciones, usarán de la fórmula siguiente: *absuelto.*

TITULO IV.

De las penas correspondientes á los abusos.

ART. 19. El autor ó editor de un impreso calificado de *subversivo en grado primero* será castigado con la pena de seis años de prision, entendiéndose esta no en la cárcel pública, sino en otro lugar seguro. El de un escrito *subversivo en segundo grado* con cuatro años; y el de *subversivo en tercer grado* con dos; quedando ademas privado el delincuente de su empleo y honores, y ocupándoseie tambien las temporalidades si fuese eclesiástico.

20. A los autores ó editores de escritos sediciosos en primero, segundo y tercer grado se aplicarán las mismas penas designadas contra los autores ó editores de obras *subversivas* en sus grados respectivos.

21. El autor de un escrito que incite directamente á la desobediencia de las leyes ó de las autoridades, será castigado con un año de prision; y el que provoque á esta desobediencia con sátiras ó invectivas pagará una multa de cincuenta ducados; y si no pudiere satisfacer esta cantidad sufrirá un mes de prision.

22. Por el escrito *obsceno, ó contrario á las buenas costumbres*, pagará el autor ó editor una multa equivalente al valor de mil y quinientos ejemplares de dicho escrito al precio de venta; y si no pudiere pagar esta cantidad se le impondrá la pena de cuatro meses de prision.

23. Segun la gravedad de las injurias, atendidas todas las circunstancias, procederán los jueces de hecho á calificar el escrito de *injurioso en primero, segundo y tercer grado:* por el primero se aplicará la pena de tres meses de prision, y una multa de mil y quinientos reales: por el segundo dos meses de prision y la multa de mil reales; y por el tercero un mes de prision y quinientos reales: al que no pudiere pagar la multa se le duplicará el tiempo de la prision.

24. La reincidencia será castigada con doble pena; y en los delitos que tienen señalada graduacion se impondrá al culpable la pena dupla correspondiente al grado en que se verifique dicha reincidencia.

25. Ademas de las penas especificadas en los artículos anteriores serán recogidos cuantos ejemplares existan por vender de las obras que declaren los jueces comprendidas en cualquiera de las calificaciones espresadas en el título 3.º; pero si solo declarasen comprendida en dicha calificacion una parte del impreso, se suprimirá esta, quedando libre y corriente el resto de la obra.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

TITULO V.

De las personas responsables.

ART. 26. Será responsable de los abusos que cometa contra la libertad de imprenta el autor ó editor del escrito, á cuyo fin deberá uno ó otro firmar el original, que debe quedar en poder del impresor.

27. El impresor será responsable en los casos siguientes: primero, cuando siendo requerido judicialmente para presentar el original firmado por el autor ó editor, no lo hiciere. Segundo: cuando ignorándose el domicilio del autor ó editor llamado á responder en juicio no dé el impresor razon fija del espresado domicilio, ó no presente alguna persona abonada que responda del conocimiento del autor ó editor de la obra, para que no quede el juicio ilusorio.

28. Los impresores estan obligados á poner sus nombres y apellidos, y el lugar y año de la impresion en todo impreso, cualquiera que sea su volúmen; teniendo entendido que la falsedad en alguno de estos requisitos se castigará como la omision absoluta de ellos.

29. Los impresores de obras ó escritos en que falten los requisitos espresados en el artículo anterior serán castigados con cincuenta ducados de multa, aun cuando los escritos no hayan sido denunciados, ó fueren declarados *absueltos*.

30. Los impresores de los escritos calificados con alguna de las notas con prendidas en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que hubiesen omitido ó falsificado alguno de los indicados requisitos, pagarán la multa de quinientos ducados.

31. Cualquiera que venda uno ó mas ejemplares de un escrito mandado recoger con arreglo á esta ley, pagará el valor de mil ejemplares del escrito á precio de venta.

TITULO VI.

De las personas que pueden denunciar los impresos.

ART. 32. Los delitos de *subversion y sedicion* producirán accion popular, y cualquiera español tendrá derecho para denunciar á la autoridad competente los impresos que juzgue *subversivos ó sediciosos*.

33. En todos los casos, escepto los de injurias, en que se abuse de la libertad de imprenta, deberán el fiscal nombrado al efecto, ó los síndicos del ayuntamiento constitucional, denunciar de *oficio*, ó en virtud de escitacion del gobierno ó del gefe político de la provincia, ó de los alcaldes constitucionales.

34. El fiscal que se menciona en el artículo anterior, deberá ser un letrado nombrado anualmente por la diputacion provincial, pudiendo ser reelegido. Los impresores deberán pasar á este fiscal un ejemplar de todas las obras ó papeles que se impriman en la respectiva provincia, bajo la pena de cinco ducados por cada contravencion.

35. En los casos de injurias solo podrán acusar las personas á quienes las leyes conceden esta accion.

TITULO VII.

Del modo de proceder en estos juicios.

ART. 36. Las denuncias de los escritos se presentarán ó remitirán á uno de los aldaldes constitucionales de la capital de provincia, para que este convoque á la mayor brevedad los jueces de hecho de que se trata en los artículos siguientes.

37. Estos jueces de hecho serán elegidos anualmente á pluralidad absoluta de votos por el ayuntamiento constitucional de las capitales de provincia dentro de los quince primeros dias de su instalacion; cesando en este mismo dia los jueces del año anterior, los cuales podrán ser reelegidos.

38. El número de estos *jueces de hecho* será triple del de los individuos que compongan el ayuntamiento.

39. Para ejercer este cargo se necesita ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y residente en la capital de la provincia.

40. No podrán ser nombrados jueces de hecho los que ejerzan jurisdiccion civil ó eclesiástica, los gefes políticos, los intendentes, los comandantes generales de las armas, los secretarios del despacho y los empleados en sus secretarías, los consejeros de estado, ni los empleados en la servidumbre de palacio.

41. Ningun ciudadano podrá escusarse de este cargo, á menos que tenga alguna imposibilidad física ó moral á juicio del ayuntamiento.

42. En el caso de que algun juez de hecho sin haber antes justificado algun impedimento legal dejare de asistir al juicio, el alcalde constitucional, ó el juez de primera instancia en su caso despues de citarle por tres veces, le impondrá una multa, que no podrá bajar de doscientos reales ni pasar de cuatrocientos.

43. Hecha la denuncia de un escrito, uno de los alcaldes constitucionales, acompañado de dos regidores y del secretario de ayuntamiento, hará sacar por suerte nueve de las cédulas en que estén escritos los nombres de los jueces de hecho; verificado lo cual, y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON ®
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

sentados los nombres en un libro destinado al efecto, citará el alcalde á dichos jueces.

44. Reunidos estos nueve jueces á la hora señalada por el alcalde en el edificio destinado al efecto, les recibirá el juramento siguiente: ¿Jurais haberos bien y fielmente en el cargo que se os confia, decidiendo con imparcialidad y justicia en vista del impreso y denuncia qne se os va á presentar, si ha ó no lugar á la formacion de causa?=Sí juramos.=Si asi lo hiciereis, Dios os premie, y si no os lo demande.

45. En seguida se retirará el alcalde, y quedando solos los nueve jueces de hecho, examinarán el impreso y la denuncia; y despues de conferenciar entre sí sobre el asunto, declararán *si ha ó no lugar á la formacion de causa;* necesitándose las dos terceras partes de votos para declarar que ha lugar á ella.

46. Verificada esta declaracion, la estenderán en el mismo acto en un libro destinado al efecto, y al pie de la misma denuncia; y firmada por los nueve jueces, el primero en el órden del sorteo, que hará en estos actos de presidente, la presentará al calde constitucional que los ha convocado.

47. Si la declaracion fuere *no ha lugar á la formacion de causa*, el alcalde constitucional pasará al denunciador la denuncia con la declaracion espresada, cesando por este mismo hecho todo procedimiento ulterior.

48. Si la declaracion fuere *ha lugar á la formacion de causa*, el alcalde constitucional pasará al juez de primera instancia el impreso y la denuncia, para proceder por los trámites que en esta ley se señalan.

49. El juez de primera instancia tomará desde luego las providencias necesarias para suspender la venta de los ejemplares del impreso que existan en poder del impresor ó vendedores, imponiendose la pena del valor de quinientos ejemplares á cualquiera de estos que falte á la verdad en la razon que dé del número de aquellos, ó que venda despues alguno.

50. Procederá igualmente el juez á la averiguacion de la persona que deba ser responsable con arreglo á lo dispuesto en el título V de esta ley; pero antes de haber declarado que *ha lugar á la formacion de causa*, ninguna autoridad podrá obligar á que se le haga manifiesto el nombre del autor ó editor; y todo procedimiento contrario es un atentado que se castigará con arreglo al decreto de 24 de marzo de 1813.

51. Habiendo recaido la declaracion de *ha lugar á la formacion de causa* en un impreso denunciado por *subversivo ó sedicioso*, ó por *incitador* en primer grado á la *desobediencia*, mandará el juez prender al sugeto que aparezca responsable; pero

si la denuncia del impreso fuese por cualquiera de los demas abusos especificados en el título II, se limitará el juez á exigirle fiador, ó la caucion suficiente de estar á las resultas del juicio; y en caso de no dar fiador ó caucion, le pondrá igualmente en custodia.

52. Declarado por los primeros jueces de hecho que *ha lugar á la formacion de causa* respecto de un impreso denunciado por *injurioso*, y averiguado en consecuencia por el juez de primera instancia el paradero de la persona responsable del escrito, el juez citará á esta para que, si quiere comparezca por sí, ó por medio de apoderado, ante el alcalde constitucional á juicio conciliatorio con el denunciador, concediéndosele para ello el término de tres dias si se halla en el pueblo, y el de veinte á lo mas si está ausente, pasado el cual sin haberlo verificado, se procederá al juicio con arreglo á esta ley.

53. Antes de entablarse el juicio deberá el alcalde constitucional pasar al juez de primera instancia una lista certificada de los doce jueces de hecho que han de calificar el impreso, los cuales habrán sido sacados por suerte de entre los que quedaron insaculados en el primer sorteo, observándose el mismo método en uno y otro; y debiendo verificarse este y los demas sorteos á puerta abierta.

54. El juez de primera instancia pasará á la persona responsable del impreso una copia certificada de la denuncia hecha para que pueda preparar su defensa de palabra ó por escrito, y copia de la lista de los doce jueces de hecho, para que pueda recusar en el término perentorio de veinte y cuatro horas hasta siete de dichos jueces, sin obligacion de espresar la causa de su recusacion.

55. En el caso de verificarse esta, el juez de primera instancia oficiará al alcalde constitucional para que sortee igual número al de los recusados; y los que salgan en lugar de estos, podrán ser recusados igualmente.

56. Completo ya el número de los jueces de hecho, sin admitirse otra recusacion, el juez de primera instancia mandará citarlos para el sitio en que haya de celebrarse el juicio, y antes de empezar este les recibirá el juramento concebido en los términos siguientes: ¿Jurais haberos bien y fielmente en el cargo que se os confia, calificando con imparcialidad y justicia segun vuestro leal saber y entender, el impreso denunciado que se os presenta, ateniéndoos á las notas de calificacion espresadas en el título III de la ley de libertad de imprenta?=Sí juramos=Si asi lo hiciéreis &c.

57. Este juicio deberá verificarse á puerta abierta, pudiendo asistir y hablar en su defensa el interesado, un letrado ó cualquiera otra persona en su nombre, bajo la responsabilidad que las leyes previenen.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

58. Asimismo podrán asistir y hablar para sostener la denuncia el fiscal, el síndi o ó cualquiera otro denunciador en su caso por sí ó por un letrado que le represente, dejando al acusado la facultad de contestar despues de haber hablado el que sostenga la denuncia

59. En seguida hará el juez letrado una recapitulacion de todo lo que resulta del juicio para ilustracion de los jueces de hecho, los cuales se retirarán á una estancia inmediata á conferenciar sobre el asunto; y acto continuo calificarán el impreso con arreglo á lo prescrito en el mencionado título III, necesitándose á lo menos ocho votos para condenar un impreso.

60. Si estos ocho ó mas votos hubieren convenido en la especie de abuso, pero no en el grado, se entenderá la calificacion hecha en el menor de estos, y se aplicará la pena que le correspondiere.

61. Hecho esto saldrán á la audiencia pública; y el primer nombrado, que hará en este acto de presidente, pondrá en manos del juez de primera instancia la calificacion por escrito firmada de todos, despues de haberla leido en voz alta.

62. Si la calificacion fuese *absuelto*, usará el juez de la fórmula siguiente: Habiéndose observado en este juicio todos los trámites prescritos por la ley, y calificado los doce jueces de hecho con la fórmula de *absuelto* el impreso titulado... denunciado tal dia por tal autoridad ó persona, la ley absuelve á N. responsable de dicho impreso; y en su consecuencia mando que sea puesto inmediatamente en libertad, ó se le alce la caucion ó fianza, sin que este procedimiento le cause perjuicio ni menoscabo en su buen nombre y reputacion.

63. En el mismo acto mandará el juez poner en libertad ó alzar la caucion ó fianza á la persona sujeta al juicio; y todo acto contrario á esta disposicion será castigado como crimen de detencion ó procedimiento arbitrario.

64. Cuando los jueces de hecho hubiesen calificado el impreso de *subversivo* ó *sedicioso* en cualquiera de los tres grados, ó de incitador á la desobediencia de las leyes en primero, si pareciere esta calificacion errónea al juez de primera instancia, podrá este suspender la aplicacion de la pena, y pasar oficio al alcalde constitucional para que saque á la suerte otros doce jueces de hecho entre los que no hayan intervenido ni en la declaracion de *haber lugar á la formacion de causa*, ni en la primera calificacion del impreso.

65. Estos doce jueces de hecho calificarán de nuevo el impreso con las formalidades prescritas en esta ley; y si ocho ó mas de ellos convinieren en la calificacion anterior, procederá el juez letrado á pronunciar la sentencia y aplicar la pena correspondiente.

66. Si declarasen el escrito absuelto, procederá el juez con arreglo al artículo 62; y si conviniesen en la especie de delito, pero no en el grado, se observará lo prescrito en el artículo 60.

67. Los jueces de hecho solo serán responsables en el caso de que se les justifique con testigos contestes en un mismo hecho, ó por otra prueba plena legal, haber procedido en la calificacion por cohecho ó soborno.

68. Si la calificacion fuese alguna de las espresadas en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, el juez de primera instancia deberá usar de la fórmula siguiente: Habiéndose observado en este juicio todos los trámites prescritos por la ley, y calificado los jueces de hecho con la nota de... (una de las contenidas en dichos artículos) el impreso titulado... denunciado tal dia por tal autoridad ó persona, la ley condena á N. responsable de dicho impreso á la pena de... espresada en el artículo... del título IV; y en su consecuencia mando que se lleve á debido efecto.

69. Concluido este acto, se tendrá el juicio por fenecido, y procederá el juez á su ejecucion, pasando una cópia legalizada de la sentencia á quien hubiese denunciado el impreso, y otra al reo si la pidiere.

70. Los derechos del juez de primera instancia, del escribano que actúe en este juicio, y los demas gastos del proceso serán abonados con arreglo al arancel por la persona responsable del impreso, siempre que este haya sido declarado criminal; pero si hubiere sido declarado absuelto, y el juicio fuese de injurias pagará las costas el denunciador. En todos los demas casos se satisfarán las costas del fondo que se forme de las multas impuestas con arreglo á esta ley, cuyo fondo deberá estar depositado en el ayuntamiento con la correspondiente cuenta separada.

71. Si el impreso hubiese sido declarado criminal, el fiscal percibirá tambien sus derechos, que se incluirán en las costas; pero no cuando el impreso haya sido declarado absuelto.

72. En uno y otro caso se publicará la calificacion y sentencia en la gaceta del gobierno, á cuyo fin el juez de primera instancia remitirá un testimonio á la redaccion de dicho periódico.

73. Cualquiera persona que reimprima un impreso mandado recoger, incurrirá por el mismo hecho en la pena que se haya impuesto á consecuencia de la calificacion.

74. Todo delito por abuso de libertad de imprenta produce desafuero, y los delincuentes serán juzgados por los jueces de hecho y de derecho con arreglo á esta ley.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

TITULO VIII.

De la apelacion en estos juicios.

ART. 75. Cuando el juez de primera instancia no haya impuesto la pena designada en esta ley, podrá apelar cualquiera de las partes á la audiencia territorial dentro del término ordinario, y el juez de primera instancia le admitirá la apelacion en ambos efectos para mejorarla.

76. Igualmente podrá cualquiera de los interesados apelar á la audiencia cuando no se hayan observado en el juicio los trámites ó formalidades prevenidas en esta ley; pero esta apelacion será para el solo efecto de reponer el proceso desde el punto en que se haya cometido la nulidad; debiendo en este caso la audiencia exigir la responsabilidad con arreglo á las leyes al juez ó autoridad que hubiere cometido la falta.

77. En los dos recursos de que se ha hablado en los artículos anteriores, si se declarase que han sido infundados, se condenará en las costas al que los hubiese interpuesto.

TITULO IX.

De la junta de proteccion de la libertad de imprenta.

ART. 78. Las cortes, en uso de las facultades que les concede el artículo 131 de la constitucion, nombrarán cada dos años en los primeros dias de su instalacion una junta de proteccion de libertad de imprenta, que deberá residir en Madrid, compuesta de siete individuos, en la que hará de presidente el primero en el órden de su nombramiento. Asimismo nombrarán otras tres juntas de proteccion para México, Lima y Manila, que estarán subordinadas, y dirigirán sus reclamaciones y propuestas á la junta de proteccion establecida en la capital de la monarquia.

79. Para ser nombrado individuo de esta junta se necesita ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y dotado de la competente instruccion.

80. Esta junta formará luego que se instale, el correspondiente reglamento para su gobierno interior y el de las otras juntas de ultramar; y lo presentará á la aprobacion de las cortes.

81. Las facultades de esta junta son laa siguientes. Primera: proponer con su informe á las cortes todas las dudas que le consulten las autoridades y jueces sobre los casos estraordinarios que ocurran, ó dificultades que ofrezca la puntual observancia de esta ley. Segunda: dar cuenta á las cortes de las quejas que presente cualquier autor ó editor en los casos prevenidos en el artículo 5.° Tercera: presentar á las cortes al principio de cada legislatura una esposicion del estado en que se halle la libertad política de la imprenta, los obstáculos que haya que remover, ó abusos que deban remediarse. Cuarta: examinar las listas de las causas pendientes ó fenecidas sobre abusos de libertad de imprenta; á cuyo fin los jueces de primera instancia deberán remitirle cada trimestre una razon esacta de todas ellas. Quinta: cuidar de que se publiquen en la gaceta del gobierno con la debida puntualidad las sentencias dadas en todas las provincias del reino sobre abusos de libertad de imprenta con arreglo al artículo 72 de esta ley.

82. Hasta la legislatura del año próximo la junta suprema de censura ejercerá las funciones de la junta de proteccion de libertad de imprenta que se establece por esta ley.

83. Quedan derogados por ella todos los decretos anteriores sobre la libertad política de la imprenta.

DECRETO.

DE 22 DE OCTUBRE DE 1820.

Se hacen estensivas á la armada las modificaciones que se espresan respecto á las penas de désercion.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: Se hacen estensivas á la armada nacional las modificaciones que á consulta del estinguido consejo de guerra se hicieron por la real órden de 30 de enero de 1815 á favor de los individuos del ejército, respecto á las penas que imponen por la desercion los artículos desde el 71 al 77 de sus leyes penales.

DECRETO.

DE 22 DE OCTUBRE DE 1820.

Sueldos que han de gozar los oficiales del cuerpo político de la armada nacional.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: Se señala á la clase de oficiales primeros del cuerpo político de la armada nacional el sueldo de doce mil rs. de vellon anuales; á la de segundos el de nueve mil y ceiscientos; á la de terceros el de siete mil doscientos; á la de suartos el de cinco mil cuatrocientos, y á la de quintos el de cuatro mil doscientos, dejando el aumento de sueldos de las clases

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

superiores, que no se hallan tan mal dotadas para cuando se aprueben los de la hacienda militar, y no proveyéndose ninguna de las vacantes que en lo sucesivo puedan ocurrir en las clases subalternas hasta que se haga el arreglo de dicho cuerpo ó queden reducidas al menor número posible, segun las atenciones de la armada.

DECRETO.

DE 22 DE OCTUBRE DE 1820.

Se señalan los sueldos de los primeros y segundos médicos-cirujanos de la armada.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: Que los sueldos de los primeros y segundos médicos-cirujanos de la armada nacional sean iguales á los de los primeros y segundos ayudantes de medicina del ejército; y por ahora se señala el de seiscientos reales mensuales á los primeros médicos-cirujanos de la armada, y el de cuatrocientos y cincuenta á los segundos.

DECRETO.

DE 25 DE OCTUBRE DE 1820.

Haciendo estensivo el aumento de prest y sueldo acordado á algunas clases del ejército á los individuos de las mismas en la marina militar.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: Que el aumento de prest á los soldados y de sueldos a los oficiales subalternos del ejército, hecho por decreto de 13 de setiembre próximo pasado, sea estensivo, bajo las reglas establecidas para el ejército, á los individuos de las mismas clases de la marina militar, entendiéndose respecto de los oficiales desde la de alféreces de navío inclusive.

ORDEN.

Previniendo que á los declarados pobres no se exijan derechos en las curias episcopales por el despacho de dispensas.

Exmo. sr.=Pedro Mateos y Antonio Toribio, vecinos de Castejada, obispado de Plasencia, han ocurrido á las córtes haciendo presente que á pesar de haber acreditado su pobreza, y sido declarados pobres para el pago de los derechos de una dispensa matrimonial, uno de los individuos de aquella curia eclesiástica les ha exigido mil y quinientos reales vellon por las diligencias

previas. Y habiendo llamado la atencion de las córtes este desorden, han acordado que mientras se dicta la medida general que estan meditando, siendo de absoluta necesidad contener del modo posible los escesos á que da lugar la falta de un sistema uniforme, y aliviar de todo gravamen pecuniario á los que declaran esentos de él nuestras leyes, se pase la representacion de aquellos al gobierno, como lo ejecutamos, para que siendo cierto lo que en ella se espone, disponga no sea estorbada ó detenida por este medio su justa solicitud.

Tambien han acordado que todos los declarados pobres queden esentos de pagar derechos en las curias episcopales por las informaciones y demas diligencias previas para obtener el correspondiente despacho de dispensas; siguiéndose en esto la regla observada respecto de los pobres en los asuntos contenciosos por los demas tribunales; y asimismo que mientras se presenta el plan, en virtud del cual se han de cortar de raiz este y otros abusos semejantes, adopte el gobierno las eficaces medidas que le inspire su zelo, para que en este y otros puntos de esa naturaleza no se repitan esacciones contrarias al de prosperidad de los pueblos y agenas del espíritu de la santa iglesia. Madrid 26 de octubre de 1820.

ORDEN.

Sobre interinidad de los jueces de los tribunales &c.

Exmo. sr.=Las córtes han examinado la consulta que con fecha 24 de agosto último les ha dirigido V. E. de real órden, manifestándoles entre otras cosas la duda que para consolidar la organizacion de los tribunales habia ocurrido á S. M., acerca de si los individuos que provisionalmente entraron á servir las plazas, á consecuencia de los decretos de instalacion de las corporaciones á que pertenecian, deben continuar en ellas en clase de propietarios, como lo estaban en el año de 1814, ó si necesitan de un nuevo nombramiento arreglado al modo y forma que previene la constitucion; y en su vista, y de las diferentes indicaciones de algunos señores diputados, se han servido declarar: Que son interinos todos los magistrados y jueces, escepto los que hayan sido elegidos constitucionalmente desde el restablecimiento del actual sistema: que el gobierno proceda al nombramiento de todos, con arreglo á la constitucion y á las leyes: encargando al consejo de estado tenga muy particular atencion en sus propuestas á los dignos magistrados que hayan sido perseguidos por su adhesion al mismo sistema, ó que hayan mostrado en los últimos seis años la virtud y firmeza propias de su ministerio: que podrá el gobierno reponer como propietarios sin nueva propuesta á aquellos magistra-

dos ó jueces nombrados con arreglo á la constitucion, que por la abolicion de esta en mayo de 1814, quedaron entonces destituidos de sus destinos, y no obtuvieron otros en los últimos seis años, conforme á la regla general prescrita en el real decreto de abril próximo pasado: que la calidad de diputado en córtes no obsta para obtener el despacho de propietario en las plazas que disfrutan de tales magistrados; y últimamente que los magistrados que sean repuestos, lo serán tambien en la antigüedad que disfrutaban. Madrid 1.° de noviembre de 1820.

DECRETO.

DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Dotacion de los capellanes párrocos castrenses.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: *Artículo* 1.° Los capellanes párrocos castrenses de infantería ligera y de línea y los de ciudadelas, gozarán de sueldo para su cóngrua subsistencia, setecientos rs. vn. cada mes: los de caballería ochocientos; y los de tropas de casa real ochocientos y cincuenta. 2.° Los capellanes párrocos castrenses de los cuatro colegios militares percibirán cada mes, el primero mil reales, y el segundo novecientos. 3.° No se proveerá en lo sucesivo para la administracion espiritual de cada uno de dichos cuatro colegios sino un solo capellan, ó sea capellan párroco castrense, que gozará de la asignacion que se señala ahora al primero; debiendo hacerse la provision de este destino prévia oposicion, y en sugeto que haya sido capellan párroco castrense al menos diez años. 4.° Los capellanes de número de la armada gozarán, estando á bordo, el sueldo de setecientos rs. vn. cada mes, y la mitad menos estando en departamento. Los de batallones de brigadas de artillería y capellan mayor del hospital setecientos rs.: los de guardias marinas ochocientos: los curas de departamento novecientos; y los tres subdelegados á mil rs. cada uno. 5.° Los capellanes párrocos castrenses y de la armada en las provincias de ultramar gozarán de sueldo, sobre el haber que disfrutan por sus reglamentos vigentes, cuatrocientos reales mensuales. 6.° Todos los destinos eclesiásticos de la armada que esten vacantes ó vacaren en lo sucesivo, no se proveerán en propiedad hasta que las córtes hagan el arreglo conveniente para el mejor servicio espiritual de un cuerpo tan digno de su atencion y cuidado. 7.° Todos los destinos eclesiásticos del ejército se proveerán en adelante por rigorosa oposicion. 8.° Se revocan los privilegios esclusivos hasta ahora concedidos á los capellanes del ejército y armada para obtener cierto número de prebendas, quedándoles la puerta abierta para que

aspiren á todas, segun creyesen convenirles, atendidos sus méritos. Lo cual se entenderá por ahora hasta que se sancione el reglamento general de dotacion de curas diocesanos, que está presentado á las córtes, en que se trata del mismo asunto. 9.° Con arreglo á la ley 3.ª, tít. 3.°, lib. 1.° de la Nov. Recop. sobre los cementerios de las iglesias, se prohibe á todos los capellanes párrocos castrenses y de la armada, y cualquiera eclesiástico que haga sus veces, el que con ningun título exijan ofrenda ni cuarta funeral de los militares, sean de la clase que fueren. 10. Con respecto á los curas del ejército y armada, y de cualquiera eclesiástico que haga sus veces, quedan abolidos los emolumentos ordinarios, que con el título de derechos de estola se han cobrado hasta ahora; y tambien el conocido con el nombre de derecho de soltería, debiendo los respectivos curas dar *gratis* á los militares, cuando lo pidan, el certificado de soltería.

DECRETO.

DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Sobre percepcion del derecho del post mortem, *vacantes de prebendas eclesiásticas, consultas de las mismas &c.*

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: 1.° Que el derecho del *post mortem* y los demas que por concesiones pontificias ó estatutos se observan en las iglesias, se perciban desde la muerte del obtentor, y se cuenten los dos años de vacante, despues de cumplidas aquellas obligaciones si son por tiempo determinado; y en el caso de serlo por tiempo indefinido, despues de cuatro meses, aplicando los frutos de estos á los objetos que tengan derecho á percibirlos. 2.° Que el consejo de estado, como está mandado, exijan de los cabildos, y la junta nacional del crédito público de los colectores, noticia del dia en que haya vacado cada prebenda, de las obligaciones que tenga de las que habla el artículo anterior, y de las demas que considere oportuno. 3.° Que no se hagan las consultas hasta pasado el término de las mencionadas obligaciones, y un año y medio mas, es decir, medio año antes de concluirse los dos años de vacante. 4.° Que en los títulos se esprese el dia en que fenecen, imponiendo al provisto la obligacion de haber de tomar en el mismo la posesion, y continuando en el disfrute de las rentas de la prebenda que deja hasta aquel mismo dia, en que fenecen los referidos dos años. 5.° Que la anualidad que debe percibirse en cuatro años empiece á contarse desde la toma de posesion; y si no se toma al vencimiento de los dos

años, queden los frutos desde este dia al de la toma de posesion, á quien correspondan por derecho comun ó peculiar de la iglesia. 6.° Las reglas anteriores son aplicables á las dignidades, canongías, prébendas y beneficios de patronato particular, laical ó eclesiástico, cuyas rentas sean de la misma naturaleza que las de los beneficios de real patronato. Y 7.° Lo son asimismo á los beneficios patrimoniales que no tienen gravamen de cura de almas, á las capellanías dotadas con rentas decimales ó bienes y gracias de la corona, y á las de libre presentacion, aunque no tengan rentas de igual naturaleza; pero no á las que ademas de no tener otras propiedades ni rentas que las del patrimonio del fundador ó de su familia, pertenecen á parientes ó personas determinadas por llamamientos que hacen forzosa la presentacion.

ORDEN.

Se autoriza al gobierno para que pueda conceder á los oficiales del ejército sus retiros con la escala que se espresa.

Exmo. sr.=Las cortes se han servido autorizar al gobierno para que pueda conceder á los oficiales su retiro con el tercio del sueldo de la infanteria del ejército á los quince años de servicio; con la mitad á los veinte, con los dos tercios á los veinte y cinco, y con el todo á los treinta. Madrid 7 de noviembre de 1820.

DECRETO.

DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Sobre venta de efectos de las casas de regulares suprimidas.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: 1.° Se reconocerán como válidas todas y cualesquiera ventas de granos, caldos, ganados, bestias y aperos de labor, ú otros efectos muebles y semovientes de las casas de regulares suprimidas que se hayan verificado antes del dia de la solemne promulgacion de la ley de su reforma. 2.° Se esceptúan de esta generalidad las pinturas, manuscritos, ornamentos y demas objetos pertenecientes á las bellas artes, literatura ó culto divino; y los tenedores por título oneroso ó gratuito los entregarán inmediatamente á la respectiva autoridad á quien corresponda, segun la espresada ley, salvo su derecho contra quien haya lugar. 3.° Los prelados, procuradores ó ecónomos que hayan practicado alguna ó algunas ventas de las comprendidas en el artículo 1.°, rendirán cuenta de su producto al encargado del crédito público del distrito, el cual les admitirá en descargo lo

gastado á juicio prudencial para el mantenimiento ordinario de la casa hasta el dia en que se notifique su estincion, y en el pago de deudas legítimas que acreditasen en debida forma. 4.° El residuo neto se distribuirá entre los individuos de la casa al respecto de su carácter y edad, segun lo prevenido en dicha ley; anotándose la cuota de cada uno para rebatirla de la pension señalada, sin que pueda el crédito público distraer estos caudales á otros objetos con pretesto alguno. 5.° Si dicho producto se hubiese repartido ya en todo ó parte entre los referidos individuos, deberán retenerle y tomarse la razon de que habla el artículo anterior, para los efectos que en él se espresan. 6.° Los granos, legumbres, caldos, ú otros cualesquiera frutos que existiesen colectados ó entrojados al tiempo de la notificacion de la ley, se venderán desde luego por el crédito público, con intervencion de apoderado por parte de los religiosos, y el producto se repartirá entre todos ellos, bajo de las reglas y para los fines que se indican en los artículos precedentes. 7.° Si el rendimiento de las ventas hechas ó por hacer no cubriese un trimestre de las pensiones de los individuos de la casa respectiva, el crédito público suplirá inmediatamente el *deficit;* por manera que cada religioso al tiempo de su separacion debe percibir á lo menos tres meses de su situado. 8.° En lo sucesivo se les entregará su haber por trimestres anticipados; y este pago se reputará preferente á otro cualquiera por el crédito público, como una carga de rigorosísima justicia, que disminuye el valor de los bienes que se le adjudican.

ORDEN.

DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Aclarando la duda de si los militares que obtengan plazas de gefes políticos en propiedad, se han de dar ó no de baja en el ejército.

Exmo. sr.=Habiendo las córtes tomado en consideracion la duda propuesta por V. E. en papel de 15 de octubre último sobre si los militares que obtengan plazas de gefes políticos en propiedad se han de dar de baja en el ejército ó no, se han servido declarar, conformándose con el dictámen del consejo de estado, que los militares que son nombrados gefes políticos sin pretenderlo, porque el gobierno los contempla útiles por su talento, aptitud y demas circunstancias, tengan opcion á los ascensos de escala que les correspondan, mientras lo fueren, sin perjuicio de que en cesando vuelvan á su carrera; pero que no la tengan los que sean

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nombrados en fuerza de sus pretensiones; entendiéndose tambien esta declaracion con los militares de mar, y con los magistrados cesantes que se hallen en igual caso y circunstancias. Madrid 8 de noviembre de 1820.

ORDEN.

En la cual se declaran algunas dudas sobre la inteligencia del decreto de 2 de setiembre sobre pluralidad de beneficios.

Exmo sr.=Las córtes han examinado la esposicion del dean, dignidades y racioneros de la iglesia catedral de Avila, que V. E. les remitió con fecha 24 de octubre último, y en que solicitan que, atendida la corta dotacion de sus respectivas prebendas, no se les comprenda en la ley de 2 de setiembre anterior sobre pluralidad de beneficios; y en consecuencia se han servido declarar que la incompatibilidad de beneficios eclesiásticos, acordada justamente por las mismas córtes en dicho dia, y sancionada por S. M. en 4 del propio mes, debe entenderse segun las disposiciones eclesiásticas y civiles que en ella se recuerdan, salva la cóngrua respectiva á la clase del poseedor; que no estando bien establecida esta cóngrua, *por ahora*, y mientras se decreta el arreglo general del clero, no debe considerarse escesiva la renta de catorce á veinte mil reales vellon en las dignidades y canongías de las iglesias catedrales, destinadas principalmente para descanso de los párrocos, y que mientras los prebendados esponentes no tengan mas de ocho á diez mil reales vellon en sus raciones, y de catorce á veinte mil en sus dignidades y canongías, pueden ser considerados como no comprendidos en la referida ley, como ni tampoco el dean del cabildo, con tal que su renta no sea superior á la de una dignidad, y una quinta parte mas; y últimamente, que prévia esta declaracion, se remita este espediente y todos los de la misma clase al gobierno, á fin de que en conformidad á esta disposicion *interina*, dicte las providencias que estime justas en casos de igual naturaleza. Madrid 8 de noviembre de 1820.

ORDEN.

En la cual se manda que las solicitudes de los ayuntamientos para obras de pública utilidad vengan dirigidas é informadas por las diputaciones provinciales &c.

Exmo. sr.=El ayuntamiento constitucional de la villa de Alcocer ocurrió á las córtes con fecha 1.° de setiembre último, solicitando la aprobacion de una rifa de dos muletas nuevas, para con su producto construir una cárcel y casa consistorial: en su vista, y atendiendo á que segun el artículo 322 de la constitucion, la aprobacion de cualquiera arbitrio que adopten los ayuntamientos para obras ú objetos de utilidad comun, ha de obtenerse por medio de las diputaciones provinciales, y siendo la cuarta atribucion de estas el proponer al gobierno dichos arbitrios, han tenido á bien las córtes acordar que el citado ayuntamiento de la villa de Alcocer debe dirigir su solicitud por conducto de la respectiva diputacion provincial á que pertenece con el correspondiente informe de ella. Y al propio tiempo se han servido resolver por punto general, que debiendo observarse escrupulosamente lo dispuesto por los dos citados artículos de la constitucion, guardando la escala que establecen en el curso de las solicitudes de los ayuntamientos, no se admita ninguna que no venga dirigida é informada por la diputacion provincial respectiva, para evitar el riesgo de aprobar disposiciones de algunos ayuntamientos, que acaso se hallen en oposicion con los intereses de la provincia á que corresponden. Madrid 8 de noviembre de 1820.

ORDEN.

Se consideran como parroquias las que son ayudas de la de Cartagena para las elecciones parroquiales, haciéndose general esta resolucion á todos los pueblos que se hallen en el caso que se espresa.

Exmo. sr.=Las córtes, enteradas de lo que espone en la adjunta instancia el ayuntamiento constitucional de Cartagena, y de las causas que indica para que se le autorice á fin de hacer las juntas parroquiales para las elecciones, no solo en la única parroquia de Nuestra Sra. de Gracia, sino en las cuatro ayudas mas que tiene en el recinto de su poblacion urbana y rural, han resuelto, teniendo presente lo que dispusieron las generales y estraordinarias para la ciudad de Cádiz en órden que se comunicó al ministerio del cargo de V. E. en 18 de diciembre de 1812, que las ayudas de parroquia que tiene la única de Cartagena se consideren como parroquias para el efecto de las elecciones, y que estas deben hacerse en todas con arreglo á la constitucion, á lo prevenido para Cádiz en dicha órden y al decreto é instruccion de 23 de mayo de aquel año; y que se generalice esta resolucion á todos los pueblos que se hallen en el mismo caso. Madrid 8 de noviembre de 1820.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ORDEN.

Se declara que los síndicos procuradores estan obligados como los demas individuos de los ayuntamientos á la recaudacion y conduccion de las contribuciones.

Exmo. sr=Enteradas las cortes de lo espuesto por los alcaldes y regidores del ayuntamiento constit cional de Pozo-blanco, en los Pedroches de Córdova, y por los procuradores síndicos de dicho pueblo, manifestando los primeros, que siendo una atribucion de los ayuntamientos el reparto y esaccion de las contribuciones, deben todos sus individuos llenar este deber en la parte que se señale á cada uno, y los segundos, esponiendo las razones en que se funda su resistencia á tal encargo; han declarado por punto general que aunque espícitamente no hayan sido obligados los procuradores síndicos á la recaudacion y conduccion de las contribuciones, lo están espresamente del mismo modo que los alcaldes y regidores, por consecuencia de la mayor consideracion sobre la que antes tenian que la constitucion les da á aquellos en la planta sobre que establece los ayuntamientos, haciéndolos verdaderos individuos de estas corporaciones, á las que incumbe particularmente las mencionadas funciones económicas. Madrid 8 de noviembre de 1820.

ORDEN.

Declarando que la ley sobre abolicion de la ordenanza de matrículas de mar es estensiva en todas sus partes á todos los puntos de ambas Españas.

Exmo. sr.=Las cortes han tomado en consideracion la duda propuesta por V. E. de órden de S. M. en oficio de 3 del corriente; y en su vista, y de los antecedentes del asunto, se han servido declarar que la ley de 8 de octubre anterior sobre abolicion de la ordenanza de matrículas de mar y reglamento que se le substituye, es estensiva en todas sus partes, y debe regir en todos los puntos de ambas Españas, puesto que en ella no se hace distincion alguna ni aplicacion de lugar. Madrid 8 de noviembre de 1820.

DECRETO.

DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Supresion de medias anatas.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: Quedan suprimidas las medias anatas que se exigian á los empleados por los sueldos de los empleos que entraban á servir, y por los ascensos que obtenian, segun se acordó por las cortes generales y estraordinarias.

DECRETO.

DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Supresion de las esacciones para redencion de cautivos.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: se suprimen las esacciones que se hacian para redencion de cautivos con el título de mandas pias y forzosas.

AÑO DE 1821.

ORDEN.

Por la que se declara que el decreto sobre abolicion de mayorazgos no se opone á la conclusion de los permisos concedidos antes de su publicacion para vender bienes vinculados.

Exmo. sr.=El duque de Hijar representó á las córtes en 30 de octubre último, manifestando que como padre y legítimo administrador de los bienes de su hijo primogénito el cual conde de Salvatierra, propuso á la antigua cámara de Castilla la enagenacion de varias fincas pertenecientes á los mayorazgos de este para pagar las deudas que resultaban contra su casa; y que en efecto, dada comision al juez competente, se verificó el remate y venta de algunas fincas, y su producto se invirtió en el pago de acreedores; pero que no habiendo sido aquel suficiente para cubrir todos los créditos, á instancia de los acreedores se señalaron con las formalidades necesarias nuevas fincas capaces de llenar aquellos; todo lo que mereció la aprobacion de la cámara, la que despachó la correspondiente cédula de diligencias; y evacuadas por el juez de primera instancia D. Julian de Sojo, fueron remitidas por este al ministerio de gracia y justicia, donde se detuvo el espediente á causa de estar para sancionarse la ley sobre abolicion de mayorazgos. Por todo lo que, y en atencion á que este asunto estaba ya casi concluido, pues solo faltaba el señalamiento de dia y hora para el remate, y á que las fincas señaladas se debian ya considerar como fuera de la vinculacion, mediante la real facultad obtenida para su enagenacion, juzgando el duque de Hijar no hallarse este caso comprendido en la ley sobre estincion de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ORDEN.

Se declara que los síndicos procuradores estan obligados como los demas individuos de los ayuntamientos á la recaudacion y conduccion de las contribuciones.

Exmo. sr=Enteradas las cortes de lo espuesto por los alcaldes y regidores del ayuntamiento constit cional de Pozo-blanco, en los Pedroches de Córdova, y por los procuradores síndicos de dicho pueblo, manifestando los primeros, que siendo una atribucion de los ayuntamientos el reparto y esaccion de las contribuciones, deben todos sus individuos llenar este deber en la parte que se señale á cada uno, y los segundos, esponiendo las razones en que se funda su resistencia á tal encargo; han declarado por punto general que aunque espícitamente no hayan sido obligados los procuradores síndicos á la recaudacion y conduccion de las contribuciones, lo están espresamente del mismo modo que los alcaldes y regidores, por consecuencia de la mayor consideracion sobre la que antes tenian que la constitucion les da á aquellos en la planta sobre que establece los ayuntamientos, haciéndolos verdaderos individuos de estas corporaciones, á las que incumbe particularmente las mencionadas funciones económicas. Madrid 8 de noviembre de 1820.

ORDEN.

Declarando que la ley sobre abolicion de la ordenanza de matrículas de mar es estensiva en todas sus partes á todos los puntos de ambas Españas.

Exmo. sr.=Las cortes han tomado en consideracion la duda propuesta por V. E. de órden de S. M. en oficio de 3 del corriente; y en su vista, y de los antecedentes del asunto, se han servido declarar que la ley de 8 de octubre anterior sobre abolicion de la ordenanza de matrículas de mar y reglamento que se le substituye, es estensiva en todas sus partes, y debe regir en todos los puntos de ambas Españas, puesto que en ella no se hace distincion alguna ni aplicacion de lugar. Madrid 8 de noviembre de 1820.

DECRETO.

DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Supresion de medias anatas.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: Quedan suprimidas las medias anatas que se exigian á los empleados por los sueldos de los empleos que entraban á servir, y por los ascensos que obtenian, segun se acordó por las cortes generales y estraordinarias.

DECRETO.

DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1820.

Supresion de las esacciones para redencion de cautivos.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: se suprimen las esacciones que se hacian para redencion de cautivos con el título de mandas pias y forzosas.

AÑO DE 1821.

ORDEN.

Por la que se declara que el decreto sobre abolicion de mayorazgos no se opone á la conclusion de los permisos concedidos antes de su publicacion para vender bienes vinculados.

Exmo. sr.=El duque de Hijar representó á las córtes en 30 de octubre último, manifestando que como padre y legítimo administrador de los bienes de su hijo primogénito el cual conde de Salvatierra, propuso á la antigua cámara de Castilla la enagenacion de varias fincas pertenecientes á los mayorazgos de este para pagar las deudas que resultaban contra su casa; y que en efecto, dada comision al juez competente, se verificó el remate y venta de algunas fincas, y su producto se invirtió en el pago de acreedores; pero que no habiendo sido aquel suficiente para cubrir todos los créditos, á instancia de los acreedores se señalaron con las formalidades necesarias nuevas fincas capaces de llenar aquellos; todo lo que mereció la aprobacion de la cámara, la que despachó la correspondiente cédula de diligencias; y evacuadas por el juez de primera instancia D. Julian de Sojo, fueron remitidas por este al ministerio de gracia y justicia, donde se detuvo el espediente á causa de estar para sancionarse la ley sobre abolicion de mayorazgos. Por todo lo que, y en atencion á que este asunto estaba ya casi concluido, pues solo faltaba el señalamiento de dia y hora para el remate, y á que las fincas señaladas se debian ya considerar como fuera de la vinculacion, mediante la real facultad obtenida para su enagenacion, juzgando el duque de Hijar no hallarse este caso comprendido en la ley sobre estincion de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mayorazgos, ni sujeto á las formalidades que en ella se prescriben para la enagenacion de los bienes vinculados, suplicó á las córtes se sirviesen acordar que el juez de primera instancia D. Julian de Sojo continuase y concluyese este espediente con arreglo á derecho, y segun el modo y forma que lo habria hecho hasta aqui. Y las córtes, en consideracion á las sólidas razones alegadas por el duque de Hijar, y á que, segun el principio general de derecho, la ley solo comprende los casos futuros, pero no se estiende á lo pasado, han tenido por justa su solicitud; y en su consecuencia han resuelto que, siendo cierto el relato del esponente, y habiéndose observado en la prosecucion de este espediente las formalidades prescritas por las leyes vigentes en aquella época, se dé órden para que el espresado juez de primera instancia lo continúe hasta su conclusion; y que al efecto se pase al gobierno el aviso correspondiente; declarando al mismo tiempo que esta resolucion se tenga por general, y se observe en todos los casos semejantes á este. Madrid 17 de marzo de 1821.

ORDEN.

Declarando que en todos los tribunales eclesiásticos del reino deban admitirse las apelaciones en ambos efectos en todos los casos prevenidos por el derecho comun.

Exmo. sr.=El juez metropolitano, vicario general de la provincia eclesiástica de Santiago, que reside en Salamanca, ha espuesto á las córtes, que á pesar de lo decretado por las mismas en la ley de 9 de octubre de 1812, y de lo que previene su artículo 22 del capítulo 2.° para que en las causas en que, segun la ley deba admitirse la apelacion en ambos efectos, se remitan los autos originales á los tribunales de apelacion, sin exigir derechos con el nombre de compulsa: las cuatro sufraganías de aquel vicario, á saber; Avila, Badajoz, Plasencia y Coria, están en posesion, las dos primeras por sinodal, y las otras dos por costumbre de no admitir las apelaciones mas que en un efecto en causas beneficiales; cuya práctica se ha reclamado por los litigantes como no conforme á dicho decreto; y no pudiendo el vicario mandar la remision de autos originales, como está prevenido, por ser contra lo literal del citado artículo 22, ni que la hagan en compulsa, por ser contrario al espíritu de dicha ley, ha pedido que las córtes declaren, ó que las apelaciones se admitan en aquellos tribunales conforme á las reglas generales de derecho, ó que, si subsisten sus prácticas, remitan los autos originales; pues que, á no intervenir la espresada costumbre, se admitirán sus apelaciones en ambos efectos.

Las córtes, en vista de esta esposicion, han venido en declarar, que tanto los sufragáneos de Badajoz, Avila, Plasencia y Coria, como cualesquiera otros del reino en donde se observe igual costumbre, deberán otorgar las apelaciones en ambos efectos en todos los casos que estan prevenidos por el derecho comun, y en ellos remitir los autos originales, como está mandado por los tribunales civiles en la ley de 9 de octubre de 1812. Madrid 20 de marzo de 1821.

DECRETO.

DE 23 DE MARZO DE 1821.

Aclaraciones de la ley de 23 de mayo de 1812 sobre formacion de ayuntamientos constitucionales.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado las siguientes aclaraciones á la ley de 23 de mayo de 1812 sobre la formacion de ayuntamientos constitucionales. 1.ª Habrá dos alcaldes, seis regidores y un procurador síndico, en los pueblos que, pasando de 500 vecinos, no escedan de 1ȳ: dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores síndicos en los que desde 1ȳ no pasen de 4ȳ: tres alcaldes, doce regidores y dos procuradores en los de 4 á 10ȳ: en los de 10ȳ á 16ȳ cuatro alcaldes, diez y seis regidores y tres síndicos: en los de 16ȳ á 22ȳ cinco alcaldes, veinte regidores y cuatro síndicos; y en los de 22ȳ arriba seis alcaldes, veinte y cuatro regidores y cinco procuradores síndicos. 2.ª Siguiendo los mismos principios establecidos para la eleccion de estos empleos, se elegirán en un dia festivo del mes de diciembre por los vecinos que se hallen en el ejercicio de los derechos de ciudadano, nueve electores en los pueblos que no lleguen á 1ȳ: quince en los que no llegando á 1ȳ, no pasen de 4ȳ; diez y nueve en los que llegando á 4ȳ, no pasen de 10ȳ; veinte y cinco en los que llegando á 10ȳ no pasen de 16ȳ; treinta y uno en los que llegando á 16ȳ no pasen de 22ȳ, y treinta y siete en los que pasen de 22ȳ 3.ª Para evitar lo mas pronto posible los graves y trascendentales daños que ocasiona en las ciudades populosas la escasez de funcionarios municipales, se completará inmediatamente el número de alcaldes constitucionales y demas individuos de los ayuntamientos hasta el que va indicado, nombrándolos los mismos electores que han hecho las elecciones para el presente año.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ORDEN.

En la cual se declara que la espedicion de títulos de revisores de letra antigua corresponde á las diputaciones provinciales, asi como el examen y aprobacion de maestros de primeras letras.

Exmo. sr.=Conformándose las cortes con lo propuesto por el consejo de estado en su consulta de 9 de agosto último, que nos dirigió el antecesor de V. E. en 20 de setiembre siguiente, y devolvemos adjunta, se han servido declarar, que la espedicion de títulos de revisores de letra antigua corresponde á las diputaciones provinciales, de la misma manera que el examen y aprobacion de maestros de primeras letras. Madrid 31 de marzo de 1821.

ORDEN.

Por la que se manda que los individuos de ayuntamiento una vez nombrados para servir sus cargos no puedan serlo para otros del mismo en todo el tiempo que hayan de continuar en ellos con arreglo á lo prevenido.

Exmo. sr.=Las cortes, enteradas de una esposicion de D. Fernando Antonio de Cos, en que manifiesta que siendo regidor quinto del ayuntamiento de Santander, fue nombrado alcalde segundo constitucional en reemplazo de D. Francisco de Herrera Bustamante, que pasó á ocupar la plaza de diputado suplente de la diputacion provincial, con cuyo motivo solicita que se declare su derecho á la plaza de regidor; se han servido resolver, que el espresado Cos sea repuesto en su cargo de regidor quinto de la ciudad de Santander, previa la correspondiente aceptacion y juramento, y que se proceda á la eleccion de alcalde segundo, declarando al mismo tiempo por punto general, que los individuos de ayuntamiento, una vez nombrados para servir sus cargos, no pueden serlo para otros de la misma corporacion en todo el tiempo que hayan de durar, con arreglo á lo prevenido en la constitucion. Madrid 31 de marzo de 1821.

ORDEN.

Mandando se suspenda la provision de beneficios y capellanias que no tengan anexa cura de almas &c. ínterin se acuerde lo conveniente sobre el plan general del clero

Exmo. sr.=Las cortes han determinado, que mientras acuerdan lo conveniente sobre el plan general del clero de España,

se suspenda la provision de los beneficios y capellanias que no tengan anexa cura de almas, y no fueron comprendidas en el decreto de 1.° de diciembre de 1810: que durante la misma época tampoco se provean las capellanias de sangre, ni se erijan títulos de patrimonio; y que estas medidas no sean por ahora estensivas á las provincias de ultramar; pero los RR. obispos, al ordenar á título de capellania de sangre ó de patrimonio, exigirán que todos los que se presentaren á órdenes con semejantes títulos queden en lo sucesivo obligados á la administracion de sacramentos, y para ello sufran antes el examen *ad curam animarum.* Madrid 8 de abril de 1821.

ORDEN.

Se recomienda al gobierno proceda, en uso de sus facultades, á la formacion de la lista de libros que no deban correr, y que tome las medidas mas enérgicas para que no circulen aquellos, ni los escritos y estampas obscenas &c.

Exmo. sr.=Estando justamente mandado en la ley de las córtes de 22 de febrero de 1813, capítulo 2.°, artículo 1.°, que el rey tome todas las medidas convenientes para que no se introduzcan en el reino libros ni escritos prohibidos ó contrarios á la religion; y acreditando una triste esperiencia que públicamente se venden muchos libros é impresos de esta clase y otros que corrompen las buenas costumbres y ofenden la decencia pública, y aun estampas que abren los ojos á la inocencia, y frustran y destruyen por sus cimientos la sana y religiosa educacion que en todas las clases del estado desean promover las cortes, y está recomendada en la constitucion política de la monarquia; han acordado las mismas se escite el celo del gobierno para que en uso de sus facultades, y por los medios prescritos en la citada ley, proceda á la formacion de la lista de libros que no deban correr; y entre tanto dicte las mas enérgicas y prontas providencias que atajen desde luego este daño, y curen y precavan el estrago que del libre curso y venta de estos escritos y estampas obscenas se sigue á la causa pública, y especialmente á la religion que la nacion está obligada á proteger con leyes sabias y justas. Madrid 14 de abril de 1821.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETO.

DE 17 DE ABRIL DE 1821.

Se establecen las penas que habrán de imponerse á los conspiradores contra la constitucion é infractores de ella.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: Artículo 1.° Cualquiera persona, de cualquiera clase y condicion que sea, que conspirase directamente y de hecho á trastornar ó destruir, ó alterar la constitucion política de la monarquía española, ó el gobierno monárquico moderado hereditario que la misma constitucion establece, ó á que se confundan en una persona ó cuerpo las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, ó á que se radiquen en otras corporaciones ó individuos, será perseguida como traidor, y condenada á muerte. 2.° El que conspirase directamente y de hecho á establecer otra religion en las Españas, ó á que la nacion española deje de profesar la religion católica apostólica romana, será perseguido tambien como traidor, y sufrirá la pena de muerte. Los demas delitos que se cometan contra la religion serán castigados con las penas prescritas, ó que se prescribieren por las leyes. 3.° Cualquiera español, de cualquiera condicion y clase, que de palabra ó por escrito no impreso, tratare de persuadir que no debe guardarse en las Españas ó en alguna de sus provincias la constitucion política de la monarquía en todo ó parte, sufrirá ocho años de confinamiento en algun pueblo de las islas adyacentes, bajo la inmediata inspeccion de las respectivas autoridades civiles, y perderá todos sus empleos, sueldos y honores, ocupándosele ademas sus temporalidades si fuere eclesiástico. Si cometiere este delito un estrangero hallándose en territorio español, perderá tambien los empleos, sueldos y honores que haya obtenido en el reino, sufrirá una reclusion de dos años, y despues será espelido de España para siempre. 4.° Si incurriese en el mismo delito un empleado público, ó un eclesiástico secular ó regular cuando ejerce su ministerio, en discurso ó sermon al pueblo, carta pastoral, edicto ú otro escrito oficial, será declarado indigno del nombre español, perderá todos sus empleos, sueldos, honores y temporalidades, sufrirá ocho años de reclusion, y despues será espulsado para siempre del territorio de la monarquía. El cura ó prelado de la iglesia que presida, en que se pronuncie el discurso ó sermon al pueblo, el secretario que autorice la carta pastoral, edicto ó escrito oficial, el gefe político, alcalde ó juez respectivo que inmediatamente no lo recoja y proceda contra el culpable, sufrirán una

multa de treinta á seiscientos pesos fuertes, al prudente arbitrio de los jueces, segun la gravedad del caso y el mayor ó menor grado de la culpa. Las cantidades espresadas serán dobles en Ultramar. 5.° Si el empleado público, ó el eclesiástico con su sermon, discurso, carta pastoral, edicto ó escrito oficial, segun el artículo precedente, causasen alguna sedicion ó alboroto popular, sufrirán la pena de este crímen, segun la clase á que corresponda. 6.° Ademas de lo dispuesto en los artículos anteriores, el rey, oyendo al consejo de estado en el modo y forma que previene la constitucion respecto de los decretos conciliares y bulas pontificias, podrá suspender el curso, y recoger las pastorales, instrucciones ó edictos que los M. RR. arzobispos, RR obispos y demas prelados y jueces eclesiásticos dirijan á sus diocesanos en el ejercicio de su sagrado ministerio, si se creyese contener máximas contrarias á la constitucion; y se mandará formar causa siempre que se hallaren méritos para ello. En ultramar el gefe político superior de cada provincia, consultando á los fiscales de la audiencia territorial, podrá recoger la pastoral, edicto ó instrucciones, remitiéndolo al rey para los efectos indicados. 7.° Todo español, de cualquiera clase y condicion, que de palabra ó por escrito no comprendido en la ley de libertad de imprenta propagase máximas ó doctrinas que tengan una tendencia directa á destruir ó trastornar la constitucion política de la monarquia, sufrirá, segun la gravedad de las circunstancias, la pena de uno á cuatro años de confinamiento en algun pueblo de las islas adyacentes, bajo la inmediata inspeccion de las respectivas autoridades civiles Si el reo de este delito fuese empleado público, perderá ademas su empleo, sueldo y honores; y siendo eclesiástico, se le ocuparán tambien las temporalidades. Cuando el empleado público, ó un eclesiástico secular ó regular, delinquiere contra lo prevenido en este artículo, ejerciendo las funciones de su ministerio, á mas de las penas anteriores, se estenderá el confinamiento á seis años. El estrangero que hallándose en territorio español incurriese en este delito, perderá los honores, empleo y sueldo que obtenga en el reino; sufrirá la reclusion de un año, y pasado, será espelido para siempre de España. 8.° El que de palabra ó por escrito no comprendido en la ley de la libertad de imprenta provoque á la inobservancia de la constitucion con sátiras ó invectivas, pagará una multa de diez á cincuenta duros; y no pudiendo satisfacerla, sufrirá la pena de quince dias á cuatro meses de prision. Esta pena será doble en los empleados públicos; y si delinquieren ejerciendo las funciones de su ministerio, sufrirán ademas la de suspension de empleo y sueldo por dos años. Las cantidades espresadas serán dobles en ultramar. 9.° Se declara que el que incurra

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en los casos de los artículos 3.°, 7.° y 8.° por medio de un papel impreso sujeto á las leyes de la libertad de la imprenta, debe ser juzgado y castigado con arreglo á ellas esclusivamente. 10. Los alcaldes de los pueblos que no hiciesen celebrar en ellos las juntas electorales de parroquia en los dias señalados por los artículos 36 y 37 de la constitucion, avisando á los vecinos con una semana de anticipacion, conforme al artículo 23 del capítulo 1.° de la instruccion espedida en 23 de junio de 1813 para el gobierno de las provincias, sufrirán la pena de privacion de sus oficios, y pagarán una multa de cincuenta pesos fuertes para el erario público, la cual será doble en ultramar. 11. Igual obligacion tendrán los gefes políticos por lo respectivo al pueblo de su residencia, bajo la pena de privacion de empleo y multa de quinientos pesos fuertes, que tambien será doble en ultramar. 12. Las propias penas sufrirá el gefe político que no cuidase de que se celebren las juntas electorales de partido y de provincia en los dias señalados por la constitucion. 13. Asi los alcaldes y regidores, como los gefes políticos que presidan las juntas electorales de parroquia, de partido ó de provincia, serán castigados, los primeros con las penas impuestas en el artículo 10, y estos últimos con las señaladas en el 11, si no cuidasen respectivamente, en cuanto á ellos corresponda, de que las juntas y elecciones se celebren con entero arreglo á la constitucion. 14. Cualquiera persona que impidiese la celebracion de unas ú otras juntas electorales, ó embarazase su objeto, ó coartase con amenazas la libertad de los electores, sufrirá la pena de privacion de empleos, sueldos y honores que obtenga, y diez años de presidio. Si para ello usase de fuerza con armas, ó de alguna conmocion popular, será condenada á muerte. 15. Cualquiera persona, de cualquiera clase y profesion que sea, que se presente con armas en las juntas electorales, será espelida de estas en el acto, y privada de voz activa y pasiva en aquellas elecciones. 16. La autoridad que directa ó indirectamente impidiere que alguno ó algunos diputados se presenten en las cortes, sufrirá la pena de privacion de empleos, sueldos y honores, sin perjuicio de las demas á que haya lugar con arreglo á los artículos anteriores. 17. Cualquiera que impidiere ó conspirase directamente y de hecho á impedir la celebracion de las cortes ordinarias ó estraordinarias en las épocas y casos señalados por la constitucion, ó hiciese alguna tentativa para disolverlas ó embarazar sus sesiones y deliberaciones, será perseguido como traidor, y condenado á muerte. 18. La misma pena se impondrá al que hiciese alguna tentativa para disolver la diputacion permanente de cortes, ó para impedirle el libre ejercicio de sus funciones. 19. Las cortes y la diputacion permanente podrán por sí decretar el arresto de cualquiera que les falte al respeto cuando se hallen reunidas, ó que turbe el órden y tranquilidad de sus sesiones; y dentro de cuarenta y ocho horas deberán hacerle entregar á disposicion del tribunal ó juez competente. 20. Nadie está obligado á obedecer las órdenes, de cualquiera autoridad que sea, para ejecutar cualquiera de los actos referidos en los cinco artículos precedentes. Si alguno los ejecutase, sufrirá respectivamente las penas impuestas, sin que le sirva de disculpa cualquiera órden que haya recibido. 21. Cualquiera autoridad que no preste cuantos auxilios dependan de ella á la diputacion permanente, siempre que esta se los pida para el desempeño de sus funciones, sufrirá la pena de privacion de empleo, é inhabilitacion perpetua para obtener otro alguno. 22. Estas mismas penas, y la de resarcimiento de todos los perjuicios, se impondrán á cualquiera autoridad que en cualquier tiempo persiga á un diputado de cortes por sus opiniones. 23. El diputado de cortes que, contra lo prevenido en los artículos 129 y 130 de la constitucion, admitiese para sí ó solicitase para otro algun empleo ó ascenso, no siendo de escala, ó alguna pension ó condecoracion de provision del rey, perderá el empleo, pension ó condecoracion; será declarado indigno de la confianza nacional, y si se hallase en ejercicio, será espelido de las cortes, y en su lugar vendrá el suplente. 24. Cualquiera que se abrogare alguna de las facultades que por la constitucion pertenecen esclusivamente á las cortes, perderá los empleos, sueldos y honores que obtenga; quedará inhabilitado perpetuamente para obtener otros, y será recluso en un castillo por diez años. 25. Las mismas penas se impondrán al secretario del despacho ú otra persona que aconseje al rey para que se abrogue alguna de las facultades de las cortes, ó al que le auxilie autorizando sus órdenes, ó ejecutándolas á sabiendas. 26. Iguales penas sufrirá el que aconseje ó auxilie al rey para alguno de los actos que se prohiben por las restricciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sesta, sétima y octava, artículo 172 de la constitucion, ó para emplear las milicias nacionales fuera de las provincias respectivas sin otorgamiento de las cortes. 27. No pudiendo el rey privar á ningun individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna, el secretario del despacho que firme la órden, y el juez que la ejecute, serán responsables á la nacion, y uno y otro perderán el empleo; quedarán inhabilitados perpetuamente para obtener oficio ó cargo alguno, y resarcirán á la parte agraviada todos los perjuicios. 28. Es reo tambien del propio atentado, y sufrirá las mismas penas, el juez ó magistrado que prende ó manda prender á cualquiera español sin hallarle delinquiendo en *fraganti*, ó sin ob-

servar lo prevenido en el artículo 287 de la constitucion. 29. Aténtase tambien contra la libertad individual cuando el que no es juez arresta á una persona sin ser en *fraganti*, ó sin que preceda mandamiento del juez por escrito, que se notifique en el acto al tratado como reo. Cualquiera que incurra en alguno de estos dos casos sufrirá quince dias de prision, y resarcirá al arrestado todos los perjuicios; y si hubiese procedido como empleado público, perderá ademas su empleo. Esta disposicion no comprende á los ministros de justicia, ni á las partidas de persecucion de malhechores cuando detengan á alguna persona sospechosa para el solo efecto de presentarla á los jueces. 30. Cométese el crimen de detencion arbitraria: *Primero:* cuando el juez, arrestado un individuo, no le recibe su declaracion dentro de las veinte y cuatro horas. *Segundo:* Cuando le manda poner ó permanecer en la cárcel en calidad de preso, sin proveer sobre ello auto motivado, de que se entregue cópia al alcaide. *Tercero:* Cuando el alcaide, sin recibir esta cópia é insertarla en el libro de presos, admite alguno en calidad de tal; *Cuarto:* Cuando el juez manda poner en la cárcel á una persona que dé fiador, en los casos en que la ley no prohibe espresamente que se admita la fianza. *Quinto:* Cuando no pone al preso en libertad bajo fianza, luego que en cualquier estado de la causa aparece que no puede imponérsele pena corporal. *Sesto:* Cuando no hace las visitas de cárceles prescritas por las leyes, ó no visita todos los presos, ó cuando, sabiéndolo, tolera que el alcaide los tenga privados de comunicacion, sin órden judicial ó en calabozos subterráneos ó mal sanos: *Séptimo.* Cuando el alcaide incurre en estos dos últimos casos, ú oculta algun preso en las visitas de cárcel para que no se presente en ellas. 31. El magistrado ó juez que cometa este delito por ignorancia ó descuido será suspenso de empleo y sueldo por dos años, y pagará al preso todos los perjuicios. Si procediese á sabiendas, sufrirá como prevaricador la pena de privacion de empleos, sueldos y honores, é inhabilitacion perpetua para obtener oficio ni cargo alguno, ademas de pagar los perjuicios. 32. El alcaide ú otro empleado que por su parte incurra en el mismo crímen, perderá tambien el empleo, pagará al preso todos los perjuicios, y será encerrado en la cárcel por otro tanto tiempo, y con iguales prisiones que las que sufrió el injustamente detenido. 33. Ademas de los casos espresados en los artículos anteriores, la persona de cualquiera clase ó condicion que contravenga á disposicion espresa y determinada de la constitucion pagará una multa de diez á doscientos duros, y en su defecto sufrirá la pena de reclusion de quince dias á un año, y resarcirá todos los perjuicios que hubiese causado.

Si fuere empleado público, quedará ademas suspenso de empleo y sueldo por un año. 34. Todos los delitos contra la constitucion, comprendidos en los treinta y dos primeros artículos de esta ley, causarán desafuero, y los que los cometan serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria. 35. El tribunal competente de los M. RR. arzobispos y RR. obispos en las causas de esta ley, será el supremo de justicia; y para los demas prelados y jueces eclesiásticos la audiencia territorial. 36. Los delincuentes contra la constitucion podrán ser acusados ante los jueces y tribunales competentes por todo español á quien la ley no prohiba este derecho, y cualquiera puede representar contra las infracciones, ó al rey, que las hará examinar y juzgar por quien corresponda, ó directamente á las córtes, conforme al artículo 373 de la misma constitucion. 37. Las córtes, en este último caso, harán efectiva la responsabilidad de los infractores, conforme á su reglamento interior, y á la ley de 24 de marzo de 1813. 38. Todos los jueces y tribunales procederán con la mayor actividad en las causas sobre delitos contra la constitucion, prefiriéndolas á los demas negocios, y abreviando los términos cuanto sea posible.

DECRETO.

DE 17 DE ABRIL DE 1821.

Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiracion.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: Artículo 1.° Son objeto de esta ley las causas que se formen por conspiracion ó maquinaciones directas contra la observancia de la constitucion, ó contra la seguridad interior ó esterior del estado, ó contra la sagrada é inviolable persona del rey constitucional. 2.° Los reos de estos delitos, cualquiera que sea su clase ó graduacion, siendo aprendidos por alguna partida de tropa; asi del ejército permanente como de la milicia provincial ó local, destinada espresamente á su persecucion por el gobierno, ó por los gefes militares comisionados al efecto por la competente autoridad, serán juzgados militarmente en el consejo de guerra ordinario prescrito en la ley 8.ª, título 17, libro 12 de la Novísima Recopilacion. Si la aprension se hiciere por órden, requerimiento ó en auxilio de las autoridades civiles, el conocimiento de la causa tocará á la jurisdiccion ordinaria. 3.° Tambien serán juzgados militarmente en el mismo consejo, con arreglo á la ley 10, título 10, libro 12 de la Novísima Recopilacion, los reos de esta clase que con

arma de fuego ó blanca, ó con cualquier otro instrumento ofensivo, hicieren resistencia á la tropa que los aprendiese, asi del ejército permanente como de la milicia provincial ó local, aunque la aprension proceda de órden, requerimiento ó auxilio prestado á las autoridades civiles. 4.° Para precaver la resistencia y el consiguiente desafuero de que habla el artículo anterior, luego que se reciban noticias ó avisos de la existencia de alguna cuadrilla ó partida de facciosos contra el régimen constitucional, las autoridades políticas harán publicar sin la menor dilacion, bajo su mas severa responsabilidad, un bando con espresion de la hora, para que inmediatamente se dispersen los facciosos y se restituyan á sus hogares respectivos. 5.° Este bando se publicará y circulará con la mayor rapidez por el distrito; y pasado el número de horas que la autoridad haya señalado en el mismo bando, con arreglo á las circunstancias, se entenderá que hacen resistencia á la tropa para el efecto de ser juzgados militarmente, segun el artículo 3.°, las personas siguientes: 1.° Las que se encuentren reunidas con los facciosos, aunque no tengan armas: 2.° Las que sean aprendidas por la tropa huyendo despues de haber estado con los facciosos: 3.° Las que habiendo estado con ellos se encuentren ocultas y fuera de sus casas con armas: 6.° Los que en el término prefijado en el bando de que hablan los artículos anteriores, obedeciendo al llamamiento de la autoridad, se retiren á sus casas antes de ser aprendidos, no siendo los principales autores de la conspiracion, y no teniendo otro delito que el de haberse reunido con los facciosos por primera vez, serán indultados de toda pena. 7.° La obligacion impuesta á las autoridades políticas sobre la publicacion del bando no les impedirá tomar inmediatamente cuantas medidas juzguen convenientes para dispersar cualquiera reunion de facciosos, prender á los delincuentes, y atajar el mal en su origen. 8.° Los salteadores de camino, los ladrones en despoblado, y aun en poblado, siendo en cuadrilla de cuatro ó mas, si fueren aprendidos por la tropa del ejército permanente, ó de la milicia provincial ó local, en alguno de los casos de que hablan los artículos 2.° y 3.°, serán tambien juzgados militarmente, como en ellos se previene. 9.° En cualquiera de los casos de los artículos anteriores, si la milicia provincial ó local ejecutase por sí sola la aprension, el consejo ordinario de guerra se compondrá de oficiales de dicha clase, con arreglo á ordenanza; pero si hubiese concurrido tambien tropa permanente á la aprension, asistirán al consejo de guerra oficiales de una y otra clase en igual número, y el presidente con arreglo á ordenanza. 10. Las sentencias del consejo de guerra ordinario se ejecutarán inmediatamente, si las aprobase el capitan general con acuerdo de su auditor. En caso de

no conformarse, remitirá los autos originales por el primer correo al tribunal especial de guerra y marina, el cual deberá pronunciar su sentencia dentro del preciso término de tres dias á lo mas; y la que recayese se ejecutará sin necesidad de consulta. 11. En todos los procesos que se formaren militarmente á virtud de los artículos anteriores se escusarán cuanto sea posible los careos con arreglo á la real órden mencionada en la nota 16, título 17, libro 12 de la Novísima Recopilacion. 12. Si al fiscal pareciese conveniente, segun la gravedad y circunstancias de una causa en que haya varios reos, que se formen piezas separadas, podrá hacerlo del modo que mas conduzca á la brevedad del proceso; y siempre lo practicará respecto de cualesquiera reos luego que resulten confesos ó convictos, á fin de que no se demore la sentencia de estos y su pronta ejecucion. 13. En todos los demas casos los reos de estos delitos serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria con derogacion de todo fuero, aun cuando la aprension se haya verificado por la fuerza armada. 14. En las causas de esta ley no habrá lugar á competencia alguna, fuera de la que pudiese suscitarse entre las jurisdicciones ordinaria y militar, segun los límites que aquí se señalan. Las competencias que se promovieren se decidirán por el tribunal supremo de justicia dentro de cuarenta y ocho horas á lo mas despues de su recibo. 15. El juez de primera instancia, á quien corresponda el conocimiento de estas causas, les dará una preferencia esclusiva, pudiendo en caso necesario pasar las de distinta clase al otro ú otros jueces que hubiese en el mismo pueblo. 16. En el sumario deberá resultar plenamente acreditada la perpetracion del delito; pero podrá darse por concluido, y elevarse la causa al estado de acusacion, aunque el procesado no esté plenamente convicto, siempre que las pruebas ó indicios inclinen prudentemente el ánimo del juez á creer que el tratado como reo es culpable ó inocente, y que la causa no presenta fundados motivos de poderse adelantar mas en el sumario, ó los ofrece de que podrá hacerse suficientemente en el plenario. 17. Para la actuacion del sumario podrá el juez de primera instancia valerse de cualquier escribano real ó numerario del partido. 18 El juez de primera instancia acordará la formacion de piezas separadas con arreglo á lo prevenido en el artículo 12 de esta ley. 19. Recibida al reo la confesion, si hubiere méritos y lugar para la acusacion, la formalizará el promotor fiscal dentro de tres dias á lo mas; en el auto de traslado que se dé al reo por igual término improrogable se recibirá la causa á prueba. 20. El reo dentro de las veinte y cuatro horas, á lo mas, nombrará procurador y abogado que residan en el partido, ó se hallen á la sazon en él; y no lo haciendo se nombrarán de oficio en el acto. 21.

El promotor fiscal y el procurador del reo presentarán dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á la devolucion de los autos la lista de los testigos de cargo y descargo de que intenten valerse para su prueba respectiva. Estas listas se comunicarán recíprocamente á las partes para la oposicion de tachas en el dia en que haya de celebrarse el juicio, y para los demas efectos convenientes. 22. Las listas de testigos espresarán en cada uno de ellos su vecindad, estado y destino ó modo de vivir. Los testigos que se hallaren dentro de las siete leguas, ó á una jornada regular de la residencia del juzgado, serán compelidos á comparecer personalmente, y tambien cuando á reclamacion de alguna de las partes estimase el juez indispensable para el cargo y descargo la comparecencia personal. Los demas se examinarán por exhorto, acerca del que se observará lo prevenido en el artículo 7.º de la ley de 11 de setiembre de 1820. Estas mismas reglas se aplicarán para la ratificacion de los testigos del sumario. 23. El juez señalará á la mayor brevedad posible el dia para la comparecencia de los testigos y celebracion del juicio. En él serán examinados á puerta abierta, cada uno de ellos con separacion, ante el promotor fiscal, el reo ó su procurador y su abogado. Con la misma solemnidad se leerán las declaraciones y ratificaciones de los que no comparezcan personalmente. Las declaraciones se firmarán por los testigos que supieren hacerlo. Si las partes ó el abogado del reo tuvieren que hacer algunas observaciones á los testigos en el acto de dar estos sus declaraciones, podrán verificarlo por medio del juez; y se escribirán asi las preguntas ú observaciones como las respuestas, á continuacion de la declaracion. 24. Concluido este acto, asi el procurador fiscal como el reo y su abogado, presentarán las pruebas instrumentales que crean favorables, y espondrán en voz cuanto tengan por conveniente; y sin mas trámites ni escritos, pronunciará el juez la sentencia dentro de tres dias á lo mas. 25. Notificada á las partes, las emplazará el juez con término de ocho dias para ante la audiencia territorial, haciendo saber al reo en el acto que nombre procurador y abogado, y si pasado este término y dos dias mas no se presentasen procurador y abogado nombrados por el reo, y que residan á la sazon en la capital, el tribunal los nombrará de oficio. 26. El tribunal fijará el término para el despacho de los autos por el fiscal, el procurador del reo y el relator; no pudiendo esceder de tres dias el concedido á cada uno. 27. Dentro de los plazos que espresa el artículo anterior, podrán las partes suministrar ante el semanero las pruebas que estimen conducentes, y que se les deban admitir con arreglo á las leyes. 28. Pasados estos plazos se procederá inmediatamente á la vista de la causa por la sala á quien

corresponda, agregándosele por antigüedad ministros de las otras hasta el número de seis, incluso el regente ó quien haga sus veces, que siempre deberá asistir. 29. Dentro de tres dias á lo mas se deberá pronunciar la sentencia. 30. El tribunal no tendrá para estas causas número determinado de horas de despacho. Se juntará de dia y de noche por todo el tiempo que convenga segun la urgencia. 31. La mayoría absoluta de votos formará sentencia. En los casos de empate se estará por la que se conformase con la del juez de primera instancia; y no habiendo absoluta conformidad, por la mas favorable el reo. 32. La sentencia que recayere causará ejecutoria. La de libertad se ejecutará inmediatamente. La de pena capital dentro de cuarenta y ocho horas. Las demas á la mayor brevedad posible. 33 Los plazos que señala esta ley son improrogables y perentorios, y no pueden alargarse á título de suspension, restitucion ni otro alguno. Tampoco se admitirán en ninguna de las instancias recursos de indulto. 34. Los cómplices en los delitos de que trata esta ley serán juzgados, como los reos principales, con arreglo á ella. 35. Las causas actualmente pendientes, segun el estado en que se hallaren á la promulgacion de esta ley, se arreglarán para su curso ulterior á lo prevenido en ella, pero sin salir de los respectivos juzgados en que se hallen radicadas. 36. Las leyes sobre la materia se entenderán derogadas en lo que fuesen contrarias á la presente. 37. Las disposiciones de esta ley se entienden limitadas á las provincias de la Península é Islas adyacentes.

ORDEN.

Declarando no hallarse comprendidas en el artículo 2.º de la ley de libertad de imprenta las conclusiones que versan sobre la sagrada escritura &c.

Exmo. sr.=Las cortes, enteradas de la esposicion del gefe político de Galicia, que V. E. nos dirigió con papel de 24 de marzo último, se han servido declarar que no estan comprendidas en el artículo 2.º de la ley de libertad de imprenta las conclusiones que versen sobre la sagrada escritura y sobre los dogmas de nuestra religion, cuando se imprimen de órden de las universidades con la censura previa de los doctores que designan los estatutos de dichas corporaciones. Madrid 9 de mayo de 1821.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DECRETO.

DE 12 DE MAYO DE 1821.

Concediendo á los intendentes ciertas facultades para la cobranza de contribuciones é impuestos.

Las cortes, habiendo examinado la propuesta de S. M. acerca de adoptar ciertas medidas para la mas pronta y facil esaccion y recaudacion de las contribuciones y toda clase de impuestos á los pueblos de la Península, han aprobado: 1.° Que por ahora y hasta tanto que se establezca el arreglo general de hacienda se autorice provisionalmente á los intendentes para que en materia de contribuciones y toda clase de impuestos, en cuanto á su cobranza, puedan cobrar por sí, y sin necesidad de implorar el auxilio del poder judicial ni otra autoridad. 2.° Que con inhibicion de las audiencias, jueces y demas magistrados puedan los mismos intendentes decretar y llevar á efecto los apremios que consideren indispensables en los casos precisos, y con entero arreglo á lo prevenido en la instruccion de 1725, menos en la parte que dispone la detencion de individuos del ayuntamiento en la cabeza de partido, porque es poco conforme á las nuevas instituciones. 3.° Que los apremios militares sean suplidos en todos sus efectos por los prevenidos en dicha instruccion de 1725, siempre que estos no sean de pura ceremonia, y no se confien á personas despreciables, sino que se envie por ejecutores á los empleados cesantes, los que procedan inmediatamente que se personen en los respectivos pueblos al embargo y venta de bienes equivalentes al descubierto, propios del alcalde, consejales y secretario de ayuntamiento, sin admitirles escusa, ni darles audiencia hasta que la hacienda pública se halle plenamente reintegrada; en cuyo caso podrán acudir, si lo tuviesen por conveniente, ante el juez de primera instancia de la capital á deducir su derecho contra quien les parezca; previniéndose á las autoridades que corresponda que jamás abonen ni consientan se haga sobre el vecindario ó generalidad de los contribuyentes derrama alguna para el pago de dietas y gastos de tales comisionados; pues todos deben aprontarlos los espresados alcaldes, consejales y secretario de ayuntamiento, sin perjuicio de que puedan repetirlo de los contribuyentes que hubiesen sido morosos. Y 4.° El gobierno examinará las causas del retraso que advierte en la cobranza del subsidio, y pondrá los mas prontos y eficaces remedios, y celará el desempeño de los deberes de los empleados del resguardo y demas de la hacienda pública.

ORDEN.

Declarando no estar escluidos de tomar parte y representar en las causas de la hacienda pública los empleados en ella.

Exmo. sr.=Las cortes han examinado el espediente que V. E. les remitió en 28 de setiembre último, y en que el administrador interino de la aduana de Barcelona se queja del juez de primera instancia encargado de los negocios contenciosos de hacienda por no quererle reconocer por parte legítima en representacion de la hacienda nacional en la causa formada contra el administrador propietario D. Juan Rovira y varios empleados, por estraccion de grana y añil con guias; por permitir desempeñar las funciones fiscales en ella á D. Antonio Coma, que se negó á hacerlo en el tiempo que conocia el juzgado de hacienda; y por haber declarado ilegítima la sentencia que con acuerdo de asesor profirió el intendente cuando ejercia la subdelegacion de rentas. Y conformándose con el parecer del consejo de estado, apoyado por el gobierno, las cortes han venido en declarar que el citado administrador interino es parte y debe tenérsele por tal; porque aunque las nuevas instituciones han variado, los jueces en el ramo de hacienda no han alterado el modo de enjuiciar, ni escluido á los representantes de la hacienda pública de tomar parte en las causas á favor de la misma, por ser esta facultad inherente á la naturaleza de sus destinos, y hallarse prevenida en las instrucciones vigentes en este punto, especialmente en el artículo 68, capítulo 6.° de la de rentas de 16 de abril de 1816, que no ha sido derogada: y al mismo tiempo han resuelto se remita este negocio al tribunal supremo de justicia, como lo ejecutamos por conducto de V. E. para que proceda en él con la mayor actividad y eficacia, segun lo exige su importancia. Madrid 14 de mayo de 1821.

ORDEN.

Permitiendo á D. Andres Fernandez de Viedma que disponga de todas las vinculaciones que posee: y se hace general esta resolucion con las modificaciones que se espresan.

Exmo. sr.=El capitan de navio retirado D. Andres Fernandez de Viedma, vecino de Jaen, ocurrió á las cortes pidiendo permiso para disponer del total de las vinculaciones que posee, mediante á no tener sucesor conocido dentro del cuarto ni quinto grado; y en atencion á que si llegase á verificarse su fallecimiento antes de averiguarse quién hubiese de serlo en cada una

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de dichas vinculaciones, resultarian tantos pleitos cuanto es el número de estas: y en vista de dicha esposicion se han servido conceder al citado D. Andres Fernandez de Viedma el permiso que solicita, con la calidad de suplir la dificultad que presenta la prueba negativa de no tener sucesores legítimos por medio de una informacion de testigos, que aseguren quedar por muerte de dicho Viedma reducidos sus bienes á la clase de mostrencos; fijándose edictos por el término de dos años, de ocho en ocho meses, tanto en el pueblo de dicho poseedor, como en los lugares donde se hallen sitos los bienes amayorazgados, y en la capital del reino, con el fin de que se publiquen en la gaceta ministerial y otros papeles públicos que el juez de primera instancia ante quien deba seguirse esta causa gradúe por convenientes; y citándose y emplazándose á los que se juzguen con derecho á suceder, para que comparezcan por sí ó por sus apoderados dentro del citado término; con apercibimiento de que pasado este, se procederá á la declaracion de ser libres los referidos bienes, y que el actual poseedor podrá disponer de ellos como mejor fuere su voluntad, segun se ha practicado y practica en las causas de mostrencos, vacantes y abintestatos Cuya resolucion quieren las cortes sea general para todos los poseedores de vinculaciones que se hallen en iguales circunstancias. Madrid 15 de mayo de 1821.

ORDEN.

Por la que se suprimen las cédulas de preeminencia, y se establecen reglas para conceder jubilaciones á los magistrados de las audiencias &c.

Exmo. sr.=Las córtes se han enterado por el oficio de V. E. de 18 de octubre último, de las dudas ocurridas al gobierno, con motivo de haber acudido á S. M. el magistrado de la audiencia de Sevilla D Joaquin de Santa Maria, solicitando se le permitiese continuar gozando de la cédula de preeminencias que obtuvo en 1818, siempre que esta gracia no se considerase incompatible con el sistema constitucional, y en este caso su jubilacion con todo el sueldo. Y en vista de la consulta que hace el gobierno acerca de si en semejantes casos se podrán conceder jubilaciones á los magistrados que se hallen en iguales circunstancias; si dichas jubilaciones deberán ser con todo el sueldo ó solo con el de 16y reales señalados por decreto de 4 de setiembre último á los cesantes de las chancillerías y audiencias; y si para no gravar al erario con estas jubilaciones, cuando algun magistrado se imposibilite del todo á la asistencia del desempeño de su ministerio, será lo mejor no

hacer novedad, ni proveer su plaza sino que goce de todo el sueldo hasta su fallecimiento, supliendo su falta los demas y los fiscales; han resuelto las córtes: 1.° Que se supriman ó queden abolidas para siempre las cédulas de preeminencias, por ser incompatibles con el sistema constitucional. 2.° Que para conceder jubilaciones de aqui adelante se haga constar imposibilidad fisica ó moral, igualmente que buenos servicios. 3.° Que en los espedientes informativos de estas cualidades se oiga á las diputaciones provinciales, para de ese modo evitar hasta la mas remota sospecha de parcialidad. 4.° Que en el caso de concederse las jubilaciones sean con todo el sueldo, ó á lo menos con las dos terceras partes de él, por ser justo que al que se consagra al servicio de la pátria, y se inutiliza en él sin culpa suya, se le auxilie con los socorros necesarios para subsistir en la mas triste y penosa estremidad de su vida. Por último, las córtes, atendiendo á las circunstancias que concurren en D. José Joaquin de Santa Maria, á sus distinguidos y dilatados servicios, que han sido ya tomados en consideracion en abril del año de 1818, se han servido declarar, que puede S. M. dispensarle sin ejemplar, si fuese de su real agrado, del informe de la diputacion provincial, mediante á ser pública y notoria su avanzada edad; concediéndole la jubilacion que solicita, con el sueldo por entero que disfruta. Madrid 17 de mayo de 1821.

DECRETO.

DE 18 DE MAYO DE 1821.

Se hace estensivo á los eclesiásticos y militares el medio de conciliacion que se prescribe en la constitucion para los demas ciudadanos, con las escepciones que se espresan.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: Artículo 1.° En los pleitos civiles ó por injurias, en que séan demandados eclesiásticos ó militares, debe preceder el medio de conciliacion prescrito por la constitucion, del mismo modo que cuando se demanda á los demas ciudadanos. 2.° La conciliacion en todos estos casos debe celebrarse con entero arreglo á lo dispuesto en el capítulo 3.° de la ley de 9 de octubre de 1812 ante los alcaldes constitucionales de cada pueblo, que son los que por la misma constitucion se hallan encargados de ejercer el oficio de conciliadores, lo cual es y debe entenderse sin perjuicio del fuero que competa al demandado, para que no se le juzgue sino por su juez competente cuando no se concilien las partes. 3.° Para que se celebre el juicio de conciliacion no debe preceder peticion por es-

crito, bastará que se solicite verbalmente para que el alcalde mande citar desde luego al demandado, evitando dilaciones. 4.° Debe preceder la conciliacion en las causas de divorcio como meramente civiles; pero no es necesaria en los juicios verbales, ni tampoco en los de concurso á capellanías colativas, ni en otras causas eclesiásticas de la misma clase en que no cabe prévia avenencia de los interesados. En esta última clase se comprenden tambien las causas que interesan á la hacienda pública, á los pósitos ó propios de los pueblos, á los establecimientos públicos, á los menores, á los privados de la administracion de sus bienes, y á las herencias vacantes. 5.° No debe preceder el juicio de conciliacion para hacer efectivo el pago de todo género de contribuciones é impuestos, asi nacionales como municipales, ni para el de los créditos dimanantes del mismo origen. 6.° Tampoco deberá preceder el juicio de conciliacion para intentar los interdictos sumarios y sumarísimos de posesion, el de denuncia de nueva obra, y para intentar un retracto ó promover la formacion de inventarios y particion de herencia, ni para otros casos urgentes de igual naturaleza; pero si hubiese de proponerse despues demanda formal que haya de causar juicio contencioso, precederá precisamente el juicio de conciliacion. 7.° En los juicios de concurso no es necesario el medio de la conciliacion para que los acreedores puedan repetir sus créditos; pero para pedir judicialmente cualquier ciudadano el pago de una deuda, aunque dimane de escritura pública, se intentará antes dicho juicio de conciliacion, y no aviniéndose las partes, se procederá acto continuo al embargo de bienes para evitar todo perjuicio al acreedor. 8.° Lo que quedase resuelto y convenido entre las partes en el juicio de conciliacion, se ejecutará sin escusa ni tergiversacion alguna por el mismo alcalde; y si gozare de fuero privilegiado la persona contra quien deba procederse, lo verificará del mismo modo su juez legítimo en vista de la certificacion que se le presentará de lo resuelto y convenido en el juicio de conciliacion. 9.° Toda persona demandada, á quien cite el alcalde para la conciliacion, está obligada á concurrir ante él para este efecto si reside en el mismo pueblo. Si no lo hiciese se le citará segunda vez á costa suya, conminándole el alcalde con una multa de 20 á 100 reales vellon, segun las circunstancias del caso y de la persona; y si aun asi no obedeciese, dará el alcalde por terminado el acto, franqueará al demandante certificacion de haberse intentado el medio de conciliacion, y de no haber tenido efecto por culpa del demandado; declarará á este incurso en la multa con que le conminó, y se la exigirá si no tuviese fuero privilegiado; y en el caso de tenerle pasará certificacion de la condena del juez respectivo para que

la exija desde luego, remitiendo su importe al alcalde que la impuso. En las provincias de ultramar la multa será de un peso fuerte á lo menos, y no podrá esceder de cinco. 10. En los juicios de conciliacion podrán concurrir las partes, ó personalmente ó por medio de procurador autorizado con poder especial al efecto, y las multas que se exijan en los casos de que habla el artículo anterior se destinarán por ahora esclusivamente al alimento de los pobres presos de las cárceles. 11. Cuando sean demandantes ó demandados el alcalde único, ó todos los de un pueblo, se celebrará la conciliacion ante el regidor primero en órden; y si lo fueren los alcaldes y el ayuntamiento en cuerpo, ejercerá las funciones de conciliador el alcalde del año último; y si se tratase de un negocio de interes comun, se ocurrirá al del pueblo mas inmediato que no lo tuviere. 12. Los alcaldes y demas personas que concurran al juicio de conciliacion no llevarán por este acto derecho alguno; pero se exigirán dos reales vellon á las partes para atender á los gastos indispensables de papel y formacion de libros donde deben estenderse dichos juicios.

ORDEN.

Haciendo estensiva á los cuerpos de la armada la resolucion de 7 de noviembre último, sobre retiros á los oficiales del ejército.

Exmo. sr.=Las córtes se han servido declarar que su órden de 7 de noviembre de 1320, autorizando al gobierno para que pueda conceder á los oficiales su retiro con el tercio del sueldo de la infanteria del ejército á los quince años de servicio, con la mitad á los veinte, con los dos tercios á los veinte y cinco, y con el todo á los treinta, es estensiva á la armada. Lo que participamos á V. E., y por resolucion de la duda que de órden de S. M. consultó ese ministerio en oficio de 17 de marzo último. Madrid 18 de mayo de 1821.

DECRETO.

DE 19 DE MAYO DE 1821.

Se establecen reglas para la fabricacion de pólvora, arrendamiento y venta de las fábricas pertenecientes á la nacion.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: *Artículo* 1.° La fabricacion de pólvora comun ó de caza, minas &c. queda en absoluta libertad, como la fabricacion del salitre. *Art.* 2.° La pólvora de guerra se fabricará por ahora como hasta aquí de cuenta del cuerpo de artillería. *Art.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

3.° El gobierno comprará libremente á los fabricantes particulares todo el salitre sencillo y afinado que necesite para el surtido de pólvoras del ejército y armada, procurando que haya siempre de repuesto en almacenes una tercera parte mas del afinado, que ha de entregarse al cuerpo de artilleria á medida que se vaya gastando. *Art.* 4.° El gobierno se reservará en la parte que lo crea conveniente la afinacion de los salitres que ha de entregar al cuer. po de artilleria para que elabore las pólvoras de guerra. *Art* 5.° Para el afino de estos salitres sencillos y fabricacion de los que convenga hacer de su cuenta, se reservará el gobierno las únicas y precisas fábricas que puedan elaborarlo con ventaja y economía. *Art.* 6.° Todas las demas fábricas propias de la nacion se arrendarán ó venderán á particulares, segun mejor convenga; pero con la precisa y terminante condicion de no destinarlas á otro objeto que á salitrerías, ó de dar todos los años una cantidad de salitre igual al *maximum* que puedan producir, ó hayan producido anteriormente. *Art.* 7.° El gobierno, igualmente que los particulares, venderá los salitres sencillos ó afinados sobrantes despues de cubrir sus precisas atenciones á precios convencionales, y asimismo las pólvoras que juzgue deber fabricar en los molinos que le pertenecen, mientras no halle quien los compre ó tome en arriendo para este objeto. *Art.* 8.° Los fabricantes de pólvora podrán vender las que fabriquen donde y como les parezca, siempre que sea por menor, pero atendiendo á los graves riesgos y contingencias que tiene el tráfico en grande de este misto terrible, los alcaldes y ayuntamientos serán estrechamente responsables de que todo molino, almacen ó repuesto de pólvora se establezca á la distancia suficiente de toda poblacion, para evitar desastres y accidentes funestos; y no permitirán que se almacene, venda, transporte y atraviese por poblado, ni á cierta distancia de él (que será la que señale el ayuntamiento segun las circunstancias) mayor cantidad que la de una arroba con corta diferencia, y eso con las precauciones de estilo para el despacho del público. *Art.* 9.° Las fábricas de pólvora de particulares, asi como las de cualquiera otro artefacto, pagarán por derecho de patente ó fabricacion la cantidad que les corresponda, conforme á lo que el gobierno determine respecto á las demas fábricas de todas clases. *Art.* 10. Los salitres estrangeros, bien sean de Europa ó de la India, quedan absolutamente prohibidos en el comercio: los que hubiese introducido de esta clase la compañía de Cárdenas con anuencia del gobierno, se le abonarán á costo y costas; pero todos los demas que se hayan introducido ú introdujeren furtivamente se darán por decomiso, y se entregarán afinados á la fábrica de pólvora de la artilleria.

ORDEN.

Reglas para el establecimiento de los oficios de hipotecas.

Exmo. sr.=Las córtes, habiendo tomado en consideracion lo espuesto por la diputacion provincial de Cataluña con fecha 10 de marzo último, acerca de la importancia y aun necesidad de que se pongan en las capitales de los partidos los oficios de hipotecas, asi como hasta ahora han estado en las de los corregimientos, subdelegaciones ó antiguos partidos, han resuelto lo sguiente: 1.° En todo pueblo cabeza de partido habrá oficio de hipotecas. 2.° Las diputaciones provinciales formarán, imprimirán y publicarán listas de las cabezas de partido. 3.° El oficio de hipotecas estará á cargo del secretario del ayuntamiento, siempre que lo fuere un escribano público. 4.° Cuando el secretario de ayuntamiento no sea escribano público, nombrará el ayuntamiento para el oficio de hipotecas otro sugeto que tenga dicha calidad, bajo las prevenciones contenidas en la pragmática de 31 de enero de 1768. Madrid 20 de mayo de 1821.

DECRETO.

DE 21 DE MAYO DE 1821.

Derogacion del artículo 7.° de la instruccion de 1725 sobre apremio de labradores &c.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado; se declara derogado el artículo 7.° de la instruccion de 1725, y que pueden los labradores y todos los demas contribuyentes ser apremiados en los meses de junio, julio y agosto como en los demas del año.

ORDEN.

Por la cual se declara que los premios de constancia y de acciones distinguidas no tienen carácter de sueldo.

Exmo. sr.=D. Agustin Herrero, mozo de oficio y macero de las córtes, ocurrió á las mismas en 6 de abril próximo pasado, haciendo presente el derecho con que se consideraba á que se le continuase abonando el premio que habia obtenido correspondiente á seis tiempos de servicio militar, cuyo premio se le ha suspendido desde su nombramiento de empleado de las córtes, en el concepto de no deber disfrutar dos sueldos, y en atencion á que otros que se hallan en igual caso siguen disfrutando sus

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

premios sin oposicion, y á otras razones, pidió que las córtes declarasen deber continuarle dicho abono, no considerándolo como un segundo sueldo, sino como es en sí un premio de su constancia en los 30 años de servicio. Y en vista de esta esposicion han declarado las córtes, que este interesado debe continuar gozando del premio que corresponde á su tiempo de servicio, y que los premios de constancia y de acciones distinguidas no tienen otro caracter que el de una verdadera recompensa y distincion, como se comprueba por la costumbre de notar a los que los obtienen con un distintivo particular y con la espresion de los premios que gozan á continuacion de sus nombres; y porque de otro modo el agraciado con aquellos se veria privado de la señal honorífica de sus méritos, siempre que obtuviese algun otro sueldo, lo cual no se verifica cuando tienen ascensos en la carrera, ni debe verificarse porque obtengan colocacion fuera de ella; pues que si asi sucediese, seria despojarlos de la distincion á que se hicieron acreedores por sus servicios. Madrid 21 de mayo de 1821.

ORDEN.

En la cual se prescribe el plan de ejercicios literarios para la oposicion de prebendas y curatos.

Exmo. sr.=Las córtes han resuelto, que los ejercicios literarios para la oposicion de prebendas y curatos sean en lo sucesivo los siguientes. La composicion y lectura de una disertacion canónica ó dogmático-moral, segun la carrera literaria de los opositores, y un detenido exámen sobre la disertacion y materias canónicas y dogmático morales. Asimismo han resuelto que los jueces para la oposicion de prebendas sean canónigos, y curas para los curatos, debiendo llevar los primeros dos años de prebendados, y los segundos doce de curas. Madrid 25 de mayo de 1821.

ORDEN.

En la que se declara que las corporaciones, aunque autorizadas por la ley así como las sociedades que no lo esten, no deban admitirse como defensores en las causas de fe.

Exmo. sr.=En 4 de setiembre del año próximo pasado espuso á las córtes el presbítero D. Juan Antonio Llorente haber impreso en París una obra intitulada: *Proyecto de una constitucion religiosa, considerada como parte de la civil de una nacion libre é independiente;* y que habiéndose introducido algunos ejemplares de ella en España, el provisor y vicario general del obispado de Barcelona D. Pedro José Abella mandó examinarla y censurarla con arreglo á lo decretado por las córtes generales y estraordinarias en 22 de febrero de 1813, con cuyo motivo se quejaba Llorente de los procedimientos de este, que califica de ilegales, y pidió se reprobase su conducta.

Tambien por su parte ocurrió á las córtes el provisor Abella, dando cuenta de sus procedimientos, y manifestando que despues de haber nombrado de oficio varios defensores de la obra, todos los cuales se negaron á serlo, no creyéndose autorizado para obligar al que nombrase á encargarse de la defensa, consideró que de ningun modo cumpliria mejor con el verdadero espíritu de la ley de que las obras no queden indefensas, que llamando por edictos á cualquiera persona que quisiese defender la obra publicada por Llorente; y que puestos en efecto los edictos, solo se presentaron cuatro comisionados de la sociedad patriótica Barcinonense de Buenos amigos, establecida en Barcelona, los cuales en nombre de la misma presentaron el pedimento de que acompañó copia, encargándose de la citada defensa. Y con este motivo pidió que las cortes declarasen si en las causas de fé debian admitirse como defensores las sociedades patrióticas ú otras corporaciones autorizadas por la ley, y el modo de hacer efectiva con ellas la responsabilidad en el caso de que así procediese en justicia; ó si el cargo de defensor en las citadas causas debe recaer en una sola y determinada persona.

Las córtes, habiendo examinado este espediente con escrupulosa detencion, han venido en declarar: 1.° Que D Pédro José Abella ha procedido en este negocio con arreglo á la ley. 2.° Que las sociedades no autorizadas por las leyes no deben admitirse como defensoras en las causas de fé. 3.° Que las corporaciones aprobadas ó autorizadas por la ley no pueden encargarse de la defensa de una obra ó escrito relativo á la fé, por ser repugnante al órden judicial, y por la dificultad de hacer efectiva con ellos la responsabilidad en los casos que la exigiese la ley. Madrid 28 de mayo de 1821.

DECRETO.

DE 29 DE MAYO DE 1821.

Sobre reemplazo de los gefes y oficiales agregados y supernumerarios del ejército

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: Primero. El gobierno proveerá al reemplazo de los gefes y oficiales agregados ó supernumerarios en el ejército, atendiendo principalmente á las circunstancias de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

adhesion conocida á la constitucion política de la monarquia, y de aptitud; prefiriendo la antigüedad solo en el caso de igualdad de aquellas. Segundo. Se anulan todas las disposiciones contrarias á la presente.

DECRETO.

DE 30 DE MAYO DE 1821.

Acerca de la propuesta de S. M. sobre promocion de los cadetes y sargentos primeros del ejército.

Las córtes, habiendo examinado la propuesta de S. M. sobre promocion de los cadetes y sargentos primeros del ejército, han aprobado. 1.° Que sin embargo de que en lo sucesivo se observará en toda su fuerza y vigor lo aprobado ya por las cortes, respecto á que no se provean empleos militares que no tengan la vacante efectiva; para no privar en tanto al ejército del estímulo que las circunstancias permiten conservar en esta parte, y hasta que se estinga el número de gefes, oficiales y sargentos supernumerarios que actualmente existen, se siga la regla de conceder de cada tres vacantes, dos al reemplazo de los supernumerarios, y una al ascenso en las clases de coronel hasta subteniente inclusive. 2.° Que igualmente por esta vez y sin ejemplar se ascienda á alféreces y subtenientes de sus respectivas armas un número de cadetes de la guardia real y de infantería y caballeria del ejército, igual al que haya de los que entraron á servir en la carrera militar hasta el año de 1814 inclusive. 3.° Que en los cuerpos ó establecimientos militares en que para el primer ascenso de los cadetes se haya seguido hasta ahora la antigüedad sean promovidos los que entraron á servir hasta el año de 1814 inclusive; pero si por la ordenanza ó particular reglamento de alguno ó algunos de aquellos estuviere prevenido que se dé la preferencia á la aptitud, se verifique la promocion bajo esta base; en el concepto de que en tal caso el número de los ascendidos ha de ser igual al que haya de los que entraron á servir hasta el referido año de 1814, sin perjuicio de que los que de estos queden ahora postergados puedan ser ascendidos despues cuando hayan concluido sus estudios y tengan la aptitud necesaria. 4.° Que los sargentos primeros de las mismas armas y cuerpos á quienes corresponda por terna de dos cadetes y un sargento, sean tambien ascendidos, eligiéndolos entre los mas aptos de los que reunan las circunstancias de haber hecho la guerra de la independencia ó parte de ella, y haber sido sargentos primeros desde 1814 á lo menos. 5.° Que el gobierno tome todas las medidas y precauciones que juzgue oportunas para que la promocion de que tratan los artículos anteriores se haga bajo las reglas de la mas rigurosa justicia, y que los nuevamente ascendidos se distribuyan en sus respectivas armas con la proporcion debida. 6.° Que los cadetes que resulten sobrantes, si les acomodare seguir sirviendo en su clase y arma, puedan continuar, sujetándose sin embargo al método de ascensos que prescriban las órdenes vigentes, ó que en lo sucesivo se establezca; pero si quisieren pasar á las milicias provinciales, se les conceda: á los que lleven menos de tres años de servicio, de subtenientes de las mismas; de tres á cinco, de tenientes; y de cinco en adelante, de capitanes.

DECRETO.

DE 8 DE JUNIO DE 1821.

Abolicion de ciertos derechos sobre la plata y oro &c.

Las córtes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente: Artículo 1.° Quedan abolidos los derechos llamados de *quintos*, uno por ciento y señoreage. Art. 2.° A estos se substituye una sola contribucion de tres por ciento sobre la plata, y lo mismo sobre el oro, que se pagará en la misma forma que se observaba para los quintos. Art. 3.° Los mineros y beneficiadores, en clase de tales, no estarán sujetos á pagar ninguna otra contribucion, escepto las de los fondos del tribunal general de minería, cuando no ejerzan otra industria ó tengan otra especie de negociacion; pero esto no se entenderá en cuanto á las contribuciones generales y municipales á que estén sujetas las demas clases de ciudadanos. Art. 4.° No se cobrará por razon de monedage mas que lo que efectivamente cuesta la operacion, reduciendo los dos reales que ahora se pagan á lo que resultare ser el verdadero costo. Para regularle se tomará el medio término de los gastos de cada quinquenio, y esto será lo que se cobrará en el quinquenio siguiente, renovándose en cada uno esta promediacion. En las casas de moneda que de nuevo se establezcan, se formará un presupuesto que regirá el primer año, corrigiéndolo al fin de este con el resultado de sus cuentas, y gobernándose por este presupuesto corregido hasta que al fin del primer quinquenio pueda tomarse el término medio. A los introductores se entregará en moneda el valor de sus metales por escala numérica, sin adelantos de preferencia de unos á otros, y sin mas demora que la del tiempo necesario. Art. 5.° Se cesará de cobrar los ocho maravedises por marco de plata que se pagan como gastos de afinacion, y los 26 maravedises impuestos sobre la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

misma cantidad de las pastas mistas que se introducen á apartar, á título de mermas de la plata. Art. 6.° El aumento de plata á sus leyes que resultare en la afinacion, y el que se esperimenta en la fundicion de las barras de plata y de oro para ligarlas y reducirlas á rieles, deducidos los gastos de estas operaciones, asi como el producto de los febles de la moneda, se entregarán al fondo dotal del cuerpo de minería; y la diferencia entre el aumento de oro y verdaderas mermas de la plata en el apartado se deducirán de los costos de esta operacion. Art. 7.° No se llevará por razon de costos de apartado mas que dos reales de plata por marco, que son los que ahora tiene la operacion, hecha la deduccion indicada en el artículo anterior, abonando á los introductores todo el oro que sus pastas contuvieren. Cuando mejorado el procedimiento los costos fueren menores, se rebajará á proporcion á los introductores lo que por esta razon paguen, abonándoles el oro en la misma proporcion, y siendo libres para efectuar la operacion por sí mismos, ó á donde mas les conviniere. Art. 8° Todo lo que se ha dicho de la plata es aplicable al oro, cobrándose lo mismo por la amonedacion de un marco de plata que de oro, dispensando el derecho llamado de bocado, y reduciendo el de ensaye á los costos que esta operacion tuviere como en la plata. Art. 9.° Una vez verificado el pago en las tesorerías nacionales del derecho de tres por ciento sobre la plata, y lo mismo sobre el oro, y puestos en las barras ó tejos de estos metales los sellos que lo acrediten, sus dueños son libres para venderlos ó emplearlos en los usos que quieran, sin fijacion alguna de precio. Art. 10. Se observarán puntualmente las reales órdenes de 13 de enero de 1784, 12 de noviembre de 1791 y 6 de diciembre de 1796, relativas á la franquicia de alcabalas que se concede á los artículos del consumo de las minas, asi como la órden de 13 de enero de 1812 por lo respectivo á la sal. Art. 11. Quedan abolidos todos los derechos establecidos durante la revolucion, tanto sobre los artículos del consumo de las minas, como sobre los metales en pasta ó acuñados, bajo cualquier título que se conozcan. Art. 12. Cuidará el gobierno de remitir la mayor cantidad posible de azogue, consignándola á las diputaciones de minería, para que estas la distribuyan á los mineros, y de que en lo sucesivo las remisiones sean suficientes para proveer á las necesidades de las minas, formando en México un repuesto bastante para que nunca llegue á faltar aquel ingrediente necesario para el beneficio. Art. 13. En lo sucesivo los empleos facultativos de las casas de moneda y apartado, y los de ensaye en las casas de la capital y foráneas, recaerán esclusivamente en personas que tengan los conocimientos de física, química y mineralogia necesarios para desempeñarlos, prévio examen de facultativos en estas ciencias; y en los que fueren de escala en los mismos establecimientos, serán preferidos para las primeras entradas los alumnos del seminario de minería. Art. 14. Estas providencias solo se entienden en cuanto á la América septentrional.

ORDEN.

Declarando que los párrocos que vivan fuera del recinto de sus parroquias no puedan dar ni recibir votos en las juntas electorales en que sean pastores &c.

Exmo. sr.=Las cortes han examinado una esposicion en que D. Alejandro Fernandez Bustos, vecino de Zamora, pide se declare si un párroco que vive fuera de los límites de su parroquia ha de tener el voto activo y pasivo para las elecciones de diputados en la junta parroquial de la en que vive, ó en la de que es pastor; y en su vista se han servido declarar que los párrocos que vivan fuera del recinto de sus parroquias no puedan dar ni recibir votos en las juntas electorales de las en que sean pastores, y sí únicamente gocen de voto pasivo en las que tengan su vecindad y residencia. Madrid 12 de junio de 1821.

DECRETO.

DE 13 DE JUNIO DE 1821.

Derogacion del artículo 6.° del decreto de 30 de mayo relativo al pase de cadetes á las milicias provinciales.

Las cortes, habiendo examinado la propuesta de S. M. sobre el pase de cadetes del ejército á las milicias provinciales con el ascenso declarado por el artículo 6.° del decreto de 30 de mayo último, han aprobado que quede sin efecto el espresado artículo.

ORDEN.

Aclaracion del decreto de 8 de octubre de 1820 sobre matrículas de mar.

Exmo. sr.=Enteradas las cortes de la consulta del gefe político de Asturias, la cual nos dirigió V. E. en 29 de marzo anterior, y devolvemos adjunta, acerca de si á Vicente Gonzalez, cabo que fue del regimiento de Zaragoza, se le ha de permitir ejercitarse en la pesca, en razon á haberse inutilizado en el servicio, y haber pescado anteriormente en clase de terrestres; y sobre si los marineros que se inutilizan en el servicio de la armada antes de cumplir el tiempo prescrito por la ley y la edad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de cuarenta años deben inscribirse en las listas de hombres de mar, se ha servido resolver: 1.° Que no es conveniente acceder á la solicitud de Vicente Gonzalez. 2.° Que los marineros que se inutilizan en el servicio de la armada antes de cumplir los seis años de servicio y los cuarenta de edad, pueden continuar ejercitándose en las industrias de mar, debiendo inscribirse en la quinta lista que señala el decreto de 8 de octubre de 1820; y que esta resolucion se circule y tenga como aclaracion al citado decreto de 8 octubre. Madrid 13 de junio de 1821.

DECRETO.

DE 19 DE JUNIO DE 1821.

Aclaracion de la ley de 27 de setiembre último sobre vinculaciones.

Las cortes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitucion, han decretado lo siguiente para facilitar la ejecucion y cumplimiento de la ley de 27 de setiembre del año próximo pasado. *Art.* 1.° El posseedor actual de bienes que estuvieron vinculados, podrá enagenar los que equivalgan á la mitad ó menos de su valor sin previa tasacion de todos ellos, obteniendo el consentimiento del siguiente llamado en órden. Prestado el consentimiento por el inmediato, no tendrá accion alguna cualquiera otro que pueda sucederle legalmente, para reclamar lo hecho y ejecutado por virtud del convenio de su predecesor. 2.° Si el inmediato fuere desconocido, ó se hallare bajo la patria potestad del poseedor actual, deberá prestar el consentimiento el síndico procurador del lugar donde resida el poseedor con arreglo al artículo 3.° del decreto de 27 de setiembre, cuyo consentimiento prestarán igualmente por sus pupilos y menores los tutores y curadores, quienes para el valor de este acto, y salvar su responsabilidad, cumplirán con las formalidades prescritas por las leyes generales del reino cuando se trata de un negocio de huérfanos y menores 3.° En el caso de que se opongan al consentimiento para la venta el siguiente llamado en órden, y los tutores ó síndicos, tratándose de la enagenacion íntegra de la mitad de los bienes, se cumplirá con la tasacion general que prescribe la ley de 27 de setiembre; pero si solo se pretendiere vender una ó mas fincas, cuyo valor no alcance á la mitad y hubiere igualmente oposicion, podrá el poseedor ocurrir á la autoridad local, y comprobado que en el valor de otro ú otras, queda mas de la mitad que le es permitido enagenar, se autorice la venta por el juez, y se proceda desde luego á ella.

DECRETO.

DE 22 DE JUNIO DE 1821.

Aumento de sueldo á los oficiales primeros, segundos y terceros del ministerio de artilleria.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: se señala á los oficiales primeros y segundos del ministerio de artilleria nacional el aumento de sueldo de 150 rs. mensuales, y á los oficiales terceros el de 100.

ORDEN.

Aclaracion de la inteligencia que deberá darse á la voz sirvientes domésticos

Exmo. sr.=Las córtes, con el fin de evitar los altercados y contiendas que podrian suscitarse en las juntas electorales de parroquia por la diferente inteligencia que se da á la voz *sirvientes domésticos*, se han servido declarar que bajo la referida voz solo deben comprenderse los criados que estipulen ó contraten prestar á las personas de sus amos como objeto principal algun servicio casero y puramente mecánico, con esclusion de otro cualquiera que pertenezca á las labores ó ejercicio de campo, y de los relativos á las ciencias, artes, comercio, industria, educacion de niños ó jóvenes, desempeño de oficinas de cuenta y razon, y demas de iguales y semejantes clases, que de ninguna manera esten reputados por propios y peculiares de los criados domésticos. Madrid 24 de junio de 1821.

ORDEN.

Declarando que las diputaciones provinciales pueden consentir que los ayuntamientos graven á sus pueblos con ciertos impuestos, cuando su objeto sea urgente.

Exmo. sr.=Las córtes, en vista de las esposiciones dirigidas á las mismas por diferentes ayuntamientos en solicitud de aprobacion de los arbitrios que han propuesto para cubrir las cargas municipales de los respectivos pueblos que representan, se han servido resolver por punto general que las diputaciones provinciales, en uso de la facultad que les concede el artículo 323 de la constitucion, pueden consentir que los ayuntamientos interinamente usen del arbitrio de fiel medidor, y el de gravar con impuestos los objetos de consumo para sus gastos municipales, en el único caso de estar convencidas las mismas diputaciones por vista de espediente instruido de ser urgente el objeto á que se destinen dichos arbitrios, y de no haber otros menos gravosos. Madrid 25 de junio de 1821.

ORDEN.

Mandando se observen las leyes vigentes relativas á obrages de plata y oro.

Exmo. sr.=Las córtes, despues de haber tomado en consideracion lo espuesto en las adjuntas instancias por los diputados del colegio de Plateros de esta córte, el colegio de Plateros de esta córte, el colegio de Plateros de la ciudad de Valencia, y por los Plateros de la ciudad de Barcelona, acerca del abuso que hacen muchos del benéfico decreto de 8 de junio de 1813, introduciendo, fabricando, y aun espendiendo artefactos de oro y plata, que cuando menos no tienen la calidad prescrita por las leyes; se han servido resolver que hasta que por el código civil ú otra ley se establezcan nuevas reglas para asegurar la ley y buena calidad de los obrages de oro y plata, deben observarse las leyes vigentes del título 10 libro 9 de la Novísima Recopilacion. Madrid 25 de junio de 181.

ORDEN.

Para que se continúe el abono de la gratificacion á los cirujanos militares.

Exmo. sr.=Las córtes, enteradas de lo manifestado por V. E. de órden de S. M. en oficio de 18 del corriente sobre la necesidad de aumentar el sueldo á los individuos del cuerpo de cirujía militar, mediante haberles cesado las gratificaciones que percibian, se han servido declarar: 1.° Que el abono de la gratificacion á los cirujanos debe continuar por el mismo método que rige, haciéndose los descuentos prevenidos para este objeto en los haberes de las clases que deben sufrirlos, hasta tanto que en las ordenanzas generales se establezca lo conveniente: Y 2.° Que se recomiende al gobierno la formacion y presentacion á las córtes del reglamento particular del cuerpo de cirujía militar, teniendo en consideracion respecto á los haberes la supresion de los descuentos en las pagas de los oficiales, conforme á lo prevenido en el artículo 104 del decreto orgánico del ejército de 9 del presente mes. Madrid 27 de junio de 1821.

DECRETO.

DE 28 DE JUNIO DE 1821.

Reglas para hacer el abono del retiro á los oficiales del ejército que han servido en las milicias provinciales.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: 1.° Que á los oficiales del ejército que pasaron á milicias en el año de 1814 les corresponde el retiro de tales oficiales de ejército. 2.° Que á los de milicias que fueron declarados de ejército en 1810, se les abone la mitad del tiempo que sirvieron en provincia antes de dicha época, y por entero el que hayan servido desde el citado año 1814. 3.° Que si unos ú otros hubiesen obtenido ascensos en milicias como tales milicianos, obtengan el retiro correspondiente á un empleo menos, con arreglo al reglamento de retiros de 1.° de enero de 1810; pero si en el ascenso hubiesen conservado la consideracion de ejército, optarán al retiro que como tales les corresponda. 4.° Que á los oficiales puramente de milicias se concedan los retiros, conforme á lo prevenido para ellos en dicho reglamento de 1810. 5.° Que á los que no tengan los años de servicio que prescribe el mismo reglamento para obtener el fuero y uso de uniforme, se les conceda sin embargo, conforme á lo dispuesto en la real órden de 27 de setiembre de 1814. Y 6.° Que á todas las clases que actualmente componen los regimientos de milicias se haga estensiva para sus respectivos retiros la gracia concedida al ejército en decreto de 7 de noviembre de 1820.

ORDEN.

Aclaraciones sobre el modo y órden con que han de proceder las diputaciones provinciales para la renovacion de sus individuos en las circunstancias que se espresan.

Exmo. sr.=Las córtes, enteradas de una esposicion de la diputacion provincial de Granada acerca de las dudas que se habian ofrecido sobre el órden que deberian ocupar para el acto de la renovacion los suplentes que habiendo sido llamados en lugar de algunos de los vocales propietarios inhabilitados por causas justas y legítimas para continuar en sus encargos, se han servido resolver lo siguiente: 1.° Que la diputacion provincial de Granada y todas las demas de la monarquía deben renovarse en esta primera vez y en lo sucesivo conforme á lo dispuesto para la de Cataluña en 29 de abril de 1814. 2.° Que los suplentes llamados á reemplazar las vacantes de las diputaciones deben ocupar los últimos lugares, quedando de mas antiguos los propietarios que antes existian, segun se acordó para con los individuos de los ayuntamientos constitucionales por decreto de 11 de agosto de 1813. en la regla 5.ª 3.° Que el suplente ó suplentes de las diputaciones provinciales en el acto mismo de entrar á reemplazar á los propietarios sean habidos y reputados como tales, y renovados en esta clase. 4.° Que en la provincia de Granada, y en las demas que se encuentren en iguales circunstancias sin suplente alguno, procedan las juntas electorales en la eleccion inmediata al nombramiento de los tres que les corresponden, con arreglo al artículo 329 de la constitucion. 5.° Que en las provincias

en donde queden dos suplentes, salga de ellos el último nombrado, quedando el otro como mas antiguo. 6.° y último. Que tanto en el caso espresado en el artículo anterior, como en el de no quedar mas que un suplente, se proceda al nombramiento de los otros dos que faltan para completar la diputacion provincial. Madrid 29 de junio de 1821.

DECRETO.

DE 29 DE JUNIO DE 1821.

Esencion de diezmos á los nuevos plantíos de cacao de Nueva-España.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: quedan esentos del pago de diezmos los nuevos plantíos de cacao que se hagan en Nueva España.

DECRETO.

DE 29 DE JUNIO DE 1821.

Asignacion de retiros á los sargentos de primera y segunda clase del ejército.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: 1.° El sargento primero ó segundo, que se retire y no goce el sueldo de oficial, disfrutará á los 15 años de servicio un tercio del haber correspondiente á su última clase, cuyas funciones haya desempeñado por espacio de un año, y ademas el aumento de 30 reales mensuales: á los veinte años la mitad del haber y el aumento de 60 reales: á los 25 los dos tercios de aquel y el premio de 50 reales; y á los 30 el haber íntegro y el premio de 112 reales y medio. 2.° Lo prevenido en el artículo anterior no tendrá efecto sino desde el dia de su publicacion, y de consiguiente no se admitirá reclamacion alguna para mayor sueldo á los que actualmente se hallan ya retirados.

ORDEN.

Por la que se declara no deber continuar en las córtes mas diputados suplentes de las provincias de ultramar que los de Filipinas y Perú.

Exmo. sr.=En la segunda junta preparatoria de las córtes estraordinarias celebrada en este dia se ha resuelto que no deben continuar ejerciendo las funciones de diputados otros suplentes de las provincias de ultramar, sino los de Filipinas y el Perú. Madrid 23 de setiembre de 1821.

FIN.

INDICE

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

A

Abogacia. *No pueden ejercerla los jueces de primera instancia, sino en defensa de sus propias causas*..... 129.

Abogados. *Se declara libre su incorporacion en los colegios de su instituto*..... 8.

Africa. *Habilitacion á sus oriundos para entrar en colegios*..... 25.

Agencias consulares. *Las encargadas á los españoles por las potencias estrangeras no se consideran como empleos*..... 55.

Agricultura. *Medidas para su prosperidad*..... 2.

———— *Establecimiento de cátedras de este ramo*..... 82.

Aguardiente mezcal. *Su libre fábrica y venta en el vireinato de México*..... 3.

Alcabala. *No la causa la venta ó permuta de esclavos*.... 116.

Alcabalas y cientos. *Se declara libre de este derecho la venta de embarcaciones en América*..... 5.

Alumbre. *Vease* Estancos.

América. *Varias medidas para el fomento de su agricultura é industria*..... 79.

———— *Otras en favor de los indios y castas*..... 54.

———— *Se prohibe el comercio de repartimientos á los justicias*..... 3.

———— *Se estiende á ella la libertad de alcabalas en la venta de embarcaciones*..... 5.

———— *Se concede la libertad en la pesca de la ballena, nutria y lobo marino, y en el buceo de la perla*.. 7.

———— *Véase* Indios.

Anatas. *Supresion de las medias*..... 172.

Apelaciones. *Deben admitirse en todos los tribunales eclesiásticos en ambos efectos en todos los casos de derecho comun*..... 174.

Apremios. *Se prohiben bajo de este nombre las prácticas introducidas para afligir á los reos*..... 8.

Armada. *Se hace estensivo á sus individuos el reglamento de sueldos del ejército*..... 106.

———— *Véase* Marina. Matrículas. Retiros y Sueldos.

Arrendamientos. *Sean libres los de cualquiera finca*..... 80.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en donde queden dos suplentes, salga de ellos el último nombrado, quedando el otro como mas antiguo. 6.° y último. Que tanto en el caso espresado en el artículo anterior, como en el de no quedar mas que un suplente, se proceda al nombramiento de los otros dos que faltan para completar la diputacion provincial. Madrid 29 de junio de 1821.

DECRETO.

DE 29 DE JUNIO DE 1821.

Esencion de diezmos á los nuevos plantíos de cacao de Nueva-España.

Las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: quedan esentos del pago de diezmos los nuevos plantíos de cacao que se hagan en Nueva España.

DECRETO.

DE 29 DE JUNIO DE 1821.

Asignacion de retiros á los sargentos de primera y segunda clase del ejército.

Las córtes, usando de la facultad que se les concede por la constitucion, han decretado: 1.° El sargento primero ó segundo, que se retire y no goce el sueldo de oficial, disfrutará á los 15 años de servicio un tercio del haber correspondiente á su última clase, cuyas funciones haya desempeñado por espacio de un año, y ademas el aumento de 30 reales mensuales: á los veinte años la mitad del haber y el aumento de 60 reales: á los 25 los dos tercios de aquel y el premio de 50 reales; y á los 30 el haber íntegro y el premio de 112 reales y medio. 2.° Lo prevenido en el artículo anterior no tendrá efecto sino desde el dia de su publicacion, y de consiguiente no se admitirá reclamacion alguna para mayor sueldo á los que actualmente se hallan ya retirados.

ORDEN.

Por la que se declara no deber continuar en las córtes mas diputados suplentes de las provincias de ultramar que los de Filipinas y Perú.

Exmo. sr.=En la segunda junta preparatoria de las córtes estraordinarias celebrada en este dia se ha resuelto que no deben continuar ejerciendo las funciones de diputados otros suplentes de las provincias de ultramar, sino los de Filipinas y el Perú. Madrid 23 de setiembre de 1821.

FIN.

INDICE

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

A

Abogacia. *No pueden ejercerla los jueces de primera instancia, sino en defensa de sus propias causas*..... 129.

Abogados. *Se declara libre su incorporacion en los colegios de su instituto*..... 8.

Africa. *Habilitacion á sus oriundos para entrar en colegios*..... 25.

Agencias consulares. *Las encargadas á los españoles por las potencias estrangeras no se consideran como empleos*..... 55.

Agricultura. *Medidas para su prosperidad*..... 2.

———— *Establecimiento de cátedras de este ramo*..... 82.

Aguardiente mezcal. *Su libre fábrica y venta en el vireinato de México*..... 3.

Alcabala. *No la causa la venta ó permuta de esclavos*.... 116.

Alcabalas y cientos. *Se declara libre de este derecho la venta de embarcaciones en América*..... 5.

Alumbre. *Vease* Estancos.

América. *Varias medidas para el fomento de su agricultura é industria*..... 79.

———— *Otras en favor de los indios y castas*..... 54.

———— *Se prohibe el comercio de repartimientos á los justicias*..... 3.

———— *Se estiende á ella la libertad de alcabalas en la venta de embarcaciones*..... 5.

———— *Se concede la libertad en la pesca de la ballena, nutria y lobo marino, y en el buceo de la perla*.. 7.

———— *Véase* Indios.

Anatas. *Supresion de las medias*..... 172.

Apelaciones. *Deben admitirse en todos los tribunales eclesiásticos en ambos efectos en todos los casos de derecho comun*..... 174.

Apremios. *Se prohiben bajo de este nombre las prácticas introducidas para afligir á los reos*..... 8.

Armada. *Se hace estensivo á sus individuos el reglamento de sueldos del ejército*..... 106.

———— *Véase* Marina. Matrículas. Retiros y Sueldos.

Arrendamientos. *Sean libres los de cualquiera finca*..... 80.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Artilleria. (*Cuerpo de*) *sus individuos sean juzgados por su tribunal particular*..... 19.
——— *Aumento de sueldo á los oficiales de su ministerio.* 203.
Audiencias. *Su reglamento*..... 35.
Autores. (*Véase* Escritos).
Autoridades. *Su responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes superiores*..... 11.
——— (*Véase* Responsabilidad).
Ayuntamientos. *Su formacion*..... 28.
——— *Su secretario no necesita ser escribano*..... 32.
——— *En sus elecciones los eclesiásticos tienen voz activa, pero no pasiva*..... 33.
——— *No tienen voto en ellos los gefes políticos, y sí los síndicos*.....55 *y* 85.
——— *Cómo se reemplazarán las vacantes de los regidores*..... 66.
——— *Los individuos de los antiguos conservan sus honores*..... 67.
——— *La ley de perentescos se observe en la eleccion de sus individuos*..... 78.
——— *Obligaciones de los ayuntamientos*..... 86.
——— *Varias reglas para su gobierno*..... 103.
——— *Sus solicitudes se informen por las diputaciones provinciales*..... 170.
——— *Los nombrados para los ayuntamientos no pueden serlo para otros cargos de los mismos durante el primer nombramiento*..... 176.
——— *Aclaracion de la ley sobre su formacion*..... 175.
Azogue. *Franquicias y libertad de su comercio*..... 1.
——— *Medidas para fomentar el laboreo de sus minas.* 2.
Azotes. *Se prohibe esta correccion en las escuelas y colegios*..... 104.
——— *Su abolicion en clase de pena*..... 105.

B

Baldios. *Y otros terrenos comunes se mandan reducir á propiedad particular*..... 56.
Ballena. *Véase* América.
Beneficios. *Aclaracion de dudas sobre la pluralidad de ellos.* 170.
——— *Véase* Ordenes y Eclesiásticos.

C

Cadetes. *Vease* Ejército.
Calabozos. *Se mandan destruir los subterráneos y malsanos.* 151.
Capellanes. *Vease* Castrenses.
Cárceles. *Visita de ellas por el tribunal de guerra y marina, y por los demas militares*..... 33.
——— *La jurisdiccion eclesiástica debe hacerla en las que le estén sujetas*..... 34.
——— *Las providencias tomadas en visita no son reformables por apelacion ú otro recurso*..... 122.
——— *Vease* Tribunales.
Castas. *Su esencion del tributo*..... 3.
——— *No se les incluye en el repartimiento de tierras.* 4.
Castrense jurisdiccion. *Sus límites y los de la ordinaria*... 53.
Castrenses párrocos ó capellanes. *Su dotacion*..... 166.
Causas criminales. *Cuándo no tiene lugar en ellas el recurso de nulidad*..... 102.
——— *Reglas para su sustanciacion*..... 126.
——— *Procedimientos en las livianas*..... 117.
——— *En las de fe no pueden ser defensores las comunidades ó corporaciones*..... 196.
——— *Véase* Conciliacion y Conspiracion.
Cautivos. *Se suprimen las esacciones para su redencion*.. 173.
Cesantes. *Sueldo que deben disfrutar*..... 125.
Cirujanos militares. *Continue el abono de su gratificacion*.. 204.
Comitan. *Se le concede el título de ciudad*..... 110.
Compañia de Jesus. *Se suprime*..... 120.
Competencias de jurisdiccion. *Instruccion para dirimirlas*.. 76.
——— *Aclaracion de algunas dudas sobre ella*..... 118.
Conciliacion. *Causas criminales en que no tiene lugar*..... 109.
——— *Se señalan los derechos que causa*..... 116.
——— *Es estensiva á los eclesiásticos y militares, y se fijan varias reglas sobre ella*..... 191.
Conclusiones. *Las que versen sobre la sagrada escritura no están comprendidas en el art. 2.° de la ley de libertad de imprenta*..... 187.
Consejo de generales. *Se resuelven algunas dudas sobre ellos.* 107.
Conspiracion (causas de). *Conocimiento y modo de proceder en ellas*..... 183.
Conspiradores. *Penas á los que lo sean contra la constitucion.* 178.
Curatos. *Ejercicios para su oposicion*..... 196.
Curia eclesiástica. *Vease* Apelaciones y Derechos.

D

Derecho de propiedad. *Se asegura á los inventores, introductores y perfeccionadores*..... 139.
Derechos. *No se exijan en las curias episcopales á los declarados pobres por el despacho de dispensas*... 164.
Desercion. *Se hace estensiva á los individuos de la armada la modificacion de las penas concedida al éjercito.* 168.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Diezmo. *Se eximen de su pago los nuevos plantios de cacao*..... 206.
Diputaciones provinciales. *Sus obligaciones*..... 91.
——— *Reglas para su gobierno*..... 103.
——— *Pueden instalarse con la mayoría de sus individuos*..... 116.
——— *Pueden consentir en que los ayuntamientos graven á los pueblos con ciertos impuestos*..... 203.
——— *Deben informar las solicitudes de los ayuntamientos*..... 170.
——— *Modo de renovar sus individuos*..... 205.
Diputados. *Se declara que no deben concurrir á las córtes los de Ultramar*..... 206.

E

Eclesiásticos seculares. *No pueden ser miembros de los ayuntamientos*..... 33.
——— *Sueldo que deben gozar los que obtengan empleos civiles*..... 124.
——— *Vease* Beneficios, Ordenes y Regulares.
Ejército. *Cómo debe contribuirse á su manutencion y servicio*..... 81.
——— *Premio del de Ultramar*..... 101.
——— *Promocion de los cadetes y sargentos primeros del*. 198.
——— *Reemplazo de los gefes y oficiales sobrantes*.... 197.
——— *Vease* Retiros.
Elecciones. *Vease* Párrocos y Parroquias.
Embarcaciones. *Su venta es libre de alcabalas, y cientos en América*..... 5.
Empleados. *Los de los hospitales militares solo estén sujetos al gefe de estos*..... 9.
——— *Prevenciones que deben hacerse en los títulos de los civiles y eclesiásticos*..... 53.
——— *Cómo se hará efectiva su responsabilidad*..... 67.
——— *Quedan suspensos aquellos á quienes se mande formar causa por infracciones de la constitucion*. 74.
——— *Los de la hacienda militar son subalternos de la secretaria de guerra*..... 114.
——— *Vease* Cesantes.
Empleos. *No pueden servirse por substitutos*..... 24.
Enterramientos. *Se renueva la observancia de las leyes que los prohiben en sagrado*..... 110.
Esclavos. *Su venta ó permuta no causa alcabala*..... 113.
Escritos. *Reglas para conservar la propiedad de ellos á sus autores*..... 84.

Estancos. *Se estinguen los de alumbre*..... 24.

F

Fábricas. *Libertad de establecer las que se quieran*..... 83.
Fe. *Vease* Tribunales.

G

Ganaderia. *Vease* Agricultura.
Gefes políticos. *No tienen voto en los ayuntamientos*... 55 y 85.
——— *Se les concede la facultad que tenian los presidentes de las Chancillerias sobre licencias para contraer matrimonio*..... 98.
——— *Su reglamento y atribuciones*..... 95.
——— *Quién debe instruir la sumaria de los que sean procesados como tales*..... 73.
——— *Vease* Ayuntamientos, Militares, Vagos.
Gremios. *No es necesario incorporarse en ellos para ejercer oficio*..... 84.
Goazacoalcos. *Se manda abrir un canal entre este y el rio Chimipila*..... 115.
Guaimas (puerto de). *Se habilita para el comercio*..... Ib.
Guerra. *Vease* Tribunales.

H

Hacienda militar. *Sus empleados son subalternos de la secretaria de guerra*..... 114.
Hacienda pública. *Son parte legítima en sus causas los empleados de ella*..... 189.
Hipotecas. *Reglas para el establecimiento de los oficios de ellas*..... 195.
Honor (tribunal de). *Mandado establecer en el ejército*..... 5.
Horca. *Abolicion de esta pena*..... 25.
Hospitales militares. *Varias medidas para su mejor gobierno*. 9.
——— *Se les aplican los productos de obras pias*..... 12.
——— *Instruccion para este objeto*..... 13.
——— *Vease* Empleados.

I

Imprenta. *Reglamento de su libertad*..... 152.
——— *Vease* Conclusiones.
Indios. *Su esencion del tributo*..... 3.
——— *Varias medidas en su favor*..... 54.
——— *Se prohibe usar con ellos de azotes y otros castigos*..... 105.
——— *Sus reducciones y doctrinas se ponen á disposicion de los ordinarios*..... 106.
Ingenieros (cuerpo de). *Sus individuos sean juzgados por su tribunal particular*..... 19.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Inquisicion. *Abolicion del tribunal de este nombre*..... 60.
——— *Se mandan quitar sus inscripciones*..... 62.
——— *Se declaran nacionales sus bienes*..... 63.
——— *Sueldos y destino de sus individuos*..... 65.
——— *Vease* Tribunales.
Intendentes. *Se les conceden ciertas facultades para la cobranza de los impuestos*..... 188.
Inventores. *Vease* derecho de propiedad.
Iturrigaray. *Se admite á su esposa la súplica que interpuso*.. 152.

J

Jesuitas. *Vease* Compañia de Jesus.
Jubilaciones de Magistrados. *Cómo se han de conceder*.... 190.
Jueces de primera instancia. *Reglamento de sus juzgados*.. 35.
——— *Les corresponde el cumplimiento del art. 5.º de la ley 6 tit. 4.º lib. 1.º de la Recopilacion*.. 109.
——— *No pueden ejercer la abogacia, sino en defensa de sus propias causas*..... 129.
——— *En los casos de apelacion y demas en que deban remitir los procesos á los tribunales de segunda instancia lo hagan sin los reos, si no es que preceda órden para ello*..... 121.
Jueces eclesiásticos. *Deben hacer visita de sus cárceles en los dias que los demas*..... 34.
Jurisdiccion. *Límites de la ordinaria eclesiástica y la castrense*..... 58.
Juzgados de primera instancia. *Su reglamento*..... 35.

L

Labradores. *Se les puede apremiar en cualquier tiempo del año*..... 195.
Libros. *Se encarga al gobierno forme la lista de los que no deben correr*..... 177.

M

Maestrias de plata. *Se declaran anexas á los comandantes de buques de guerra*..... 112.
Maestros de primeras letras. *Su exámen y aprobacion pertenece á las diputaciones provinciales*..... 94.
Marina. *La tropa de ella se iguala á la del ejército en los premios de constancia*..... 26.
——— *Aumento del prest y sueldo á los individuos de la militar*..... 164.
——— *Vease* Armada, Desercion, Matrículas y Sueldos.
Matriculados de Marina. *Sus pensiones y premios*..... 5.
——— *Fondo establecido con este objeto*..... 6.
Matrículas de mar. *Se estinguen en América*..... 24.

——— *Se estinguen, y se fijan las reglas para la pesca, navegacion y servicio*..... 143.
——— *La ordenanza de ellas es estensiva á ambas Españas*..... 172.
——— *Aclaracion del decreto de 8 de octubre de 1820 sobre su estincion*..... 201.
Matrimonio. *La facultad que tenian los gefes de Indias para conceder licencia para contraerlo á los contribuyentes del montepio militar en tiempo de guerra se hace estensiva al de paz*..... 22.
——— *Para el de los militares pueden suplir sus gefes el consentimiento de sus padres que se hallen en pais ocupado por el enemigo*..... 26.
——— *Los gefes políticos tienen la facultad para dar licencia de contraerlo, que antes tenian los presidentes de las Chancillerias*..... 98.
Mayorazgos. *Vease* Vinculaciones.
Médicos-Cirujanos de la Armada. *Vease* Sueldos.
Milicias. *Vease* Retiros.
Militares. *Se establece para ellos un premio medio entre los de constancia y acciones distinguidas*..... 27.
——— *Los imposibilitados del servicio sean preferidos para las plazas del resguardo y otras*..... 10.
——— *Cómo hayan de informar en estrados los que sean letrados*..... 60.
——— *Cuándo se hayan de dar de baja los que sirvan de gefes políticos*..... 169.
——— *Vease* Matrimonio.
Mineros. *Se manda dar á los de Nueva España la sal y pólvora á costo y costas*..... 23.
Mitas. *Abolicion del servicio de los indios asi llamado* 54.
Modo de vivir. *Véase* Vagos.
Monacales. *Supresion de ellos*..... 135.
——— *Venta de efectos de las casas suprimidas*..... 168.
Montepio. *Se puede disfrutar juntamente con otra pension.* 32.
——— *El militar se concede á las viudas de los que mueren de peste, y cuándo*..... 102.
——— *Reglas para su gobierno*..... 111.

N

Naipes. *Su libre fabricacion y venta*..... 20.
Nobleza. *No se admitan informaciones de ella en los colegios militares*..... 66.
Nuevo México. *Se manda erigir en él un obispado*..... 60.
——— *Medidas para la ereccion*..... 78.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Nulidad. *Vease* Recursos.

O

Obrages de oro y plata. *Que sobre ellos se observen las leyes vigentes*..... 204.
Obras pias. *Vease* Hospitales.
Oficiales. *Vease* Ejército y Retiros.
Ordenes. *Vease* Autoridades.
Ordenes sagrados. *Los que las reciban á título de capellanía de sangre ó de patrimonio queden obligados á la administracion y sufran antes el examen* ad curam animarum..... 176.
Oro. *Vease* Derechos y obrages.

P

Parientes. *Vease* Ayuntamientos.
Párrocos. *Los que no viven en sus parroquias no tienen voto activo ni pasivo en las elecciones de ellas*.... 201.
Parroquias. *Para las elecciones se consideren como tales las que solo fueren ayudas*..... 171.
Pensiones. *Plan de las que deben concederse á las familias de los que perecen en defensa de la patria*..... 20.
Perlas. *Libertad de su buceo y comercio*..... 7.
Plata. *Abolicion de ciertos derechos*..... 199.
——— *Vease* Derechos y Obrages.
Pobres. *No se les lleven derechos en las curias espiscopales por el despacho de dispensas*..... 164.
Pólvora. *Reglas para su fabricacion y libertad*..... 193.
——— *Vease* Mineros.
Post mortem. *Vease* Vacantes.
Prebendas. *Vease* Curatos.
Prest. *Aumento del de la tropa*..... 131.
Premios. *Se establece para los militares uno medio entre los de constancia y acciones distinguidas*..... 27.
——— *Los de constancia y acciones distinguidas no tienen el caracter de sueldo*..... 195.
Prision. *Modo de proceder á la de cualquier ciudadano*.. 129.
Privilegios. *Los procedentes de señorio quèdan abolidos*..... 17.
Procesos. *Se remitirán á las audiencias sin los reos*..... 121.

R

Recursos de nulidad. *El supremo tribunal conocerá y cómo de los que se interpongan de los tribunales especiales.* 59.
——— *Cuándo no tienen lugar en las causas criminales.* 102.
Regulares. *Los secularizados pueden ser diputados*..... 85.
——— *Vease* Monacales.

Repartimientos. *Se prohibe el comercio de este nombre losá justicias de América*..... 3.
——— *Las castas no están incluidas en el de tierras.* 4.
Responsabilidad. *La de los empleados públicos en el cumplimiento de las resoluciones de las Córtes*.... 22.
——— *Cómo se hará efectiva*..... 67.
Retiros. *Escala de tiempo y sueldos con que se pueden conceder á los oficiales del ejército*..... 168.
——— *Se hacen estensivos á los oficiales de la armada los concedidos á los del ejército*..... 193.
——— *Reglas para el abono á los oficiales que han servido en milicias provinciales*..... 204.
——— *Asignacion del que deben gozar los sargentos.* 206.
Reuniones. *Se prohibe tenerlas organizadas para discutir asuntos políticos*..... 152.
Rifas. *Cuándo y cómo se permitirán las de particulares*.. 79.

S

Sanidad. *En las capitales á mas de la junta provincial de ella debe haber la municipal*..... 110.
Sargentos. *Vease* Retiros.
Secretarios. *Para serlo de ayuntamiento no se necesita ser escribano*..... 32.
——— *Sueldo y consideraciones de los que lo hayan sido del despacho*..... 113.
Señorios. *Los jurisdiccionales se incorporan á la nacion.* 17.
——— *Los territoriales son considerados como propiedad particular*..... 18.
Síndicos. *Tienen voto en los ayuntamientos*.....55 *y* 85.
——— *Están obligados á recaudar y conducir las contribuciones*..... 172.
Sirvientes domésticos. *Aclaracion de esta voz*..... 203.
Sociedades económicas. *Se mandan poner en ejercicio*.... 82.
Sueldos. *Rebaja que debe hacerse á los que no sirvan sus destinos*..... 10.
——— *Cuáles deben gozar los eclesiásticos que obtengan empleos civiles*..... 124.
——— *Los de los empleados cesantes*..... 125.
——— *De los médicos-cirujanos primeros y segundos de la armada*..... 164.
——— *Aumento del de los oficiales del ejército*..... 131.
——— *Se hace estensivo á la marina militar*..... 164.
——— *De los oficiales del cuerpo político de la armada.* 163.
——— *Aumento á los del ministerio de artillería*.... 203.
Súplica. *Vease* Iturrigaray.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Supresion. *Vease* Anatas, Cautivos, Compañía, Monacales y Vinculaciones.

T

Tepic. *Se le concede el título de ciudad* ..... 12.
Tortura. *Su abolicion* ..... 8.
Tribunales. *Ley sobre su arreglo* ..... 35.
——— *Establecimiento del de guerra y marina* ..... 30.
——— *Visita que este debe hacer de sus cárceles* .... 33.
——— *Cómo debe verificarse* ..... 56.
——— *Se estingue el de la inquisicion* ..... 60.
——— *Establecimiento de los protectores de la fe* .... ib.
——— *Los individuos del supremo y de los especiales no sean ocupados en otras comisiones* ..... 52.
——— *Qué consideracion debe tenerse á los que suplen en ellos* ..... 75.
——— *Instruccion para dirimir sus competencias* .... 76.
——— *Aclaracion de dudas sobre esta instruccion* .... 118.
——— *El supremo conocerá de las reclamaciones de los magistrados y jueces* ..... 104.
——— *En los eclesiásticos debe admitirse apelacion en ambos efectos en todos los casos de derecho comun.* 174.
——— *Deben hacer tambien visita de las cárceles de su cargo en los mismos términos que los demas.* 35.
——— *Vease* Artillería é Ingenieros.

V

Vacantes. *Derecho de percibir las de prebendas eclesiásticas y el* post mortem ..... 167.
Vagos. *Conducta que deben observar con ellos los gefes políticos y los ayuntamientos* ..... 130.
Vasallage. *Se mandan quitar sus signos* ..... 79.
Vinculaciones. *Supresion de toda especie de* ..... 132.
——— *Se faculta á sus poseedores para disponer del todo de ellas con ciertas condiciones* ..... 189.
——— *Aclaracion de la ley que las suprime* ..... 202.
——— *El decreto de su abolicion no se opone á la conclusion del permiso obtenido antes para enagenar los bienes vinculados* ..... 178.
Vínculos. *Cómo deben asegurar los que los enagenan el pago de sus acreedores* ..... 102.
Visitas. *Vease* Cárceles y Tribunales.
Viudas. *Vease* Montepio.

FIN.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

